

# Utopía y Praxis Latinoamericana

Dep. legal: ppi 201502ZU4650

*Esta publicación científica en formato digital  
es continuidad de la revista impresa*  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555  
Depósito legal pp 199602ZU720

## Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social

Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  
Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA)



# 25

Aniversario

AÑO 25, n°Extra 3  
Interlocuciones

2 0 2 0



***Utopía y Praxis Latinoamericana*** nace como una respuesta a la situación de conflictividad política que atraviesa actualmente la democracia y la sociedad latinoamericana. Pero también nace como una respuesta comprometida con el análisis filosófico y la interpretación histórica de la cultura y las ciencias sociales frente a la crisis de la Modernidad. Respuesta que procura la creación de nuevos/as actores y escenarios a partir de los cuales se hagan posibles inéditas alternativas para la teoría crítica y el cambio social efectivo. Una respuesta en dos sentidos: la utópica porque todo proyecto existencial auténtico debe enmarcarse y definirse por el universo de sus valoraciones humanas; la práctica porque, a diferencia de la necesaria teoría, implica un tipo de acción cuyo movimiento es capaz de dialectizar la comprensión de la realidad, pero también de transformar a los sujetos que la constituyen. Con lo cual la noción de praxis nos conduce de retorno a la política, a la ética y, hoy día, a la ciencia y a la técnica. Es una respuesta desde América Latina, porque es a partir del ser y pensar latinoamericano que la praxis de nuestro proyecto utópico se hace realizable.

***Utopía y Praxis Latinoamericana*** es una revista periódica, trimestral, arbitrada e indexada a nivel nacional e internacional, editada por la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela), adscrita al Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y financiada por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES) de esta misma Universidad. Las áreas temáticas que definen el perfil de la revista están insertas en las siguientes líneas del pensamiento iberoamericano y latinoamericano: Filosofía Política Latinoamericana, Historia de las Ideas, Epistemología, Teorías y metodologías de las Ciencias Sociales, Antropología social, política y filosófica, Ética y pragmática, Filosofía y diálogo intercultural, Estudios de Género. Las sub-áreas respectivas a cada área general serán definidas por el Comité Editorial, con la ayuda de sus respectivos asesores nacionales e internacionales, a fin de establecer la pertinencia de los trabajos presentados.

***Extra-Interlocuciones*** es la colección de Dosieres temáticos que presenta la revista internacional de Filosofía y Teoría Social *Utopía y Praxis Latinoamericana* a la comunidad internacional de investigadores/as de América Latina y otros continentes, comprometidos con la episteme inter y transdisciplinar del pensamiento crítico, alternativo, emancipador y decolonial. Los perfiles editoriales de esta colección son transversales entre las diversas disciplinas de las ciencias sociales lo que permite abordar cuestiones de relevancia que por su novedad requieren de una difusión entre redes de investigación internacionales. Su objetivo principal es publicar prácticas discursivas cónsonas con otra comprensión de las problemáticas actuales de la filosofía política y las ciencias sociales. A partir de experiencias emergentes que puedan transformar en su praxis las relaciones subjetivas de la convivencia que se desarrolla en el espacio público, el interés y propósito es hominizarse el mundo de vida que sirve de sostenibilidad a la racionalidad del S. XXI. Saberes y epistemes radicalmente cuestionadoras que, en su presente actual y provenir posible, logren desconstruir los "puntos de apoyo" de la política de la Modernidad y generar otras relaciones de alteridad, perspectivas, vértices, encrucijadas y convergencias, que se encuentran implicadas en las dinámicas no lineales de la cultura y la Historia. Hoy día, en la era de la Globalización y las hegemonías tecno científicas, el valor político y trascendencia del sujeto vivo se encuentran en riesgo de fenecer. Las crisis del modo de producción y reproducción de los bienes materiales para satisfacer las contingencias de la vida, reclama la conciencia de un deber ser con suficiente fronesis para reescribir la otra Historia que pueda eliminar la aporía de sus propios fines...

**Utopía y Praxis Latinoamericana** es una publicación patrocinada por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia (CONDES).

El sitio oficial de Utopía y Praxis Latinoamericana es el proporcionado por la Biblioteca Digital **Revicehluz** de Revistas Científicas y Humanísticas pertenecientes al *Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información*, Serbiluz, de la Universidad del Zulia, LUZ; Maracaibo, Venezuela.

**Serbiluz:** <http://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia>  
**Email:** [utopraxislat@gmail.com](mailto:utopraxislat@gmail.com)

Esta publicación cuenta con el apoyo editorial y de difusión de *Ediciones nuestraAmérica desde Abajo* y el *Directorio de revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur* (Deycrit-Sur). Se informa expresamente que este grupo solo colabora con la revista, pero que no posee ningún derecho sobre ella.

Visite también su archivo en: <http://deycrit-sur.com/repositorio/archivoutopraxis.html>

**Utopía y Praxis Latinoamericana** aparece indizada y/o catalogada en las siguientes bases de datos:

- REVENCyT (Fundacite, Mérida)
- Ulrich's International Periodicals Directory (USA)
- Hand book of Latin American Studies (USA)
- Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB, Alemania)
- The Philosopher's Index (USA)
- CLASE (México)
- FONACIT (Caracas, Venezuela)
- BASE (Alemania)
- LATINDEX (México)
- DIALNET (España)
- REDALyC (México) • REBIUN (España)
- Google Scholar
- Centro Virtual Cervantes (España)
- CEFILIBE (México)
- LECHUZA (Oviedo, España)
- Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales y Humanidades (Madrid, España)
- Repertoire Bibliographique de la Philosophie (Louvain La Neuve, Belgique)
- CERCAL (Bélgica)
- RevistasLatinoamericanas.org
- MIAR.ub.edu/es
- OEI-CREDI (España)
- DOAJ (Directory of Open Access Journals)
- Sistema de Biblioteca de la Universidad de Antioquia (Colombia)
- The Library of Congress (USA)
- EBSCO (México)
- Sociological Abstracts (USA)
- Reportorio de Ensayista y Filósofos Ibero e Iberoamericano (Athens, USA)
- REBIUN (España)
- r-Revistas (CSIC, España)
- ISI Thomson citation Index
- SCImago Journal & Country Rank
- Scopus
- Flacsoandes.edu.ec
- Cecies.org
- CETRI, Belgique
- Redib.org
- Academic Journal DATABASE
- Biblioteca de Filosofía Digital
- Citefactor.org
- Universia.org
- OALib Journal
- Qualis-Capes: B3 (Homologada)
- Publiindex: A2 (Homologada)
- LatinREV
- OAJI
- Deycrit-Sur
- WorldCat
- Zenodo.

**Director Fundador**

Álvaro B. Márquez-Fernández †  
(1952-2018)  
In memoriam

---

**Directora**

Zulay C. Díaz Montiel, Universidad del Zulia, Venezuela  
diazzulay@gmail.com

**Editor**

Ismael Cáceres-Correa, Ediciones nuestraAmérica desde Abajo, Chile  
utopraxislat@gmail.com

---

**Directores Honorarios**

Nohan CHOMSKY, Leonardo BOFF, Enrique DUSSEL, Gloria M. COMESAÑA-SANTALICES, Raúl FORNET-BETANCOURT, Gino CAPOZZI, Gianni VATTIMO, Andrés ORTÍZ-OSÉS

---

**Comité Editorial**

Roberto Agustín Follari; Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina: rfollari@gmail.com  
Marc Pallarés Piquer; Universidad Jaume I de Castellón, España: pallarem@uji.es  
Walter Omar Kohan; Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil: wokohan@gmail.com  
Luis Sáez Rueda; Universidad de Granada, España: lsaez@ugr.es  
Emilia Bermúdez; Universidad del Zulia, Venezuela: ebermudezh@gmail.com  
Antoni Aguiló; Universidade de Coimbra, Portugal: antoniaguilo@ces.uc.pt  
Jonatan Alzuru Aponte; Universidad Austral de Chile, Chile: jonatan.alzuru@uach.cl  
Gregorio Valera-Villegas; Universidad Central de Venezuela, Venezuela: gregvalvil@yahoo.com  
Ismael Cáceres-Correa; Universidad de Concepción, Chile: utopraxislat@gmail.com  
Esteban Torres Castaños; Universidad de Córdoba, Argentina: esteban.tc@gmail.com  
Hugo Biagini; Universidad de La Plata, Argentina: hbiagini@gmail.com  
Nestor Kohan; Universidad de Buenos Aires, Argentina: teoriasocial.na@gmail.com  
Morelba Brito; Universidad del Zulia, Venezuela: mbritoc54@yahoo.com  
Luigi di Santo; Universidad de Cassino y del Lazio Meridional, Italia: disanto.luigi100@tiscali.it  
Luis González; Universidad del Zulia, Venezuela: ludwig73ve@yahoo.com  
Leonor Arfuch; Instituto Gino Germani, Argentina: larfuch@yahoo.com.ar  
Jorge Alonso; Universidad de Guadalajara, México: jalonso@ciesas.edu.mx  
José Quintero Weir; Universidad del Zulia, Venezuela: jqarostomba@gmail.com  
Sara Beatriz Guardia; Universidad San Martín de Porres, Perú: sarabeatriz.guardia@gmail.com  
Luis Garagalza; Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España: luis.garagalza@ehu.eus  
Gildardo Martínez; (Universidad del Zulia, Venezuela: gildardo1@gmail.com  
Ricardo Salas Astráin; (Universidad Católica de Chile, Chile: rsalasa@gmail.com  
Pedro Sotolongo; (Universidad de La Habana, Cuba: pedro.sotolongo@yahoo.com  
Carlos Walter Porto-Gonçalves; (Universidad Federal Fluminense, Brasil: cwpg@uol.com.br  
Edward Demenichónok; (Universidad Estatal de Fort Valley, EE.UU: demenche@usa.net



---

### **Comité Científico**

Víctor MARTÍN FIORINO, Universidad Católica de Colombia (Colombia); Flor ÁVILA HERNÁNDEZ; Universidad Católica de Colombia (Colombia); Pablo GUADARRAMA GONZÁLEZ, Universidad Nacional de Colombia (Colombia); Boaventura de SOUSA SANTOS (Portugal), Franz HINKELAMMERT (Costa Rica), Friz WALLNER (Austria), Constança MARCONDES CESAR (Brasil), Didier Le LEGALL (Francia), Weinne KARLSSON (Suecia), Adela CORTINA (España), José Javier CAPERA FIGUEROA (México), Jesús MARTÍN-BARBERO (Colombia), Paolo FABBRI (Italia), Henrich BECK (Alemania), Angel LOMBARDI (Venezuela), Miguel Angel HERRERA ZGAIB (Colombia), Daniel MATO (Argentina), José Manuel GUTIÉRREZ (España), Helio GALLARDO (Costa Rica), Paula Cristina PEREIRA (Portugal), Javier ROIZ (España), Flavio QUARANTOTTO (Italia), Leonor ARFUCH (Argentina), Juan Luis PINTOS CEA NAHARRO (España), Alberto BUELA (Argentina), Alessandro SERPE (Italia), Carlos DELGADO (Cuba), Eduardo Andrés SANDOVAL FORERO (México), Yamandú ACOSTA (Uruguay), Jorge VERGARA (Chile), Miguel Eduardo CÁRDENAS (Colombia), Orlando ALBORNOZ (Venezuela), Adalberto SANTANA (México), Dorando MICHELLINI (Argentina), Edgar CORDOVA JAIMES, Universidad del Sinú. Elías Bechara Zainúm (Colombia)

---

### **Comité Editorial Asesor**

Esteban MATE (Anthropos, España), Antonio SIDEKUM (Nova Harmonia, Brasil), Robinson SALAZAR (Insumisos Latinoamericanos, México), José Luis GÓMEZ MARTÍNEZ (Repertorio Iberoamericano, USA), Jesús E. CALDERA YNFANTE (Universidad Católica de Colombia, Colombia), Altieres DE OLIVEIRA SILVA (Escuela de Publicidad y marketing-ESPM, Brasil)

---

### **Comité de Ética**

Jaime NUBIOLA (España), Francisco HIDALGO (Ecuador), Yohanka LEÓN DEL RÍO (La Habana, Cuba), Francois HOUTART (Bélgica).

---

### **Traductores/as**

Sirio L. PILETTI RINCÓN (Venezuela)  
Dionisio D. MÁRQUEZ ARREAZA (Brasil)

---

### **Asistente Web Site**

Efraim J. MÁRQUEZ-ARREAZA (Canadá)

---

# Utopía y Praxis Latinoamericana

Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social  
Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA)  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  
Universidad del Zulia-Venezuela

Año: 25. nº. Extra 3 Interlocuciones 2020

## Índice de Contenido

Editor invitado  
Luis Eduardo DÍAZ CID

### PRESENTACIÓN

**Luis Eduardo DÍAZ CID**

In memoriam al educador colombiano Elías Bechara Zainúm, en el centenario de su natalicio. / *In memory of colombian educator Elías Bechara Zainúm, in the centenary of her birth*

9-11

### ARTÍCULOS

**Ana Carolina MERCADO GAZABÓN**

El recurso de insistencia, una herramienta adicional para la protección del derecho constitucional fundamental de petición. / *The appeal for insistence, an additional tool for the protection of the fundamental constitutional right of petition*

12-30

**Andrés BOTERO BERNAL. Mario PALENCIA SILVA. Alonso SILVA ROJAS**

Literatura y violencia: memoria, recuerdo y evocación como herramientas de no repetición En el brazo del río. / *Literature and violence: memory, remembrance and evocation as tools of non-repetition En el brazo del río*

31-49

**Eduardo Alonso FLÓREZ ARISTIZABAL. Carlos Alberto MOJICA ARAQUE**

Discrecionalidad Judicial. Desarrollo de una categoría en continua construcción. / *Judicial Discretion. Development of a category in continuous construction*

50-60

**Carlos Arturo HERNÁNDEZ DÍAZ. Luis Eduardo DÍAZ CID. Orlando MENESES QUINTANA**

Cultura política y geopolítica: un análisis desde el constitucionalismo y autoritarismo. / *Political and Geopolitical Culture: an analysis from Constitutionalism and Authoritarianism*

61-71

**Edwin RUBIO MEDINA**

The right to self-determination as a strategy to dispute the legal field. / *El derecho a la autodeterminación como estrategia para la disputa en el campo jurídico*

72-86

**Cindy CARRIAZO DIAZ. Maura PEREZ REYES. Kathelyn GAVIRIA BUSTAMANTE**

Planificación educativa como herramienta fundamental para una educación con calidad. / *Educational planning as a fundamental tool for quality education*

87-95

**Ricardo Camilo RUEDA MORA. Stefano VINACCIA ALPI. Leidy Vanessa CORREA GRISALEZ**

Propiedades psicométricas del cuestionario función reflexiva parental (PRFQ) en la población monteriana. / *Psychometric properties of the Parental Functioning Questionnaire (PRFQ) in Monteria population*

96-104

**Rubén Darío SEPULVEDA VARGAS. María Alejandra TABORDA CARO. Deivi David FUENTES DORIA**

Conflictos por el agua y resiliencia comunitaria en el bajo Sinú: Evidencias de disputas y alternatividad. / *Water conflicts and community resilience in Lower Sinu: Evidence of disputes and alternativity*

105-124

**Filiberto Eduardo R. MANRIQUE MOLINA. Omar HUERTAS DÍAZ. Edgar Athzel CARMONA ARIAS**

Hacia una Constitución ecológica en México frente a la crisis ambiental causada por la disrupción corrupta del antropocentrismo / *Towards an ecological Constitution in Mexico facing the environmental crisis caused by the corrupt disruption of anthropocentrism*

125-138

**Victoria Amalia PRECIADO BURGOS**

Educación o resocialización: Problemática abordada desde la administración penitenciaria en Colombia. / *Education or resocialization: Problem addressed from the penitentiary administration in Colombia*

139-153

**José Gregorio NOROÑO SÁNCHEZ. Manuel NUÑEZ VILLAVICENCIO. Romel Ramón GONZÁLEZ DÍAZ**

Ética sindical como mecanismo impulsor de competitividad en las pequeñas y medianas empresas. / *Union ethics as a mechanism driving competitiveness in small and medium-sized enterprises*

154-173

**Angélica María MUSKUS CARRIAZO**

Motivación de la declaratoria de insubsistencia en Colombia. / *The motivation of the Insubsistence declaratory in Colombia*

174-189

**Andrés HERNÁNDEZ MARULANDA. Nelson Javier ESCOBAR MORA. Horderlin ROBLES VEGA**

Enseñanza en el análisis de señales aleatorias usando correlación y sus aplicaciones. / *Teaching in the analysis of random signals using correlation and its applications*

190-200

**Ana CANTILLO OROZCO. Omaira BERNAL PAYARES. Isabel Cristina RINCÓN RODRÍGUEZ. Jorge E. CHAPARRO MEDINA**

Perspectivas de la política de contabilidad ambiental, sistemas de información administrativa y financiera. / *Perspective of environmental accounting policy, administrative and financial information systems*

201-215

**José Manuel GUTIÉRREZ SILVA. Jenny ROMERO BORRÉ**

Factores asociados a la diáspora de estudiantes universitarios. / *Factors associated with the diaspora of university students.*

216-226

**DIRECTORIO DE AUTORES/AS** .....227-228

**DIRECTRICES Y NORMAS DE ENVÍO** .....229- 231

**GUIDELINES FOR PUBLICATION** .....232-234

**INSTRUCCIONES PARA LOS ÁRBITROS** .....235-236



## PRESENTACIÓN

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 9-11  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

### In memoriam al educador colombiano Elías Bechara Zainúm, en el centenario de su natalicio

*In Memory of Colombian Educator Elías Bechara Zainúm, in the Centenary of her Birth*

**Luis Eduardo DÍAZ CID**

<https://orcid.org/0000-0002-9845-1701>

Chindos40@gmail.com

Universidad del Sinú "Elías Bechara Zainúm"

Montería Colombia

Elías Bechara Zainúm, nace en Santa Cruz de Lorica el 10 de diciembre de 1920 y muere en Montería el 9 de agosto de 2013, Hijo de Migrantes Sirio-Libaneses que llegaron a Colombia hacia finales del siglo 19 y comienzos del siglo 20, instalándose en Santa Cruz de Lorica Córdoba. Allí se radican sus padres y tienen sus hijos, siendo Elías uno de los menores. Desde niño era muy lector y además siempre quiso ayudar y proteger a sus compañeritos de estudio<sup>1</sup>. Como en Córdoba en esa época, casi la totalidad de los niños solo llegaban a los estudios de primaria<sup>2</sup>, porque no existían Colegios de secundaria<sup>3</sup> oficiales y los niños que querían seguir estudiando bachillerato, debían viajar a otras ciudades como Cartagena, con todo lo que eso, en aquellas épocas implicaba para los padres de familia y para el niño también.

Como niño le tocó esta situación a Elías Bechara, de trasladarse a Cartagena para hacer su bachillerato y seguir los Estudios Superiores en la Universidad de Cartagena. Allí estudió Química, posteriormente se trasladó a México y Texas para hacer Especialización en Bioquímica y Laboratorio. Regresa a Colombia y se instala en la ciudad de Barranquilla en donde inicia su Labor como docente en la Universidad del Atlántico, alternando su tiempo con la investigación y el laboratorio. Descubre la Formula Retardada de la Penicilina (Pensolvox) que vende para su distribución a Laboratorio Own de Colombia.

Elías tuvo la virtud de saber leer e interpretar los signos de su tiempo y de su entorno, cualidad que muy pocas personas desarrollan. Esto le sirvió para presentar al gobierno la propuesta de una institución que formara técnicamente a los hijos de campesinos, para explotar mejor el campo, al darse cuenta de la vocación agropecuaria del Departamento de Córdoba; así emprende una labor titánica para conseguir, desde los terrenos como a los docentes de lo que se llamó Instituto Técnico Agrícola de Lorica, en 1962; donde jóvenes de todo el Caribe Colombiano hicieron estudios en esa Institución oficial.

<sup>1</sup> Información tomada de la Familia Jatin, que también migraron a Colombia mucho antes que los Bechara.

<sup>2</sup> En año 1933 existían en toda Colombia 509.651 estudiantes en primaria, época en que le tocó hacerla a Elías Bechara. En el año 1963 en Córdoba había 58.669 estudiantes de primaria, de los cuales 36.242 niños, eran de la zona rural. FUENTE: DANE. "50 años de estadística Educativas", 1933 a 1985. boletín de estadística No. a 44.

<sup>3</sup> Entre 1933 y 1953 no hubo colegios de secundaria en Córdoba, así que los 129 bachilleres contabilizados hasta el año 1953 en esta región, realizaron sus estudios en otras ciudades. FUENTE: DANE. "50 años de estadística Educativas", 1933 a 1985. boletín de estadística No. a 44



Instalado en Montería, inicia la formidable tarea de Crear en 1964, lo que hoy es la Universidad de Córdoba<sup>4</sup>, sin tener profesores ni local propio, iniciando labores en el Colegio Nacional José María Córdoba, con dos carreras profesionales: Medicina Veterinaria-Zootecnia, e Ingeniería Agronómica y el técnico profesional en Topografía<sup>5</sup>. Del Colegio Nacional se traslada a la Plaza de feria Ganadera de Montería, hasta que al fin logra obtener el terreno en donde actualmente funciona.

En 1965, crea en Montería el primer bachillerato nocturno departamental de la Región Caribe; apoya decididamente con la creación del Instituto Nacional de Educación Media Diversificada “Lorenzo María Lleras” (INEM), cediendo 12 hectáreas del campus de la Universidad de Córdoba, para su funcionamiento en montería, y en Berástegui corregimiento de Ciénaga de Oro, cede 31 hectáreas, para las practicas agropecuarias de los estudiantes del INEM. Por otro lado, promovió en 1969 la creación del Colegio de bachillerato femenino “Cecilia de Lleras” de Montería.

En 1974 crea en Montería la Corporación Educativa Superior de Córdoba (Cesco) con 47<sup>6</sup> estudiantes en las carreras de técnico profesional en Administración de Empresas, Trabajo Social y Lenguas Modernas. En 1980 Elías Bechara Zainúm transformó CESCO en Corporación Universitaria del Sinú (CUS), con 121 estudiantes<sup>7</sup> y las carreras profesionales de Derecho, Administración de Empresas, Trabajo Social y Licenciatura en Lenguas Modernas. La Corporación Universitaria del Sinú, desde 2004 se transformó en lo que es hoy: Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainúm” con Acreditación de Alta Calidad según la resolución del Ministerio de Educación Nacional, número 0006197 de junio 13 de 2019.

¿Cómo este hombre egregio logro todo lo que se propuso? se preguntan muchos; trataré de describir muy brevemente su filosofía, su personalidad y su pedagogía, ya que todas estas categorías confluyen en tan ilustre Maestro. Elías Bechara era un hombre carismático con excelente sentido del humor<sup>8</sup>, sereno, analista o lector de la realidad local, regional y nacional; hombre recto de palabra y coherente en su pensar, con su actuar, decidido con naturalidad y forma de vida fidedigna; persuadido por su experiencia vivida y de sus raíces, que le permitió ver la necesidad insatisfecha de sus conciudadanos cordobeses, caribeños y colombianos en general, de formarse y ayudar a formar integralmente a los profesionales del futuro.

Elías era un hombre locuaz, sonriente y agradable en su trato con sus amigos, con sus estudiantes y trabajadores, sabio y prudente en toda la extensión de la palabra; a mi modo de ver, en él, se conjuga el pasado de su experiencia familiar, su formación educativa fuera del entorno cercano a sus padres, y las circunstancias sociales, políticas, económicas, culturales e históricas del país, que le toco vivir.

Fue un conocedor de la ética levinasiana<sup>9</sup> que logró encarnar en su propia existencia y dentro de su quehacer pedagógico, además de ser un ferviente agradecido con la sociedad colombiana por el acogimiento que tuvieron sus padres migrantes<sup>10</sup>, llevándolo a reconocer en sus congéneres, a otro ser como él, pero diferente, es decir, veía en el otro un ser con penurias o necesidades insatisfechas, con limitaciones sin oportunidades, de ahí que sus conciudadanos se convirtieron para él, en el epicentro de su labor pedagógica, social, y política y hasta económica; razón suficiente para justificar su incansable dedicación a la formación de ese otro, dándole el protagonismo que se merece, su reconocimiento, su acogida y su desarrollo. Concibió

<sup>4</sup> En 1963 no había estudiantes de educación superior en Córdoba, lo que lleva a Elías a buscar la solución de los jóvenes cordobeses. Porque ya empezaban a salir los bachilleres del Colegio Nacional José María Córdoba. FUENTE: DANE: boletín mensual de estadística Nos. 284, 292, 313, 352. ICFES: Estadísticas de Educación Superior, tabulados definitivos

<sup>5</sup> ¿Nos preguntamos, por que abrió con esas carreras propias para el sector agropecuario? Porque Él fue un emprendedor visionario y prospectivo, que no quería profesionales solo para lo agropecuario, como ha sido hasta hoy, sino que quería que el campo se convirtiera en verdaderas empresas agroindustriales, en donde se promoviera la producción técnica de la materia prima y se procesara para alcanzar un verdadero desarrollo agroindustrial, que aún hoy no han sabido interpretar esas iniciativas de Elías Bechara.

<sup>6</sup> FUENTE: DANE: boletín mensual de estadística Nos. 284, 292, 313, 352

<sup>7</sup> ICFES: Estadísticas de Educación Superior, tabulados definitivos. 1980

<sup>8</sup> Información de la Dra. Magaly Cogollo en conversaciones informales.

<sup>9</sup> LEVINAS, Emmanuel. (1977) Totalidad e Infinito. Ensayos sobre la Exterioridad, Sígueme, Salamanca, Pág. 22

<sup>10</sup> Expresiones de sus hijas y nietos.



la educación desde ese otro<sup>11</sup>, no desde el maestro, sino desde ese otro que se acoge, se escucha, y se cuida o protege.

Es algo parecido a la pedagogía del Oprimido<sup>12</sup> pero diferente, ya que, para Elías Bechara, ese otro es extranjero<sup>13</sup>, es sacado del anonimato, para ser recibido como tal. Ese otro parte de su situación de exclusión y sufrimiento que acompaña al «extranjero» con cultura diferente a la sociedad receptora. Desde esta perspectiva se fundamenta su agradecimiento a la sociedad colombiana con una propuesta de retribución, hospitalidad y acogida en donde la educación es y resuelve una relación ética sobre ese otro (cordobés, colombiano o latinoamericano).

Este brevísimo esquema del pensamiento del Maestro Elías Bechara Zainúm, nos invita a pensar en el otro, que implica necesariamente que es ineludible enseñar y aprender a convivir en las sociedades contemporáneas que cada vez son más complejas, donde una multiplicidad de interrelaciones ha generado una incontable cantidad de conflictos a distintas escalas: desde los que surgen en las relaciones uno a uno, en la familia, en las escuelas, o en la calle, hasta las que han llevado a la humanidad a enfrentamientos armados o biológicos de gran envergadura y consecuencias funestas.

Sería bueno pensar también y hablar de la educabilidad de las emociones en el marco de la pedagogía de la alteridad<sup>14</sup> que ofrece un espacio de análisis en el que se permita dilucidar y saber si es posible vincular esta postura pedagógica vislumbrada ya por el Maestro Elías, como una postura que bien puede ser una opción ante el creciente surgimiento de problemas que afectan cada vez más áspidamente, sobre todo a la juventud universitaria.

---

<sup>11</sup> LEVINAS, Emmanuel. (1977) *op. cit.* p. 313.

<sup>12</sup> FREIRE, Paulo (2005) *Pedagogía del oprimido*, 2ª edición, México, Siglo XXI Editores S.A. ISBN 968-23-2589-7 247 pág.

<sup>13</sup> URUBAYEN, Julia, (2011) Emmanuel Levinas. [en línea]. Philosophica: Enciclopedia filosófica: (consulta: 5 de abril de 2020). Disponible en Internet: «<http://www.philosophica.info/voces/levinas/Levinas.html>»

<sup>14</sup> FRAGOSO-LUZORIAGA, R. (2015) "Inteligencia y competencias emocionales en educación superior, ¿un mismo concepto?" En: *Revista Iberoamericana de Educación Superior RIES*, 6 No. 16 Vol. VI. IISUE UNAM



## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 12-30  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

## El recurso de insistencia, una herramienta adicional para la protección del derecho constitucional fundamental de petición

*The Appeal for Insistence, an Additional Tool for the Protection of the Fundamental Constitutional Right of Petition*

Ana Carolina MERCADO GAZABÓN

<https://orcid.org/0000-0003-0595-2409>

[anacaro2703@hotmail.com](mailto:anacaro2703@hotmail.com)

Universidad del Sinú, Montería, Colombia / Universidad de Salamanca (España)

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3907030>

## RESUMEN

El ordenamiento jurídico colombiano, regula en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011 "*Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*", un mecanismo de protección del derecho fundamental constitucional de petición. Esa herramienta es el denominado recurso de insistencia, que tiene entre sus principales características el de ser de carácter judicial, principal, informal, expedito e independiente de la acción constitucional contenida en el artículo 86 Superior. Así las cosas, se analizará en este escrito su consagración legal, procedimiento y desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

**Palabras clave:** Derecho de petición, reserva legal, información, documentos, recurso de insistencia.

## ABSTRACT

The Colombian legal system, regulates in article 26 of Law 1437 of 2011 "Code of Administrative Procedure and Administrative Litigation", a mechanism for the protection of the fundamental constitutional right of petition. This tool is the so-called appeal for insistence, which has among its main characteristics are being judicial, principal, informal, expeditious and independent of the constitutional action contained in Article 86 Superior. Thus, this legal analysis, procedure and jurisprudential development by the Constitutional Court and the State Council will be analyzed in this document.

**Keywords:** Right to petition, legal reserve, information, documents, appeal for insistence.

Recibido: 20-05-2020 • Aceptado: 28-06-2020



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## INTRODUCCIÓN

La Ley 1437 de 2011<sup>1</sup>, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dedicó un Título completo, concretamente el II de la Parte Primera, a la regulación integral del derecho constitucional fundamental de petición contenido en el artículo 23 Superior<sup>2</sup>, según el cual *“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”*<sup>3</sup>.

Debe precisarse que, con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley (2 de julio de 2012<sup>4</sup>), el Congreso de la República, atendiendo, de una parte, la declaratoria de inconstitucionalidad del mencionado Título II, efectuada en la sentencia C-818 de 2011<sup>5</sup>, - providencia en la que se analizaron los cargos formulados por unos ciudadanos que adujeron que, por versar el título II de forma integral sobre un derecho fundamental debía ser objeto de regulación mediante ley estatutaria y no ordinaria como había acontecido, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política<sup>6</sup> - y debido a que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad quedaron diferidos en el tiempo a fin de que el Congreso, expidiera la Ley Estatutaria correspondiente<sup>7</sup>, el legislativo, profirió la Ley Estatutaria 1755 de 2015<sup>8</sup> la que reguló el derecho fundamental de petición y sustituyó el Título II, Capítulos I, II y III, artículos 13 a 33, de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011<sup>9</sup>, en relación con las reglas generales y especiales del derecho de petición presentado ante las autoridades y las organizaciones e instituciones privadas, definiéndolo de la siguiente forma:

Artículo 13<sup>10</sup>. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política<sup>11</sup>, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, **requerir información, consultar, examinar y requerir copias de**

<sup>1</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>2</sup> Constitución Política de Colombia [CPC]. julio de 1991 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)

<sup>3</sup> Constitución Política de Colombia [CPC]. Art. 23. julio de 1991 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)

<sup>4</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>5</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-818 de 2011. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Noviembre 1 de 2011). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-818-11.htm>

<sup>6</sup> Constitución Política de Colombia [CPC]. Arts. 152 y 153. julio de 1991 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)

<sup>7</sup> Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Junio 30 de 2015. DO. N° 49.559. Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1755\\_2015.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html)

<sup>8</sup> Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Junio 30 de 2015. DO. N° 49.559. Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1755\\_2015.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html)

<sup>9</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>10</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 13. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>11</sup> Constitución Política de Colombia [CPC]. Art. 23. julio de 1991 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)

**documentos**, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos”<sup>12</sup> .(resaltado fuera del texto).

Ahora bien, nos proponemos abordar el estudio del derecho de petición desde una arista considerada, en nuestro criterio, poco desarrollada por la doctrina y es desde la óptica de un recurso judicial para su protección efectiva, distinto de la “afamada” acción de tutela, recurso que es de carácter principal, expedito y que opera cuando una autoridad niega la entrega de documentos o información al peticionario argumentando reserva de ley. Este recurso se denomina el recurso de insistencia y se encuentra consagrado en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011<sup>13</sup> sustituido, como arriba se expresó, por la Ley 1755 de 2015<sup>14</sup>.

De entrada debe advertirse que se trata de un recurso diferente a la solicitud de insistencia de revisión de tutelas que se adelanta ante la Corte Constitucional, regulada en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991<sup>15</sup> y en el Acuerdo 02 de 2015 de la Corte<sup>16</sup> (Reglamento de la Corte), y que consiste en la facultad con la que cuentan: (i) cualquier Magistrado titular de la Corte Constitucional; (ii) el Procurador General de la Nación; (iii) el Defensor del Pueblo; y (iv) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para insistir ante la Corte Constitucional en la selección de un caso de tutela que fue anteriormente excluido por esa Corporación para su revisión. El propósito es que las autoridades mencionadas sugieran al máximo Tribunal Constitucional reconsiderar la selección de un caso excluido de revisión.

Precisado lo anterior, en este escrito, se hará un análisis de la figura denominada recurso de insistencia, establecida en la Ley 1437 de 2011<sup>17</sup>, a la luz de dicha norma y de la jurisprudencia que se ha considerado más relevante sobre la materia emanada de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. No obstante, deben hacerse algunas referencias previas al derecho de petición como mecanismo de acceso a la información y a los documentos. Y si bien debe reconocerse el amplio desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre este derecho, - núcleo esencial, plazos para resolverlo, tipos, la acción de tutela como medio judicial para su protección etcétera - y no se pretende volver sobre ello en este escrito, se considera necesario referirse a algunos aspectos preliminares que rodean la figura contenida en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011<sup>18</sup>.

En todo caso el derecho de petición es un tema que siempre ha estado y estará vigente en el ordenamiento jurídico colombiano, sobre todo si se tiene en cuenta que las cifras sobre su vulneración son alarmantes: es el derecho fundamental que da lugar a la instauración del mayor número de acciones de tutela en el país, incluso por encima de los derechos a la salud y al debido proceso, esto, de acuerdo con el informe que la rama judicial rindió al Congreso año 2018-2019<sup>19</sup>, en el que da cuenta de cómo en el 2018 de las 757.983 acciones de tutela presentadas en el país, el 34.9% de las mismas invocaban la vulneración del derecho de petición , seguido del derecho a la salud que se reclama en el 33.2% de los casos, del debido proceso que se presenta en el 12.7% y del mínimo vital con una participación del 6.2%. Y si se retrocede en el tiempo, históricamente es, el derecho de petición, el más invocado como vulnerado en sede de tutela. A

<sup>12</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 13. enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>13</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>14</sup> Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Junio 30 de 2015. DO. N° 49.559. Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1755\\_2015.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html)

<sup>15</sup> Decreto 2591 de 1991. por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Artículo 33. Noviembre 19 de 1991. DO. N° 40.165. Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto\\_2591\\_1991.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2591_1991.html)

<sup>16</sup> Acuerdo 02 de 2015. Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional. Julio 22 de 2015. Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/Inicio/Reforma%20Reglamento-19.pdf>

<sup>17</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>18</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>19</sup> Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura. Obtenido de Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura. Recuperado de: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/publicaciones/2018-2019>

julio de 2019, según datos estadísticos de la misma Corte Constitucional, el 34,7% de las tutelas radicadas en dicha Corporación, en los primeros 7 meses de 2019 reclamaron el derecho de petición. En palabras de la Corte: *"Entre enero y julio de este año fueron radicadas 388.160 tutelas; de estas, 151.241 (34,7%) estaban relacionadas con el derecho de petición. La entrega de información, copias y procedimientos fue la reclamación más frecuente por este derecho, representando el 87,6% de los casos"*<sup>20</sup>

## **EL PASO PREVIO A LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE INSISTENCIA: EL EJERCICIO DERECHO DE PETICIÓN Y LA INVOCACIÓN DE LA RESERVA LEGAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD**

### **a) Apuntes sobre el derecho de petición**

En ejercicio del derecho de petición, las personas pueden presentar solicitudes respetuosas a las autoridades, para que se les suministre información sobre situaciones de interés general y/o particular. Se trata entonces de un derecho con un carácter especial, pues aun cuando es un derecho fundamental autónomo, es la vía por medio de la cual se protegen otros derechos como la libertad de expresión, el derecho a la participación o el derecho a la información.

Respecto del derecho de petición, la Corte Constitucional<sup>21</sup> ha precisado que su ejercicio no se limita a la posibilidad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades, sino a recibir respuesta de estas, la que debe ser oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado<sup>22</sup>.

Que la respuesta sea pronta, implica la oportunidad en la resolución de la petición, es decir que esta no se produzca en forma tardía sino rápida, ligera, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

Puede decirse que la regla general indica que el plazo para contestar las solicitudes es de 15 días hábiles, plazo que debe entenderse como un tiempo máximo que tiene la administración o el particular para resolver la solicitud, de modo que la autoridad puede responder la petición antes del vencimiento de dicho término<sup>23</sup>. Entonces, hasta que ese plazo no transcurra no se afectará el derecho referido y no se podrá hacer uso de la acción de tutela.

Adicionalmente, señala la Ley 1755 de 2015<sup>24</sup> que existen plazos especiales para resolver solicitudes de documentos y de información que deben resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción y las solicitudes de consulta cuyo plazo máximo es de treinta (30) días.

Asimismo, se indica que la petición debe resolverse de fondo con claridad, precisión y congruencia con lo solicitado, es decir que debe contestarse con argumentos de fácil comprensión; la respuesta debe atender directamente lo pedido, sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas, que la contestación esté conforme con lo solicitado; y consecuente con el trámite que se ha surtido.

Así las cosas, el derecho de petición supone una "resolución" de lo planteado, en consecuencia, existe vulneración cuando las autoridades responden que la solicitud del ciudadano se encuentra en trámite o cuando se contesta que el funcionario carece de competencia. En este último evento, la administración deberá fundamentar la carencia de competencia y remitir a la entidad que tiene la potestad para tramitar el

<sup>20</sup> Corte Constitucional. (17 de septiembre de 2019). Corte Constitucional. Obtenido de Corte Constitucional. Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?EI-34,7%-de-las-tutelas-radicadas-en-la-Corte-Constitucional-en-los-7-primeros-meses-del-2019-reclamaron-el-derecho-de-peticion%C3%B3n-8765>

<sup>21</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-951 de 2014. (M.P. Martha Victoria Sánchez Méndez: diciembre 4 de 2014). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2014/C-951-14.htm>

<sup>22</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1160A de 2001. (M.P. Manuel Jose Cepeda Espinosa: noviembre 2 de 2001). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-1160A-01.htm>

<sup>23</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-101 de 2014. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: febrero 25 de 2014). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-101-14.htm>

<sup>24</sup> Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Junio 30 de 2015. DO. N° 49.559. Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1755\\_2015.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html)

asunto e informar de esa decisión al peticionario. Todo ello de conformidad con el contenido del artículo 21 del CPACA<sup>25</sup>.

Ahora bien, debe precisarse que la autoridad requerida, en la respuesta que otorga no está obligada a acceder a lo pretendido por el peticionario, por lo que en el evento en que se niegue lo solicitado, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones que sustentan aquella postura negativa. En otras palabras, la autoridad que recibe la petición no está en la obligación de definir favorablemente las pretensiones del solicitante, en ese sentido la inconformidad con la contestación dada no implica violación del derecho de petición.

Por último, se indica que, existe el deber para las autoridades de poner en conocimiento del peticionario la respuesta<sup>26</sup>. El ciudadano debe conocer la decisión proferida por las autoridades para ver protegido efectivamente su derecho de petición<sup>27</sup>, porque ese conocimiento, es el presupuesto para impugnar la respuesta correspondiente.

### b) La reserva legal como excepción del acceso a la información y documentos

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011<sup>28</sup>, dos principios que rigen el procedimiento administrativo son, entre otros, los de transparencia y publicidad, en ese sentido, la regla general es el carácter público de la actuación administrativa, es decir, que cualquiera, sin necesidad de acreditar una legitimación concreta, pueda conocer el procedimiento y pedir copias de este. En consecuencia, con ello, es deber de las autoridades entregarle, a quien lo solicite, información clara, completa, oportuna, cierta y actualizada sobre el quehacer estatal: estado de la ejecución presupuestal, listado o monto de los contratos suscritos, ejecución contractual, documentos sobre comisión de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, datos estadísticos sobre asesinato de líderes sociales etcétera. En otras palabras, la regla general es, que toda persona, mediante el ejercicio del derecho fundamental de petición, tiene la posibilidad de acceder a la información pública. El fundamento son las siguientes disposiciones constitucionales:

*"Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley."*<sup>29</sup>

*"ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley"*<sup>30</sup>.

<sup>25</sup> "Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los diez (10) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito.

Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remitido al peticionario.

Los términos para decidir se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente". Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 21. enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>26</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-249 de 2001. (M.P. José Gregorio Hernández Galindo: febrero 27 de 2001). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-249-01.htm>

<sup>27</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-259 de 2004. (M.P. Clara Inés Vargas Hernández: marzo 17 de 2004). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-259-04.htm>

<sup>28</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>29</sup> Constitución Política de Colombia [CPC]. Art. 74. Julio 19 de 1993 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)

<sup>30</sup> Constitución Política de Colombia [CPC]. Art. 209. Julio 19 de 1993 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)



No obstante, bajo la premisa según la cual, ningún derecho fundamental es absoluto, el acceso a la información a través del ejercicio del derecho de petición tampoco lo es, pues el ordenamiento jurídico contempla la existencia de una restricción: la reserva legal, la que solo opera en las hipótesis taxativamente señaladas en la ley.

Dicha reserva se encuentra desarrollada en el título X de la Ley 1437 de 2011<sup>31</sup>, que contempla en su artículo 24 cuáles son las informaciones y documentos reservados. Para ser más precisos se transcribe el contenido de la disposición:

*“ARTÍCULO 24. INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:*

- 1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.*
- 2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.*
- 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.*
- 4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.*
- 5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.*
- 6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.*
- 7. Los amparados por el secreto profesional.*
- 8. Los datos genéticos humanos.*

*PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información”<sup>32</sup>.*

Las causales de reserva se encuentran expresamente señaladas en la Constitución o en la ley<sup>33</sup>, y no en acuerdos *interpartes*. Por tratarse de disposiciones que limitan el derecho de acceso a la información dichas causales deben ser interpretadas de manera restrictiva. La justificación de las causales de reserva se explica en que obedece para proteger determinados fines públicos o derechos de terceros previstos en el ordenamiento jurídico, como pasa a explicarse:

---

<sup>31</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>32</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 21. enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>33</sup> Se citan ejemplos de documentos reservados previstos en la ley:

Ley 1324 de 13 de julio de 2009, “*Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el Sistema de Evaluación de Resultados de la Calidad de la Educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES*”, dispuso en su artículo 4° una reserva de los bancos de preguntas que se utilizan en las evaluaciones externas señalando que “*Gozan del privilegio de la reserva los bancos de preguntas que se utilicen en las evaluaciones externas [...]*”. En similar sentido, el párrafo segundo del artículo 164 de la Ley 270 de 1996 dispone que las pruebas aplicadas en los procesos de selección para ocupar cargos en carrera de la Rama Judicial tienen el carácter de reservado. Ley 270 de 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia. Marzo 7 de 1996. DO. N° 42.745. Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0270\\_1996\\_pr003.html#164](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996_pr003.html#164)

1. Los asuntos que versen sobre la defensa o seguridad del Estado, es decir la información relacionada con la inteligencia del Estado, tales como informes de inteligencia y contrainteligencia militar. Sobre el particular puede revisarse la sentencia de 7 de marzo de 2018<sup>34</sup>, en la que la sección cuarta del Consejo de Estado<sup>35</sup> resolvió una acción de tutela interpuesta contra una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fallo este último que ordenó la entrega de información clasificada de contrainteligencia, concretamente resultados de prueba de polígrafo. Concluyó el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo que incurrió el Tribunal de Cundinamarca en defecto sustantivo al ordenar la entrega de información que, dada su naturaleza, goza del carácter reservado. El fundamento de la reserva es el artículo 33 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013<sup>36</sup> *"por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones"*, que dispone que, en general, por la naturaleza de las funciones que cumplen los organismos de inteligencia y contrainteligencia, la información que manejan es reservada, tanto así, que se prohíbe su difusión hasta por 30 años, que se puede extender hasta por 15 años más.
2. Las directrices que da el Ministerio de Relaciones Exteriores a los jefes de misión y agentes diplomáticos, para el desarrollo de sus funciones.
3. También tendrán el carácter de reservados los documentos relacionados con el derecho a la intimidad de las personas, es decir lo que tiene ver con el ámbito personalísimo de cada individuo o familia, aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones que normalmente están sustraídos a la injerencia o al conocimiento de extraños. Debe aclararse que no se trata de la reserva de la totalidad de las hojas de vidas, la historia laboral o los expedientes pensionales, sino de apartes específicos que hagan alusión a datos que involucran la esfera de intimidad y privacidad de las personas, que se han considerado como datos sensibles<sup>37</sup>.

Sobre la Historia Clínica que también se encuentra sometida a reserva, debe señalarse además el carácter de documento privado y obligatorio, en el que se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley (Resolución 1995 de 1999<sup>38</sup>).

4. De igual forma se encuentran sometidos a reserva los referentes a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Según dispone el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011<sup>39</sup>, en comento,

<sup>34</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 11001-03-15-000-2017-01671-01(AC). C.P. Milton Chaves García. 7 de marzo de 2018. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/>

<sup>35</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 11001-03-15-000-2017-01671-01(AC). C.P. Milton Chaves García. 7 de marzo de 2018. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/>

<sup>36</sup> Ley 1621 de 2013. Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones. Art. 33. Abril 17 de 2013. DO. N° 48.764. Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1621\\_2013.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1621_2013.html)

<sup>37</sup> "Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos (Huella dactilar, Reconocimiento facial, Reconocimiento de iris, Geometría de la mano, Reconocimiento de retina, Reconocimiento vascular. hace referencia a las tecnologías que miden y analizan las características del cuerpo humano, como el ADN, las huellas dactilares, la retina y el iris de los ojos, los patrones faciales o de la voz y las medidas de las manos". Ley Estatutaria Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Ley 1581 de 2012. Art. 5. octubre 17 de 2012. DO. N° 48.587 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1581\\_2012.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html)

<sup>38</sup> Resolución 1995 de 1995. Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica. Julio 18 de 1995. Recuperado de: [https://www.minsalud.gov.co/Normatividad\\_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201995%20DE%201999.pdf](https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201995%20DE%201999.pdf)

<sup>39</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 24. Enero 18 de 2011

estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.

5. Es reservada la información financiera y comercial de las personas a partir del cual se pueda efectuar un análisis de riesgo.
6. La información que hace parte del denominado secreto empresarial es reservada, es decir todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por valor competitivo para la empresa desea mantener ocultos, tales como procesos de fabricación, formulas, recetas, listado de proveedores, listado de clientes, métodos de negocio entre otros.
7. Los datos e información amparados por el secreto profesional, esto es, al tenor de lo dispuesto en la Sentencia C-301 de 2012<sup>40</sup>: *'la información reservada o confidencial que se conoce por ejercicio de determinada profesión o actividad'*<sup>41</sup>. Dicha garantía tiene fundamento en el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución<sup>42</sup>, precepto en el que se le califica como inviolable.
8. Por último, la información sobre las características hereditarias de las personas también es reservada.

De acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 24<sup>43</sup>, para efectos de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información. Asimismo, prevé la Ley 1437 de 2011<sup>44</sup>, *'la restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella'*<sup>45</sup>.

Se precisa, que la reserva se predica respecto del documento o información pública en específico, pero no, frente a su existencia. Y es que la reserva legal de un documento o información pública no puede llevarse al extremo de mantener bajo secreto su existencia, lo que se protege es su contenido.

De otra parte, esta reserva legal no aplica cuando la información o documentos sean solicitados por autoridades judiciales, legislativas y administrativas que los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones, autoridades como la Fiscalía, la Procuraduría o Contraloría General de la Nación, las que, en todo caso, deben garantizar y asegurar la reserva de la información que les sea suministrada<sup>46</sup>.

Por último, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 25 de la ley 1437 de 2011<sup>47</sup>, la negativa a entregar la información debe ser motivada, es decir la autoridad que niega la información o los documentos por razones de reserva, debe indicar, de manera exacta, las disposiciones legales o constitucionales que sustentan su fundamento, es decir que la autoridad no se puede limitar a simplemente señalar el carácter

---

(Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>40</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia 301 de 2012. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: abril 25 de 2012). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-301-12.htm>

<sup>41</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia 301 de 2012. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: abril 25 de 2012). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-301-12.htm>

<sup>42</sup> Constitución Política de Colombia [CPC]. Art. 74. julio de 1991(Colombia).Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)

<sup>43</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 24. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>44</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>45</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 25. enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>46</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 27. enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>47</sup> "Artículo 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.

*La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella".* Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 25. enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

reservado de los documentos solicitados. En este punto, vale la pena citar la providencia de fecha 26 de junio de 2019 en la que el Consejo de Estado<sup>48</sup> dentro de acción de tutela promovida por unas ciudadanas contra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) SAS y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca<sup>49</sup>, por considerar que sus actuaciones eran violatorias de los derechos fundamentales de petición e información, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en tanto que la primera les negó la información que le solicitaron y, la segunda rechazó el recurso de insistencia interpuesto, respecto del deber de motivar la respuesta negativa, por parte de la autoridad, frente a solicitud de información, señaló: “Ciertamente, la SAE en el documento de respuesta no señaló la disposición o disposiciones legales por medio de las cuales justificaba el no suministro, en copia, de los documentos requeridos por las accionantes, que en concepto de aquella son privados o constitutivos de reserva”<sup>50</sup>.

No obstante, señala el mismo artículo 25<sup>51</sup> en comento, que contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos, por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno. Y precisamente no procede recurso alguno, porque en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011<sup>52</sup>, se concibe un procedimiento especial, independiente, judicial, expedito, informal, a efectos de que sea la jurisdicción contenciosa administrativa la que revise la negativa de acceder a dicha información o documentos. Aparece así la figura del recurso de insistencia, el que ya se consagraba en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 21 de la Ley 57 de 1985<sup>53</sup> y que consiste en el trámite a seguir cuando un documento o una información estén sometidos a reserva y la persona interesada insista en su petición de información o de documentos ante la autoridad que ha invocado tal reserva. Es a este recurso al que nos referiremos en las líneas siguientes.

## **EL RECURSO DE INSISTENCIA: UNA OPORTUNIDAD ADICIONAL PARA REITERAR EN UNA PETICIÓN DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS QUE HA SIDO NEGADA POR RAZÓN DE RESERVA**

### **a) Consagración legal y procedimiento**

El contenido de la disposición sobre el recurso de insistencia, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo<sup>54</sup>, sustituido por la Ley 1755 de 2015<sup>55</sup>, es el siguiente:

*“Artículo 26<sup>56</sup>. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.*

<sup>48</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Proceso 11001-03-15-000-2019-02403-00(AC). C.P. Nicolás Yepes Corrales. 26 de junio de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/>

<sup>49</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Proceso 11001-03-15-000-2019-02403-00(AC). C.P. Nicolás Yepes Corrales. 26 de junio de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/>

<sup>50</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Proceso 11001-03-15-000-2019-02403-00(AC). C.P. Nicolás Yepes Corrales. 26 de junio de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/>

<sup>51</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 25. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>52</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.htm](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.htm)

<sup>53</sup> Ley 57 de 1985. Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales. Julio 5 de 1985. DO. N° 37056. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=276>

<sup>54</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>55</sup> Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Junio 30 de 2015. DO. N° 49.559. Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1755\\_2015.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html)

<sup>56</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

*Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:*

- 1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.*
- 2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.*

**Parágrafo.** *El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado (sic) en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella*<sup>57</sup>.

La Corte al efectuar el análisis de constitucionalidad previo, al proyecto de Ley Estatutaria número 65 de 2012 Senado y número 227 de 2013 Cámara *"Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en sentencia C-951 de 2014*<sup>58</sup>, encontró exequible, el contenido del citado artículo 26<sup>59</sup>.

Señaló la Corte que el artículo en comentario *"establece el trámite a seguir cuando un documento o una información estén sometidos a reserva y la persona interesada insista en su petición de información o de documentos ante la autoridad que ha invocado tal reserva. El recurso de insistencia debe interponerse por escrito y sustentarse en la diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes"*<sup>60</sup>.

Y más adelante señala: *" (...) la Corte encuentra que el establecimiento de un procedimiento sumario para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, cuando los administrados consideren que este no ha sido satisfecho por parte de la administración, es idóneo en la medida en que se trata de un proceso judicial de única instancia a través del cual se decide de manera definitiva sobre la validez de la restricción al acceso de los documentos públicos, cuyas características procedimentales en nada riñen con el Estatuto Superior y, por el contrario, su estipulación legal es desarrollo de los artículos 15, 23, 74 y 209 de la Constitución Política, pero, además, se ajusta a los cánones del debido proceso previsto en el artículo 29 Constitucional"*<sup>61</sup>.

Así, mediante un proceso judicial de única instancia, el Tribunal Administrativo del lugar donde se encuentra la documentación negada, debe resolver, dentro del término de diez (10) días, si fue acertada o no la respuesta negativa de la entidad requerida, o lo que es lo mismo, se pronuncia sobre la validez de la restricción de los derechos fundamentales a la información y al acceso a los documentos públicos.

A continuación, se explica más detalladamente el trámite al tenor de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011<sup>62</sup> y los desarrollos jurisprudenciales:

---

<sup>57</sup>Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>58</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-951 de 2014. (M.P. Martha Victoria Sánchez Méndez: diciembre 4 de 2014). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2014/C-951-14.htm>

<sup>59</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>60</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-951 de 2014. (M.P. Martha Victoria Sánchez Méndez: diciembre 4 de 2014). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2014/C-951-14.htm>

<sup>61</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-951 de 2014. (M.P. Martha Victoria Sánchez Méndez: diciembre 4 de 2014). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2014/C-951-14.htm>

<sup>62</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

1. **No requiere agotar requisito de procedibilidad alguno:** Se trata de un recurso que, en todos los casos, procede de manera directa, es decir que previo a su interposición no es necesario agotar recurso alguno como el de reposición<sup>63</sup>.
2. **Ante quien se ejerce y plazo para interponerse:** El recurso de insistencia debe interponerse por escrito y sustentarse en la diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes, es decir que su interposición se lleva a cabo ante la autoridad que negó la información.
3. **Plazo de la autoridad administrativa para remitir el recurso de insistencia a la autoridad judicial:** Señala el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011<sup>64</sup> que la autoridad que invoca la reserva es la que deberá remitir la solicitud de insistencia al competente en la jurisdicción contenciosa, en donde se surtirá el trámite de insistencia. No obstante, el legislador no definió el término dentro del cual el funcionario debe remitir la respectiva documentación al juez o tribunal contencioso administrativo. Frente a esto, la Corte, señaló que a la luz de una interpretación sistemática de los artículos 209 de la Constitución<sup>65</sup>, en consonancia con el principio de celeridad previsto en el numeral 13 del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011<sup>66</sup>, la remisión que debe efectuar la autoridad administrativa al operador judicial debe ser inmediata, *“con el fin de salvaguardar de manera efectiva, los derechos fundamentales del peticionario”*<sup>67</sup>. Por su parte el Consejo de Estado ha señalado que omitir este deber por parte de la autoridad, se considera violatorio de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso del peticionario<sup>68</sup>.
4. **Competencia para resolver el recurso de insistencia.** La norma (artículo 26 Ley 1437 de 2011<sup>69</sup>) asigna la competencia para resolver sobre esta insistencia, al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá o al juez administrativo, si las autoridades competentes son distritales o municipales, quienes decidirán en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada. Nótese cómo, si bien el recurso se presenta ante una autoridad administrativa, la que ha invocado la reserva, finalmente, es una autoridad independiente, la judicial, la que lo resuelve, según el caso, el respectivo Tribunal Administrativo o el juez administrativo.

Resulta pertinente citar en este punto que, en la referida sentencia de control previo de constitucionalidad al proyecto de Ley número 65 de 2012 Senado y número 227 de 2013 Cámara *“Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*, sentencia C-951 de 2014<sup>70</sup>, la Corte consciente que, en no todos los municipios del país existen juzgados administrativos, el recurso de insistencia sería nugatorio, consideró que, en el evento que en el municipio no exista juez administrativo, la competencia para resolver acerca del recurso de insistencia previsto en el artículo 26, debe corresponder a cualquier juez del municipio sede de la autoridad que aplicó la reserva. Por ello, declaró la Corte la exequibilidad condicionada de la norma, es decir, bajo el

<sup>63</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Proceso 11001-03-15-000-2019-03121-00(AC). C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 1 de agosto de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/>

<sup>64</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>65</sup> Constitución Política de Colombia [CPC]. Art. 209. julio de 1991(Colombia).Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)

<sup>66</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 3. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>67</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-951 de 2014. (M.P. Martha Victoria Sánchez Méndez): Diciembre 4 de 2014). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-951-14.htm>

<sup>68</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Proceso 11001-03-15-000-2019-02403-00(AC). C.P. Nicolás Yepes Corrales. 26 de junio de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/>

<sup>69</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>70</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-951 de 2014. (M.P. Martha Victoria Sánchez Méndez: diciembre 4 de 2014). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2014/C-951-14.htm>



entendido de que “en los municipios en los que no exista juez administrativo, se podrá instaurar este recurso ante cualquier juez del lugar”<sup>71</sup>.

1. **Término de la autoridad judicial para resolver.** El Tribunal Administrativo o los jueces tienen 10 días para decidir.
2. **Recursos contra la decisión que resuelve la insistencia.** Contra el fallo de única instancia dictado dentro del recurso de insistencia no procede el recurso de alzada. Claro que respecto de la decisión si puede interponerse el recurso de reposición<sup>72</sup>.

Adicionalmente debe señalarse que, vía jurisprudencial,<sup>73</sup> se ha señalado que, en el evento en que, pese a la orden dada por el juez contencioso a la autoridad respectiva, dentro de un trámite de insistencia, consistente en decretar la entrega de la información pedida, esta se mantenga renuente, puede el actor hacer uso de lo dispuesto en el artículo 305 del Código General del Proceso<sup>74</sup>, en aras de obtener de forma material los documentos que requiere. Preceptúa el artículo 305<sup>75</sup> lo siguiente:

*“Artículo 305. Procedencia. **Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas** o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando contra ellas se haya concedido apelación en el efecto devolutivo.*

*Si en la providencia se fija un plazo para su cumplimiento o para hacer uso de una opción, este solo empezará a correr a partir de la ejecutoria de aquella o de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso. La condena total o parcial que se haya subordinado a una condición solo podrá ejecutarse una vez demostrado el cumplimiento de esta”<sup>76</sup> (Negrillas fuera del texto original).*

La anterior disposición resulta aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011<sup>77</sup>, norma según la cual, “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”<sup>78</sup>. Precisando que en la actualidad está en vigencia, en el ordenamiento jurídico colombiano, el Código General del Proceso y no el Código de Procedimiento Civil<sup>79</sup>.

## **b) El recurso de insistencia y la acción de tutela**

En los eventos en los que la Administración o los particulares, no respondan la petición, no resulta aplicable el recurso de insistencia sino la acción de tutela, toda vez que la procedencia del recurso de

<sup>71</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-951 de 2014. (M.P. Martha Victoria Sánchez Méndez); Diciembre 4 de 2014). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-951-14.htm>

<sup>72</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 11001-03-15-000-2018-04391-00(AC). C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 2 de mayo de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscadord-jurisprudencia/>

<sup>73</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Proceso : 11001-03-15-000-2019-01402-00(AC). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. 20 de mayo de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscadord-jurisprudencia/>

<sup>74</sup> Código General del Proceso [CGP]. Ley 1564 de 2012. Art. 305. Julio 12 de 2012 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1564\\_2012.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html)

<sup>75</sup> Código General del Proceso [CGP]. Ley 1564 de 2012. Art. 305. Julio 12 de 2012 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1564\\_2012.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html)

<sup>76</sup> Código General del Proceso [CGP]. Ley 1564 de 2012. Art. 305. Julio 12 de 2012 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1564\\_2012.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html)

<sup>77</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 306. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>78</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 306. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>79</sup> Código de Procedimiento Civil. [CPC]. Decreto 1400 de 1970. Agosto 6 de 1970 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/codigo\\_procedimiento\\_civil.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil.html)

insistencia requiere una respuesta expresa, negativa frente al suministro de la información o documentos. En otras palabras, ambos mecanismos judiciales son una garantía para la protección del derecho constitucional fundamental de petición, sin embargo, son independientes y excluyentes, en ese sentido, en los eventos en los que la Administración o los particulares, no respondan una solicitud, o se niega el acceso a la información, pero con fundamento en razones distintas a su carácter reservado, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para salvaguardar el derecho contenido en el artículo 23 Superior<sup>80</sup>; por el contrario, cuando frente a lo solicitado exista una respuesta expresa negativa frente al suministro de la información aduciendo reserva lo procedente es la interposición del recurso de insistencia al que se refiere el artículo 26 de la ley 1437 de 2011<sup>81</sup>.

En sentencia T-466 de 2010<sup>82</sup>, se pronunció la Corte en los siguientes términos:

"La jurisprudencia constitucional ha distinguido dos hipótesis de desconocimiento del derecho fundamental de acceso a los documentos públicos que cuentan con dos mecanismos de defensa judicial diferentes. En efecto, la primera consiste en que la administración emita una respuesta negativa a la solicitud, aduciendo su carácter reservado e invocando las disposiciones constitucionales o legales pertinentes. En este evento, la Corte no ha dudado en afirmar que el recurso de insistencia es el mecanismo judicial de defensa procedente, en tanto aquel constituye un instrumento específico, breve y eficaz para determinar la validez de la restricción a los derechos fundamentales en cuestión. La segunda hipótesis consiste en la vulneración por falta de respuesta material o respuesta diversa al carácter reservado de la información. En este supuesto, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que es la acción de tutela el mecanismo idóneo para obtener la protección de tal derecho fundamental."<sup>83</sup>

De otra parte, es improcedente la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de procedencia de la subsidiariedad, cuando el accionante no haya hecho uso del recurso de insistencia contenido en el artículo 26 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015<sup>84</sup>, frente a la negativa por parte de la autoridad de entregar la información o documentos que invoca como sujeta a reserva y tampoco existe justificación de su parte acerca de por qué no acudió a dicho mecanismo. Ese es el entendimiento que le ha dado el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo<sup>85</sup>, al carácter principal del recurso de insistencia, en providencia de 4 de diciembre de 2018<sup>86</sup>, en la que rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por un particular en contra de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y otros, toda vez que el tutelante no hizo uso del recurso de insistencia frente a la negativa de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, que se negó a entregar unos documentos pedidos por el peticionario por estar bajo reserva. Y era el recurso judicial de insistencia el idóneo para resolver definitivamente sobre el tema y no la acción de tutela que fue el mecanismo utilizado por el actor. Es decir

<sup>80</sup> Constitución Política de Colombia [CPC]. Art. 23. julio de 1991(Colombia).Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)

<sup>81</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.htm](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.htm)

<sup>82</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-466 de 2010. (M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio : Junio 16 de 2010). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-466-10.htm>

<sup>83</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-466 de 2010. (M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio : Junio 16 de 2010). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-466-10.htm>

<sup>84</sup> Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Art.26. Junio 30 de 2015. DO. N° 49.559. Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1755\\_2015.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html)

<sup>85</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Proceso 11001-03-15-000-2018-03733-00(AC). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 4 de diciembre de 2018. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/>

<sup>86</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Proceso 11001-03-15-000-2018-03733-00(AC). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 4 de diciembre de 2018. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/>

que era el recurso de insistencia el medio ordinario de defensa dispuesto por el ordenamiento jurídico para examinar la legalidad de la respuesta dada por la autoridad y que invocaba la reserva.

En conclusión, el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015<sup>87</sup> sobre el recurso de insistencia, al disponer un proceso judicial autónomo y principal para debatir la decisión de la autoridad de otorgar carácter reservado a determinada información o documento, la acción de tutela adquiere un carácter subsidiario.

### c) El recurso de insistencia frente a los particulares

Las reglas del recurso de insistencia no se aplican a las organizaciones particulares, pues las mismas están dirigidas únicamente para las autoridades públicas. Así se desprende del análisis de constitucionalidad efectuado al artículo 26 de la Ley 1755 de 2015<sup>88</sup> en la sentencia C-951 de 2014<sup>89</sup> y del contenido de la T-487 de 2017<sup>90</sup>. En aplicación de esa línea jurisprudencial, el Consejo de Estado, en providencia de 2 de mayo de 2019<sup>91</sup>, dentro de una acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por decisión emitida por este último, al desatar el recurso de insistencia interpuesto por un particular contra Fiduciaria Corficolombiana S.A, sociedad anónima de carácter privado<sup>92</sup>, quien se negó a entregar información solicitada por el peticionario invocando reserva legal bancaria, rechazó el recurso de insistencia interpuesto contra Corficolombiana ya que ésta tiene naturaleza privada y el artículo 33 de la Ley 1755 de 2015<sup>93</sup> no habilita que se le extienda este recurso por estar previsto exclusivamente para autoridades de carácter público.

El Consejo de Estado al resolver la tutela que contra la antedicha decisión interpuso el peticionario, acogió la postura del Tribunal Administrativo de Antioquia y en ese sentido precisó que si bien *“el artículo 23 de la Constitución Política previó el derecho fundamental de petición, en el que se fijó como sujetos pasivos del mismo a las autoridades y a las organizaciones privadas (...) en el artículo 33 del mencionado capítulo tercero, consagró que las peticiones de los usuarios ante las instituciones privadas: Cajas de Compensación Familiar, Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, entidades que conforman el sistema financiero y bursátil y aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios, y que se rijan por el derecho privado, se les aplicaría, en lo pertinente, las disposiciones sobre el derecho de petición de los capítulos primero y segundo de la Ley 1755 de 2015”*<sup>94</sup>. Y más adelante señaló *“En ese sentido, explicó que no era posible atribuir unas competencias a los juzgados y tribunales administrativos que no les ha sido conferida legalmente, de ahí que, en estricto sentido con el artículo 26 ibídem, la posibilidad de presentar el recurso de insistencia está dado para las peticiones que se presenten ante las autoridades del orden nacional, departamental, distrital o municipal, sin que en ese grupo se incluyera a las organizaciones de carácter privado”*.

<sup>87</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>88</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>89</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-951 de 2014. (M.P. Martha Victoria Sánchez Méndez: Diciembre 4 de 2014). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2014/C-951-14.htm>

<sup>90</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-487 de 2017. (M.P. Alberto Rojas Ríos: Julio 28 de 2017). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-487-17.htm>

<sup>91</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 11001-03-15-000-2018-04391-00(AC). C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 2 de mayo de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscajur-jurisprudencia/>

<sup>92</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 11001-03-15-000-2018-04391-00(AC). C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 2 de mayo de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscajur-jurisprudencia/>

<sup>93</sup> Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Art.33. Junio 30 de 2015. DO. N° 49.559. Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1755\\_2015.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html)

<sup>94</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 11001-03-15-000-2018-04391-00(AC). C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 2 de mayo de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscajur-jurisprudencia/>

## CONCLUSIONES

Se analizó en el presente escrito el denominado recurso de insistencia previsto en el artículo 26 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo<sup>95</sup>, que se muestra como una herramienta útil, adicional a la acción de tutela e independiente de ella, para lograr la protección del derecho constitucional fundamental de petición.

A lo largo de este trabajo se analizó:

1. El derecho de petición como derecho fundamental,
2. La existencia de la reserva legal como una excepción de acceso a la información y documentos públicos, y un límite al ejercicio de este derecho
3. El recurso de insistencia como un instrumento otorgado por el legislador para proteger el derecho de petición frente a la respuesta negativa de la administración, para entregar documentos o información, con fundamento en el artículo 24 de la ley 1437 de 2011<sup>96</sup>.

Así pues, lo que se evidencia es que el legislador privilegia la protección del derecho de petición, que como es sabido frente a ausencia de respuesta tiene la vía judicial de la acción de tutela; y es natural que refuerce su protección, este derecho es la vía por medio de la cual se pueden proteger otros de mayor entidad como la libertad de expresión o el derecho a la información.

Así las cosas, el recurso de insistencia es la vía idónea para que quien vea vulnerado el ejercicio del derecho fundamental de petición por la actuación de una autoridad que niega la entrega de información o documentos, invocando la reserva de ley, pueda acceder a ellos, o lo que es lo mismo es el mecanismo procedente para que quien quiera obtener información o documentos, presuntamente protegidos con reserva, pueda lograr mediante la revisión de un tercero imparcial, es decir ajeno a la autoridad que posee la información o documentos, a saber, el juez, de darse los presupuestos de ley, el acceso a ellos.

Adicionalmente el procedimiento previsto en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011<sup>97</sup> reviste un trámite sencillo ajeno a cualquier tipo de formalismo o agotamiento de requisito de procedibilidad previo, que debe ser resuelto por la autoridad judicial en un término perentorio de 10 días (el mismo de la acción de tutela).

De todo lo hasta aquí expuesto puede concluirse que para que proceda el recurso de insistencia se debe tener en cuenta cuatro requisitos:

- i. debe existir una solicitud de información o expedición de copias de documentos ante una autoridad administrativa;
- ii. que la petición sea negada total o parcialmente, es decir que esa petición sea rechazada total o parcialmente, mediante decisión motivada, en la que se indiquen las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos por motivos de reserva<sup>98</sup>;
- iii. que el peticionario insista, dentro del término legal (en la diligencia de notificación o dentro de los diez días siguientes), en su solicitud ante la autoridad<sup>99</sup>; y
- iv. que se envíe al tribunal competente los documentos pertinentes para poder decidir si son o no reservados<sup>100</sup>.

<sup>95</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>96</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 24. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>97</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

<sup>98</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Proceso 11001-03-15-000-2019-03380-00(AC). C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 7 de octubre de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/>

<sup>99</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 50001-23-33-000-2019-00139-01(AC). C.P. Milton Chaves García. 11 de julio de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/>

<sup>100</sup> Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Proceso 11001-03-06-000-2018-00240-00(C). C.P. Edgar González López. 27 de

## **BIBLIOGRAFÍA**

CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (2011). Ley 1437 de 2011. Art. 13. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html). Consultado el 19 de marzo de 2020.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO [CPACA]. LEY 1437 DE 2011. Art. 21. enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html) Consultado el 19 de marzo de 2020.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO [CPACA]. LEY 1437 DE 2011. Art. 21. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html) Consultado el 19 de marzo de 2020.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO [CPACA]. LEY 1437 DE 2011. Art. 25. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html) Consultado el 19 de marzo de 2020.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO [CPACA]. LEY 1437 DE 2011. Art. 27. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html) Consultado el 19 de marzo de 2020.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO [CPACA]. LEY 1437 DE 2011. Art. 25. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html) Consultado el 19 de marzo de 2020.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO [CPACA]. LEY 1437 DE 2011. Art. 26. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html) Consultado el 19 de marzo de 2020.

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO [CGP]. LEY 1564 DE 2012. Art .305. Julio 12 de 2012 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1564\\_2012.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html) Consultado el 19 de marzo de 2020.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. PROCESO 11001-03-06-000-2018-00240-00(C) 2019. C.P. Édgar González López. 27 de marzo de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurispr> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. PROCESO 11001-03-15-000-2017-01671-01(AC) 2018. C.P. Milton Chaves García. 7 de marzo de 2018. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. PROCESO 11001-03-15-000-2019-02403-00(AC) 2019.. C.P. Nicolás Yepes Corrales. 26 de junio de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. PROCESO 11001-03-15-000-2019-03121-00(AC) 2019.. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 1 de agosto de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. PROCESO 11001-03-15-000-2019-02403-00(AC) 2019. C.P. Nicolás Yepes Corrales. 26 de junio de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. PROCESO 11001-03-15-000-2018-04391-00(AC) 2019. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 2 de mayo de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. PROCESO : 11001-03-15-000-2019-01402-00(AC) 2019. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. 20 de mayo de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. PROCESO 11001-03-15-000-2018-03733-00(AC) 2018. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 4 de diciembre de 2018. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. PROCESO 11001-03-15-000-2018-04391-00(AC)2019. C.P Julio Roberto Piza Rodríguez. 2 de mayo de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. PROCESO 11001-03-15-000-2019-03380-00(AC) 2019. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 7 de octubre de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. PROCESO 50001-23-33-000-2019-00139-01(AC) 2019. C.P. Milton Chaves García. 11 de julio de 2019. Recuperado de: <http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/> Consultado el 19 de marzo de 2020.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA [CPC]. ART. 209. JULIO 19 DE 1993 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html) Consultado el 19 de marzo de 2020.

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA [CPC]. Art. 23. julio de 1991(Colombia).Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html). Consultado el 19 de marzo de 2020.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA [CPC]. ART. 74. JULIO 19 DE 1993 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html) Consultado el 19 de marzo de 2020.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. AUTO 006 DE 1993. (M.P. Jorge Arango Mejía: Mayo 20 de 1993). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/1993/A006-93.htm> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. SENTENCIA C-487 DE 2017. (M.P. Alberto Rojas Ríos: Julio 28 de 2017). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-487-17.htm> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. SENTENCIA C-951 DE 2014. (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez: diciembre 4 de 2014). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2014/C-951-14.htm> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. SENTENCIA T-101 DE 2014. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: febrero 25 de 2014). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-101-14.htm> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. SENTENCIA T-1160A DE 2001. (M.P. Manuel Jose Cepeda Espinosa: noviembre 2 de 2001). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-1160A-01.htm> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. SENTENCIA T-249 DE 2001. (M.P. José Gregorio Hernández Galindo: Febrero 27 de 2001). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-249-01.htm> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. SENTENCIA T-259 DE 2004. (M.P. Clara Inés Vargas Hernández: Marzo 17 de 2004). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-259-04.htm>

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. SENTENCIA T-466 DE 2010. (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio: Junio 16 de 2010). Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-466-10.htm> Consultado el 19 de marzo de 2020.

CORTE CONSTITUCIONAL. (17 de septiembre de 2019). Corte Constitucional. Obtenido de Corte Constitucional. Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?El-34,7%-de-las-tutelas-radicadas-en-la-Corte-Constitucional-en-los-7-primeros-meses-del-2019-reclamaron-el-derecho-de-petici%C3%B3n.-8765>. Consultado el 19 de marzo de 2020.

LEY 1324 DE 2009. Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES. Julio 13 de 2009. DO. N° 47.409. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36838>

LEY 270 DE 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia. Marzo 7 de 1996. DO. N° 42.745. Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0270\\_1996\\_pr003.html#164](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996_pr003.html#164) Consultado el 19 de marzo de 2020.

LEY 1437 DE 2011. Art. 306. Enero 18 de 2011 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html) Consultado el 19 de marzo de 2020.

LEY 57 DE 1985. Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales. Julio 5 de 1985. DO. N° 37056. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=276> Consultado el 19 de marzo de 2020.

LEY ESTATUTARIA POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LEY 1581 DE 2012. Art. 5. Octubre 17 de 2012. DO. No 48.587 (Colombia). Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1581\\_2012.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html). Consultado el 19 de marzo de 2020.

RAMA JUDICIAL. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Recuperado de: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/publicaciones/2018-2019>. Consultada el 19 de marzo de 2020.

## **BIODATA**

**Ana Carolina MERCADO GAZABÓN:** Abogada de la Universidad Externado de Colombia (Colombia). Especialista en Derecho Público, Ciencia y Sociología Política de la Universidad Externado de Colombia (Colombia). Magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario (Colombia). Candidata a Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca (España). Actualmente docente investigadora de la Universidad del Sinú (Montería – Córdoba).



## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 31-49  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

## Literatura y violencia: memoria, recuerdo y evocación como herramientas de no repetición *En el brazo del río*

*Literature and Violence: Memory, Remembrance and Evocation as Tools of Non-Repetition  
'En el brazo del río'*

**Andrés BOTERO BERNAL**

<http://orcid.org/0000-0002-2609-0265>

[aboterob@uis.edu.co](mailto:aboterob@uis.edu.co)

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

**Mario PALENCIA SILVA**

<http://orcid.org/0000-0002-2609-0265>

[palencia@uis.edu.co](mailto:palencia@uis.edu.co)

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

**Alonso SILVA ROJAS**

<https://orcid.org/0000-0002-5605-9840>

[asilva@uis.edu.co](mailto:asilva@uis.edu.co)

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

Este trabajo está depositado en Zenodo:  
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3907034>

## RESUMEN

El artículo analiza, desde un enfoque fundamentalmente filosófico, los sentidos políticos de la literatura sobre el conflicto armado, poniendo como ejemplo de ello la novela *En el brazo del río* (2006 y 2017) de la escritora colombiana Marbel Sandoval Ordoñez. Estos sentidos políticos pueden resumirse en tres: primero, la reconstrucción de las memorias traumáticas, que logran –por su crudeza– una poderosa impresión en el lector; segundo, unas memorias convertidas en vehículos de las narrativas para el reconocimiento (autocomprensión) de cómo llegamos a ser lo que somos como sociedad; y tercero, la aspiración a que un lector afectado por este tipo de narrativas pueda romper el círculo vicioso de la violencia.

**Palabras clave:** Conflicto armado, Colombia, Novela, Violencia, Río Magdalena, *En el brazo del río*, Marbel Sandoval.

## ABSTRACT

The paper analyzes, from a fundamentally philosophical perspective, the political meanings of the literature on the armed conflict, giving as an example the novel *En el brazo del río* (2006 & 2017) by the Colombian writer Marbel Sandoval Ordoñez. These political meanings can be summed up in three: first, the reconstruction of traumatic memories, which achieve - due to their harshness - a powerful impression on the reader; second, memories converted into vehicles of narratives for the recognition (self-understanding) of how we came to be what we are as a society; and third, the aspiration that a reader affected by this type of narrative can break the vicious circle of violence.

**Keywords:** Armed conflict, Colombia, Novel, Violence, Magdalena River, *En el brazo del río*, Marbel Sandoval.

Recibido: 20-05-2020 • Aceptado: 25-06-2020



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## INTRODUCCIÓN<sup>1</sup>

*En el brazo del río* es una novela de la escritora y periodista Marbel Sandoval Ordoñez [1959-], publicada en el 2006<sup>2</sup> y con una segunda edición en el 2017<sup>3</sup>. Esta última edición hizo parte de la colección “La biblioteca del río”, de la editorial Diente de León, la cual busca rescatar la literatura que “permite el conocimiento de las representaciones individuales o colectivas del espacio geográfico aquí determinado [río Magdalena], considerado como territorio o paisaje”, según podemos leer en la información de la colección<sup>4</sup>. Nos basaremos para nuestro análisis en la versión del 2017.

Asimismo, esta novela ha trascendido el formato libro y fue adaptada al teatro por el dramaturgo cubano Atilio Caballero y llevada a escena por el colectivo “Diente de León” en el 2018, bajo la dirección de Manuel José Jaimes.

Debemos agregar que con esta novela inicia una trilogía de la autora sobre la memoria de las víctimas del conflicto armado, a la que le siguen las obras: “Joaquina Centeno” (2017) y “Las Brisas” (esta última aún inédita).

*En el brazo del río* tiene la particularidad que está escrita a dos voces, independientes la una de la otra. La primera voz es la de Sierva María Malagón y la segunda la de Paulina Lizcarro, adolescentes y entrañables amigas del colegio, quienes con su narración resignifican el conflicto armado y la barbarie (Cárdenas: 2017). Cada una de ellas, desde su perspectiva, narra la amistad que surge, pero alrededor de esa bella amistad que, en ciertos recodos de la obra parece insinuar un enamoramiento juvenil de Sierva hacia Paulina, está el Río Magdalena, con sus alegrías y tristezas.

En este río, el dolor (fruto de la injusticia por la masacre de los masetos o paramilitares) termina disputándose la recia amistad de las dos jóvenes, en un marcado ambiente de indiferencia de la sociedad del momento frente a la barbarie (la de la masacre de Cimitarra-Vereda Vuelta Acuña (Santander) ocurrida el 12 de enero de 1984), la misma que se lleva la vida (y el cuerpo, pues nunca apareció) de Paulina. No queremos dar más elementos de la trama, para evitarle al lector un indebido spoiler, pero no podemos desaprovechar la oportunidad que ahora se nos permite de analizar, desde la filosofía política, una obra como esta.

Ahora, si bien la novela no busca ser una ‘memoria histórica’ en tanto tiene un fuerte componente ficcional, el drama de la misma surge de que está basada en hechos reales, para desconcierto del lector. ¿Cómo pudo suceder algo así? Es lo que se pregunta quien termina de leer la obra.

Sin embargo, repetimos, sigue siendo un relato ficcional, aunque tremendamente realista, como bien nos lo cuenta la autora:

En ‘El brazo del río’ y ‘Joaquina Centeno’ parto de hechos reales. Elijo los datos que así los ubican, así como a los involucrados, víctimas y victimarios, pero me alejo de los mismos en la medida en que construyo los personajes; les invento una vida, les doy un lugar para que puedan ser reconocidos, entendidos, si es el caso, odiados, si es necesario. Cuando pienso en mi literatura siento que recreo esa realidad como una manera de ponerle rostro a quienes somos para que no nos acostumbremos a vivir inmersos en la violencia; para que sintamos a los demás como propios y nos duela su dolor y nos alegren sus alegrías, y ojalá nazca un sentimiento de necesidad de claridad y justicia<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Resultado de investigación financiado con recursos del proyecto 2328 (código SIVIE) de la Universidad Industrial de Santander (Colombia). Esta investigación se realizó bajo el método documental-bibliográfico, con enfoque hermenéutico.

<sup>2</sup> Sandoval, M. (2006). *En el brazo del río*. Medellín: Hombre Nuevo Editores. ISBN: 9789585950566.

<sup>3</sup> Sandoval, M. (2017). *En el brazo del río*. Bogotá: Diente de León. ISBN: 9588245168.

<sup>4</sup> Presente en: Sandoval, M. (2017) *Ibid.* p. 158.

<sup>5</sup> Aguirre, R. (26 de junio de 2016). Entrevista a Marbel Sandoval Ordoñez. *Siempre Latina*. Disponible en: [http://siemprelatina.com/latinas\\_destacadas/marbel-sandoval-ordonez/](http://siemprelatina.com/latinas_destacadas/marbel-sandoval-ordonez/)

La idea del libro nació, según Marbel Sandoval, de la siguiente manera:

Uno como autor siempre está pensando en un tema para escribir, sin embargo, un día se encuentra que es el tema el que lo elige a uno. Mis novelas las puedo escribir en varios meses, pero su tiempo de gestación es larguísimo. La primera, 'En el brazo del río', la escribí 20 años después de que estuviera enfrentada al hecho que la generó<sup>6</sup>.

Y agrega:

Yo llego a la región y me encuentro a un grupo de campesinos que están llegando por el río y están diciendo que los están matando, la noticia ya había sido publicada en los medios, se decía que el Ejército había matado ocho guerrilleros en un enfrentamiento, pero yo llego y lo que me encuentro es que estaban matando a los campesinos<sup>7</sup>.

Pero, ¿qué pasó en realidad? Hemos podido recopilar la siguiente información sobre la masacre ocurrida en la Vereda Vuelta Acuña (Santander), Municipio de Cimitarra, el 12 de enero de 1984. Según las fuentes documentales, los campesinos: Honorio Muñoz Céspedes, Jesús Muñoz, Óscar Yepes, Carlos Tobón, Isaura Lascarro, su hija Beatriz Urrego Lascarro, Cruz Elena López y un joven de 15 años quien era conocido como "Juancho", fueron asesinados en una operación conjunta de soldados de la XIV Brigada del Ejército, en ese momento a cargo del General Farouk Yanine Díaz, y del grupo paramilitar M.A.S. (Muerte a Secuestradores). Sin embargo, en el número de víctimas hay información contradictoria, mientras en una fuente se habla de 5 asesinados<sup>8</sup> en las demás se habla de 8<sup>9</sup>.

De los documentos revisados se encuentra que la mayoría de los cadáveres presentaron signos atroces de tortura. Al parecer, todas las víctimas fueron quemadas con ácido, pero eso no fue todo; a Isaura, por ejemplo, le arrancaron los ojos, y los vientres de las mujeres fueron abiertos. De acuerdo con un informe del Grupo de Memoria Histórica<sup>10</sup> en donde se retoma uno de los testimonios de un sobreviviente, se afirma que el único cuerpo intacto (sin signos de tortura) fue el de Honorio.

Del relato de Raúl Berrio<sup>11</sup>, hijo de Isaura y hermano de Beatriz, con relación a los personajes de la novela *En el brazo del río*, es importante señalar que Beatriz correspondería al personaje de Paulina Lazcarro, de quien nunca se encontró su cuerpo. Según Raúl, su madre fue torturada y violada por paramilitares y soldados, y aparecieron todos los cuerpos menos el de Beatriz (de acuerdo con rumores, sus restos destrozados fueron tirados al río). Claro está, que esto no supone, por el carácter ficcional de la obra, que Beatriz haya sido retratada fielmente en la novela, pero sí el espíritu de injusticia que rodeó este acto de barbarie.

Luego de estas aclaraciones, queremos recordar al lector que nuestra intención no es hacer un análisis estético de la obra, cosa que dejamos para mejores manos, sino resaltar varios aspectos desde nuestro

<sup>6</sup> Manrique, W. (27 de junio de 2017). Marbel Sandoval Ordóñez: "Lo que hay en Colombia, ahora, por encima de todo, es odio". *WMagazin*. Disponible en: <http://wmagazin.com/marbel-sandoval-ordonez-lo-que-hay-en-colombia-ahora-por-encima-de-todo-es-odio/>

<sup>7</sup> Trujillo, J. (22 de abril de 2018). Literatura y periodismo: una forma de acercarse a la realidad. *Plaza Capital*. Disponible en: <https://plazacapital.co/escena/2993-literatura-y-periodismo-una-forma-de-acercarse-a-la-realidad>

<sup>8</sup> Testimonio de Raúl Berrio, hijo de Isaura Lascarro y hermano de Beatriz: Berrio, R. (21 de octubre de 2014). Víctimas con sufrimientos olvidados. Recuperado de: [pazfarc-ep.org/noticieros/item/2224-la-masacre-de-vuelta-acuna.html](http://pazfarc-ep.org/noticieros/item/2224-la-masacre-de-vuelta-acuna.html)

<sup>9</sup> Colombia nunca más. (16 de julio de 2001). Cimitarra. De la Colonización a la Militarización. Disponible en: [www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14/cap2.html](http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14/cap2.html); Colombia nunca más. (S.F.). Farouk Yanine Díaz - Alias: "El Turco", "El Águila". Disponible en: <https://vidassilenciadas.org/farouk-yanine-diaz-alias-el-turco-el-aguila/>; Equipo Nikor (editor). (29 de mayo de 2001). Colombia Nunca Más. Disponible en: [www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z7/Intro.html](http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z7/Intro.html); Grupo Memoria Histórica. (2011). *El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Carare (ATCC)*. Bogotá: Taurus. ISBN: 9789587583953; Insuasty, A., Valencia, J. & Restrepo, J. (2016). *Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)*. Medellín: Editorial Kavilando. ISBN: 978-958-59647-4-7; Vidas silenciadas. (S.F.). Masacre Vuelta Acuña - Cimitarra 12 de Enero de 1984. Disponible en: <http://vidassilenciadas.org/victimas/1997/>

<sup>10</sup> Grupo de Memoria Histórica. (2011). Op. Cit.

<sup>11</sup> Cfr. Berrio, R. (2014). Op. Cit.

campo disciplinario, la filosofía política, de esta importante novela colombiana.

Para concluir este apartado introductorio, señalamos que este texto es un resultado de la investigación institucional denominada “Las novelas contemporáneas colombianas *En el brazo del río*, *La balada de los bandoleros baladíes*, *Viaje al interior de una gota de sangre*, *Rebelión de los oficios inútiles* y *La multitud errante*, como medio de formación ética del lector en torno a la mujer y la representación de su cuerpo en el marco del conflicto armado, a la luz del pensamiento ético político de Martha Nussbaum”. Esta investigación, financiada por la Universidad Industrial de Santander, se guió por la metodología de investigación documental, con un enfoque analítico-hermenéutico.

## 1. LOS SENTIDOS POLÍTICOS DE LA LITERATURA SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

El conflicto en sí mismo, la irrupción de actores como el paramilitarismo y el narcotráfico, con la corrupción que ha generado al interior de todas las instituciones, incluida la misma guerrilla, así como la violación constante de derechos humanos fundamentales, han proporcionado material abundante no sólo para la literatura sino para el periodismo y la investigación<sup>12</sup>.

En primer lugar, esta novela es un claro ejemplo, sin ser el primero ni el último, de cómo muchos literatos colombianos se han convertido en agentes culturales que, aprovechando su oportunidad con la narración, han sabido interpelar al lector para que este pueda reconocerse en medio de una sociedad donde la violencia y el dolor se han sobrepuesto sobre la verdad y la justicia<sup>13</sup>. Y esto se ha podido gracias al cambio en la forma de narrar la violencia, tal como lo indica Cárdenas, refiriéndose a dos literatos colombianos: Rosero y Sandoval, esta última autora de *En el brazo del río*:

Antes de contar una violencia reiterada donde la cantidad de muertos o el sin número de desaparecidos es el pilar de la trama narrativa, estos dos escritores buscan ubicar al lector en un ángulo desde el cual logren comprender las dinámicas y el entorno que se vive al interior de un escenario de guerra. Ello es, que a través de los recursos utilizados en la configuración de las obras, tanto Rosero como Sandoval posibilitan la creación de voces narrativas que observan, escuchan y perciben todo aquello que les sucede antes, durante y después de estallar la confrontación armada o el evento violento<sup>14</sup>.

En este sentido, estos agentes culturales, que de cierta manera podríamos llamar “intelectuales comprometidos” con una “visión responsable de su propia labor”<sup>15</sup>, han logrado posicionar la violencia no solo en el espectro de la narrativa colombiana del siglo XX y XXI, sino que, también, le han puesto un sitio político en lo que respecta a la memoria colectiva, en tanto que hay una búsqueda clara de afectar al lector, de recordarle, incluso traumáticamente, el dolor (mejor dicho, el horror) del conflicto armado interno colombiano.

Esta interpelación al lector es, claramente, política, por muchos sentidos, pero podríamos enunciar tres que consideramos los más importantes. El primero de ellos tiene que ver con la importancia de la reconstrucción de las memorias traumáticas (entre más traumáticas mejor, porque logra así una impresión más fuerte en el lector, una que logre permanecer en el recuerdo), pero memorias que no son fin en sí

<sup>12</sup>Sandoval, M. (7 de septiembre de 2012). El conflicto colombiano en la literatura. *El País*. Disponible en: [https://elpais.com/cultura/2012/09/06/actualidad/1346937518\\_330638.html](https://elpais.com/cultura/2012/09/06/actualidad/1346937518_330638.html)

<sup>13</sup>Criollo, F. (2014). Memorias emergentes, asedios a la historia oficial. Pasto: Trabajo de grado presentado para optar por el título de Licenciado en Filosofía y Letras. Facultad de Ciencias Humanas. Licenciatura en Filosofía y Letras. Universidad de Nariño, Pasto, Colombia; Herrera, M. (2017). A propósito. En: Sandoval, M. *En el brazo del río* (pp. 141-156). Bogotá: Diente de León. ISBN: 9588245168.

<sup>14</sup>Cardenas, J. (2016). Construcción y representación literaria del conflicto armado en Colombia a través de las voces de los personajes en Los ejércitos de Evelio Rosero y En el brazo del río de Marbel Sandoval. Bogotá: Tesis presentada para optar por el título de Magister en Estudios Literarios, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Literatura, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. p. 97.

<sup>15</sup>Botero, A. *El papel del intelectual: pasado, presente y futuro inmediato*. Medellín: Universidad de San Buenaventura. ISBN: 9589642276.

mismas, sino que se comportan como vehículos de la narrativa para el segundo de los sentidos, el cual es un reconocimiento (una autocomprensión) de cómo llegamos a ser lo que somos como sociedad; para, finalmente, como tercer sentido, luego del anterior ejercicio hermenéutico, aspirar a que un lector afectado, uno que se reconoce en una sociedad que ha hecho o permitido tales barbaries, pueda romper el círculo vicioso de la violencia. Sintetizando, la memoria, el recuerdo, la evocación y la añoranza, sirven como herramientas que, junto con otras, posibilitarían la garantía de no repetición de la barbarie.

Así pues, cabe señalar que la particularidad narrativa llevada a cabo en la obra, viene dada por la inclusión del recuerdo y la evocación, como elementos principales del relato [...] En síntesis, la representación de una violencia que pretende, mediante la narración del recuerdo, permanecer en la memoria para no ser olvidada, y aún mejor, no repetirla<sup>16</sup>.

O como dice la propia autora:

para bucear en quiénes somos y para contarnos como una manera de romper el hechizo de la costumbre ante la barbarie, porque si nos acostumbramos más, estamos perdidos. Al contar estas historias, al humanizarlas, al dejar en claro los odios y los amores, podremos descubrir que el otro estaba vivo y no tuvimos por qué quitarle la vida. Busco sondear nuestra alma y mirar qué nos hace ser como somos<sup>17</sup>.

Ahora bien, mucho se ha escrito sobre la posibilidad de que la literatura movilice emociones y estas, a su vez, logren un progreso moral del lector. A quien se suele citar como defensora de la literatura (especialmente la novela realista) como formación moral del lector, ha sido Nussbaum<sup>18</sup>, pero la idea es tan antigua como la propia lectura.

Según Nussbaum, en caso de cumplirse tres requisitos, es viable pensar, *cualitativamente*, que la lectura de novelas conduce a una formación moral. Esos requisitos son, sintetizando, una 'literatura habilitada' para este proceso (ella considera que la 'novela realista' es el mejor ejemplo, sin negar que otros géneros pueden tener una fuerza igual o similar<sup>19</sup>), una lectura como 'espectador juicioso' (concepto que toma del 'espectador imparcial' de Adam Smith) y una 'co-ducción' (o diálogo con otras personas de lo leído<sup>20</sup>).

Y no para la autora de afirmar, para evitar malentendidos, que es necesario desconfiar: "las novelas (como cualquier otro texto) ofrecen una guía promisorio pero falible e incompleta"<sup>21</sup> (el texto entre paréntesis es de la autora)<sup>22</sup>. De allí la importancia de que el lector no se quede con su propia lectura:

---

<sup>16</sup> Cardenas, J. (2017). Representación narrativa de la violencia y el conflicto armado en la obra *En el brazo del río* de Marbel Sandoval. *Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica*. No. 26. pp. 87-102. DOI: <http://dx.doi.org/10.156487/cl.26.2017.6> ISSN: 1794-8290. p. 95.

<sup>17</sup> Aguirre, R. (2016). Op. Cit.

<sup>18</sup> Nussbaum, M. (1997). *Justicia poética*. Trad. Carlos Gardini. Barcelona: Editorial Andrés Bello. ISBN: 8489691096.

<sup>19</sup> Verbigracia, los filmes: "En cuanto al cine, la crítica reciente nos ha demostrado convincentemente que algunas películas tienen el potencial para realizar contribuciones similares a las que yo atribuyo a las novelas. Y se podría argumentar que en nuestra cultura, hasta cierto punto, el cine ha reemplazado a la novela como 'el' medio narrativo moralmente serio pero de gran popularidad. Creo que ello desmerece el continuo poder de la novela, y procederé a hablar sin reservas de la novela como forma viva. Pero no soy reacia a admitir que el cine también puede hacer similares aportaciones a la vida pública". Nussbaum, M. (1997), Op. Cit. p. 31.

<sup>20</sup> "Me imagino a los lectores en una situación concreta, pero diferentes lectores presentarán, por cierto, diferentes situaciones concretas. Diferentes lectores percibirán legítimamente distintas cosas en una novela, interpretándola y evaluándola de diversas maneras. Ello naturalmente sugiere un nuevo desarrollo de la idea de razonamiento público como lectura de novelas: que el razonamiento implícito no sólo es específico de un contexto sino que, cuando está bien hecho, es comparativo y evoluciona en la conversación con otros lectores cuyas percepciones cuestionan o complementan la nuestra. Esta es la idea de la "co-ducción", elaborada por Wayne Booth" Nussbaum, M. (1997). *Ibid.* pp. 34-35. En similar sentido: Nussbaum, M. (2005). *El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la educación liberal*. Trad. Juana Pailaya. Barcelona: Paidós, 2005. ISBN: 9788449317705. p. 135.

<sup>21</sup> Nussbaum, M. (1997). Op. Cit. p.111.

<sup>22</sup> Puesto que las "obras literarias no están libres de prejuicios y puntos ciegos que son endémicos de la mayor parte de la vida política" Nussbaum, M. (2005). Op. Cit. p. 136.

En el proceso de co-ducción, nuestras intuiciones acerca de una obra literaria se refinan mediante las críticas de la teoría ética y del consejo amigable, las que pueden modificar la experiencia emocional que tenemos como lectores... En síntesis, mi visión no exhorta a confiar cándida y acríticamente en la obra literaria<sup>23</sup>.

Obviamente, ya desde un enfoque *cuantitativo*, no hay un consenso, por ausencia de estudios experimentales concluyentes, que puedan establecer una *relación necesaria* entre la lectura de algún tipo de novela con el progreso moral del lector, pero tampoco puede considerarse como insensata tal propuesta de la filósofa estadounidense<sup>24</sup>. Por el momento, solo tenemos claro que la disputa que acaece es sobre si dicha relación entre lectura y desarrollo moral es necesaria y suficiente (cosa que no cree Nussbaum), necesaria aunque no suficiente, o meramente contingente (una relación que puede que posibilite el progreso moral como puede que no)<sup>25</sup>. Nussbaum pivotea entre estas dos últimas posibles respuestas, a lo que ciertos críticos<sup>26</sup> le han respondido con las siguientes preguntas: (i) si es necesaria y no suficiente, ¿cómo lo sabe? y ¿qué estudios empíricos soportan tal afirmación?; y (ii) si es contingente, ¿cuál es el valor real de una propuesta que concluya que “puede que sí, puede que no”? ¿acaso es una probabilidad de que la literatura conduzca a un mejor nivel moral del lector? y ¿cuál es la probabilidad basándose en estudios empíricos?

Dicho con otras palabras, los críticos de Nussbaum no ponen en entredicho si hay relación entre la literatura y la formación moral, en la medida que es posible afirmar, sin contradecir los cánones de la psicología cognitiva-experimental del desarrollo moral, que la literatura ‘potencialmente’ es un vehículo de emociones, en tanto es más perturbadora que otros géneros académicos o literarios<sup>27</sup>, y que dicho vehículo puede, si se articula con otros elementos, propiciar un fin moral, a la vez que político. Lo que cuestionan es el tipo de relación, de un lado, y los soportes científicos de ese tipo de relación, del otro<sup>28</sup>.

En este caso, desde Nussbaum, podría afirmarse que la novela *En el brazo del río*, con el carácter ficcional a la vez que realista de su exhibición narrativa del horror, propiciaría, potencialmente, el desarrollo moral del lector, por medio de los tres sentidos políticos anteriormente expuestos.

Es que la novela que analizamos tiene un altísimo contenido dramático, entre otras cosas por su crudeza y por estar basada en hechos reales, y en este sentido, es un potente vehículo para propiciar la empatía hermenéutica del lector<sup>29</sup> (nos referimos a aquella capacidad de comprensión del lector fruto de ponerse en los zapatos de los personajes), una empatía que le evoca el olor a “cebolla y sal”<sup>30</sup>, el olor del “sancocho en

<sup>23</sup> Nussbaum, M. (1997). Op. Cit. p. 111.

<sup>24</sup> Botero, A. (2014). ¿La Lectura Literaria Forma Buenos Jueces? Análisis Crítico de la Obra “Justicia Poética”. *Revista In Jure Anáhuac Mayab* [online]. Vol. 3/ No. 5. pp. 34-91. ISSN: 2007-6045

<sup>25</sup> Botero, A. (2014). Ibid.

<sup>26</sup> V.gr. Botero, A. (2014). Ibid.

<sup>27</sup> Nussbaum, M. (1997). Op. Cit. p. 30.

<sup>28</sup> Además de algunos trabajos citados por Botero (2014), también sería menester citar una investigación francesa (Petit: 2013, pp. 61-106) sobre el papel transformador de la literatura, el cine y el diálogo (en torno a lo leído y lo observado) para el desarrollo moral de los jóvenes. Estos estudios sugieren que los participantes, gracias al proceso ya aludido, mostraron un incremento de sus sentimientos de solidaridad y empatía por el otro. Sin embargo, aún estamos lejos de establecer si el elemento propiciador determinante del desarrollo moral es la lectura, la deliberación u otro elemento de los muchos presentes en las investigaciones hasta ahora realizadas; al mismo tiempo que no hay claridad meridiana sobre si tal relación entre lectura y desarrollo moral es necesaria, suficiente o contingente. En fin, para profundizar sobre este debate, recomendamos: Petit, M. (2013). *Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura*. Trad. Rafael Segovia y Diana Luz Sánchez. México: Fondo de Cultura Económica. pp. 13-43 y pp. 107-144; Cerillo, P. (2016). *El lector literario*. México: Fondo de Cultura Económica. pp. 13-24 y pp. 115-124; Bahloul, J. (2013). *Lecturas precarias. Estudio sociológico sobre los “poco lectores”*. Trad. Alberto Cué. México: Fondo de Cultura Económica. pp. 17-35 y pp. 55-103).

<sup>29</sup> A tal punto, que un investigador reconoció que su tesis de maestría se centró en esta novela, junto con “Los Ejércitos” de Evelio Rosero, por el impacto que le generó su lectura: “La selección de estas dos obras estuvo mediada por la inquietud y desestabilidad emocional que produjeron en quien realiza esta investigación” Cárdenas, J. (2016). Op. Cit. p. 98.

<sup>30</sup> “Había un olor revuelto a cebolla y a sal, que es como olemos los seres humanos, sobretudo en estas tierras cálidas” Sandoval, M. (2017). Op. Cit. p. 77.



el río<sup>31</sup>, pero también una que permite co-sentir el dolor y la angustia de seres que se saben ante una muerte inminente pero no quieren mostrarse desfallecer ante sus homicidas<sup>32</sup>.

La estrategia, pues, de estos agentes culturales, como Marbel Sandoval, para lograr el efecto político deseado (la no repetición de la barbarie), sería la impresión fuerte en el lector, por medio del registro de memorias traumáticas, que le permiten preguntarse cómo fue que llegamos a esta barbarie, a la vez que posibilitan cuestionar el rol de todos nosotros ante el horror ya comprendido. En este sentido, podríamos decir que la novela que analizamos hace parte de las "narrativas de luto"<sup>33</sup>, mediante las cuales las víctimas usan narrativas a su alcance como formas de resistencia política ante los 'discursos hegemónicos' o 'historias oficiales' que tienden a banalizar o invisibilizar la atrocidad, una forma de llamar la atención sobre lo que de otra manera desaparecería del recuerdo, como un llamado a las memorias sobre lo injusto y como manera de elaborar el propio duelo<sup>34</sup>.

Así las cosas, esta novela, creemos, propicia la emergencia de una naturaleza humana reconstruida en torno al río, el mismo que trae alegrías como tristezas. Una naturaleza humana que ve como natural enterrar a sus muertos, para poder, a partir de allí, elaborar el necesario duelo. De allí la comprensible agonía de Antígona frente al cuerpo insepulto de su hermano Polinices, pero también la de las personas, en especial mujeres (viudas, madres, hijas, esposas<sup>35</sup>), que buscan entre las aguas del río los cuerpos putrefactos de sus seres queridos, a pesar de las advertencias de los asesinos de dejar que sea el río su cementerio<sup>36</sup>.

Ahora, este rechazo a dejar los muertos sin sepultura es uno de los orígenes mismos de la humanidad, como bien lo sabía Hegel<sup>37</sup>. Por ello, cuando los antiguos griegos enlistaron las obligaciones morales naturales, esta aparece como una de las primeras, anterior incluso al deber de deshonrar a los traidores. La moral antigua, la familiar, se enfrenta a la moral política, de la *polis*.

Incluso, ha sido entendida como tan natural esta obligación moral que aquellas personas que no logran enterrar a sus parientes asesinados en el conflicto interno, han encontrado diversas maneras de sublimar su legítima expectativa de enterrar a los suyos. No solo nos referimos a la antigua práctica del entierro simbólico, sino también a una que ha llamado la atención de académicos<sup>38</sup> y de artistas como Juan Manuel Echavarría con su obra *Réquiem NN* (elaborada entre 2006 y 2015 en el contexto del Magdalena Medio colombiano<sup>39</sup>), a saber: la adopción de "los muertos del río", es decir, de los cadáveres que aparecían como NN en las riberas

<sup>31</sup> Dice Sierva María: "lo que pienso es que me estoy comiendo en el sancocho de pescado un poco de Paulina, porque nunca la encontraron" Sandoval, M. (2017). *Ibid.* p. 13.

<sup>32</sup> Esa mezcla de miedo ante lo inminente y orgullo femenino, está retratada en la escena de la matanza de los masetos, cuando Paulina se da cuenta del desenlace que le espera: "¡Mamá! – me salió la voz desgarrada. No quería llorar. No quería que además de que nos mataban, nos vieran doblegadas" Sandoval, M. (2017). *Op. Cit.* p. 84.

<sup>33</sup> Arenas, S. (2015). Luciérnagas de la memoria. Altares espontáneos y narrativas de luto en Medellín, Colombia. *Revista Interamericana de Bibliotecología*. Vol. 38/ No. 3. pp. 189-200. Doi: 10.17533/udea.rib.v38n3a04. ISSN: 0120-0976.

<sup>34</sup> "El discurso sobre la violencia que subyace en los relatos o testimonios que surgen por el conflicto armado, se torna como un mecanismo para desahogar el trauma ocasionado por la guerra. Se busca con ello, contar los detalles que rodearon el tormento, en el caso de Paulina, de ser violada por varios hombres que sin ningún remordimiento arrebataron su vida y la de su madre" Cárdenas, J. (2017). *Op. Cit.* p. 97.

<sup>35</sup> Y lo anterior es un ejemplo de cómo esta novela, así como en las otras dos que conforman la trilogía de Sandoval, las mujeres son protagonistas, como lo confiesa la propia autora: "Lo que sí sé es que en todas prevalece la voz de las mujeres que queremos contar y contarnos. Lo hace Paulina, que se narra a sí misma desde la muerte y Sierva María, que la cuenta y se cuenta. Lo hacen en Las Brisas, la señora de la casa y la empleada que se dan la oportunidad de charlar. Rosa tiene por fin quién la escuche. Nosotros siempre queremos hablar y contar nuestras historias. Son maneras que tenemos de compartir la vida. Y Joaquina Centeno es en simultánea una novela de esperanza en la justicia y una tragedia porque la justicia se toma todo el tiempo y la vida de Joaquina está llegando a los 80 años. Una persistencia de la que somos muy capaces las mujeres. Treinta años en los que las víctimas continúan desaparecidas, algunos victimarios han muerto y otros estarán muriendo y Joaquina se empecina, con su cuerpo que ya no responde, porque es así como los años pasan y deberían pasar para todos, para usted ... para mí" Aguirre, R. (2016). *Op. Cit.*

<sup>36</sup> Herrera, M. (2017). *Op. Cit.*

<sup>37</sup> Botero, A. (2016). La tragedia colombiana vista desde el cine: Edipo alcalde (1996). *Revista de Derecho: Universidad del Norte*. No. 45. pp. 295-326. ISSN: 0121-8697.

<sup>38</sup> Herrera, M. (2017). *Op. Cit.*; Rubiano, E. (2017). "Réquiem NN", de Juan Manuel Echavarría: entre lo evidente, lo sugestivo y lo reprimido. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*. Vol. 12/ No. 1, pp. 33-45. Doi:10.11144/Javeriana.mavae12-1.mnj. ISSN: 1794-6670.

<sup>39</sup> "Réquiem NN está conformada por tres obras: una serie fotográfica (2006-2015), 12 videos con el título Novenarios en espera (2012) y un documental (2013) de 70 minutos". Rubiano, E. (2017). *Ibid.* p. 35.

de los ríos colombianos, por parte de aquellos que no encontraron a los suyos. Adoptar, escoger un NN, darle nombre, sepultura, adornar su tumba, rezarle, ha sido una manera de transportar el duelo propio a la vez que una forma de intentar, por medio de la esperanza de recibir ayudas sobrenaturales del muerto escogido, encontrar un poco de justicia en medio de la injusticia generalizada que supone la *vida que viven los sobrevivientes*.

Dicho con otras palabras, el muerto *escogido* o *adoptado* no solo reemplaza al muerto propio para elaborar un duelo por interpuesta persona. En el intercambio de dones propios de toda cultura [donde siempre espero que mi favor a otro sea merecedor de alguna recompensa o don, real o simbólico<sup>40</sup>], el que adopta un muerto del río, pasa a ser protegido por el alma del adoptado, ante la ausencia de sus propios lares, al estar desaparecidos, que lo protejan.

## 2. EL RÍO Y LA VIOLENCIA

En un país como Colombia, no extraña la centralidad del río Magdalena, no solo en la vida económica sino también en la configuración de las redes sociales y afectivas de las poblaciones ubicadas a los lados de su cauce. De allí se explica, por dar un caso, cómo la mitología fundadora (así como las 'representaciones colectivas' y los 'imaginarios sociales') de los pueblos ribereños se centra en un río que da y quita vida (verbigracia, la representación de una Llorona, en canoa, que recorre el río preguntando por sus hijos). La vida y la muerte transitan, como cualquier vecino, por el río<sup>41</sup>. "Lo mío es rescatar con la literatura el vivir y el morir, las dos líneas que atan la existencia, en un lugar específico que es Colombia" dice la autora<sup>42</sup>; podríamos agregar, que ese lugar específico no es otro que el río Magdalena. En fin, esta realidad trascendente del río no ha desaparecido en momentos de guerra, y queda registrada en diferentes obras, como el filme de "El río de las tumbas" (1964, Dirigido por Julio Luzardo), y la novela *En el brazo del río*.

El río es más que un medio de transporte y comunicación. El río, además, transporta presencias y ausencias, alegrías y tristezas. El río, en épocas de guerra, es un eterno círculo (el río siempre está allí) que trae lo bueno y lo malo (el agua siempre es diferente, siempre está en devenir). En este caso, parafraseando a Heráclito, el río es un eterno e inamovible devenir, es el *arché* del mundo que fundamenta a los que viven a su alrededor, sean buenos o malos.

En esta novela, el río es testigo mudo, representación de lo eterno, opuesto a la efímera alegría. "La eternidad es lo contrario de la felicidad", dice Paulina<sup>43</sup>, lo que ella misma ratifica más adelante: "Por eso sé que la felicidad es corta y contraria a la eternidad que dura para siempre y con dolor"<sup>44</sup>. Y si bien la felicidad es efímera, corta, sin el tiempo eterno del río no existiría. Pero a pesar de su cortedad, la alegría está en la aspiración legítima de los personajes; en el caso de Paulina y su familia, la felicidad está en poder volver a sus tierras.

"¿Será que podemos volver, mamá?", pregunta Paulina, y le responde su madre: "Hay que ver cómo están las cosas", pero la pregunta de Paulina no era tanto expresión de su propia esperanza; ella sabía lo que era esa tierra, la que dejaron atrás huyendo de los paramilitares, para su madre: "La miro y pienso que si no volvemos ella se me va a morir más de tristeza, que de apuros, que esos los hemos podido resolver... Ser feliz de pronto sólo era estar donde se tenía que estar, si a uno lo dejaban. Pero a nosotras, de muchas maneras, no nos dejaron"<sup>45</sup>.

<sup>40</sup> Mauss, M. (1979). Ensayo sobre los dones. motivo y forma del cambio en las sociedades primitivas. En MAUSS, M. *Sociología y antropología* (pp. 155-263). Trad. Teresa Rubio. Madrid: Tecnos. ISBN: 843090798X.

<sup>41</sup> Herrera, M. (2017). Op. Cit. p. 145.

<sup>42</sup> Aguirre, R. (2016). Op. Cit.

<sup>43</sup> Sandoval, M. (2017). Op. Cit. p. 18.

<sup>44</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 20.

<sup>45</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 48-49.

El río es el medio de transporte de buenos y malos, de guerrilleros, militares, masetos y colonos. Pero no se habla de él mayor cosa en la novela, salvo como el contexto y el vehículo de la violencia política que vivió el Magdalena Medio en “esos ochenta del siglo veinte donde a mí me tocó vivir”, diría Paulina<sup>46</sup>. Una época tan violenta que el río se volvió, en sí mismo, un cementerio, pues no todos los asesinados aparecieron, no todos los que aparecieron fueron reconocidos y no todos los reconocidos fueron reclamados por sus familiares. En el primer caso está Paulina, quien en un recurso literario que permite la ficción, luego de ser asesinada, sigue narrando su historia gracias a la voz que le permite la novelista, narración que es reflejada por la rememoración constante de Sierva María. Es que para ella, Sierva María, “hacer memoria sobre su amiga es su única certeza emergente”<sup>47</sup>.

En la espiral de violencia colombiana, los años ochenta fueron muy relevantes por ser el punto de quiebre de un nuevo tipo de horror. Resumamos: desde una perspectiva política, la violencia partidista de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, dio lugar a un proceso de pacificación impuesto desde las élites, basadas en la repartición del poder entre los partidos en contienda (el famoso Frente Nacional). Sin embargo, esta fue una pacificación que tuvo consecuencias nefastas desde otro punto de vista: significó la inutilidad de la lucha de ideas como medio legítimo de acceso al poder en una democracia, la consolidación de la corrupción y el nepotismo como medio de estar y hacerse con el poder, el cierre de la llegada al poder de movimientos por fuera de ambos partidos y la atadura del poder a las autoridades caudillistas tradicionales de cada partido (lo que supuso otra exclusión: la de quienes, dentro del partido, pretendían el poder por fuera de las sendas autorizadas por los ‘jefes naturales’). Precisamente, la violencia política y la reducción de la política a un juego entre élites corruptas, entre otras cosas por la pérdida de ideales y la llegada del narcotráfico, lanzaron a miles de miles de colombianos a las fronteras reales del Estado, personas que fueron a “tumbar monte” buscando su tierra prometida, a las que se suele denominar como “colonos”.

Asimismo, esta reducción de la actividad política, en un contexto de Guerra Fría, transformó la violencia interpartidista (liberales contra conservadores) en una contienda subversiva y antisubversiva, lo que significó un cambio estructural en la forma de hacer la guerra: la guerra de guerrillas, de un lado, y la guerra contrainsurgente de tierra arrasada, del otro. El Estado, al no poder imponerse en el monopolio de la fuerza sobre los movimientos subversivos, alimentados por la ausencia del primero en sus fronteras reales, terminó inmerso en una guerra de posiciones y de desgaste, guerra que produjo una deshumanización del conflicto y la pérdida de cualquier barrera ética en el trato con el enemigo, pero una guerra que, al fin y al cabo, nadie estaba destinado a ganar (lo que se conoce como ‘empate negativo’). Este empate negativo entre Estado y subversión, dio lugar a que crecieran movimientos paramilitares, auspiciados por agentes del aparato militar y policial, que consideraron que así podían tomar ventaja del enemigo subversivo, y por víctimas de las guerrillas. Estas víctimas iban desde narcotraficantes, pasando por hacendados y llegando hasta campesinos y habitantes de zonas marginales de centros urbanos; estos dos últimos terminaron siendo la tropa de estos ejércitos privados<sup>48</sup>. Los movimientos paramilitares crecieron con fuerza en los años 80 del siglo pasado, en especial en el Magdalena Medio, y fueron ellos los actores que desatan el drama de la novela que ahora comentamos.

Sin embargo, desde una perspectiva económica, bien podría decirse lo anterior con otro enfoque: el problema siempre fueron las tierras, las de los terratenientes, las de los narcotraficantes, la de los colonos, la de los campesinos, la de los indígenas, la de los afrocolombianos, codiciadas por el ‘otro’ como moneda para su guerra. En este caso, bien sabía la lúcida Paulina, a diferencia de la silenciosa y observadora Sierva

---

<sup>46</sup> Sandoval, M. (2017). *Ibid.* p. 31.

<sup>47</sup> Criollo, F. (2014). *Op. Cit.* p. 69.

<sup>48</sup> Describe Paulina a sus asesinos: “Los que no tenían machetillas, llevaban el pelo bien recortado, como los militares. Los otros eran gente del campo, vestidos de militares”. Sandoval, M. (2017). *Op. Cit.* p. 69. Y más adelante agrega: “Pensé que aquí había tropa combinada con paramilitares, que así es como los llaman. La palabra la mencionó el padre Eduardo cuando le conté cómo fue que tuvimos que salir de La Vega, sin mirar atrás. Masetos era el nombre con el que yo siempre había oído nombrarlos” Sandoval, M. (2017). *Ibid.* p. 83.

María. Reclama Paulina la carta fundamental de derechos de la población civil en medio de una guerra: “que nadie nos disputara lo que era nuestro, y trabajar para que nunca más ni un hombre, ni un grupo, se sintieran con derecho a venir a sacarnos de nuestras tierras”<sup>49</sup>, tierras que, en el caso de la familia de Paulina, fue tomada como colonos y de la que luego tendrían que huir por el miedo a los paramilitares.

Aquí la novela toma tintes de rememoración frente a lo que sostiene la ‘efímera felicidad’ del campesino y del colono que conquista con su trabajo la tierra nueva:

Y no se trataba –nos dice Paulina– de que la tierra nueva hubiera sido una mujer fácil. Muchos fueron los que murieron tumbando estos montes, mordidos por serpientes, comidos por las fiebres y los fríos de la malaria o desangrados por un golpe de machete equivocado. Eso sí, es agradecida... lo que nos hacía felices no era tener todo colmado, sino que habíamos aprendido a serlo con lo poco que teníamos<sup>50</sup>.

Una tierra conquistada al monte para luego ser arrebatada por grupos armados. Y luego de eso, el éxodo, pero uno al revés del bíblico: “Era lo que había hecho el pueblo de Israel cuando salió de Egipto en busca de su liberación, pero del que hablaban aquí sucedía al revés: la gente no salía de tierra extranjera sino de la propia”<sup>51</sup>, nos dice Sierva María al ver el desgarramiento (mal llamado desplazamiento) de campesinos por la matanza paramilitar. Era la expulsión de la tierra prometida, la conquistada, para buscar el basural donde se pudiera sobrevivir, con lo que se produce un círculo vicioso y horripilante de una guerra que, al parecer, se quería devorar las tierras domadas y, con ellas, el trabajo de hombres y mujeres:

Era como cuando el pueblo de Dios abandonó Egipto para ir a la tierra prometida, sólo que al contrario [reflexiona Paulina de forma similar a Sierva María]. La promesa, que había sido estas tierras hace muchos años, cuando expulsados por otra violencia también tomaron sus posesiones y su parentela y se vinieron a tumbar monte, se había terminado<sup>52</sup>.

Al finalizar, es la propia Sierva María quien se da cuenta de que la violencia que ve ante sus ojos, es más que política, pues los desplazados no retornaron, el miedo se los impedía:

De manera que no sólo los mataban sino que les quitaban el derecho a que sus familias continuaran en su tierra. ¿O sería que toda esta sangre derramada no era sino para apoderarse de la tierra?, me pregunté y me di cuenta de que cuando el padre Eduardo me invitó a que me formara mis propios conceptos me puso en situaciones difíciles<sup>53</sup>

Así, las tierras, metaforizadas como mujeres difíciles pero agradecidas, quedaron abandonadas: “ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silenciosa está la casa”, como reza la vieja y premonitory canción, citada en la novela<sup>54</sup>, refiriéndose al pasillo colombiano *Las acacias* con letra del poeta español Vicente Medina Tomás [1866-1937] y música del antioqueño Jorge Molina [1898-1927], canción que se convirtió en el himno del mal llamado desplazamiento (subrayamos que este fenómeno es mejor nombrarlo *desgarramiento*):

Ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silenciosa está la casa.  
Se diría que sus puertas se cerraron para siempre,  
se cerraron para siempre sus ventanas.

---

<sup>49</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 32.

<sup>50</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p.107.

<sup>51</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 63.

<sup>52</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 106.

<sup>53</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 104.

<sup>54</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. .104.

Gime el viento en los aleros, desmorónanse las tapias,  
y en sus puertas cabecean combatidas por el viento las acacias,  
combatidas por el viento las acacias.

Dolorido, fatigado de este viaje de la vida  
he pasado por las puertas de mi estancia  
y una historia me contaron las acacias.

Todo ha muerto, la alegría y el bullicio,  
los que fueron la alegría y el calor de aquella casa  
se marcharon unos muertos y otros vivos,  
que tenían muerta el alma.  
Se marcharon para siempre de la casa.

### 3. ¿Y EL PADRE EDUARDO?

Un aspecto que no queremos dejar pasar, aunque no podamos dedicarle más que escasas referencias por un tema de espacio, tiene que ver con el rol, fundamental como elemento de dramaticidad en la novela, del padre Eduardo, quien ayuda en la formación de Paulina y Sierva María en un grupo de catequesis. El padre Eduardo tiene una gran importancia en el drama por tres aspectos en general.

El primero, porque es el promotor de un espacio donde confluye y transita la amistad entre las protagonistas: el grupo de catequesis. Como nos dice Paulina:

La catequesis fue la respuesta para muchas de las preguntas que me estaba haciendo. Hubiera podido ser un grupo como otros, pero el padre Eduardo le imprimía un sello especial. Las tardes de sábado, después de la integración, los juegos y las charlas, buscaba la manera de quedarme con él para conversar. Le conté de la vida en La Vega, de la escuela, de mis papás, de mis hermanos, y de las ganas que desde entonces tenía de ir más allá de adonde nos llevaba el mismo río [...] El padre Eduardo era como tener otra vez, de otra manera, a *mi* papá y al maestro Juan José<sup>55</sup>.

El segundo, porque es el padre Eduardo quien ante la interpelación de Sierva María sobre lo que está pasando en el río (paramilitares, matanzas, desplazamientos, noticias contradictorias, etc.), le propone a ella una regla de oro que le va a permitir pasar de ser una niña ingenua a una mujer crítica y reflexiva (a lograr la mayoría de edad kantiana): "El padre Eduardo me dejó con la recomendación de que escuchara, viera y entendiera por mi cuenta"<sup>56</sup>. Fue esa invitación, de alguien tan importante para la vida tanto de Sierva María como de Paulina, la que posibilita a aquella a abrir los ojos ante una barbarie que de otra manera le habría pasado inadvertida. Dice Sierva María, luego de 'escuchar, ver y entender' por su propia cuenta:

Mi parecer me decía también que lo que allí pasaba era grave, pero que a nadie le interesaba, con excepción de a sus protagonistas. A mí me había empezado a importar ese miércoles porque no estaba Paulina, pero los otros días apenas había sido una noticia y un chismorreo de vecinos para distraer los calores de enero y las vacaciones del colegio<sup>57</sup>.

Y, el tercero, porque es el padre Eduardo, con su discurso teológico sobre un 'Dios liberador', sobre un Jesús que padeció como judío pobre, pero que sigue padeciendo como campesino desgarrado (o desplazado

---

<sup>55</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. pp. 30 y 31 respectivamente.

<sup>56</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 77.

<sup>57</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 78.

según los medios oficiales), quien brinda a las protagonistas un horizonte teológico que les permite comprender la finalidad del destino immanente del ser humano: la liberación. Nos comenta Sierva María:

Después de la integración, el padre Eduardo dedicaba una hora para hablamos del dios que se hizo hombre, pero no parecía que hablara del mismo dios de la profesora de religión, el que nos miraba desde el cielo, subido en una nube de algodones. "Es liberador", dijo un día el padre, muy al principio de esos primeros seis meses, y liberador fue la palabra que enganchó a Paulina<sup>58</sup>.

Esta imagen ofrecida por el padre Eduardo, bien puede interpretarse como una alusión a la teología de la liberación, de un lado, y al quehacer teológico de los sacerdotes comprometidos con su labor pastoral en medio de la guerra, que sirven de intermediarios con el gobierno, del otro<sup>59</sup>. Ante todo, el padre Eduardo es un hombre social, dado a los desgarrados, a los pobres, con el consejo siempre en su boca, de los que no habla por su grey, sino que les pide que 'escuchen, vean y entiendan' por su propia cuenta.

Y gracias a esta actitud del padre Eduardo, que como ya dijimos es significativa en el desenlace de la trama, podemos apreciar, como lectores críticos, dos aspectos relevantes en las intenciones políticas de obras como esta. El primer aspecto es el diagnóstico de la indiferencia generalizada que situaciones tan horripilantes de violencia política y social generan en la sociedad colombiana, actitud que ha sido cómplice de la barbarie. Ya vimos como la propia Sierva María se da cuenta que solo le empieza a importar la maldad que bordea el río cuando su amiga desapareció en él. Y vuelve y lo recalca, cuando afectada por el dolor de la ausencia de Paulina, nos comenta: "Es como si la indiferencia se hubiera vuelto carne y habitara entre nosotros, para usar palabras de la Iglesia"<sup>60</sup>. Y es ella misma, una vez más, al ser la que sobrevive, la que escucha los llamados de Paulina que salen del río<sup>61</sup> y con base en los consejos del padre Eduardo, quien sentencia al comentar sobre la detención de algunos de los responsables de la matanza: "Pienso que, con excepción de los implicados, a nadie le importó mucho la noticia. Así éramos y así seguimos siendo. Mientras lo que suceda no toque a nuestra puerta, todo puede pasar"<sup>62</sup>. Y mientras no nos importe, mientras el mal se nos presente como banal o lejano, todo, cualquier cosa, puede pasar. Lo peor es que esa 'banalización del mal', usando un término de Arendt<sup>63</sup>, va de la mano con el chisme: "El boleto de aceptación en esta ciudad de lenguas tan bravas como el clima"<sup>64</sup>. Chisme que no refleja indignación, sino banalización y morbo, chisme que termina por ser cómplice de la barbarie pues des-horroriza la emoción.

El segundo aspecto es la desconfianza frente a las noticias. Los medios de comunicación, cosa que no es novedosa, se han vuelto en muchos casos –y no solo por un tema de costos– retransmisores de comunicados oficiales. Pero son estos mismos comunicados oficiales, repetidos sin mayor análisis por los medios, traídos al inicio de varios capítulos de la novela por la propia autora, los que nos dan cuenta de la (des)información que impera entre quienes no han querido 'escuchar, ver y entender' por su propia cuenta ante la multiplicidad de versiones de lo que pasó con Paulina, su familia y sus vecinos. Por ejemplo, en relación con los hechos de la novela, primero se dijo que las víctimas murieron en enfrentamientos con el ejército. Luego los noticieros anunciaron que fueron asesinados por el grupo paramilitar Muerte a

---

<sup>58</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 27.

<sup>59</sup> Por ejemplo: "El miércoles, después del medio día, en un salón de la escuela José Antonio Galán, los comisionados [enviados desde Bogotá para investigar la masacre] conocieron, antes que a otros, a Isidro Yepes [el único sobreviviente]. El padre Eduardo lo presentó. Pálido y arrastrando una pierna, Isidro llevaba un recorte de prensa en la mano: -Aquí dice que estoy muerto y que era guerrillero -les dijo. Los comisionados no dijeron nada. -Ni estoy muerto, ni soy guerrillero, ni me mataron en un enfrentamiento -continuó-, lo que pasó fue una matanza que hicieron los masetos" Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 108. El texto entre corchetes es nuestro.

<sup>60</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p.85.

<sup>61</sup> Dice Sierva María: "Paulina me llama desde el fondo del río, no creo que sea un llamado desde la muerte, creo que es una súplica para que no la olvide, para que mi memoria sea su memoria, para que el olvido no la sepolte a ella para siempre. Me llama y yo la escucho" Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 134.

<sup>62</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 114.

<sup>63</sup> Arendt, H. (2006). *Eichmann en Jerusalén*. Trad. Carlos Ribalta. (2ª ed). Barcelona: Debolsillo. ISBN: 84-8346-066-1.

<sup>64</sup> Sandoval, M. (2017). Op. Cit. p. 113.

Secuestradores (MAS) y, finalmente, un crimen adjudicado a las FARC. A esto se suma la rapidez con la que las noticias pasan, lo que deja un efímero recuerdo en los receptores, que solo puede ser equilibrado con una literatura que retrate la 'maldad absoluta' que no queremos 'escuchar, ver y entender'<sup>65</sup>.

Así, Sierva María llega a la desconcertante conclusión "de que nos crean la ilusión de estar sabiendo qué es lo que está pasando y lo que en verdad está pasando es que esa manera de contar lo que nos alimenta es una memoria corta y un entendimiento nublado"<sup>66</sup>, sentencia que toma mayores dimensiones cuando recordamos que la autora de la novela fue una consagrada periodista que bien conoció los engranajes de esa maquinaria que recibía comunicados oficiales y producía noticias<sup>67</sup>. Por lo anterior, Sierva María nos dice luego de ver cómo las noticias de la matanza variaban en tan poco tiempo, que "en adelante no podría creer sino lo que yo misma pudiera constatar"<sup>68</sup>. En este sentido, la novela, busca un medio de resistencia con la forma tradicional en la que los ciudadanos hemos conocido el conflicto: la historia oficial y las noticias de los medios de comunicación<sup>69</sup>.

#### 4. ¿Y MILTON Y EL DE LOS OJOS CON LÁSTIMA?

Otro aspecto que no queremos dejar de lado, tiene que ver con dos personajes, apenas accesorios, pero que dejan una inquietud en el lector. El primero de ellos es el perro Milton, abandonado por la familia de Paulina al ser desgarrados de sus tierras por los paramilitares. Milton se quedó, al parecer, con un vecino, pero siempre merodeaba su antigua casa, y al ver que sus humanos regresaron expresó de tal forma su felicidad que la escena se vuelve entrañable. Comenta Paulina: "El corazón me saltó cuando escuché un ladrido y vi a Milton, nuestro perro. Largo y flaco, con su pelo café con parches blancos, apareció saltando. - Mamá, ¡Milton está vivo! - Sí me habían dicho los vecinos -contestó ella"<sup>70</sup>. Es el mismo Milton que sobrevivió, luego, a la matanza que los paramilitares efectuaron, pero que, a pesar de los ruidos, no abandona a sus humanos. Pero Milton, el perro, no tiene voz para servir de memoria de los que se fueron. Es el testigo mudo de la maldad de una especie, la humana, que se proclamó, por mandato bíblico, dueña de la tierra, incluso de la tierra de Paulina.

Y ni hablar ahora de los "ojos melancólicos", seguramente ojos con vergüenza, que Paulina logra ver entre los de sus asesinos. En la novela, mientras Paulina relata la matanza, se menciona dos veces a ese muchacho de ojos lastimeros entre los masetos: "Veo atrás de todos a uno que me mira con ojos de lástima"<sup>71</sup>. El mismo que se niega a participar de la violación colectiva de Paulina: "Abro los ojos sólo cuando entra uno que no me toca. Miro, a la luz de la linterna que colgaron en el techo, y veo que me miran los mismos ojos de lástima con los que me vio uno de los hombres cuando intenté escaparme. Se queda frente a mí un rato, luego da la vuelta y se va"<sup>72</sup>.

Este joven, con los ojos de lástima, bien nos recuerda que no todos los asesinos son iguales. Pero ¿de qué vale si al finalizar las acciones horribles son las mismas? Este joven bien podría ser el que siente que, con tal de no participar activamente, de no jalar del gatillo o de no separar con violencia las piernas de la mujer, con tal de no ser actor directo de la barbarie está a salvo de cualquier juicio... pero él siente lástima, repudio por lo que pasa, por lo que hacen sus compañeros. Sin embargo, no hace nada, tal vez no puede

<sup>65</sup> Aspecto crítico del debate que se vive aún frente a la (des)información sobre la complejidad del conflicto actual: es el juego de la guerra a nivel del manejo de la información, con maniobras de engaño ejercidas por todas las partes y ante la cual habría que responder con la mayoría de edad kantiana.

<sup>66</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 129.

<sup>67</sup> Marbel Sandoval Ordóñez trabajó como redactora de noticias para El Tiempo, Colprensa y Vanguardia Liberal, en los años ochenta, donde se destacó como jefe de redacción en la oficina de Barrancabermeja. Cárdenas, J. (2017). Op. Cit. p. 89.

<sup>68</sup> Sandoval, M. (2017). Op. Cit. p. 133.

<sup>69</sup> Criollo, F. (2014). Op. Cit. pp. 33-38.

<sup>70</sup> Sandoval, M. (2017). Op. Cit. p. 43-44.

<sup>71</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 92.

<sup>72</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 92.

hacerlo so pena de compartir el mismo destino de sus víctimas. Ante la tragedia, este joven, que bien podía ser uno muy bueno en su vida cotidiana, decide la pasividad, pero sus ojos delatan que no se siente a gusto. Él no está tranquilo con su decisión. Bien podía ser uno de los militares, un recluta tal vez, que se vio compelido por el comandante a compartir esa noche con los paramilitares y ser más que testigo del horror. Pero qué más da. Paulina desapareció.

## CONCLUSIONES

En la novela *En el brazo del río* encontramos una historia de ausencias y presencias. No es solo la ausencia de los “muertos del río” que claman ser oídos, como desde el fondo del río, por medio de los que quedaron vivos [relata Sierva María: “Me llama [Paulina] y yo la escucho”<sup>73</sup>], sino ausencias acumuladas incluso entre vivos, que dan lugar al círculo de la violencia. Por ejemplo, Paulina evoca la ausencia de su padre, quien seguro huyó a su vez de la violencia política, asesinado en Puerto Berrío luego de haber amaestrado al monte, a la mujer difícil pero agradecida que es la tierra; a la vez que Sierva María evoca la ausencia de su progenitor, quien no quiso responder cuando supo que sería papá<sup>74</sup>. Al primero lo mataron, el segundo “se mató solito”<sup>75</sup>. Y luego Sierva María lamenta la ausencia de Paulina<sup>76</sup>, pero es esta melancolía la que le lleva a ser memoria y voz de su amiga desaparecida.

Pero la ausencia que más duele, la que más atormenta al lector, hace referencia a la verdad de los que murieron, que solo puede ser contada por los que sobrevivieron, una verdad que no tiene porqué ser agradable, aunque necesariamente será liberadora, como el Dios del padre Eduardo. Dice Sierva María: “Mi verdad era que todavía no cumplía catorce años y que un día, y de una sola vez, me tocó abrir los ojos, sólo que no me gustó la luz que me llegó, porque me decía que no siempre podía confiar en lo que veía bajo el primer rayo y también que podía no gustarme lo que viera”<sup>77</sup>. Se trata de ver lo mejor que se pueda la verdad. Obviamente, dice la autora, hay “muchas verdades. La verdad de cada uno de los que ha vivido el conflicto”<sup>78</sup>.

La novela que analizamos trata sobre la verdad de la muerte de Paulina, su familia y sus vecinos en manos de los masetas auxiliados por el ejército<sup>79</sup>. En otros casos sería la verdad de los asesinados y la de las víctimas de la guerrilla. En otros la de los del Estado. En otros la de la delincuencia común o del narcotráfico. Pero en la situación de una guerra de guerrillas, con la táctica del desgaste, donde no hay fronteras claras entre enemigos y población civil, donde no se sabe “¿quién era quién en medio de esta matazón?”<sup>80</sup>, es posible que el lector de una novela como esta se sienta profundamente conmovido y adolorido, esperamos que no solo porque las víctimas no son guerrilleros, sino fundamentalmente por la forma en que seres humanos, involucrados o no en el conflicto, fueron despachados de esta vida. “Siempre quedan cosas pendientes porque Colombia es un país donde nada es lo que parece”<sup>81</sup>.

Claro está que la novela nos hace mucho énfasis, como elemento dramático, sobre la inocencia de las víctimas, que no eran actores del conflicto. Pero reiteramos que el dolor no puede fundarse solo en ello, pues significaría que se justificaría la muerte, en tales circunstancias, si realmente hubiesen sido soldados de

<sup>73</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 134.

<sup>74</sup> Cardenas, J. (2017). Op. Cit. 96.

<sup>75</sup> “Y a mi papá yo sí lo perdí, pero porque no lo conocí, no porque me lo hubieran matado. Él se mató solito para mí” Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 52.

<sup>76</sup> Dice Sierva María: “Ahora son dos mis ausencias: la de mi papá que debe caminar por estas mismas calles calientes y olorosas a petróleo, y la de Paulina, que no pudo acompañar más mis pasos” Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 129.

<sup>77</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 104.

<sup>78</sup> Aguirre, R. (2016). Op. Cit.

<sup>79</sup> Asunto que fue corroborado por las investigaciones judiciales posteriores, que son enunciadas novelescamente por Sandoval: “Los señores de Bogotá primero les sacaron fotos [a varios tarros dejados en la escena del crimen] y luego se los llevaron en bolsas plásticas, oí a uno de ellos mentar que eran provisiones del Ejército y que tenían espaguetis, puré de guayaba, carne de diablo y leche condensada” Sandoval, M. (2017). Op. Cit. p. 97. El texto entre corchetes es nuestro.

<sup>80</sup> Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 114.

<sup>81</sup> Aguirre, R. (2016). Op. Cit.



alguno de los ejércitos en pugna. Desde un plano humano y moral, en el caso que narra ficcionalmente la novela, no debería ser el asunto más importante que hayan sido o no guerrilleros.

Otro aspecto a resaltar de la novela, como motor de emociones, tiene que ver con el reclamo de justicia, pero una de “la de después” que es a lo único a lo que ya pueden esperar las víctimas. Veamos lo que al respecto dice Sierva María:

Pensé en las noticias que había leído acerca de la Comisión Especial empeñada en saber qué había pasado en Vuelta Acuña y en otros asesinatos, pero ésta era justicia de la de después, de la que se aplica cuando ya pasaron las cosas, y a los sobrevivientes quién los cuidaba y les garantizaba la vida para que pudieran seguir en sus labranzas, ¿sería que tenían que morirse para que les pusieran cuidado?<sup>82</sup>.

Evidenciar la injusticia y clamar por una justicia, aunque sea de “la de después”, es un motor tremendo de emociones para el lector y, en ese sentido, un propiciador para la reflexión de su actuar político y moral en sociedad. Todo por la exposición clara y contundente de una injusticia, en este caso: la de los medios de comunicación, que actúan como transmisores acrílicos de una historia oficial; la de las autoridades, que poca o nada atención le prestaron al hecho evitando así una “justicia de la de después” (por ejemplo, cuando se disuelve la comisión judicial una vez empieza a conseguir resultados en sus pesquisas a pesar de que en noticieros se anunciaba justo lo contrario<sup>83</sup>); y la de una sociedad, que con su silencio y chismes termina siendo cómplice del horror.

Igualmente, rescatamos de la novela, desde la filosofía política, la importancia de las memorias, de ser la voz de los que no pueden hablar, por los tres sentidos políticos ya vistos en el resumen y a lo largo del texto. La literatura permite una memoria del trauma, lo cual debería permitir el reconocimiento de cómo llegamos a ser lo que fuimos y lo que somos, para así, con la evocación, garantizar la no repetición. En contrario sensu, el olvido impide asumir el trauma, transmuta el reconocimiento de lo que somos por la indiferencia ante lo hecho, y así todo puede volver a pasar. Es por ello que se dice que “si la memoria cotiza al alza, el olvido lo hace a la baja”<sup>84</sup>.

Ya decía Pablo Montoya en una de sus novelas:

La ausencia de nominación es como construir un ámbito nefasto. Y es aquí cuando a Goulart parecen iluminársele los ojos. Me dice que la gran lucha es contra el olvido. Hay que hallar la identidad de esos muertos y denunciar quienes fueron los culpables. Empezar una minuciosa búsqueda de los supervivientes. Y poco a poco, con ayuda de ellos, amontonando lágrimas y dolores, nombrar a los masacrados. Otorgarles el rostro que tuvieron, saber qué hacían y pensaban y cómo fueron ejecutados. No podemos morir sin haber intentado una inmersión en la desdicha de los otros y en su calamidad de todos los días. Nuestro deber no es solo con nuestro tiempo, querido pintor, es con la posteridad. Debemos hablar de la crueldad a la que hemos descendido los hombres. Y después, solo después, permitimos que la muerte nos cierre los ojos. A mí se me hace un taco en la garganta cuando intento responderle. Goulart aprovecha mi vacilación. Dice que mi única obligación ahora es pintar la masacre<sup>85</sup>.

---

<sup>82</sup> Sandoval, M. (2017). Op. Cit. p. 103.

<sup>83</sup> Piensa así Sierva María: “también en estos meses había aprendido que mientras las palabras dichas, y hasta escritas, iban por un lado, la realidad iba por otro, o si no cómo me explicaba el traslado del marido de Estella y su noticia de la disolución de la Comisión, frente a lo que decía el recorte que ya estaba pegado en mi cuaderno: ‘Más policía judicial para el Magdalena Medio’” Sandoval, M. (2017). Ibid. p. 122.

<sup>84</sup> Mate, R. (2009). Tierra y huesos. Reflexiones sobre la historia, la memoria y la «memoria histórica». En: MATE, R. *La herencia del olvido*, (2ª ed.). (pp. 149-176). Madrid: Errata Naturae. ISBN: 978-84-936374-3-9. 151

<sup>85</sup> Montoya, P. (2015). *Tríptico de la infancia*. Bogotá: Literatura Random House. ISBN: 9789585846234. pp. 182-183.

Claro está que hay varias maneras de reconstruir las diferentes memorias del conflicto armado colombiano necesarias para los sentidos antes expuestos, maneras que a veces se cruzan o se enfrentan entre sí con la (des)memoria auspiciada por los medios hegemónicos del discurso oficial. En cierto sentido, gracias a los medios de comunicación (e incluso la literatura del siglo XIX y primera mitad del siglo XX<sup>86</sup>), ha predominado la visión de los victimarios, casi siempre justificativa en sus actos y legitimante de las estructuras de poder vigentes, “pues es claro que no es lo mismo relatar una historia ficcional desde el lado del victimario que hacerlo a partir de la propia víctima que sufre la violencia”<sup>87</sup>.

Sin embargo, poco a poco, se ha podido contar con otro tipo de memorias: las de las víctimas. Memorias heterogéneas y que, por tanto, que se reflejan de muchas maneras, como puede ser mediante expresiones artísticas<sup>88</sup> o populares<sup>89</sup>, al estar dichas narrativas al alcance de las víctimas, al igual que las memorias que hoy día se reconstruyen, como fruto de políticas públicas y proyectos académicos, ONG, universidades y algunas entidades gubernamentales (por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica), quienes buscan privilegiar (para equilibrar con los relatos de los victimarios ampliamente publicitados por los medios de comunicación) las memorias privadas de las víctimas del conflicto armado, continuamente invisibilizada, lo que aúna su dolor. Pero dentro de este recuperar las memorias de las víctimas, la ficción literaria tiene un peso significativo, pues va más allá del frío informe propio de muchos de los resultados investigativos antes señalados “al plantear espacios de pensamiento y saber que permitan hacer re-lecturas de nuestros imaginarios”<sup>90</sup>.

Rescatar las voces de los vivos dentro de las obras literarias en Colombia y presentarlas como un aspecto fundamental en la narración sobre la violencia, otorga al lector la posibilidad de experimentar el relato con los protagonistas de las historias ficcionales, sentir el padecimiento de quienes son víctimas del conflicto y asumir un punto de vista desde el cual hable sobre la violencia en el país<sup>91</sup>.

Así las memorias hacen resistencia a los que las invisibilizan: narrando lo que les ha acontecido a las víctimas, quienes además de padecer directamente el conflicto, se les limita su posibilidad de relatar en el espacio público su dolor. Y dentro de estas memorias, que buscan ponerle nombre a los “muertos del río”, que traen el pasado al presente, debemos contar la aportada por la novela “En el brazo del río”. Obviamente, este ejercicio narrativo no es nuevo. Incluso, la literatura sobre y desde las víctimas es tan antigua como el mismo conflicto armado colombiano. Podrían, como hizo Cárdenas<sup>92</sup>, identificarse los cambios que ha tenido la literatura sobre la violencia a lo largo de los siglos XIX y XX colombianos tanto en lo que atañe a sus aspectos estéticos (quién, cómo y desde dónde se cuenta la violencia) como a la representación de su objeto (el conflicto armado y la violencia). Pero nuestro interés no es hacer un rastreo de la evolución de este tipo de literatura, sino exponer su potencialidad para generar los efectos ético-políticos ya enunciados.

El recuerdo y la evocación les brinda [a las víctimas] una alternativa para, aún en la muerte, poder comunicarse y dejar un relato para las generaciones venideras, para que no tengan que sufrir los

---

<sup>86</sup> Cárdenas, para dar un ejemplo, señala que uno de los puntos diferenciadores de la literatura sobre la violencia de los siglos XIX y principios del XX, comparada con la literatura sobre la violencia de finales del siglo XX y lo corrido del XXI es el cambio del sujeto narrador, del victimario a la víctima, poniendo como ejemplo de dicho cambio la novela que ahora analizamos. Cárdenas, J. (2016). Op. Cit. pp. 96-99.

<sup>87</sup> Cardenas, J. (2016). Ibid. p. 96.

<sup>88</sup> Martínez, F. (2013). Las prácticas artísticas en la construcción de memoria sobre la violencia y el conflicto. *Eleuthera*. Vol. 9/ No. 2. pp. 39-58. ISSN: 2011-4532.

<sup>89</sup> Bien comenta Arenas frente a estas expresiones populares: “Al mismo tiempo ese altar revela la lucha por devolver el lugar social de las víctimas, denunciando la injusticia y demandando reconocimiento del daño [...] Tal vez así comprendamos que la guerra en Colombia no fue una cosa terrible que aconteció lejos, en la selva o en un lugar perdido en el mapa. Por el contrario, la guerra es una tragedia que alcanzó a nuestro vecino, amigo, colega de estudio o de trabajo. Afectó a todos ellos y por tanto, a nosotros mismos” Arenas, S. (2015). Op. Cit. p. 199.

<sup>90</sup> Criollo, F. (2014). Op. Cit. p. 10.

<sup>91</sup> Cardenas, J. (2016). Op. Cit. p. 98.

<sup>92</sup> Cardenas, J. (2016). Ibid. p. 19-39.

desdenes de la guerra, para que no tengan que enfrentar la inhumana condición de vivir en medio del conflicto armado. Y es así como la memoria se torna en el medio esencial para no olvidar<sup>93</sup>.

Es en este sentido, de recuerdo y evocación, que consideramos valioso el aporte, desde la filosofía política, de la literatura sobre la violencia, como lo es esta novela, toda una manera de hacernos sentir horror ante el horror, reconocernos tal vez como sociedad cómplice e indiferente ante la barbarie. Una manera, entre otras, de buscar la no repetición del mal absoluto.

## BIBLIOGRAFÍA

AGUIRRE, R. (26 de junio de 2016). Entrevista a Marbel Sandoval Ordóñez. *Siempre Latina*. Disponible en: [http://siemprelatina.com/latinas\\_destacadas/marbel-sandoval-ordonez/](http://siemprelatina.com/latinas_destacadas/marbel-sandoval-ordonez/)

ARENAS, S. (2015). Luciérnagas de la memoria. Altares espontáneos y narrativas de luto en Medellín, Colombia. *Revista Interamericana de Bibliotecología*. Vol. 38/ No. 3. pp. 189-200. Doi: 10.17533/udea.rib.v38n3a04. ISSN: 0120-0976.

ARENDT, H. (2006). *Eichmann en Jerusalén*. Trad. Carlos Ribalta. (2ª ed). Barcelona: Debolsillo. ISBN: 84-8346-066-1.

BAHLOUL, J. (2013). *Lecturas precarias. Estudio sociológico sobre los "poco lectores"*. Trad. Alberto Cué. México: Fondo de Cultura Económica.

BERRÍO, R. (21 de octubre de 2014). Víctimas con sufrimientos olvidados. Recuperado de: [pazfarc-ep.org/noticieros/item/2224-la-masacre-de-vuelta-acuna.html](http://pazfarc-ep.org/noticieros/item/2224-la-masacre-de-vuelta-acuna.html)

BOTERO, A. (2002). *El papel del intelectual: pasado, presente y futuro inmediato*. Medellín: Universidad de San Buenaventura. ISBN: 9589642276.

BOTERO, A. (2014). ¿La Lectura Literaria Forma Buenos Jueces? Análisis Crítico de la Obra "Justicia Poética". *Revista In Jure Anáhuac Mayab* [online]. Vol. 3/ No. 5. pp. 34-91. ISSN: 2007-6045.

BOTERO, A. (2016). La tragedia colombiana vista desde el cine: Edipo alcalde (1996). *Revista de Derecho: Universidad del Norte*. No. 45. pp. 295-326. ISSN: 0121-8697.

CÁRDENAS, J. (2016). *Construcción y representación literaria del conflicto armado en Colombia a través de las voces de los personajes en Los ejércitos de Evelio Rosero y En el brazo del río de Marbel Sandoval*. Bogotá: Tesis presentada para optar por el título de Magister en Estudios Literarios, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Literatura, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

CÁRDENAS, J. (2017). Representación narrativa de la violencia y el conflicto armado en la obra *En el brazo del río* de Marbel Sandoval. *Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica*. No. 26. pp. 87-102. DOI: <http://dx.doi.org/10.156487cl.26.2017.6> ISSN: 1794-8290.

CERILLO, P. (2016). *El lector literario*. México: Fondo de Cultura Económica.

CNRR-GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA. (2011). Los procedimientos criminales del paramilitarismo. Disponible en: <https://vidassilenciadas.org/los-procedimientos-criminales-del-paramilitarismo-3/>

---

<sup>93</sup> Cardenas, J. (2017). Op. Cit. p. 101.

- COLOMBIA NUNCA MÁS. (16 de julio de 2001). Cimitarra. De la Colonización a la Militarización. Disponible en: [www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14l/cap2.html](http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14l/cap2.html)
- COLOMBIA NUNCA MÁS. (S.F.). Farouk Yanine Díaz - Alias: "El Turco", "El Águila". Disponible en: <https://vidassilenciadas.org/farouk-yanine-diaz-alias-el-turco-el-aguila/>
- CRIOLLO, F. (2014). *Memorias emergentes, asedios a la historia oficial*. Pasto: Trabajo de grado presentado para optar por el título de Licenciado en Filosofía y Letras. Facultad de Ciencias Humanas. Licenciatura en Filosofía y Letras. Universidad de Nariño, Pasto, Colombia.
- EQUIPO NIKOR. (editor). (29 de mayo de 2001). Colombia Nunca Más. Disponible en: [www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z7/Intro.html](http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z7/Intro.html)
- GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA. (2011). *El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Carare (ATCC)*. Bogotá: Taurus. ISBN: 9789587583953.
- HERRERA, M. (2017). A propósito. En: SANDOVAL ORDOÑOZ, M. *En el brazo del río* (pp. 141-156). Bogotá: Diente de León. ISBN: 9588245168.
- INSUASTY, A., VALENCIA, J. & RESTREPO, J. (2016). *Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)*. Medellín: Editorial Kavilando. ISBN: 978-958-59647-4-7.
- MANRIQUE, W. (27 de junio de 2017). Marbel Sandoval Ordóñez: "Lo que hay en Colombia, ahora, por encima de todo, es odio". *WMagazin*. Disponible en: <http://wmagazin.com/marbel-sandoval-ordonez-lo-que-hay-en-colombia-ahora-por-encima-de-todo-es-odio/>
- MARTÍNEZ, F. (2013). Las prácticas artísticas en la construcción de memoria sobre la violencia y el conflicto. *Eleuthera*. Vol. 9/ No. 2. pp. 39-58. ISSN: 2011-4532.
- MATE, R. (2009). Tierra y huesos. Reflexiones sobre la historia, la memoria y la «memoria histórica». En: MATE, R. *La herencia del olvido*, (2ª ed.). (pp. 149-176). Madrid: Errata Naturae. ISBN: 978-84-936374-3-9.
- MAUSS, M. (1979). Ensayo sobre los dones. motivo y forma del cambio en las sociedades primitivas. En MAUSS, M. *Sociología y antropología* (pp. 155-263). Trad. Teresa Rubio. Madrid: Tecnos. ISBN: 843090798X.
- MONTOYA, P. (2015). *Triptico de la infamia*. Bogotá: Literatura Random House. ISBN: 9789585846234.
- NUSSBAUM, M. (1997). *Justicia poética*. Trad. Carlos Gardini. Barcelona: Editorial Andrés Bello. ISBN: 8489691096.
- NUSSBAUM, M. (2005). *El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la educación liberal*. Trad. Juana Pailaya. Barcelona: Paidós, 2005. ISBN: 9788449317705.
- PETIT, M. (2013). *Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura*. Trad. Rafael Segovia y Diana Luz Sánchez. México: Fondo de Cultura Económica.
- RUBIANO, E. (2017). "Réquiem NN", de Juan Manuel Echavarría: entre lo evidente, lo sugestivo y lo reprimido. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*. Vol. 12/ No. 1. pp. 33-45. Doi:10.11144/Javeriana.mavae12-1.mnj. ISSN: 1794-6670.
- SANDOVAL ORDOÑOZ, M. (2006). *En el brazo del río*. Medellín: Hombre Nuevo Editores. ISBN: 9789585950566.
- SANDOVAL ORDOÑOZ, M. (2017). *En el brazo del río*. Bogotá: Diente de León. ISBN: 9588245168.

SANDOVAL, M. (7 de septiembre de 2012). El conflicto colombiano en la literatura. *El País*. Disponible en: [https://elpais.com/cultura/2012/09/06/actualidad/1346937518\\_330638.html](https://elpais.com/cultura/2012/09/06/actualidad/1346937518_330638.html)

TRUJILLO, J. (22 de abril de 2018). Literatura y periodismo: una forma de acercarse a la realidad. *Plaza Capital*. Disponible en: <https://plazacapital.co/escena/2993-literatura-y-periodismo-una-forma-de-acercarse-a-la-realidad>

VIDAS SILENCIADAS. (S.F.). Masacre Vuelta Acuña - Cimitarra 12 de Enero de 1984. Disponible en: <https://vidassilenciadas.org/victimas/1997/>

## **BIODATA**

**Andrés BOTERO BERNAL:** Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y Doctor en Derecho por la Universidad de Huelva (España). Abogado y filósofo. Profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Miembro del grupo de investigación *Politeia* de la UIS.

**Mario PALENCIA SILVA:** Magister en Literatura Hispanoamericana (Instituto Caro y Cuervo). Candidato a Doctor en Literatura Colombiana (Universidad Tecnológica de Pereira). Candidato a Doctor en Teoría Literaria y Literatura Española (UNED). Licenciado en filología e idiomas (Universidad INCCA). Profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Miembro del grupo de investigación *Politeia* de la UIS.

**Alonso SILVA ROJAS:** Doctor en Ciencias Políticas (Universidad de Tubinga, Alemania). Abogado y filósofo. Profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Miembro del grupo de investigación *Politeia* de la UIS.



## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 50-60  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

### Discrecionalidad judicial. Desarrollo de una categoría en continua construcción

*Judicial Discretion. Development of a Category in Continuous Construction*

**Eduardo Alonso FLÓREZ ARISTIZABAL**

<https://orcid.org/0000-0003-4409-1349>

[eduardo.florez@upb.edu.co](mailto:eduardo.florez@upb.edu.co)

Universidad Pontificia Bolivariana - Seccional Montería, Colombia

**Carlos Alberto MOJICA ARAQUE**

<https://orcid.org/0000-0003-0391-015X>

[camojica@udem.edu.co](mailto:camojica@udem.edu.co)

Universidad de Medellín, Colombia

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3907038>

#### RESUMEN

En este artículo se plantea la realidad actual de los límites y/o autonomía con la que cuentan los operadores jurídicos al momento de aplicar las normas legales, teniendo en cuenta que en los Estados Constitucionales la actividad judicial se encuentra ligada al compromiso estructural que tiene el Estado frente al desarrollo del contrato social. Ahora bien, para abordar esta investigación hemos decidido tomar como referente los planteamientos del neopositivismo analítico propuesto a partir de la conceptualización desarrollada por Hart, y de esta manera plantearemos un análisis del estado actual de la "discrecionalidad" que tienen los operadores judiciales al momento de tomar una decisión, considerada "difícil".

**Palabras clave:** Discrecionalidad, operadores judiciales, neopositivismo, constitucionalismo

#### ABSTRACT

This article presents the current reality of the limits and / or autonomy that legal operators have when applying legal norms, bearing in mind that in Constitutional States judicial activity is linked to the structural commitment of the State facing the development of the social contract. Now, to approach this investigation we have decided to take as a reference the approaches of the analytical neopositivism proposed based on the conceptualization developed by Hart, and in this way we will propose an analysis of the current state of "discretion" that judicial operators have when making a decision, considered "difficult".

**Keywords:** Discretionary, judicial operators, neopositivism, constitutionalism

Recibido: 20-05-2020 • Aceptado: 30-06-2020



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## INTRODUCCIÓN

Establecer la relación que existe entre los operadores jurídicos y la norma legal, implica reconocer los defectos y problemas estructurales que durante toda la historia ha tenido el desarrollo de las teorías jurídicas que han intentado explicar la función del operador judicial. Desde esta perspectiva, el ordenamiento jurídico constitucionalizado impone unas limitaciones estructurales que dan cuenta de cómo entonces la actividad judicial se encuentra ligada al compromiso estructural que tiene el Estado frente al desarrollo del contrato social<sup>1</sup>.

Así las cosas, conforme lo evidencia Hespanha<sup>2</sup>, si realizáramos una pesquisa al desarrollo teórico de la discrecionalidad del operador jurídico, y de cómo estos operadores sustentan sus decisiones dentro del ordenamiento jurídico, nos encontraríamos que existen diversos estudios que determinan sus límites al decidir el derecho, sus alcances y la verdadera importancia de la "discrecionalidad" como herramienta jurídica dentro del Estado constitucional, lo cual implica la necesidad de tomar una postura para abordar el fenómeno y de esta manera poner al descubierto cuáles son las categorías con las cuales se construye la discusión metodológica alrededor de esta práctica judicial.

Ahora bien, para el propósito de nuestra investigación, y conforme a los lineamientos teóricos, consideramos que la postura idónea y pertinente para abordar esta cuestión, de forma irreductible, se encuentra en los planteamientos del neopositivismo analítico propuesto a partir de Hart<sup>3</sup>, para quien "en los casos difíciles, al no estar clara la norma que el juez debe aplicar, este se convierte en legislador para ese caso concreto. Cuando las normas son incompletas, y no dan soluciones, el juez legisla y ejerce una opción creativa entre varios fallos". Para este autor, cuando un juez se encuentra ante un caso difícil el ámbito discrecional puede ser muy amplio.

Frente a esta postura, y con el propósito de salvaguardar la imparcialidad y objetividad de nuestro trabajo de investigación, es imprescindible hacer referencia a los conceptos planteados por quien fuese el mayor crítico del positivismo jurídico plantado por Hart, no referimos por supuesto a Ronald Dworkin<sup>4</sup>, quien entendía el derecho como un conjunto de principios y no de reglas, lo cual lo llevó a plantear una crítica a la discreción judicial sobre la base de dos argumentos principales: "a) Porque toda regla se fundamenta en un principio y, por lo tanto, el derecho no son solo reglas y b) Porque existiendo principios en el ordenamiento jurídico, entonces, el juez que tenga dudas en los casos difíciles, no crea una norma retroactiva que antes no existía, sino que aplica los principios existentes". En conclusión, Dworkin<sup>5</sup> asegura que cuando existen normas incompletas o contradicciones el juez no debe tener discreción porque está determinado por los principios.

## LA POTESTAD DISCRECIONAL DEL OPERADOR JURÍDICO DESDE LA HISTORIA

Existe una necesaria e ineludible relación entre el operador jurídico y el contrato social al momento en que el juez ejerce la noble tarea de mediar, dirigir, tramitar y decidir los problemas de los ciudadanos cuando estos llegan a los tribunales, puesto que su papel determina la respuesta Estatal a una problemática de naturaleza jurídica, en donde los operadores judiciales tienen a cargo hacer efectivo aquello que se ha positivizado a través de normas jurídicas.

En este orden de ideas, es importante advertir que para los efectos de análisis, se observa el fenómeno desde el sistema jurídico continental romanista, en donde el Estado ha establecido que la función del juez está direccionada por un conjunto de normas jurídicas previamente establecidas, en virtud de las cuales se

<sup>1</sup> GUASTINI, R., GASCÓN, M., & CARBONELL, M. (2001). Estudios sobre la interpretación jurídica. México D.F.: Porrúa.

<sup>2</sup> HESPANHA, A. M. (2002). Cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio. Madrid: Tecnos.

<sup>3</sup> HART, H. L. (1974). *El concepto de derecho*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot S.A.

<sup>4</sup> DWORKIN, R. (1995). Los derechos en serio, Barcelona. Ariel.

<sup>5</sup> Ibidem.

deben resolver diferentes casos, siendo importante advertir que el operador judicial se verá enfrentado tanto a casos difíciles como a casos fáciles, siendo los primeros los llamados a involucrar la necesidad de que el juzgador deba ir más allá de la consagración explícita de la norma jurídica para tomar posición frente a la necesidad de "justicia" que se plantea en un litigio<sup>6</sup>.

Desde esta perspectiva, si se hiciese una revisión histórica, se podría advertir que el Estado ha planteado la necesidad de que las normas jurídicas contribuyan, como una de sus funciones principales, con evitar la arbitrariedad de quien se encuentra representando al Estado, es así como en la Antigua Roma, durante el mandato del emperador Justiniano en el año 533 D.C, aproximadamente, fecha en la cual se profirió el acta de promulgación del digesto, se prohibió a los jueces hacer cualquier interpretación a la ley, y se les ordenó dirigirse al creador de la norma en casos donde hubieren dudas<sup>7</sup>.

En el mismo sentido, una situación similar se produjo con el advenimiento del liberalismo, con la Francia naciente posrevolución, en la cual, durante el año 1790, se funda la institución llamada referé législatif con la finalidad de crear un Tribunal de Casación, *"para prevenir las desviaciones de los Jueces frente al texto expreso de la ley, lo que era considerado como una intromisión en la esfera del Poder Legislativo, capaz de quebrantar la separación de los poderes que era piedra angular de la nueva concepción del Estado de Derecho; tal es así que en los primeros años de la Revolución se dio una ley que prohibía a los Jueces interpretar las leyes, aún con eficacia limitada al caso concreto"*<sup>8</sup>.

Esta idea representó una decadencia gigantesca del sistema judicial, que se extendió hasta el siglo XIX, cuando toman fuerza las ideas de Robespierre, las cuales representan un giro conceptual que se ve expresado en el siguiente sentido: *"Esa palabra de jurisprudencia de los Tribunales, en la acepción que tenía el antiguo régimen, nada significa en el nuevo; debe borrarse de nuestro idioma"*<sup>9</sup>, significando que con la construcción republicana del Estado, el liberalismo predispuso la preponderancia de las otras ramas del poder público a la actividad judicial.

Así entonces, se gestó el concepto de "interpretación retenida" para referirse a esa corriente radicalista que consideraba nocivo cualquier ejercicio de interpretación judicial, entendiendo entonces que el legislador al ser creador de la norma se reserva para sí el ejercicio de interpretarla, esto responde a una denominación propia de una ideología política que no le basta con la separación de poderes, sino que pretende la subordinación, que no depende en últimas del ejercicio del derecho, sino de una decisión política que establece la subordinación de lo judicial frente al legislativo, evidenciando con ello un espectro de imposibilidad funcional de una actividad judicial independiente.

Por esta razón, no es sino hasta la construcción de los Estados de Derecho, durante el siglo XX, en donde en el sistema jurídico continental romanista se estructura el concepto del juez discrecional, quien es garante del Estado de Derecho; esto a través de la libertad de elección y selección del juez, quien dentro del ejercicio de sus funciones tiene el deber de guardar un amplio respeto a la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la aplicación de la norma jurídica, con las expectativas que se desarrollan en el contrato social, porque el derecho se entiende como una práctica reglada, nunca de manera ilimitada.

Mario Masciotta en su artículo denominado: El Poder Discrecional de los Jueces, afirma que *"La 'discrecionalidad judicial' resulta de la indeterminación del Derecho, implica libertad de elección y de selección, integra los poderes-deberes del juez que les confiere y les impone el ordenamiento jurídico. Consiste en la capacidad de discernir la solución justa entre diferentes parámetros, en definitiva, es el poder de decidir libre y prudencialmente en el marco de la ley y conlleva inexorablemente a la independencia del magistrado. Jamás se lleva a cabo en forma absoluta e indeterminada, siempre debe ser debidamente*

<sup>6</sup> ZAGREBELSKY, G. (1997). El derecho dúctil: ley, derechos, justicia (Vol. 4). Trotta.

<sup>7</sup> PETIT, E., & FERNÁNDEZ González, J. (1989). Tratado elemental de derecho romano. México: Porrúa.

<sup>8</sup> CALAMANDREI, P (1959). La casación civil (Trad. Santiago Sentis Melendo y Mariano Ayerra Redín). Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.

<sup>9</sup> UPRIMNY, R. (2006). Interpretación judicial, módulo de autoformación. 2018, de Consejo superior de la judicatura Sitio web: <http://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/biblioteca2011/content/pdf/a6/9.pdf>



*fundada y se encuentra sujeta al control de racionalidad y razonabilidad. Más que una prerrogativa debe ser entendida en términos de responsabilidad jurisdiccional*<sup>10</sup>

El autor advierte que incluso en la visión del Estado de derecho se dimensiona que esta potestad discrecional del juez representa ciertas ventajas y desventajas<sup>11</sup>:

#### **Desventajas:**

- 1) Subjetividad: Es injusto que dependa del temperamento del juez;
- 2) Incoherencia: Es inadmisibles que se apliquen criterios disímiles para casos iguales, pues se deteriora la seguridad jurídica y
- 3) Vergüenza judicial: No pueden atentarse contra el criterio de la comunidad, los pronunciamientos deben asentarse en el sentido común (como la lógica y la experiencia) habida cuenta de que el juez no puede incurrir en el absurdo, es decir, dictar pronunciamientos ilógicos o disparatados. La discrecionalidad irrestricta e ilimitada puede configurar la "tiranía judicial".

#### **Ventajas:**

- 1) Impedir que el tribunal se encuentre limitado a ritos formales;
- 2) Implica que la ley sea interpretada;
- 3) Simplifica los procedimientos al reducir la complejidad de las normas procesales; y
- 4) Entraña el ejercicio de la soberanía.

Vemos, pues, que si bien la construcción de la discrecionalidad tiene por finalidad dar cumplimiento a lo que las normas jurídicas positivas estructuran dentro de un Estado, las mismas deben estar planteadas para satisfacer los derechos fundamentales que están consagrados en el ordenamiento jurídico, y en todo caso evitar que se generen interpretaciones amañadas de las intenciones de lo que el poder constituyente consagró en las normas, esta disposición pone en evidencia la continua preocupación que se ha generado sobre la actividad judicial sin límites en tanto, se reconoce en coherencia al contrato social.

La discrecionalidad judicial, incluso dentro de un Estado Social de Derecho, implica una actividad jurídica de orden técnica, donde los jueces con las competencias que les son conferidas por el ordenamiento jurídico, solo se pueden inhibir de la aplicación de un precepto normativo al considerarlo antijurídico, y en ese sentido apoyar su punto decisorio en otro acápite normativo que permita, proporcionalmente, llegar a una decisión que no contrarié los principios del derecho del territorio donde se pretenda satisfacer la seguridad jurídica, a su vez esto se encuentra sometido al respectivo control judicial, para garantizar la legitimidad y legalidad propia de su actuación, para así maximizar el óptimo desarrollo del derecho y los fines propuestos por este.

El poder judicial es producto del poder constituyente y que tiene como finalidad el proteger los derechos fundamentales, es decir, *"llamado a asegurar las reglas del proceso democrático: amplitud de la participación en la discusión de los asuntos a resolver entre los afectados por la decisión que se tome; la libertad de expresarse que tienen los participantes de hacerlo por sí mismo en una deliberación; igualdad de condiciones bajo las cuales la participación se lleva a cabo y que las propuestas sean debidamente justificadas"*<sup>12</sup>

Y es que al hablar de discrecionalidad judicial es la representación técnica de la libertad – marco subjetivo de acción- del operador judicial, una libertad que en palabras de Zulay C. Díaz Montiel & Álvaro B. Márquez-Fernández<sup>13</sup>:

<sup>10</sup> MASCOTRA, M. (2015). El poder discrecional de los jueces. .Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Sitio web: [https://app.vlex.com/WWW/search/\\*discrecionalidad+judicial/WWW/vid/631567689](https://app.vlex.com/WWW/search/*discrecionalidad+judicial/WWW/vid/631567689)

<sup>11</sup> Ibidem.

<sup>12</sup> CHACIN FUENMAYOR, R. & LEAL OROZCO, G. (2019) "Tensión entre democracia y autoritarismo en Latinoamérica y el rol del poder judicial." Utopía Y Praxis Latinoamericana No. 24. Pp. 75-100.

<sup>13</sup> FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, A & MONTIEL DIAZ, Z (2013) Justicia social emancipadora, democracia ciudadana y crisis del estado. Revista Fronesis. Pp. 299-305.

La libertad es de uso responsable, moral, comunitario porque está constituida por la capacidad de creación, inventiva o instrumentación del hombre limitada solamente por la responsabilidad de perpetuar su especie. Por lo anterior, la libertad se ejerce en un orden que el hombre crea, norma y establece para la convivencia comunitaria y cívica.

La libertad ilimitada y desprovista de todo elemento moral es riesgosa y las rémoras que antepongamos a ella conducen a la inhabilitación del hombre libre para pensar, crear y transitar por el mundo. La que ejercitemos responsablemente, con sentido comunitario, respeto a la vida y reconociendo que sólo es posible disfrutarla si los otros también pueden hacer lo mismo es la libertad humana y ejercitan la libertad humana.

Se concluye entonces de lo anterior que en la interpretación existe una necesidad de consagrar los espacios de interacción judicial, pero que los mismos deben estar altamente limitados por las normas jurídicas, puesto que la discrecionalidad judicial debe entonces estar articulada con la garantía de la seguridad jurídica en un Estado, pues pese a la relevancia de que los jueces puedan intervenir en los denominados casos difíciles, estos deben únicamente motivar su decisión en correspondencia a lo que el Estado estructura en el contrato social, teniendo en cuenta que se les entrega una función de especial importancia como intérpretes de todo el sistema normativo.

No obstante, esas facultades de interpretación y discrecionalidad de las que venimos dando cuenta, no son en sí mismos elementos axiomáticos que impidan juicios en contrario, puesto que, de ser entendidos de esa manera, la labor del operador jurídico sería arbitraria e injustificada, lo que desbordaría el sistema de pesos y contrapesos, como base fundamental del principio de la tridivisión de poderes propuesto por el filósofo y jurista francés Montesquieu<sup>14</sup>, lo cual haría excesivo daño al sistema jurídico, por lo que se hace necesario la creación de un control de esas facultades judiciales.

Esta conceptualización de la discrecionalidad adquiere una especial importancia en la medida que se estructuran determinadas facultades del operador jurídico, vinculado de una forma irreductible a las reglas del sistema normativo como lo advierte el tratadista argentino Juan Carlos Cassagne<sup>15</sup> al señalar que la actividad judicial tiene dentro de su cosmovisión un deber de independencia a la vez que debe fortalecer el ordenamiento jurídico, a incluso resistir a cualquier abuso que se pueda efectuar en una decisión judicial.

De acuerdo a los estudios y análisis hechos por el autor argentino Cassagne, es posible afirmar que la discrecionalidad judicial, como potestad judicial, encontró un respaldo estructural en las bases normativas del derecho administrativo francés, dinamizando la posición de control público a las demás ramas del poder. Tal es el caso, de la Europa de la posguerra, donde se construyen marcos de operatividad de la actividad judicial.

Ese orden histórico se fue gestando de tal modo, que fueron concibiéndose los conceptos de discrecionalidad de manera particular, como por ejemplo, en Alemania donde se pensó que la discrecionalidad judicial debía estar ajustada al imperio de la administración y alejada de cualquier tipo de control judicial, o de menor grado, y en ese orden los silogismos jurídicos, compuestos por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, eran los que en últimas limitarían ese papel discrecional de los jueces.

Otra tendencia doctrinaria que ha significado un punto de vista significativo en el estudio y alcance de la discrecionalidad judicial, ha sido expuesto por Isabel Lifante Vidal<sup>16</sup>, quien plantea la identificación de la concepción de los "ítems jurídicos indeterminados", como aquellos que en últimas permiten y dan relevancia a la discrecionalidad judicial, por cuanto su análisis implica la diferenciación entre lo determinado y lo indeterminable y, en consecuencia, se obtiene la explicación de la naturaleza jurídica de la discrecionalidad judicial, ya que lo determinable no necesita mayor ejercicio que la reglamentación hecha por el legislador,

<sup>14</sup> MONTESQUIEU, C. L. de S (2001). *El espíritu de las leyes*. 14ª edición, México: Porrúa.

<sup>15</sup> CASSAGNE, J. (2009). *El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa*. Madrid. Marcial Pons

<sup>16</sup> LIFANTE, I. (2002). Dos conceptos de discrecionalidad jurídica. *Revista Doxa*. Nro. 25. Doi. 10.14198/DOXA2002.25.12

dejando de lado todo margen de discreción del juez, por cuanto esa aplicación reglada se considera justa y por demás legítima, pero al encontrarse con un sentido indeterminado, puede el juez crear derecho a partir de la interpretación de esa norma y ajustarla justamente a los casos presentados. Y como expresa Lifante, “donde termina el derecho, comienza la discrecionalidad”<sup>17</sup>

Esta visión, altamente positivista, nos muestra como la actividad judicial tiene por propósito consagrar todo un marco que viabiliza la discrecionalidad judicial, en tanto la misma cumpla con condiciones regladas, puesto que de no advertirse la posibilidad de interpretar, puede establecer condiciones que no son aceptadas o legitimadas por la sociedad, ya que es necesario que los jueces puedan ofrecer soluciones asertivas a los problemas jurídicos concretos, pero no se puede vulnerar la seguridad jurídica a partir de decisiones individuales.

### **ALCANCE DEL CONCEPTO DE DISCRECIONALIDAD Y SUS LÍMITES**

Lejos de establecer una posición concreta, debemos concluir que la discrecionalidad judicial es una construcción teórica inacabada, en la medida en que siempre se establecerán puntos de tensión alrededor de su desarrollo, frente a lo cual se precisa resaltar que, en los argumentos, tanto de aprobación como aquellos de plantean desconfianza, existen elementos que deben determinar un cuestionamiento por lo justo en la aplicación judicial.

Por esta razón, es preciso entonces señalar que la premisa fundamental a defender no es si los jueces pueden ser discrecionales en sus decisiones o no, sino que la apuesta fundamental radica en determinar cómo se construye un juicio justo dentro de un estado constitucional.

Bajo esa precisión deben delimitarse las condiciones de funcionamiento de la discreción judicial; conforme lo sostiene Hart<sup>18</sup>, es preciso que el ordenamiento jurídico determine condiciones que permitan reglar la actividad del juez, lo cual implicaría un reconocimiento de normas primarias y normas secundarias que representan limitaciones sobre las cuales el juez debe buscar los fundamentos que le permitan orientar su decisión en aquellos casos en que la norma evidencia la necesidad de interpretar.

En este sentido, el tratadista Manuel Segura, manifiesta que la norma establece las consecuencias jurídicas precisas, “aunque no haya acertado en hacerlo con la debida claridad”, lo cual quiere decir que el arbitrio solo existe allí donde hay una norma que lo autorice expresamente. En caso contrario, los jueces, por más que las normas sean vagas y ambiguas, solo realizan una tarea de aplicación en la que no podría hablarse propiamente de la existencia de una auténtica libertad de elección<sup>19</sup>

Ahora bien, esta concepción implica el reconocimiento de la existencia de una laguna axiológica o una antinomia normativa<sup>20</sup> que demanda hallar las causas de la discrecionalidad, lo cual es un ejercicio altamente acucioso puesto que, se expone, que lo que permite en últimas, de manera involuntaria, el nacimiento de la discrecionalidad es la indeterminación que emana del derecho y que concurre con sus formas de expresión. Esas indeterminaciones del derecho se consolidan de la siguiente forma: “Admitida la indeterminación del Derecho podemos analizarla desde cuatro perspectivas diferentes que se refieren al contenido del Derecho, al lenguaje de las normas, a la voluntad del legislador y, por último, a los defectos del sistema jurídico”<sup>21</sup>. Las anteriores perspectivas se evidencian de la siguiente manera:

---

<sup>17</sup> Ibidem

<sup>18</sup> HART, H. L. (1974). *El concepto de derecho*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot S.A.

<sup>19</sup> SEGURA, M. (2006). *Sentido y límites de la discrecionalidad judicial*. 2018, Madrid. Editorial universitaria Ramón Areces

<sup>20</sup> ALCHOURRÓN, C. E., & BULYGIN, E. (1974). *Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales*. Buenos Aires: Astrea.

<sup>21</sup> SEGURA, M. (2006). *Sentido y límites de la discrecionalidad judicial*. 2018, Madrid. Editorial universitaria Ramón Areces

## El contenido normativo

Es posible analizar esta perspectiva a partir de la expedición de las constituciones modernas, categorizadas en flexibles y abiertas, puesto que no limitan el ejercicio del derecho sino que permiten disposiciones que hagan de su desarrollo una constante moldura de criterios que integren posibles tomas de decisiones, esto, adquirido por los diferentes movimientos filosóficos e ideológicos que integran la creación del texto constitucional, pero siempre en defensa de principios y valores que determinen los fines de la existencia del Estado, lo cual indetermina el derecho, porque fácilmente pueden encontrarse los llamados casos difíciles entre los mismos principios constitucionales, lo cual, de tajo, debilita el respeto que le debe el juez a la ley, dándole al juzgador la potestad de decidir mediante otros medios. Este contenido del derecho, denominado indeterminación voluntaria - por la consciencia de la discreción - juega un papel importante al decidir la realidad que presenta el discurrir del derecho.

## El uso indeterminado del lenguaje

Esta perspectiva de análisis se evidencia con el advenimiento de los pactos sociales que buscan dinamizar el papel de la constitución dentro de un Estado, fomentando su uso en aquellas situaciones que en su texto les ha sido otorgado un trato especial, y que al determinarse dentro del plexo constitucional esperan adquirir un valor preponderante a la hora de materializar el derecho en situaciones de hecho, como es el caso de los diferentes factores reales de poder. “[...] puede decirse que todos los sistemas jurídicos – y, en general, también cualquier sistema normativo– padecen una indeterminación lingüística cuyo efecto fundamental es dificultar el reconocimiento de lo que el Derecho prescribe para situaciones determinadas”<sup>22</sup>. De lo anterior se concatena el uso parcial de la discrecionalidad, porque si bien se obtienen normas que aleguen posibles soluciones, por otro lado, hay normas determinadas que no ameritan el papel discrecional - como se esperaría - a la hora de actuar el derecho, lo que se concluye como el uso ambiguo en la creación de la norma.

## Indeterminación consciente de conceptos

Podríamos definirla en cierto modo, como la discrecionalidad legal, puesto que esta emana expresamente de la voluntad del legislador, donde este, al expedir leyes, sincroniza dentro del texto la posibilidad de que el juez o quien haga las veces de juzgador, pueda circunscribir su arbitrio a varias posibilidades de encontrar una solución, bien sea siguiendo el camino reglamentado del legislador, o apoyarse en otra fuente formal admitida en ese ordenamiento para obtener legitimidad en el ejercicio del derecho y la realización de la justicia. Desde esta perspectiva, la discrecionalidad admitida, no genera mayores discusiones sobre su existencia, puesto que las normas y sus fines, no garantizan una decisión justa, ni se logra de ellas inferir cuales podrían ser las soluciones para el caso en específico, por lo cual, el juez puede apoyar su decisión en la jurisprudencia, la doctrina, e incluso en el sistema internacional.

En este caso el creador de la norma prescribe la consecución de un determinado objetivo o fin, pero no dice –intencionadamente– cuáles son los medios que deben utilizarse para la obtención de este, es decir, que se presupone que existen varias posibilidades o varios caminos para la obtención del fin, dejándose al órgano habilitado por la norma la elección de tal camino<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Ibidem

<sup>23</sup> Ibidem

## Defectos del sistema normativo

Este punto de análisis deviene de las llamadas lagunas o antinomias, las cuales generan fallas en todo ordenamiento o sistema jurídico pensado. El legislador, al estar consciente de estos resquemores, prevé alternativas o mandatos de interpretación para quien tiene en sus manos el *juris dicere*, y en tal situación, poder ofrecer, por medio de analogías o apoyado en los principios preponderantes del sistema, una solución conforme a derecho

El propio creador de las normas es quien, de un modo intencionado, enuncia criterios lo suficientemente vagos e indeterminados para permitir que los jueces lleven a cabo una auténtica elección y en este sentido su poder discrecional (aunque limitado) aparece reconocido ab initio cuando se le encomienda que, de uno u otro modo, y valiéndose de los medios legítimos que el legislador pone a su disposición, dé sentido y significado final al contenido de las normas jurídicas<sup>24</sup>.

En este sentido adquiere validez material el desarrollo conceptual de esta temática, teniendo en cuenta que la discrecionalidad judicial ofrece un amplio alcance, evidenciado en la manera como se ha sublevado el poder judicial como interpretador y creador del derecho, no erga omnes, pero si estandarizado para las situaciones difíciles.

En un Estado social de derecho, la facultad de dictar méritos legales es un imperativo categórico conferido al legislador por normas de carácter constitucional, sin embargo, no es la norma quien finalmente resuelve las situaciones de hecho llevadas a los tribunales, son las decisiones de los jueces las que ofrecen las soluciones de acuerdo a los preceptos y fines de esas normas. Por tal razón en todos aquellos casos donde el legislador no previó reglas aplicables, el juez ejerce una labor creadora, o en caso de existir, le fija el sentido a la norma a través del ejercicio interpretativo, siempre en consonancia con los poderes que el mismo legislador le otorga y con los límites que este mismo le establece.

El maestro Echeverry<sup>25</sup>, en el desarrollo de la teoría Hartiana, en el debate sobre los casos difíciles, resalta la posición de Hart<sup>26</sup> en los siguientes términos:

H.L.A. Hart, uno de los más influyentes exponentes de un positivismo lingüístico-sociológico, con su teoría sobre los casos difíciles, acepta de antemano que la ley escrita no contiene respuestas definitivas a todo hecho social, abriendo la posibilidad de aceptar un alto margen de discrecionalidad judicial en la resolución de los conflictos jurídicos<sup>27</sup>.

Ahora bien, siguiendo con la exposición de la validez material del concepto de discrecionalidad judicial, considero necesario aclarar, que, si bien las decisiones judiciales no constituyen fuerza vinculante para el ordenamiento en general, existe en el ejercicio del derecho, el denominado "precedente judicial", el cual aboga por dar preponderancia a aquellas decisiones constantes y uniformes tomadas por los altos tribunales, del cual los jueces no pueden apartarse.

De esta manera vemos como ciertas decisiones judiciales adquieren fuerza vinculante frente al operador jurídico, quien finalmente se ve obligado a aplicarlas en sus providencias, lo cual a su vez constituye un límite a esa discrecionalidad judicial.

---

<sup>24</sup> Ibidem

<sup>25</sup> ECHEVERRY, C. (2008). El imperio de la discrecionalidad judicial. Revista Criterio Jurídico. Vol. 8

<sup>26</sup> HART, H. L. (1974). *El concepto de derecho*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot S.A.

<sup>27</sup> ECHEVERRY, C. (2008). El imperio de la discrecionalidad judicial. Revista Criterio Jurídico. Vol. 8

## CONCLUSIONES

Frente a la idea de la función del juez como interprete normativo, es preciso señalar que, en el proceso de construcción histórica, los diferentes regímenes han visto como un peligro la consagración legal del margen de interpretación judicial, no obstante a estas consideraciones, la discrecionalidad judicial adquiere un papel preponderante, por cuanto constituye un eje de control a las demás ramas del poder público, y su disposición legal supone un respaldo normativo en la resolución de los casos difíciles.

Es necesario resaltar la importancia de la interpretación judicial, que como medida funcional del ordenamiento jurídico implica reconocer el papel preponderante de la discrecionalidad, pero de la misma importancia es reconocer que el juez está sometido a límites funcionales que están condicionados por reglas construidas en el contrato social. Esta visión, tal y como lo hemos expuesto, pone al descubierto que las decisiones judiciales están sometidas al orden jurídico constitucionalizado.

No se trata de una apuesta hiperlegalista, sino que dentro de su concepción entiende que los derechos fundamentales son consagraciones positivas emanadas por diversas fuentes, sea de orden legal, jurisprudencial, internacional e incluso administrativo, en donde conforme lo propone el profesor Restrepo Tamayo<sup>28</sup> dan garantía de supervivencia, autodeterminación y dignidad humana.

Por esta razón los criterios orientadores del ejercicio de la discreción judicial se manifiestan cuando se presentan como elementos de armonización estructural del ordenamiento jurídico al momento de plantear respuestas a lagunas axiológicas o antinomias normativas, las cuales devienen en casos difíciles que el Estado define teleológicamente.

## BIBLIOGRAFÍA

ALCHOURRÓN, C. E., & BULYGIN, E. (1974). Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Buenos Aires: Astrea.

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (1991) Constitución Política. Bogotá D.C.

BAUTISTA, J. (2015). Discrecionalidad judicial. 2018, de Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Sitio web: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3796/18.pdf>

CALAMANDREI, P (1959). La casación civil (Trad. Santiago Sentís Melendo y Mariano Ayerra Redín). Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.

CASSAGNE, J. (2009). El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa. Madrid. Marcial Pons

CHACIN FUENMAYOR, R. & LEAL OROZCO, G. (2019) "Tensión entre democracia y autoritarismo en Latinoamérica y el rol del poder judicial." Utopía Y Praxis Latinoamericana No. 24. Pp. 75-100.

DUQUE, O. (2007). Concepciones del derecho y discrecionalidad judicial. Criterio Jurídico. No 7. Pp. 35-58

DWORKIN, R. (1995). Los derechos en serio, Barcelona. Ariel.

---

<sup>28</sup> RESTREPO TAMAYO, J. (2018). Estructural constitucional del Estado. Medellín. Sello editorial Universidad de Medellín

- ECHEVERRY, C. (2008). El imperio de la discrecionalidad judicial. Revista Criterio Jurídico. Vol. 8
- FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, A & MONTIEL DIAZ, Z (2013) Justicia social emancipadora, democracia ciudadana y crisis del estado. Revista Fronesis. Pp. 299-305.
- GARCÍA, L. (2014). El juez y el precedente: hacia una reinterpretación de la separación de poderes. Revista Vniversitarias. Doi:10.11144/ Javeriana.VJ128.jphr
- GARCÍA, J. (2006). ¿Existe discrecionalidad en la decisión judicial? Isegoría No. 35 . pp151-172
- GUASTINI, R. (1999). Principios de derecho y discrecionalidad judicial. Jueces para la democracia . nro. 34. Pp.39-46
- GUASTINI, R., GASCÓN, M., & CARBONELL, M. (2001). Estudios sobre la interpretación jurídica. México D.F.: Porrúa.
- GÜECHÁ, C. (2017). La noción de acto administrativo: un análisis desde la discrecionalidad en la actuación de la administración. Opinión Jurídica. Vol. 16 nro. 31. Pp 25-48
- HART, H. L. (1974). *El concepto de derecho*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot S.A.
- HESPANHA, A. M. (2002). Cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio. Madrid: Tecnos.
- IGARTUA, J. (1996). Discrecionalidad, arbitrariedad y control judicial. Revista Vasca de administración pública. No. 64. Pp.95-118
- KENNEDY, D. (2002). Libertad y restricción en la decisión judicial., Nuevo pensamiento jurídico Sitio web: [http://duncankennedy.net/documents/Photo%20articles/Libertad%20y%20Restriccion%20en%20la%20Decision%20Judicial\\_Estudio%20Introductorio.pdf](http://duncankennedy.net/documents/Photo%20articles/Libertad%20y%20Restriccion%20en%20la%20Decision%20Judicial_Estudio%20Introductorio.pdf)
- KRONMAN, A. (2007). El problema de la discrecionalidad judicial. Revista sobre enseñanzas del derecho. Año 5 .nro. 10. 95-99
- LEÓN, S. (2016). Los límites a la discrecionalidad judicial en la constitución política de 1991. Revista de Investigaciones en Derecho y Ciencias Políticas. No. 2. Vol. 18
- LIFANTE, I. (2002). Dos conceptos de discrecionalidad jurídica. Revista Doxa. Nro. 25. Doi. 10.14198/DOXA2002.25.12
- MARTÍNEZ, L. (2009). Relativismo ético y discrecionalidad judicial. Revista de fundamentación de las instituciones jurídicas y de derechos humanos. Nro. 61. Pp. 115- 142.
- MASCIOTRA, M. (2015). El poder discrecional de los jueces. .Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Sitio web: [https://app.vlex.com/#WWW/search/\\*/discrecionalidad+judicial/WWW/vid/631567689](https://app.vlex.com/#WWW/search/*/discrecionalidad+judicial/WWW/vid/631567689)
- MONTESQUIEU, C. L de S (2001). El espíritu de las leyes. 14ª edición, Mexico: Porrúa.
- PETIT, E., & FERNANDÉZ González, J. (1989). Tratado elemental de derecho romano. México: Porrúa.
- RESTREPO TAMAYO, J. (2018). Estructural constitucional del Estado. Medellín. Sello editorial Universidad de Medellín
- RUÍZ, R. (2010). Sobre la discrecionalidad judicial en un estado constitucional. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho. Nro. 20

SEGURA, M. (2006). Sentido y límites de la discrecionalidad judicial. 2018, Madrid. Editorial universitaria Ramón Areces.

SCHELLER, A. (2017). Discrecionalidad, ciencia y sistema del derecho penal. Revista Pensamiento jurídico Número 45, p. 193-218

UPRIMNY, R. (2006). Interpretación judicial, módulo de autoformación. 2018, de Consejo superior de la judicatura Sitio web: <http://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/biblioteca2011/content/pdf/a6/9.pdf>

ZAMBRANO, J. (2009). Multiculturalidad y discrecionalidad judicial en una sentencia penal: análisis desde Joseph Raz. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Vol. XXXII. 327-343

ZAGREBELSKY, G. (1997). El derecho dúctil: ley, derechos, justicia (Vol. 4). Trotta.

## **BIODATA**

**Eduardo Alonso FLÓREZ ARISTIZABAL:** Abogado egresado de la Universidad de la Sabana; Candidato a Doctor en Derecho de la Universidad de Medellín, Magister en Derecho de esa misma Universidad, Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Economía en la Universidad de los Andes. Director de la especialización de Derecho Penal de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería y Profesor Universitario a nivel de pregrado y postgrado.

**Carlos Alberto MOJICA ARAQUE:** Abogado y Doctor en Derecho de la Universidad de Medellín, Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Magister en Derecho de la Universidad de Medellín, Especialista en Responsabilidad Patrimonial de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Profesor Universitario a nivel de pregrado y postgrado en la Universidad de Medellín.





## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 61-71  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

## Cultura política y geopolítica: un análisis desde el Constitucionalismo y autoritarismo

*Political and Geopolitical Culture: an Analysis from Constitutionalism and Authoritarianism*

**Carlos Arturo HERNÁNDEZ DÍAZ**

<http://orcid.org/0000-0002-6092-8228>

[carlos.hernandez@unilibre.edu.co](mailto:carlos.hernandez@unilibre.edu.co) / [carhedy@gmail.com](mailto:carhedy@gmail.com)

Universidad Libre, Bogotá, Colombia

**Luis Eduardo DÍAZ CID**

<https://orcid.org/0000-0002-9845-1701>

[Chindos40@gmail.com](mailto:Chindos40@gmail.com)

Universidad del Sinú "Elias Bechara Zainúm", Montería, Colombia

**Orlando MENESES QUINTANA**

<http://orcid.org/0000-0002-7864-8228>

[orlando.meneses@unilibre.edu.co](mailto:orlando.meneses@unilibre.edu.co) / [civitasdei@hotmail.com](mailto:civitasdei@hotmail.com)

Universidad Libre, Bogotá, Colombia

Este trabajo está depositado en Zenodo:  
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3907042>

## RESUMEN

El artículo explora brevemente la situación descrita precisamente como una dualidad y no como una refutación mutua entre las doctrinas de razón de Estado y seguridad nacional, por un lado, y los controles constitucionales y la diplomacia por el otro. Los casos abordados de Estados Unidos y la Federación Rusa dejan ver que tales recursos no ofrecen allí una resistencia irreconciliable sino que se explican mejor por su particular historia constitucional y diplomática, de tal manera que la lógica propia de su trayectoria les permite recurrir a ellas en sus relaciones internacionales como herramientas disponibles para el despliegue de sus halcones o palomas según lo amerite el caso, considerando indiferentemente que deben tener ambos a su disposición.

**Palabras clave:** Geopolítica, Antecedentes constitucionalismo, Nacionalismo, Procesos de desarrollo industrial, Infraestructura expansionista.

## ABSTRACT

The article briefly explores the situation described precisely as a duality and not as a mutual refutation between the doctrines of State Reason and national security, on the one hand, and constitutional controls and diplomacy on the other. The cases addressed by the United States and the Russian Federation show that such resources do not offer irreconcilable resistance but are better explained by their particular constitutional and diplomatic history, so that the logic of their trajectory allows them to resort their international relations as tools available for the deployment of their hawks or pigeons as the case warrants, regardless of whether they should have both at their disposal.

**Keywords.** Geopolitics, Constitutional Background, Nationalism, Industrial Development Processes, Expansionist Infrastructure.

Recibido: 20-05-2020 • Aceptado: 23-06-2020



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## INTRODUCCIÓN

Las sociedades modernas han experimentado un creciente grado de complejidad en todos los ámbitos de la vida, y éstos a su vez se han multiplicado en cantidad y demanda de atención pública. Una característica de la modernidad es que esta variedad y complejidad de problemáticas se ventilan recurriendo al Estado de Derecho, que ha adquirido responsabilidades que podrían catalogarse de insólitas en el sentido de justificar por qué su atención corresponde al Estado y no a los particulares, si son problemas de la sociedad en general o atañen mejor al ámbito del derecho privado, o si son asuntos de competencia nacional o regional (movilizando, por ejemplo, el papel subsidiario o solidario del Estado). Incluso la complejidad señalada se ha extendido al escenario internacional, cuyos problemas atañen a un número cada vez mayor de Estados y naciones en un impulso que muy probablemente llegará a involucrarlos a todos, resultando así catalogados como públicos por naturaleza (asunto que además lleva a replantear la naturaleza de los ámbitos público e internacional hoy)<sup>1</sup>

Así, y con toda la importancia que han adquirido los asuntos públicos con vocación internacional, su grado de complejidad es tal que demanda la atención de teóricos especializados cuyos análisis escapan a la comprensión del ciudadano informado, a quien realmente interesan. Pero también han sido materia de reflexión en el constitucionalismo desde su origen, que se ha planteado el manejo de las relaciones exteriores como un asunto que, por su importancia, trasciende al poder ejecutivo; así, el comandante supremo de las fuerzas armadas y su protección de la seguridad nacional debe asumir responsabilidad por las decisiones que afectan necesariamente el ámbito internacional.

Aquí se quiere llamar la atención sobre una dualidad presente en las relaciones internacionales, que suelen fluctuar entre la competencia y la cooperación. Ciertamente, tal conducta muestra que las estrategias señaladas no son excluyentes y mucho menos azarosas, antes bien, su uso obedece a factores complejos, de tal manera que pueden procurar a un gobierno un alto índice de popularidad a partir del manejo de los asuntos internacionales *incluso* si logra burlar los controles constitucionales. Por una parte, hay un importante precedente histórico detrás de esta combinación, que muestra un impulso en el comportamiento de los Estados hacia la dominación de otros pueblos a través de tales estrategias. Por otro lado, es igualmente cierto que los Estados han desarrollado una tradición constitucional de comportamiento pacífico, a través de cuerpos diplomáticos, ratificada en tratados de cooperación.

El artículo explora brevemente la situación descrita precisamente como una dualidad y no como una refutación mutua entre las doctrinas de Razón de Estado y seguridad nacional, por un lado, y los controles constitucionales y la diplomacia por el otro. Los casos abordados de Estados Unidos y la Federación Rusa dejan ver que tales recursos *no* ofrecen allí una resistencia irreconciliable sino que se explican mejor por su particular historia constitucional y diplomática, de tal manera que la lógica propia de su trayectoria les permite recurrir a ellas en sus relaciones internacionales como herramientas disponibles para el despliegue de sus *halcones* o *palomas*<sup>2</sup> según lo amerite el caso, considerando indiferentemente que deben tener ambos a su disposición.

---

<sup>1</sup> Carbonell, Miguel. (2007), *Teoría del neoconstitucionalismo*. Madrid: Trotta, CARBONELL, Miguel. (2010), *El canon neoconstitucional*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

<sup>2</sup> La expresión fue acuñada por la crónica periodística norteamericana durante la época del famoso senador Joseph McCarthy; a propósito de las protestas contra la Guerra de Vietnam, hacía referencia a las posiciones en favor de la demostración de fuerza o de la salida diplomática.

## ESTADOS UNIDOS

La tradicional evasiva del imperio norteamericano para comprometerse con los protocolos internacionales no significa que al mismo tiempo no haya practicado una importante estrategia de alianzas bilaterales y multilaterales en sus relaciones exteriores<sup>3</sup>. Su desarrollo constitucional señala instrucciones sobre cómo tratar políticamente a los vecinos, combinando audazmente la diplomacia, la cooperación económica y el recurso a la fuerza (mediante sanciones e intervención directa). Esta práctica y sus efectos ha generado una desconfianza hacia la diplomacia debido a su uso reiterado como estrategia para confundir, echando para atrás los acuerdos y abandonando la palabra empeñada en un giro errático que obedece a los cambiantes intereses nacionales y del gobierno de turno, con la señalada consecuencia de agravar la ya inestable geopolítica regional y global<sup>4</sup>.

En cuanto a su tradición constitucional, es preciso aclarar que los primeros colonos fundaron las nuevas comunidades sobre la fuerza vinculante de los acuerdos plasmados en documentos, de tal manera que la constitución de 1787 vino a ratificar esta práctica colonial. Igualmente, esta Constitución y el *Bill of Rights* de 1791 reconocen los principios del derecho británico, del cual nunca quisieron desprenderse y el cual invocaron durante el movimiento de independencia. Y aunque el constitucionalismo inglés tiene una larga historia que se remonta hasta la época de la *Charta Magna*, cierto es que la profundidad política de dicha propuesta cobra sentido durante los acontecimientos del siglo XVII, a través del cual Inglaterra entrará de lleno a la modernidad transformándose en imperio<sup>5</sup>.

Hacia 1800, pues, la concepción institucional de *check and balances* vino a consolidar una doble alianza fraguada durante dos siglos, una entre clases sociales por las que la nobleza asimiló los intereses burgueses, y otra entre la monarquía y los territorios de Escocia e Irlanda, que con el Act of Union integraron sus clases comerciales, el mercado interno y, al final, se lanzaron a la conquista del mundo<sup>6</sup>. La adaptación a las nuevas realidades políticas y el subsecuente lanzamiento de la Commonwealth, que tan efectiva se mostraría durante las guerras mundiales y la Guerra Fría, significó una evolución en la insospechada alianza de Inglaterra con sus antiguas colonias americanas. Esta relación ambigua atravesó por algunas etapas significativas, así:

- Las guerras napoleónicas, en las que intervino la joven república por razones comerciales y que concluyeron con el Tratado de Ghent de 1814, el cual brindó un soporte para las relaciones amistosas entre los países involucrados que se mostraría sumamente fecundo en el futuro inmediato
- La guerra civil americana, en la que las potencias respetaron el pedido de los bandos para no intervenir, y de la que emergió como un gigante industrial con proyección internacional
- Las negociaciones sobre la frontera canadiense, que sella una alianza entre Inglaterra, Estados Unidos y Canadá que se expresará en las guerras mundiales
- Los 14 puntos de Woodrow Wilson, su propuesta para unos “Estados Unidos de Europa” y la particularidad británica al respecto
- La creación de la OTAN, la conjunción de intereses durante la Guerra Fría, la fundación de la Unión Europea y el posicionamiento actual frente a los gigantes ruso y chino

<sup>3</sup> Herring, George. (2008), *From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations Since 1776*. Oxford (UK): Oxford University Press.

<sup>4</sup> *Diario El Espectador*. Trump se retira oficialmente del acuerdo nuclear con Irán. <https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/trump-se-retira-oficialmente-del-acuerdo-nuclear-con-iran-articulo-754571>. Consultado el 30 de marzo de 2019.

<sup>5</sup> Library of Congress (U. S. A.). John Bull and Uncle Sam: Four Centuries of British-American Relations, en <http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/johnbullandunclesam>. Consultado el 30 de marzo de 2019.

<sup>6</sup> Hobsbawm, Eric. (1989). *Industria e imperio*. Barcelona: Ariel. Meneses, Orlando. (2013) *Liberalismo y sociedad en el siglo XIX europeo*. Bogotá: Universidad La Gran Colombia.

Puede, entonces, afirmarse que la posición norteamericana frente a los vecinos ha estado permeada por su herencia constitucional, de tal manera que el original impulso clasicista en sus principios, estrictamente político, viró enérgicamente hacia el exterior una vez consolidada como nación continental tras la guerra civil<sup>7</sup>.

Los Estados Unidos han tenido una tradición constitucional que otorga facultades al Congreso en las relaciones exteriores, como en los casos de control sobre las decisiones del presidente en materia de orden público o envío de tropas al exterior, presupuesto de guerra, declaración de guerra o coalición, facultad para celebrar tratados y control sobre materias de seguridad nacional, decisiones que deben contar con la aprobación del legislativo y que puede ejercer su derecho de veto. Así, es tal vez el único país en el cual el derecho internacional es acogido por el derecho interno al tiempo que el derecho interno se proyecta como derecho internacional<sup>8</sup>.

De ahí que la actuación del ejecutivo en materias sensibles de orden internacional, siempre asociadas a la doctrina de seguridad nacional, hayan sido ocasión para sonados escándalos que a partir de su gravedad han robustecido allí la institucionalidad. Tales han sido la llamada “doctrina Monroe”, las guerras con México y España de principios del siglo XX, la usurpación de Panamá, Bahía de Cochinos, los Papeles del Pentágono, Water Gate, Irán-Contras y Somalia. En todos estos casos, el gobierno americano quiso actuar en secreto para lograr objetivos que sólo a él incumbían, como una manera de proceder habitual en caso de guerra. A ello habría que sumar los recientes casos de Wiki-Leaks y el supuesto sabotaje informático ruso en las elecciones presidenciales de 2016, lo cual viene a confirmar la creciente importancia y complejidad del ámbito internacional.

Estos golpes mediáticos han dejado en claro dos cosas; primero, que la Constitución americana siempre ha tratado a los asuntos exteriores como una materia eminentemente política, razón por la cual no deben ser de competencia exclusiva del ejecutivo (aun actuando como el custodio máximo de la soberanía); y segundo, que la división de poderes no está diseñada para obstaculizar al gobierno sino para su actuación armónica y con plena autoridad, buscando una mejor y mayor información para la toma de decisiones consensuada y conforme a derecho en materias tan graves<sup>9</sup>.

Para varios analistas jurídicos e internacionalistas (John Rawls, Ronald Dworkin, Robert Keohane), esta tradición ha resultado de la mayor relevancia para la construcción del imperio norteamericano, y razón por la cual desde Abraham Lincoln se ha mantenido la doctrina de no intervención de terceros en asuntos internos, dando prioridad a las relaciones bilaterales. En ocasiones, una mayoría republicana en el Congreso ha influenciado la política internacional hacia la actuación de los halcones (mayor gasto militar y predominio de las agencias de seguridad), y en otros momentos decisivos una mayoría demócrata ha privilegiado la política de las palomas basada en la diplomacia. Sobran ejemplos de ello, baste aquí con mencionar la política de Ronald Reagan frente a la Unión Soviética o la segunda guerra de Irak en cuanto al primer caso, y la coalición respecto a la ex- Yugoslavia o las restricciones del Congreso en el caso sirio en cuanto al segundo.

Así, la herencia constitucional en materia internacional ha contribuido al liderazgo norteamericano combinando las demostraciones unilaterales de fuerza con la búsqueda de alianzas y consensos, mostrándose preparado para una u otra opción según el caso<sup>10</sup>. Porque tal legado ha sabido entender que el ámbito internacional afecta a los intereses nacionales, a la economía, al empresariado y al ciudadano común, haciendo del funcionamiento constitucional un asunto de conocimiento e interés público (tema que suele estar muy presente en las campañas presidenciales). Situación que se ve reflejada en los casos opuestos de la llamada “doctrina Obama” respecto a Cuba e Irán, y la revocación de tales logros por la administración Trump. En conclusión, para la constitución americana los asuntos exteriores no dependen exclusivamente de la

<sup>7</sup> Tindall y Shi. (1995) *Historia de los Estados Unidos*. Bogotá: Tercer Mundo; Glennon, Michael. (1996). *Diplomacia constitucional*. México: FCE.; Carr, Edward. (2004). *La crisis de los veinte años (1919-1939): una introducción al estudio de las relaciones internacionales*. Madrid: La Catarata

<sup>8</sup> McCormick, James. (2012) *The Domestic Sources of American Foreign Policy: Insights and Evidence*. New York: Rowman&Littlefield

<sup>9</sup> Vile, Martin (1998). *Constitutionalism and the Separation of Powers*. Indianapolis: Liberty Fund.

<sup>10</sup> Ferguson, Niall. (2005). *Coloso—Auge y decadencia del imperio norteamericano*. Barcelona: Debate.

situación política o las preferencias internas, sino que son considerados como valores superiores a ser tratados por comisiones especiales del Congreso, que han demostrado ser muy influyentes.

## RUSIA

La tradición de relaciones internacionales del imperio ruso no ha sobresalido por su apego a la constitución y la ley. Por tanto, para el propósito de esta intervención resulta preciso resaltar las particularidades del Estado ruso.

Cuando Pedro el Grande y su nieta política Catalina II decidieron trasladar el centro de poder desde Moscú a San Petersburgo, dejaron en claro su intención de europeizar el imperio, ciertamente, pero también de influir en la política europea, poniendo sus intereses en el Báltico como punta de lanza<sup>11</sup>. Desde luego, ellos supieron encauzar el impulso heredado de los zares anteriores, constructores de la madre Rusia, consolidándolo e inaugurando propiamente la llamada “política del equilibrio europeo”.

Ésta se vio expresada en varios momentos, así:

- La consolidación del Gran Ducado de Moscú con su conquista de los ducados suecos de Novgorod. Es el momento decisivo porque abre la puerta a la posterior influencia sobre la Liga Hanseática, el Mar Negro y Bizancio, del cual importa la religión ortodoxa y una importante empresa civilizadora
- La Paz de Westfalia de 1648, que da al imperio ruso un importante estímulo para hablar el mismo lenguaje de las potencias occidentales, con una política basada en el concepto de Estado-nación y su lógica, el absolutismo, el expansionismo y la labor civilizadora
- El Congreso de Viena 1814, que tiene ya a Rusia como un actor de primer orden y participando en el reparto de las zonas de influencia en Europa oriental, desplazando su interés hacia la órbita de los imperios otomano y austro-húngaro con núcleos importantes de población eslava
- La guerra perdida con Japón de 1905 y la retirada rusa de la Primera Guerra Mundial, que dejarían asuntos por atender en el futuro y marcarían la tensa relación con las potencias occidentales que se prolongaría durante la Guerra Fría hasta el presente

Esta trayectoria muestra la consolidación de la política exterior rusa sustentada principalmente en la idea de soberanía, poniendo la diplomacia al servicio de la fuerza o como su complemento. Rusia fue la única de las monarquías europeas tradicionales que ratificó plenamente su derecho divino y, por lo tanto, no constitucional —ya que la particular situación política había desafiado a los imperios alemán, austro-húngaro, otomano, japonés y chino—. Así que, paradójicamente, los principios de Westfalia ratificados en Viena sólo sirvieron en el largo plazo para legitimar a los Romanov y deslegitimar todas las demás monarquías europeas; y paradójicamente también, las más liberales de ellas sobrevivieron como monarquías constitucionales, mientras el destino de los Romanov estuvo marcado por la influencia alemana largamente buscada —y concretada históricamente en el tren de Lenin<sup>12</sup>.

Con todo, los Estados surgidos de allí —incluida Francia— se sirvieron de aquellos principios para consolidar su expansión imperialista más allá de Europa, de tal manera que el reparto continental incluía las zonas de influencia que chocarían durante las guerras mundiales. Tras la caída de los imperios tradicionales surgen nuevos jugadores que practican formas renovadas de imperialismo, excepto Rusia y China para los cuales los antiguos principios les resultan funcionales. Durante el “corto siglo XX” (Eric Hobsbawm), se concretan polos de influencia que se van consolidando en una trayectoria bien definida por esta herencia, con la particularidad de la asociación de esfuerzos e intereses en mundo altamente competitivo, siendo este punto uno de los decisivos en la complicada relación del Reino Unido con la Unión Europea.

<sup>11</sup> Matos, Rainer. (2017). *Historia mínima de Rusia*. Madrid: Turner.

<sup>12</sup> Merridale, Catherine. (2018) *El tren de Lenin: Los orígenes de la revolución rusa*. Barcelona: Crítica.

Cuando los analistas se refieren a “la Rusia de Putin” para describir su situación actual, la expresión parece cobrar todo su sentido. Vladimir Putin (n. 1952) hereda, interpreta y proyecta magistralmente la descrita tradición de gobierno ruso. En su actuación se puede rastrear una trayectoria consolidada desde que la Rusia de los zares aparece como una potencia capaz de imponer condiciones en Europa, participando de la gran expansión europea del siglo XVIII, e integrando geo-estratégicamente vastos territorios y poblaciones eslavas, caucásicas, tártaro-mogol y siberianas. Ya se anotó cómo durante los regímenes de Pedro y Catalina, Rusia concreta su vocación expansionista en Europa oriental, asimilando culturalmente elementos como la religión ortodoxa, la modernización en métodos de administración, de construcción y arquitectura, en armamentos y estrategias de guerra, a tal punto que estos lazos de identidad han llevado a la promoción de “la Tercera Roma”.

La construcción del Estado ruso ha sido un caso muy particular. Rusia ha sido y sigue siendo un protagonista central en la construcción de Europa y de su identidad, así sea por oposición y, como todo el continente europeo, continúa teniendo influencia mundial e incluso ejerciendo fascinación —un poco inexplicablemente, como en el caso chino— en sectores políticos de izquierda. Las decisivas derrotas de Napoleón y Hitler allí, su papel protagónico durante la Guerra Fría y su conducta ambigua entre aliado y rival en la era Putin, hacen que la búsqueda de sus intereses tenga repercusiones en todo el globo. Así que no solamente ha ayudado a construir el mundo contemporáneo, sino que sigue imponiendo condiciones en Europa y en el mundo.

Como se ha mostrado, la construcción del Estado nacional ruso se ha hecho con base en el concierto internacional y siempre ha tenido influencia sobre él, siempre mirando hacia Europa a través de Alemania como puerta de entrada e importando de allí muchas ideas y técnicas de modernización —entre las que destaca el marxismo—. No es de sorprender, entonces, que durante la Guerra Fría Berlín oriental haya sido considerada su punta de lanza y perla estratégica, debido a que representaba su presencia en el centro de Europa —esto es, del centro de civilización— así como el símbolo de su voluntad y vocación para expandir esta frontera. La expresión “Tercera Roma” reivindicaba su papel como constructor del mundo moderno a través de los principios configurados en Westfalia y Viena, con los que Rusia sale fortalecida como imperio y montada sobre una reputación que no ha querido abandonar<sup>13</sup>.

Esta reputación y este prestigio como potencia lo ha construido Rusia sobre una férrea práctica —que no doctrina— que pone la soberanía en manos de un ejecutivo fuerte. Nicolás II, último zar y orgulloso autócrata, atrapado en esta tradición no supo entender el momento político que le planteaba el liberalismo para transar una monarquía constitucional; posteriormente Stalin, el “zar rojo”<sup>14</sup> eleva a su máxima expresión la identidad entre el príncipe y el Estado, sólo superada por la crueldad inhumana y el totalitarismo en su forma más monstruosa de Corea del Norte. Mijaíl Gorbachov intentó una serie de reformas en las que buscaba el apoyo popular a través de un reconocimiento de libertades básicas —como libre expresión, reunión y locomoción—; para algunos analistas, Gorbachov malinterpretó las opciones que tenía a disposición, pues en su afán de ganar el apoyo internacional no tuvo suficientemente en cuenta el hecho de que Rusia no estaba preparada para una democracia occidental en pleno sentido, razón por la cual, por ejemplo, la *Glasnost* o prensa libre no redundó en fundación de partidos políticos seriamente organizados, sino que la apertura degeneró pronto en anarquía ante el debilitamiento de la represión.

Este es el contexto en que surge el liderazgo muy ruso de Vladimir Putin —llamado “el zar azul” debido a su magistral combinación de los métodos zaristas (simbología nacionalista) y estalinistas (espionaje a gran escala) con instrumentos posmodernos como medios de comunicación, información, desarrollo tecnológico estratégico, economía mafiosa<sup>15</sup> y red de espionaje local e internacional. Los analistas reconocen que Putin

<sup>13</sup> Fazio, Hugo. (2017) *Rusia, de los zares a Putin (1880-2015)*. Bogotá: Universidad de los Andes.

<sup>14</sup> Montefiore, Simone. (2015) *La corte del zar rojo*. Barcelona: Crítica, 2015.

<sup>15</sup> Diario El Espectador. “Vladimir Putin: a lo único que le teme la mafia rusa”, <https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/vladimir-putin-lo-unico-que-le-teme-la-mafia-rusa-articulo-846340>. Consultado el 30 de marzo de 2019.

resultó muy bien formado en la tradición rusa de gobierno a través de la combinación de lo aprendido en la KGB y la Facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo, su labor como espía en Berlín oriental y su experiencia de la caída del comunismo, y la corrupción en el gobierno de transición de Boris Yeltsin, quien lo nombra sucesor con la misión de cubrir sus escándalos de enriquecimiento ilícito<sup>16</sup>. Este enigmático y multimillonario artífice de la Rusia contemporánea ha sabido practicar una versión autóctona de democracia con un constitucionalismo formal anclado en su forma heredada de gobierno<sup>17</sup>.

Cuando se habla de esta herencia se pone de relieve el hecho de que Putin se inserta en la importante empresa internacionalista que ha implicado la construcción de un imperio, la cual ha implicado, entre otras cosas, la importación desde Occidente de procesos de desarrollo industrial y su adaptación exitosa durante la Guerra Fría. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la idea de que Putin ha relanzado una nueva Guerra Fría, puesto que esa denominación adquirió su significado de un enfrentamiento ideológico entre dos cosmovisiones incompatibles, el cual no es el caso actual. Partiendo de un análisis sobre el colapso de la Unión Soviética y de la alternativa socio-económica que representó, es preciso hablar mejor de una adaptación con la que Putin ha logrado sostener una hegemonía durante veinte años sin rivales a la vista, mas no de una simple prolongación como si nada hubiera sucedido en este siglo XXI. Por el contrario, los casos de Rusia y China demuestran esa extraordinaria capacidad de adaptación con los formas ya conocidas desplegando algún tipo de continuidad en sus métodos.

El actual enfrentamiento entre potencias tiene sus propias condiciones, y no obedece a tintes ideológicos. Vladimir Putin es un conservador nacionalista, abierto al libre mercado y astuto en su liderazgo interno y externo. Muy hábil para confundir a sus rivales, nunca comprometiéndose con acuerdos a largo plazo y directo a la hora de buscar sus intereses. Ha sabido aprovechar las ventajas del espionaje informático así como las tecnologías de la información, que ha llevado a niveles inéditos de sofisticación. Su duro posicionamiento en el tablero geopolítico admiraría una vez más a Marx, y le permitiría expresar una perplejidad similar a la improbable revolución comunista en una sociedad industrialmente inmadura, como lo era la Rusia de 1917. Para el análisis político resulta admirable esta resurrección de un gigante, después de todo el desprestigio e incertidumbre sobre su futuro en que quedó sumida tras la caída del Muro de Berlín<sup>18</sup>.

Valga un ejemplo. En 2013 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ratificaba el llamado 'Acuerdo de Ginebra' por el que Rusia y Estados Unidos verificarían el desmantelamiento del arsenal biológico y químico del gobierno sirio<sup>19</sup>. Según los analistas, este acuerdo parecía improbable frente a la intención de intervención armada liderada por la administración Obama la cual, para efectos de legitimidad, buscaba una coalición aprobada por la ONU como la de Irak en 1990 (la cual venía a ratificar el liderazgo de las palomas democráticas con la participación de la OTAN como en Yugoslavia). El acuerdo, que posteriormente demostraría ser ineficaz aunque alcanzó a limitar el uso de estas armas, mostraba el alcance de la negociación diplomática y el multilateralismo en el siglo XXI frente a la escalada armamentista y la geoestrategia basada en la doctrina de la seguridad (interés e influencia) nacional de los rivales (incluido el acuerdo nuclear con Irán).

Posteriormente, la administración Trump rompería estos acuerdos en un intento por desmarcarse de la "debilidad" de su antecesor y rescatando un trasnochado nacionalismo blanco con base en el cual impondría a la fuerza sus intereses en el mundo<sup>20</sup>. Este grueso error en la lectura del ajedrez político delata a este free

<sup>16</sup> Poch-de-Feliou, Rafael. Entender la Rusia de Putin, de la humillación al restablecimiento. Madrid: Akal, 2018.

<sup>17</sup> Greene, Samuel. From Boom to Bust: Hardship, Mobilization & Russia's Social Contract. En: *Daedalus*, Vol. 146, No. 2 (2017), p. 113-127; GREENE, Samuel and ROBERTSON, Graeme. Agreeable Authoritarians: Personality and Politics in Contemporary Russia. En: *Comparative Political Studies*, Vol. 50, No. 13 (2017), pp. 1802-1834; BBC Mundo-Editorial. Factores que convirtieron a Vladimir Putin en el hombre fuerte de Rusia. En: [https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43384900/](https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43384900), 15 de marzo de 2018.

<sup>18</sup> DW-Dokumental—Deutsche Welle TV (español), "El imperio de Moscú: el retorno de Rusia", <http://p.dw.com/p/14KkY>, consultado el 30 de marzo de 2019.

<sup>19</sup> Trenin, Dmitri. (2017). *Putin's Plan for Syria*, en *Foreign Affairs*, vol 96, n 6, dic 13; Collinson, Stephen. (2018) *El impactante plan para la retirada de Siria es Trump en estado puro*. [cnnespanol.cnn.com/guerraensiria](http://cnnespanol.cnn.com/guerraensiria), consultado el 20 de diciembre de 2018.

<sup>20</sup> Diario El Espectador. Donald Trump se retira oficialmente del acuerdo nuclear con Irán. <https://www.elspectador.com/noticias/el->

rider de nula experiencia política, aunque el análisis de su trayectoria y la comparación con Putin amerita un ejercicio para otra ocasión. Lo que aquí importa es el hecho de que, acorde con la señalada jurisprudencia norteamericana, tanto Obama como Trump, y presumiblemente cualquier otro presidente, tienen que rendir cuentas y transar con el Congreso y la Corte Suprema, debido a la tradición constitucional en el manejo de las relaciones internacionales que trasciende al ejecutivo y su mando supremo sobre las fuerzas armadas.

Pero Rusia también tiene su propia tradición, como se ha mostrado. Su restitución como jugador de primer orden ha pasado por las demostraciones en Osetia (Georgia), Ucrania y Siria, dejando en claro que el imperio ruso estará tan comprometido en la paz como en la guerra, y junto con China ya no se les podrá ignorar. En el largo plazo se prevé que las relaciones entre ellos incluyan acuerdos económicos, diplomáticos y militares, pasando por las negociaciones en el Consejo de Seguridad, aunque estas predicciones dependen en buena medida de la continuidad de Putin y su tradición de gobierno fuerte. Los analistas del caso ruso reconocen un movimiento aún incipiente entre la generación más joven —empresarios, periodistas y activistas— con una idea de democracia como procedimiento basada en principios constitucionales, a la que no le quedará nada fácil vencer las redes de corrupción política y administrativa.

En último término, el puño de hierro en el manejo interno le ha dado a Putin excelentes resultados, si de eficacia se trata. En algunos puntos ha sido creativo en el diseño y uso de prácticas inéditas, como en el señalado asunto sirio al comprobarse que las armas en cuestión fueron en realidad proveídas por Rusia<sup>21</sup>. En este sentido, Putin es un auténtico hijo de la Guerra Fría, por lo que Trump estaría en total desventaja si decide enfrentarlo en este terreno.

Visto desde el exterior, parece que el Zar Azul ha logrado sintonizar con su pueblo, al que sigue considerando como súbdito. Ha instaurado una especie de dictadura plebiscitaria que sólo admite admiración sin tener en cuenta las consecuencias (institucionales). Al fin y al cabo, la democracia es una manera de ser política, que ha llegado a entender durante generaciones qué es y para qué sirve una Constitución, en el sentido de que es un acuerdo político o no es nada, así como quién participa de ese acuerdo y bajo qué condiciones en cuanto fuerzas políticas y civiles organizadas.

Putin ha seguido la tradición sin inventar nada nuevo, pero eso sí improvisando en el momento preciso, y poniendo a punto su infraestructura expansionista. Ha sido exitoso porque ha recuperado el orgullo nacionalista ruso, y con base en este sentimiento ha logrado desviar la atención respecto a las condiciones señaladas para una política interna sana. Su estrategia, probadamente efectiva, incluye:

- a) Una gran ambición personal y una visión clara frente a sus propósitos
- b) Haber sabido aprovechar contundentemente la oportunidad dada por Boris Yeltsin
- c) La aplicación férrea de los métodos de administración de la era soviética basados en la lealtad personal
- d) Técnicas de intimidación frente a cualquier oposición, que incluyen cárcel, exilio, cooptación y asesinato
- e) Una gran red de espionaje nacional e internacional
- f) La exclusión del empresariado respecto a las decisiones políticas
- g) Implacable censura de prensa y democracia controlada
- h) Nacionalismo exacerbado, expresado en su frase de campaña: "Toda Rusia es mi Rusia"
- i) Guerra no lineal dentro y fuera de las fronteras

---

munido/trump-se-retira-oficialmente-del-acuerdo-nuclear-con-iran-articulo-754571. Consultado el 30 de marzo de 2019.

<sup>21</sup>BBC-Mundo. 5 preguntas que deja el denunciado ataque con armas químicas en Siria. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39498851>. Consultado el 30 de marzo de 2019.



## CONCLUSIONES

Constitucionalismo y autoritarismo son una tradición y una cultura que los políticos profesionales entienden bien, mas no así los ciudadanos. Esta herencia plantea un verdadero problema político; así por ejemplo, en Rusia el pueblo vive la ilusión de ser restituido como potencia, aun renunciando a sus libertades políticas frente a un gobierno fuerte. A los populismos, de izquierda o de derecha, debe advertírseles que las necesidades materiales son un arma de doble filo; en principio sirven de trampolín para acceder al poder, pero en el mediano plazo resulta muy difícil darles solución, lo que conlleva el desprestigio de la 'revolución'. En realidad, cuando se proscribe el sistema de controles, cuando se des-institucionaliza un país, la consecuencia inevitable es una despolitización que redunde en anarquía.

En el ámbito internacional, con su propia lógica e intereses, intervienen muchos actores capaces de poner condiciones, cada uno con su particular tradición intervencionista. En este juego se es más eficaz si se prescinde de controles constitucionales, puesto que la política se personaliza logrando una identidad entre el gobernante y los intereses del Estado, el cual ha sido el sueño de los tiranos de todos los tiempos. Pero ello implica consecuentemente la renuncia a la condición de ciudadanos en favor de un imaginario orgullo nacionalista.

Paradójicamente, una tradición de controles constitucionales no implica un ejecutivo débil sino necesariamente fortalecido por los otros poderes que le conceden legitimidad. Esta figura da lugar a dos factores políticos; en el ámbito interno, genera las condiciones para el ejercicio de la democracia entendido como participación y como procedimiento (o la "decencia de las formas"); en el ámbito internacional, genera una alianza para la cooperación basado en la confianza y en una identidad política y jurídica común.

Este artículo ha hecho un breve recorrido por la especificidad y la trayectoria del constitucionalismo y del autoritarismo como expresiones de una cultura política determinada. En Rusia se practica una tradición de doble herencia, geopolítica por un lado y totalitaria por el otro; así el régimen de Putin, aunque no se le puede tachar de totalitario, sí ha acaparado el gobierno como un asunto privado promoviendo una falsa grandeza del pueblo ruso. La comparación llevada a cabo puede conducir a un análisis del cambio generacional en uno y otro caso (el nacionalismo de Putin y el de Trump), o a la alternativa entre la defensa de las instituciones y el populismo que las desprecia.

## BIBLIOGRAFÍA

- CARBONELL, M. (2007), *Teoría del neoconstitucionalismo*. Madrid: Trota
- CARBONELL, M. (2010), *El canon neoconstitucional*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia,
- COLLINSON, Stephen. (2018), *El impactante plan para la retirada de Siria es Trump en Estado puro*. [cnnespanol.cnn.com/guerraensiria](https://cnnespanol.cnn.com/guerraensiria), consultado el 20 de diciembre de 2018.
- DIARIO EL ESPECTADOR. (2019) "*Vladimir Putin: a lo único que le teme la mafia rusa*", <https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/vladimir-putin-lo-unico-que-le-teme-la-mafia-rusa-articulo-846340>. Consultado el 30 de marzo de 2019.
- DIARIO EL ESPECTADOR. (2019), *Trump se retira oficialmente del acuerdo nuclear con Irán*. <https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/trump-se-retira-oficialmente-del-acuerdo-nuclear-con-iran-articulo-754571>. Consultado el 30 de marzo de 2019.
- DW-DOCUMENTAL—DEUTSCHE WELLE TV (español), (2019) "*El imperio de Moscú: el retorno de Rusia*",

<http://p.dw.com/p/14KkY>, consultado el 30 de marzo de 2019.

EDWARD. (2004), *La crisis de los veinte años (1919-1939): una introducción al estudio de las relaciones internacionales*. Madrid: La Catarata.

FAZIO, H. (2017). *Rusia, de los zares a Putin (1880-2015)*. Bogotá: Universidad de los Andes.

FERGUSON, N. (2005), *Auge y decadencia del imperio norteamericano*. Barcelona: Debate,

GLENNON, M. (1996), *Diplomacia constitucional*. México: FCE, CARR,

GREENE, Samuel. (2017), *From Boom to Bust: Hardship, Mobilization & Russia's Social Contract*. En: *Daedalus*, Vol. 146, No. 2 (2017), p. 113-127; GREENE, Samuel and Robertson, Graeme. Agreeable Authoritarians: Personality and Politics in Contemporary Russia. En: *Comparative Political Studies*, Vol. 50, No. 13 (2017), pp. 1802-1834; BBC Mundo-Editorial. Factores que convirtieron a Vladimir Putin en el hombre fuerte de Rusia. En: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43384900>, 15 de marzo de 2018.

HERRING, G. (2008) . *From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations Since 1776*. Oxford (UK): Oxford University Press,

HOBSBAWM, E. (1989) *Industria e imperio*. Barcelona: Ariel.

LIBRARY OF CONGRESS (U. S. A.). (2019), *John Bull and Uncle Sam: Four Centuries of British-American Relations*, en <http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/johnbullandunclesam>. Consultado el 30 de marzo de 2019.

MATOS, R. (2017), *Historia mínima de Rusia*. Madrid: Turner.

MCCORMICK, J. (2012) *The Domestic Sources of American Foreign Policy: Insights and Evidence*. New York: Rowman&Littlefield.

MENESES, O. (2013) *Liberalismo y sociedad en el siglo XIX europeo*. Bogotá: Universidad La Gran Colombia.

MERRIDALE, C. (2018), *El tren de Lenin: Los orígenes de la revolución rusa*. Barcelona: Crítica.

MONTEFIORE, S. (2015), *La corte del zar rojo*. Barcelona: Crítica.

POCH-DE-FELIOU, R. (2018), *Entender la Rusia de Putin, de la humillación al restablecimiento*. Madrid: Akal.

TINDALL y SHI. (1995), *Historia de los Estados Unidos*. Bogotá: Tercer Mundo.

VILLE, M. (1998), *Constitutionalism and the Separation of Powers*. Indianapolis: Liberty Fund.

## **BIODATA**

**Carlos Arturo HERNÁNDEZ DÍAZ:** Abogado, (1999) Universidad Libre, Especialista en Derecho Administrativo (2000) Universidad Libre, Especialista en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica (2006) Universidad Libre, Magister en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica (2013) Universidad Libre, C. Doctor Universidad Externado de Colombia. Profesor Asociado a la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Bogotá. Miembro del Grupo de Investigación: Estado Derecho y Territorio COLCIENCIAS. Conferencista Internacional y Director de la Colección Tendencias contemporáneas del Derecho – Universidad Libre, Para académico publicaciones: Robert Alexy y la ponderación en la Corte Constitucional (2017) disponible en <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/11473>, Bogotá, Universidad Libre.

**Luis Eduardo DIAZ CID:** Bachelor of Philosophy and Religious Sciences. Santo Tomás University of Bogotá. 1989, Bachelor of Theology. Javeriana university. Bogotá 1993. Master in Theology Emphasis Bioethics. UPB Medellín. 1999, Master of Biblical Studies. University of Antioquia. Medellín 1999, Master of Theology or Canonical Degree in Theology. UPB Medellín. 1999; PhD in Philosophy. UPB Medellín. 1994 - 2000, Doctorate in Theology. UPB Medellín. 2006 - 2008, Doctor Theology and Biblical Counseling. Santa Monica California USA. 2010. Doctor of Philosophy of Law. Saint Alcuin of York Anglican College. Concepción Chile. 2013. Postdoctor in Management of Higher Education. URBE Maracaibo Venezuela. 2014. Postdoctor in State, Public Policies and Social Peace. URBE Maracaibo Venezuela. 2015. Director of the Research Group "Applied Social Sciences and Law" of the Faculty of Law of the Sinú University. Categorized in A since 2017. Emeritus Researcher for life of Colciencias. 2017

**Orlando MENESES QUINTANA:** Sociólogo (1996) Universidad Nacional de Colombia, Especialización en Derecho Constitucional (2005) Universidad Nacional de Colombia, Maestría en Sociología política (2004) Universidad Nacional de Colombia, Maestría filosofía (2015) Universidad Javeriana. C Doctor en Filosofía Universidad Javeriana publicaciones "El liberalismo de Kant, Kelsen y Rawls a la luz de la configuración de una paz internacional". En: Colombia Reflexión Política ISSN: 0124-0781 ed: Universidad Autónoma De Bucaramanga v.20 fasc.40 p.97 - 106 ,2018, DOI: 10.29375/01240781.3463- "Los derechos fundamentales de la constitución política de 1991 como resultado de un proceso constituyente deliberativos". En: Colombia Revista Derecho del Estado ISSN: 2346-2051 ed: Universidad Externado de Colombia v.N/A fasc.42 p.149 - 180 ,2018, DOI: 10.18601/01229893.n42.06



## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 72-86  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

## The Right to Self-Determination as a Strategy to Dispute the Legal Field

*El derecho a la autodeterminación como estrategia para la disputa en el campo jurídico*

**Edwin RUBIO MEDINA**

<https://orcid.org/0000-0002-2450-7637>

[edwinrubio@ces.uc.pt](mailto:edwinrubio@ces.uc.pt)

Universidad del Sinú "Elías Bechara Sainún", Montería, Colombia

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3907044>

### ABSTRACT

This article proposes several reflections on the development of human rights, in particular the right to self-determination. As a framework of interpretation, I claim that self-determination has had drastic perspectives and it can constitute an important instrument to support the emancipation process promoted by social movements. The methodology developed was grounded on a theoretical, historical and bibliographic analysis, taken into account the main milestones of the legalization of the right to self-determination. In that sense is illustrated the case of the global indigenous movement, which reinterpreted the notion of self-determination through the Bolivian Constitution and the concept of *Sumak Kawsay*

**Keywords:** Human rights, self-determination, legal field, indigenous movement

### RESUMEN

El presente artículo lleva una reflexión crítica-propositiva de los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación. Como marco de interpretación propongo que el derecho a la autodeterminación ha generado diferentes interpretaciones y puede constituirse en un baluarte para los procesos de emancipación social promovidos por distintos movimientos sociales. La metodología desarrollada consistió en un análisis teórico, histórico y bibliográfico de los principales hitos de la legalización internacional a la autodeterminación. En este sentido presento como ejemplo el caso del movimiento indígena global, el cual reinterpretó la noción de autodeterminación a través del concepto de la constitución boliviana *Sumak Kawsay*.

**Palabras clave:** Derechos humanos, autodeterminación, campo legal, movimiento indígena

Recibido: 20-05-2020 • Aceptado: 23-06-2020



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## INTRODUCTION

Human rights may be analysed from different points of view. On the one hand it might represent the preservation of an unfair *status quo* through the law (Rubio:2019)<sup>1</sup>, leading to discouraging the struggle of social movements, for instance, Thusnet, (1984)<sup>2</sup>, identified four criticisms of the role of law as an obstacle for the social emancipation: Instability, the generalization, indeterminacy, and reification. On the other side, some authors believed though human rights speech, it turns out plausible to carry out a deep and global legal movement, which would intertwine with social demands, for example (De Sousa y Rodrigues, 2005), whose use the concept subaltern cosmopolitan legality as a strategy to deploy counter-hegemonic globalization.

To describe this duality, I will retake a sociological (Bourdieu) and anthropological (Moore) approaches. From different points of view, these authors agree on the understanding of law as a disputable territory.

With this scenario, I place the right to self-determination as an example of the dual character of human rights. Focusing on the historic process of the right of self-determination and analysing its theoretical framework, emphasizing the period of African decolonization through the Fanonian theory. Moreover, I will make some reflections on the legal development that it has had and its scope of applicability. To conclude self-determination represents a valuable tool of struggle for the social movement.

## LAW AS A SOCIAL FIELD

In Bourdieu's (1986) <sup>3</sup>the conception of a social field is the site of struggle, of competition for control. (Indeed, the field defines what is to be controlled: it locates the issues about which dispute is socially meaningful, and thus those concerning which a victory is desirable.

Moreover, according to Bourdieu:

The social practices of the law are the product of the functioning of a "field" whose specific logic is determined by two factors: on the one hand, by the specific power relations which give it its structure and which order the competitive struggles (or, more precisely, the conflicts over competence) that occur within it; and on the other hand, by the internal logic of juridical functioning which constantly constrains the range of possible actions and, thereby, limits the realm of specifically juridical solutions"(Bourdieu, 1986)<sup>4</sup>

Additionally, Bourdieu considers social practices of the law are operates within a "field" which is determined by two factors: on the one hand, by the specific power relations which give its structure or more precisely, the conflicts over competency that occur within it; and on the other hand, by the inner logic of legal thought, which constantly constrains the range of possible actions and, thereby, limits the realm of specifically juridical solutions (Boudieu, 1984).

As a consequence, the history of law represents an internal development of its concepts and methods, formalist jurisprudence sees the law as an autonomous and closed system, in doing so, and development can be understood solely in terms of its "internal dynamic." This insistence upon the absolute autonomy of legal thought and action results in the establishment of a specific mode of theoretical thinking, entirely free of any social determination. However, it does not mean that be a rigid and modifiable frame, on the contrary law may make viable and effective, moreover the notion of law depends also on specific cultural, socio-politics contexts.

---

<sup>1</sup> Rubio Medina, E. (2019). Tres teorías sobre el derecho a la autodeterminación. *Diálogos De Saberes*, (50), 119-134. <https://doi.org/10.18041/0124-0021/dialogos.50.2019.5555>

<sup>2</sup> Thusnet, M (1984). An Essay on Rights. Texas L. Wisconsin Law Review. Volume 62, Number 8.

<sup>3</sup> Bourdieu, P (1986). The Force of Law: Toward a sociology of the Juridical Field. *Hastings Law Journal*, 38 (5).

<sup>4</sup> *Ibid.*, p.808

In sum, law, as a social field must be a territory of dispute for power, employing various language, political and juridical levels.

To expand on this point, important results of the work of the anthropologist Sally Falk Moore, who used the notion of law as a “semi-autonomous field”.

This rationalist framework is widely used in the legal profession and appears as one of the keys to modernity in Weber's sociology. Conceptions of law as essentially problem-solving were also embedded in the essays of the well-known legal realist, Karl Llewellyn” (Moore, 2001)<sup>5</sup>.

Although she is conscious that law can be interpreted as domination, Moore posts from the process of decolonization in the sixties, the field's law has been expanded in favour of the oppressed. “This contemporary political activity, there was not much place for an anthropology of law focused on conformity. Agency came into its own. Cases were heard and read in terms of litigants' motives. Law was seen as a representation of social order, but it was understood to be usable in a great variety of ways by people acting in their interest. The strong and powerful could, of course, further their interests more effectively than the weak” (Moore, 2001, 104)<sup>6</sup>.

Moreover, in this essay Moore cites several authors who find in the legal mechanism constants negotiation process, which constitutes an indeterminate legal field. She illustrates this with some examples from an analytic attitude towards normative justice which appeared in Gulliver. This author observed that the Arusha, in colonial Tanganyika often managed their legal disputes, not by going to existing (colonial) Native Courts, but through a system of “informal”, non-official, negotiated settlements. Lineage representatives of the contending parties assembled and bargained solutions on behalf of the principals. Gulliver (1963)<sup>7</sup> concluded that the winners of these negotiated settlements were always the more politically powerful parties.

In conclusion, both author claim that law means a malleable language which contains an inner logic, but also depends on several contexts such as culture, politics, social relation so on and so forth. Thus, it is not the simplistic and classical approach of law as an instrument to maintain a status quo, since utilizing linguistic resistance and negotiations are plausible to reformulate the notion of legal thought. Therefore, in the next part, I will exemplify how self-determination is a good example of this assumption.

## **RIGHT TO SELF-DETERMINATION (DEFINITIONS)**

The concept of self-determination has classically been linked to the idea of self-government at the present day, a rough definition could be given for self-determination as the right of people to decide their political status. Przetacznik 1999<sup>8</sup> One of the first political and social thinkers to refer to the idea of self-determination was Bakunin when in 1866 he stated that society should be re-organized so that 'every individual, every association, every commune, every region, every nation' would have 'the absolute right to self-determination, to associate or not to associate, to ally themselves with whoever wished to live and the form of government that they wished installed Escudero 2017<sup>9</sup>. Moreover, was President Woodrow Wilson who in 1919 and 1920

---

<sup>5</sup> Moore, S. (2001). Certainties have undone: fifty turbulent years of legal anthropology, 1949-1999. The Journal of the Royal Anthropological Institute 7. P 103.

<sup>6</sup> Ibid., p.104.

<sup>7</sup> Gulliver, P (1963) Social Control in an African Society. London: Routledge and Kegan Paul, p.302

<sup>8</sup> Przetacznik, F, A Definition of Peace, 11 Sri Lanka Journal of International Law (1999), p 51.

<sup>9</sup> Escudero J. (2017) Self-Determination and Humanitarian Secession in International Law of a Globalized World. Springer, p10.

enunciated the principles on which the free determination of people should be based. He even used the expression 'self-determination' as a replacement for 'self-government'.

The newer term incorporated the right of a people to choose its form of government in a continuing process that would be synonymous with a democratic type of regime. Wilson's ideas were expressed as an amalgam of the concepts of internal self-determination, universal democracy and guardianship over primitive peoples as they moved towards the ultimate goal of full autonomy. Moreover, Woodrow Wilson went further in his concepts, as he understood democracy to be not merely an ally of the idea of self-determination, but fused with it to form a notion of 'free option of peoples' and 'self-government'. As he saw it, the governments of nations, controlled by the will and the votes of their peoples, were a guarantee of the preservation of peace in the world (Escudero, 2017)<sup>10</sup>.

Additionally, it is important to take into account three essential elements that may be identified as shaping the right to self-determination. First, the owner of this right to self-determination is peoples, groups of individuals having some social cohesion, with a clear identity and their characteristics, and an implicit relationship with a territory. (Raic) 2002. Secondly, the material content extends both to all aspects of political status and the economic, social and cultural system. Regarding its formal content, the right to self-determination is centered on the exercise of the people's sovereignty through democratic governance manifested through channels that imply a free and genuine expression of their will in the internal context and the external dimension (Cassese, 1981)<sup>11</sup>. Thirdly, the legal status of the right to self-determination formed by these elements would also be shaped by a further four aspects which have been gradually identified by legal doctrine. It is a principle applicable to all non-self-governing territories and trust territories, and not merely a policy guiding the behaviour of member states of the UN in their relations with these (Crawford, 1988)<sup>12</sup>.

### **THEORETICAL CONCEPTUALIZATION OF FRANZ FANON**

Fanon was one of the most remarkable thinkers of African decolonization and inspired the struggle of Afro movements in many countries. He created the notion "the non-being zone". In his first book "Black Skin, White masks" published in 1953, Fanon (2008)<sup>13</sup> pointed out that:

*There is a zone of nonbeing, extraordinary sterile and arid region, an incline stripped bare of every essential from which a genuine new departure can emerge.* The author did not intend carried out an ontological approach upon the being. In *The Wretched of the Earth*, he put his argumentation in terms of social inequality of humanity from one particular, historic and material phenomenon called colonization.

Furthermore, "The colonized world is a world divided in two. The dividing line, the border, is represented by the barracks and the police stations. In the colonies, the official legitimate agent, the spokesperson for the colonizer and the regime of oppression, is the police officer or the soldier. In the capitalist societies, education, whether secular or religious, the teaching of moral reflexes handed down from father to son" (Fanon, 2004)<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid., p.11

<sup>11</sup> Cassese A. 1981. *The Self-Determination of Peoples*. In *The International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights*, ed. L. Henkin. New York: Columbia University Press, p 95–113.

<sup>12</sup> Crawford, J (1999) *State Practice and International Law concerning Secession*, Clarendon Press

<sup>13</sup> Fanon F (2008). *Black skin, white masks*. Grover press

<sup>14</sup> Fanon, F (2004). *The Wretched of the Earth*. Translated from the French by Richard Philcox. Grover Press, p 4.

He reinterpreted social division not merely in terms of class, otherwise also in terms of race. In this aspect, the author states that Marxist theory was not enough to understand colonialism.

"In the colonies, the economic infrastructure is also a superstructure. The cause is the effect: you are rich because you are white; you are white because you are rich. This is why Marxist analysis should always be slightly stretched when it comes to addressing the colonial issue" (Fanon, 2004)<sup>15</sup>

Moreover, the author claimed that the world is "compartmentalized", it means inhabited by two different human species. In a petric and machinean structure. For him "the colonial subject learns to remain in his place and not overstep its limits" (Fanon, 2014)<sup>16</sup>. The aforementioned Fanon considered that decolonization would be the most appropriate path to move out of the non-being zone. It results of the encounter between two congenitally antagonistic forces that owe their singularity to the kind of reification secreted and nurtured by the colonial situation (Fanon, 2004.)<sup>17</sup>.

Despite Fanon legitimized violence, He awarded that in the decolonization struggle turns out indispensable the "compromise" with the local bourgeoisie. Following his Marxist education. As well the Fanonian theory appropriated from Marx some topics as reification and ideology, for instance, He characterized how could be the differentiation between one real or false decolonization process:

The intellectual who adopted the abstract, universal, values of the colonizer is prepared to fight so what that colonist and colonized can live in peace in a new world. But he does not see, because precisely colonialism and all modes of thought have seeped into him, is that the colonist is no longer interested in staying on and coexisting once the colonial context has disappeared. It is no coincidence that, even before any negotiation between the Algerian government and the French, the so-called "liberal" european minority has already made its position clear: clamoring for dual citizenship (Fanon, 2004)<sup>18</sup>

In addition, he understood why turn out necessary make up bridges between the non-being zone and being zone, particularly is remarkable as Fanon encouraged the creation of one right for both zones concomitantly. "To dislocate the colonial world does not mean that once the borders have been eliminated there Will be a right of way between the two sectors.

To destroy the colonial world means nothing less than demolishing the colonist's sector, burying it deep within the earth or banishing it from the territory" (Fanon, 2004)<sup>19</sup> Despite all obstacles and unfulfilled promises in the African decolonization process. It was a crucial time to formulate a key to include the right to self-determination within the international human right body, in doing so, this speech worthwhile, for whose inhabitant the non-being zone. In the next part, I explain briefly the origins of the right to self-determination concerning the African decolonization.

## **ORIGINS OF THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION AND AFRICAN DECOLONIZATION**

To expand on this point, I will quote some parts of Samuel Moyn's bibliography, especially his book "The last utopia". The scholar argued that the right to self-determination was a consolation prize for a process of struggle that sought have become more transcendent. He asserted anticolonialism rarely framed their cause in the rights language before 1945. Colonial subject was painfully aware that Western "humanism", had not been kind to them so far (Moyn, 2010)<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> Ibid., p.5

<sup>16</sup> Ibid., p.14

<sup>17</sup> Ibid., p.6

<sup>18</sup> Ibid., p.11

<sup>19</sup> Ibid., p.6

<sup>20</sup> Moyn, S (2010). The last utopia. Harvard University Press, p 87.



Subsequently, Moyn claimed the auto-determination born from American declaration which was not really concerns on the category rights; it had above all been intended to announce postcolonial sovereignty. The author brings out the Ho Chi Minh's speech when he promoted his Vietnamese declaration of Independence. In his own words, Moyn said:

*The utopia that still mattered most was postcolonial, collective liberation from the empire, not individual rights canonized in international law (Moyn, 2010)<sup>21</sup> Thereby he says "when the decolonization resulted in enough new states to matter at the UN, the phrase Human rights itself came to be incorporated in the master principle of collective self-determination". (Moyn, 2010)<sup>22</sup>. Concluding what: The anticolonialism lesson for the history of human rights is not about the growing relevance of the concept across the post-war era. It is about the ideological conditions in which human rights in their contemporary connotations become a plausible doctrine. (Moyn, 2010.<sup>23</sup>*

Paradoxically, the author considers that human rights are the last utopia: "Human rights emerged, apparently out of nowhere, in 1977 as a global movement functioning much as it does today, and then only because the alternative, more political internationalism-pan-africanism, anticolonialism, communism, and marxist humanism among them-had proven unable to transcend nation-state sovereignty to achieve the kind of revolutionary change each had promised" (Terreta, 2013)<sup>24</sup>.

Although, I agree with the critical vision of the author in his historical analysis about the concept of self-determination. However, I retake the category of law as "social field", despite this right emerged how the consequence of a consolation, it has become an important tool for the conquest of social claims. In that sense, Terreta (2013)<sup>25</sup> believes inappropriate undermine the discursive empowerment that human rights have reached after the period of African decolonization.

The human rights movement parted ways with liberation politics to achieve the prominence it eventually did in the global North, where human rights were narrowly redefined as negative protections for individuals, a safeguard against physical pain and trauma.<sup>7</sup> But I date this divergence to the end of the UN trusteeship system circa 1960 and demonstrate that the new sort of human rights movement that swept in muted—but did not fully displace—the revolutionary one that had preceded it". (Terreta, 2013).<sup>26</sup>

## **SELF-DETERMINATION WITHIN HUMAN RIGHTS SPEECH**

The origins of the right to self-determination were carried out by Lenin and Woodrow Wilson who created the conditions for anticolonialism in which international human rights –not yet formulated as an idea, were not nor the goal, with one collective right cherished over others. Also (Raic, 2002)<sup>27</sup> claimed that Wilson was:

Among the first to give the concept a place in international relations and seeking to give substance. Wilson developed the ideas which formed the core of his understanding of self-determination well

---

<sup>21</sup> Ibid., p.85.

<sup>22</sup> Ibid., p.97.

<sup>23</sup> Ibid., p. 87-88.

<sup>24</sup> Terretta, M (2013). From below and to the left. Human Rights and Liberations Politics in Africa's Postcolonial Age. Journal of World History, Volume 24, Number 2, June 13, p 391.

<sup>25</sup> Ibid.,391

<sup>26</sup> Ibid.,391

<sup>27</sup> Raic, David (2002). Statehood and the law of self-determination. Kluwer law international Press.

before his famous 14 points speech of January 8, 1918, he referred to self-government: ethnically identifiable people or nations should have the right to select their democratic government... Although the fourteen points do not mention the concept of self-determination as such, it is generally accepted that six out of the fourteen points implicitly address the concept. Few weeks after his 14 points speech, Wilson Made it explicitly clear that his ideas concerning the peace settlement were based on self-determination (Raic, 2002)<sup>28</sup>.

Furthermore, Lenin already before 1917 developed the theory of Bolshevik "national self-determination", (Raic, 2002)<sup>29</sup>, exclusively mean the right of oppressed nations to political separation; that is secession from alien oppressor bodies and nations and the formation of an independent national State. Likewise (Cobban, 1969)<sup>30</sup>, argued *"the Russian revolution and the Russian Provisional Government's emphasis on self-determination as a base for both peace with the central Government"*. Legal development of the right to self-determination. The United Nations Charter constitutes the first document with legal force to proclaim the principle of the self-determination of peoples, although the formulation adopted saw the principle as something to be aimed at, not a definite obligation (Ryngaert2010)<sup>31</sup>.

The wording used was the result of compromises between colonial powers and those who presented themselves as anti-colonialist. It did manage to ensure the development of friendly relationships and strengthen world peace, but it was far from recognizing a real right to choose one's government. The expression 'self-determination' appears in the UN Charter: in Art.1, concerning the purposes listed in Chap. I 'Purposes and Principles', and in Art. 55 of Chap. IX 'International Economic and Social Co-operation', considered a sort of 'second preamble (Pellet, 1991).<sup>32</sup>

In the first of the appearances it is described as a means to develop friendly relations among nations to strengthen universal peace, whilst in the second there is a listing of the actions that the United Nations (UN) should promote to ensure 'peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples. (Lauwers & Smis, 2000).<sup>33</sup>

In the next section, I will conduct the trajectory of the concept of self-determination in terms of international law, especially how it has been incorporated through international instruments enacted by the United Nations. The aim is to evaluate the evolution of it by means different epochs and framework of interpretation, establishing their achievements and challenges, this background is useful to understand why indigenous people have could resort to this notion.

### Resolution 1514 of the United Nations

The resolution that confirms the right of self-determination on the part of the United Nations may be a good example to highlight, as human rights are a territory of dispute. Law has a particular formalism, but knowing how to address it can imply practical and positive effects for the recognition of social demands. In this case the differentiation between the sentence: "All people shall have the right of self-determination", instead of "all people have the right of self-determination".

---

<sup>28</sup> Ibid., p.177-182

<sup>29</sup> Ibid., p.177.

<sup>30</sup> Cobban, A (1969). The nation-state and national self-determination. London Collins, p 179.

<sup>31</sup> Ryngaert, C. 2010. The ICJ Advisory Opinion on Kosovo's Declaration of Independence: A Mixed Opportunity?: International Court of Justice, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, p 481-494.

<sup>32</sup> Pellet, A. 1991. Chapitre IX: 'Coopération économique et sociale internationale'. Article 55, (a) et (b). In La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, ed. J.P. Cot and A. Pellet, 2nd ed., 841-861. Paris/Brussels: Economica/Bruylant. P 841-861.

<sup>33</sup> Lauwers, G., and S. Smis. 2000. New Dimensions of the Right to Self-determination: A Study of the International Response to the Kosovo Crisis. N & EP6: 43-70

"Although the charter refers to self-determination of "people", and Resolutions 1514 proclaims that "all people" have the right to self-determination analysis of United Nations practice until the mid-1960 reveals that it was mainly the decolonization aspect of self-determination which was developed during that period. In sum, has been referred to as a right to decolonization, was applied to all inhabitants of a colonial territory...

"All people shall have the right of self-determination", the text which was finally agreed upon provides that all people have the right of self-determination. The verb had been changed from the future to the present, to emphasize the fact that the right referred to was a permanent one" (Cassese, 1995)<sup>34</sup> Thus, for instance in 1966 by article 27 ICCPR<sup>35</sup> called "collective individuality" established criteria to recognize the existence of groups that requested the application of the right to internal self-determination as such:

- A group of individual beings who enjoy some or all of the following features
- A historical territorial connection, on which territory the group forms a majority.
- A common history.
- Common ethnic identity or origin.
- A common language.
- A common culture.
- A common religion or ideology.
- The belief of being a distinct person distinguishable from any other person. (Cassese, 1995).

### **The Helsinki and Algier Declaration (expanding self-determination)**

In the legal field although Helsinki (1975) and Algier<sup>36</sup> (1976) Declarations are statements that do not have the legal effects that an international covenant. Both have been remarkable attempts to expand the achievements of the sixties, according to Cassese:

Two documents share the same premise: a people's ability to achieve internal self-determination turns out to the extent to which the individual who comprises that group are free to enjoy their fundamental Human Rights. Both documents seek to strengthen and improve international rules governing self-determination by bolstering individual Human rights (Cassese, 1995)<sup>37</sup>.

Both declarations controverted the western country's principle that claimed "the self-determination must carry out for the whole population of a sovereign country. Additionally, there have been other interpretations after the covenant of 1966. For instance, through some concepts as the right to self-determination as a continuous process and the relationship of this right with the materialization of other human rights.

"Self-determination is not a one-off exercise. It cannot be achieved for any people by one revolution or one election. It is a continuous process. It requires that people be given continuing opportunities to choose their governments and social systems and to change them when they so choose. This, in turn, requires that they should be enabled to exercise other rights to freedom of thought, expression, the right to peaceful assembly and freedom of association". (Cassese, 1995)<sup>38</sup>.

---

<sup>34</sup> Cassese, A. (1995). Self-determination of people. Legal reappraisal. Henkin editor. Cambridge University Press, p 98.

<sup>35</sup> International Covenant on Civil and Political Rights.

<sup>36</sup> Algier Declaration are more radical than Helsinki Declaration since it attempted that the right to self-determination includes the right to secede and right to use force as last resort. Moreover, its statements have generated greater resistance in Western countries.

<sup>37</sup> Op. cit. p.302

<sup>38</sup> Ibid., p. 304

These texts adopted by very diverse groups of states, do not all possess the same legal force, nor do they all bind the same states. However, as stated by Elihu Lauterpacht, the right of peoples may be considered an integral part of positive law and not simply a political principle. (Virally1983).<sup>39</sup>

## **ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES OF THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION**

Self-determination was not born in the context of human rights rather; this idea was initially thought in the context of the interpretations of colonialism through the vision of Lenin and Wilson.

Subsequently, the process of African decolonization generated a new theoretical, political and legal struggle platform. In my view due to the rise of the human rights discourse after the Second World War, the decolonization process was reinterpreted by means law, particularly human rights speech. For example, Terretta asserted that:

African human rights activists working at the grassroots level who had previously advocated self-determination concurrently with calls for human rights protections now prioritized the preservation of political and civil liberties in the postcolonial state. In so doing, they often found themselves in confrontation with the political office holders who had been the ones to wrest self-determination from former colonial rulers. In other words, liberation politics in postcolonial African states shifted, after independence, to mean the protection of political and civil rights—whether collective or individual—from the excesses of the state. In practice, new definitions of human rights emerged differently depending on whether the independent state government claimed to support a human rights agenda (Terretta, 2013)<sup>40</sup>.

Although from Moyn's stance, legalization the right to self-determination just seems "the consolation prize". The truth is that the legal field to be a field of the on-going dispute has generated achievements on the one hand, without ignoring that many other challenges have failed to carry out. As a result, in the legal field, I categorized in two aspects.

### **Achievements**

Since the adoption of the UN, charter self-determination has gradually acquired the status and force of a set of general and legally binding guidelines for the action sovereign states. Legal standards considerably enhance the status of various classes of people: colonial peoples, peoples under foreign military occupation, racial groups living in sovereign countries, the whole population of sovereign States as an example: liberation movements representing peoples entitled to self-determination are no longer passive objects of State's.

Self-determination has also a significant impact on the most traditional segment of international law, namely the acquisition, transfer, and loss of title over territory. It has cast doubt on traditional legal titles such as colonial conquest and acquisition by a cession of sovereignty over overseas territories...Self-determination also prevents States from regarding as *terra nullius* territories inhabited by organized collectivities lacking the hallmarks of State authority. (Cassese, 1995)<sup>41</sup>.

In terms of the use of force, self-determination has had a twofold impact. On the one hand, it has extended the general ban on the force, in that is has brought about the prohibition of the resort to force by states against

---

<sup>39</sup> Virally, M. 1983. Panorama de Droit international Contemporain (Cours général de Droit international public). Recueil des Cours 183: 9–382.

<sup>40</sup> Op. cit. p.398

<sup>41</sup> Op. cit. p.324

racial groups in their territory who are denied equal access to government. On the other hand, self-determination has resulted in the granting to liberation movements of a legal license to use force to react to the forcible denial of self-determination by a colonial state, an occupying power or a state refusing a racial group. (Cassese, 1995)<sup>42</sup>.

## Challenges

The right to self-determination is only bestowed upon the peoples of the States that are parties to the two 1966 UN covenants on Human Rights. Here yet turns out prevalent the principles of sovereignty and the legal applicability of treaties. Self-determination is marred with imperfections (Cassese, 1995). The rule on the external self-determination of colonial people does not include any freedom of choice for ethnic groups living in a colonial country. As well as the wishes of the population concerned must only be ascertained by means plebiscite or referendum. Legal regulation of self-determination is that it is not assisted by a piece of effective enforcement machinery or at least a significant body of measures capable of implementing the right (Cassese, 1995)<sup>43</sup>.

## THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION ADOPTED BY INDIGENOUS SOCIAL MOVEMENT

In this section, I will highlight how indigenous people reinterpreted the right to self-determination, first, it is necessary to identify who is indigenous in terms of international law, and second, I explain briefly the relevance of ILO Convention No. 169, which have been the instrument used by indigenous people movement to defence their priorities by means self-determination. Finally, I take into account a particular example through the Bolivian Constitution, intending to illustrate precisely how indigenous movement has incorporated their cosmovision, readdress the classical purpose of self-determination.

## Who are consider indigenous?

According to (Thornberry 2000)<sup>44</sup> there are several characteristics to identify who would be considered indigenous recognized by international law. "Distinctiveness, in the sense of being different and wanting to be different. This aspect of being indigenous is closely related to the importance given to the group's self-identification as indigenous. 'Dispossession of lands, territories, and resources, through colonization or other comparable events in the past, causing today a denial of human rights or other forms of injustice.'<sup>45</sup>Lands (located in a specific geographic area) as a central element in the history, identity, and culture of the group, usually giving rise to traditional economic activities that depend on the natural resources specific to the area in question.

A third starting-point in the quest for a definition is ILO Convention No. 169 which includes in the article 1 a complex provision on the scope of application of the convention:

This Convention applies to: (a) Tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their customs or traditions or by special laws or regulations; (b) Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which

---

<sup>42</sup> Ibid., p. 325

<sup>43</sup> Ibid., p. 332

<sup>44</sup> Thornberry P, (2000) 'Self-Determination and Indigenous Peoples: Objections and Responses', in P. Aikio and M. Scheinin (eds.) Operationalizing the Right of Indigenous Peoples to Self-Determination (Turlen: Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, pp. 39-64

<sup>45</sup> UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add. United Nations Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (1994).

inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present State boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions. Self-identification as indigenous or tribal shall be regarded as a fundamental criterion for determining the groups to which the provisions of this Convention apply. The use of the term 'peoples' in this Convention shall not be construed as having any implications as regards the rights which may attach to the term under international law.

To the question of the right of self-determination. Having earlier referred to ILO Convention No. 169, it needs to be clarified that the fact that this convention does not include a clause on the right of self-determination does not mean that indigenous peoples would never qualify as beneficiaries of that right. Article 1, paragraph 3, of ILO Convention No. 169 should be taken as meaning what it says, namely that the use of the term 'peoples' in that Convention does not have 'any implications' as regards the rights which may attach to the term 'peoples' under public international law. Just as the reference to 'peoples' in the ILO Convention does not have positive implications in respect of turning into people groups that otherwise would fall short of the distinctiveness required under international law, the same reference does not have the negative implication of denying the status of a people to a group that irrespective of the ILO Convention qualifies as a people under public international law (Ghanea N. & Xanthaki A, 2004)<sup>46</sup>.

However, not necessarily all indigenous movements in Latin American have defended their claims utilizing this legislation, for instance (Tomaselli, 2016)<sup>47</sup>. who affirms there are three macro-categories of Autonomous or self-determined indigenous territories recognized by their states: a). Indigenous autonomy arrangements that have been legally established as a result of conflict resolutions (Chittagong Hill Tracks in Bangladesh; Papua and Aceh in Indonesia; the Atlantic Coast in Nicaragua etc.). b). Self -government arrangements derived from high-level debates followed by incisive constitutional or domestic law reforms (the Indigenous Peasant Native Autonomies in Bolivia; the *circumscriptions* in Ecuador; the indigenous autonomies of Mexico, the reformed autonomy of Greenland from Denmark, etc.) and .c). Arrangements developed into new legal autonomy understanding by constitutional or other amendments of domestic laws (the *resguardos* systems in Colombia).

In conclusion, this part has demonstrated the first proposal, the law can be readdressed from different perspectives which had not planned previously, such as ILO legislation in favour of the recognition of the indigenous people as the rights holder of self-determination. Now, I will point out the Bolivian case background to demonstrate how they have adopted their vision of the right to self-determination.

## **THE BOLIVIAN CONSTITUTION OF 2009**

One of the most important backgrounds of this Constitution was developed by Mst (*Movimiento Socialista de Los Trabajadores* in Spanish) they take parts of the ayllu<sup>48</sup> model and adapts them to structure their political organization at the community, regional, and national levels. Fabricant (2012).<sup>49</sup>

The Bolivian constitution in my view is the most important social lab in terms of Latin American constitutionalism and the one that most directly challenges capitalism, and the liberal vision of legal pluralism.

---

<sup>46</sup> Ghanea N. & Xanthaki A (2004). Minorities, people and self-determination. Brill academic publishers.

<sup>47</sup> Tomaselli, A. (2016). Exploring indigenous self-government and forms of autonomy. En E. b. Short, In Handbook of Indigenous People's Rights

<sup>48</sup> The traditional form of a community in the Andes, especially among Quechuas and Aymaras. They are an indigenous local government model across the Andes region of South America, particularly in Bolivia and Perú.

<sup>49</sup> Fabricant, N. (2012). Mobilizing Bolivia's displaced. Indigenous politics & struggles over land. The University of North Carolina Press chapel hill, p 79.

According to (Manuel, 2015)<sup>50</sup> the first article of the constitution should be understanding beyond the classic state structure and normative of the political charter.

This article of the Bolivian Constitution establishes that: "Bolivia is constituted as a Social Unitary State of Plurinational Community Law [...] Bolivia is based on plurality and political, economic, legal, cultural and linguistic pluralism, within the integrating process from the country".

The configuration "Social Unitary State of Plurinational Community Law" (without commas), reflects the constitutional, social and political transition of the Bolivian State. In simple words, this transition, in our opinion, seeks the "overturn" of the old to the new, of the alien to the own; of a Social Rule of Law anchored in the Republican "Nation-State", towards a Plurinational Community State, founded on the plurality and pluralism of nations and peoples (Manuel, 2015)<sup>51</sup>.

Moreover, the African-self-determination is overpassed from this perspective, since it was focusing on the relationship between a colonizing and a colonized precept. In the Bolivian case, the concept of plural nations is located in the contours of the nation-state. But also, it turns away from the classic notion of self-determination by Locke, because the concept of the property-owning citizen and individual rights has no bearing. Here too appear different actors: Indigenous, community, *Pachamama* and the rights of Mother Nature.

As well as this, there is a plurinational representation. I refer to Pacari (1984)<sup>52</sup>, who says that "the solution for the colonial situation would be the *transformation of the current power of the Uninational ... State toward a plurinational state*". This truly multinational and pluricultural state in which each nationality has the right to self-determination and the free choice of social, political and cultural alternatives".

Additionally, the concept of self-determination is fully recognized within the principles of the Bolivian constitution. "*Plurinationality as the succinct expression of the diversity of Bolivian reality; founded on four fundamental bases: a) The "self-determination of peoples", b) "Plurality" and "pluralism", c) "Decolonization" and d) Thus, Self-determination of indigenous peoples is exercised through harmony with nature and respect for community values from a holistic way. For example, "the notion of Sumak Kawsay aims to restore collective life in all its dimensions, as an alternative reaction to the dominant development model"*". (Macías)2011<sup>53</sup> Likewise, Houtart asserts that: "

Sumak Kawsay is a new word for integral development, inspired by the tradition and the discourse of the indigenous peoples, and that wants to propose, with an original contribution, a change of paradigm in front of the capitalist conception of the development. Similar intellectual efforts exist in African and Asian societies, and it is the set of all these initiatives that will help to specify the objectives of the various social movements and political organizations that fight for a change of society" (Houtart, 2011)<sup>54</sup>.

Likewise, *Sumak Kawsay* is grounded in some values which are intrinsically connected: *Pakta kausay*, (Balance): Through communal work, individual and collective equilibrium is achieved, *Alli kausay* (harmony): the balance allows sustaining the collective and individual harmony, *runakay* (know-how be) is the sum of all

<sup>50</sup> Manuel, C. (2015). "Lo plurinacional" como reto histórico avances y retrocesos desde la experiencia boliviana. En: *Constitucionalismo, descolonización y pluralismo jurídico en América latina*. Translated by me. "Lo plurinacional" como reto histórico avances y retrocesos desde la experiencia boliviana. En: *Constitucionalismo, descolonización y Ed. Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispat NEPE - Universidad Federal de S.*

<sup>51</sup> Ibid., p.243.

<sup>52</sup> Pacari, N. (1984). *Las Culturas Nacionales en el Estado multinacional ecuatoriano*. Revista del banco central de Ecuador. N 6, 113-123.

<sup>53</sup> Macías, L. (2011). *Sumak Kawsay. La Vida en plenitud*. América Latina en Movimiento. Editorial Época, Volumen II. Editorial Época, Volumen II. P.452

<sup>54</sup> Op. cit. p.16

the elements noted above. Runa means the person, the human; the *runakay* synthesizes the realization of the human being, to achieve this dimension it is essential to learn to gradually comply, each one of the values described above.

As a consequence, the notion of self-determination implemented in the Bolivian constitution has other parameters that are born in their cultural practices, without the classic division between "man" and "nature". Thereby, Indigenous intend to preserve their culture and cosmogony as a political act.

## CONCLUSIONS

The article illustrates how different actors have formulated theories from a different episteme to defend certain interests through the law, since I believe that, taking up Bourdieu and Merry, the law is an indeterminate social field and disputed territory. In this concrete case, the concept of self-determination was addressed utilizing other paths. It works to point out as the right to self-determination has been used at the international level, through the United Nations Declaration on Indigenous People (2007) for example. Moreover, the Latin American indigenous movement uses the law as a strategy to achieve self-determination, its claim arises from an ancestral right that is outside the western logic of the nation, sovereignty and civil society. This right is exercised concomitantly with another right, such as the right to ancestral territories.

## BIBLIOGRAPHY

BOURDIEU, P (1986). The Force of Law: Toward a sociology of the Juridical Field. Hastings Law. Journal, 38 (5).

MANUEL, C (2015). "*Lo plurinacional*" como reto histórico avances y retrocesos desde la experiencia boliviana. En: *Constitucionalismo, descolonización y pluralismo jurídico en América latina. Translated by me.* "Lo plurinacional" como reto histórico avances y retrocesos desde la experiencia boliviana. En: *Constitucionalismo, descolonización y* Ed. Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispas NEPE - Universidad Federal de S.

CASSESE, A (1995). Self-determination of people. Legal reappraisal. Henkin editor. Cambridge University Press.

CASTRO GÓMEZ S (2005). *La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Universidad Javeriana.

COBBAN, A (1969). The nation-state and national self-determination. London Collins.

CRAWFORD, J (1999) State Practice and International Law in Relation to Secession, Clarendon Press.

DE SOUSA B (2007). Beyond Abyssal Thinking: From global lines to an ecology of knowledge. Sep. de: Review, 30(1), Binghamton: Fernand Braudel Centre.

ESCUADERO J. (2017) Self-Determination and Humanitarian Secession in International Law of a Globalized World. Springer.



- FABRICANT, N. (2012). *Mobilizing Bolivia's displaced. Indigenous politics & struggles over land*. The University of North Carolina Press chapel hill.
- FANON F (2008). *Black skin, white masks*. Grover press.
- FANON, F (2004). *The Wretched of the Earth*. Translated from the French by Richard Philcox. Grover press.
- GHANEAN N. & XANTHAKI A (2004). *Minorities, people and self-determination*. Brill academic publishers.
- GULLIVER, P (1963) *Social Control in an African Society*. London: Routledge and Kegan Paul.
- HOUTART, F. (2011). *El concepto de Sumak Kawsay (Buen Vivir) y su Correspondencia con el bien común de la humanidad. América Latina en Movimiento translated by me*.
- LAUWERS, G., and S. SMIS. (2000). New Dimensions of the Right to Self-determination: A Study of the International Response to the Kosovo Crisis. N & EP6: 43–70.
- MACÍAS, L. (2011). *Sumak Kawsay. La vida en plenitud. América Latina en Movimiento. Editorial Época, Volumen II*. Editorial Época, Volumen II.
- MOORE, S. (2001). Certainties have undone: fifty turbulent years of legal anthropology, 1949-1999. *The Journal of the Royal Anthropological Institute* 7.
- MOYN, S (2010). *The last utopia*. Harvard University Press.
- PACARI, N. (1984). Las culturas nacionales en el estado multinacional ecuatoriano. *Revista del banco central de Ecuador*. N 6, 113-123.
- PELLET, A. (1991). Chapitre IX: 'Coopération économique et sociale internationale'. Article 55, alinéas (a) et (b). In *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, ed. J.P. Cot and A. Pellet, 2nd ed., 841–861. Paris/Brussels: Economica/Bruylant.
- PRZETACZNIK, F, A (1999). Definition of Peace, 11 *Sri Lanka Journal of International Law*
- RAIC, David (2002). *Statehood and the law of self-determination*. Kluwer law international Press.
- RUBIO MEDINA, E. (2019). Tres teorías sobre el derecho a la autodeterminación. *Diálogos De Saberes*, (50), 119-134. <https://doi.org/10.18041/0124-0021/dialogos.50.2019.5555>
- RYNGAERT, C. (2010). The ICJ Advisory Opinion on Kosovo's Declaration of Independence: A Mixed Opportunity?: International Court of Justice, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion of 22 July 2010. NILR 57: 481–494.
- TERRETTA, M (2013). From below and to the left. Human Rights and Liberations Politics in Africa's Postcolonial Age. *Journal of World History*, Volume 24, Number 2, June 13.
- THE SELF-DETERMINATION OF PEOPLES (1981.). In *The International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights*, ed. L. Henkin, 95–113. New York: Columbia University Press.
- THORNBERRY P, (2000) 'Self-Determination and Indigenous Peoples: Objections and Responses', in P.

Aikio and M. Scheinin (eds.) *Operationalizing the Right of Indigenous Peoples to Self-Determination* (Turlen: Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, pp. 39-64

THUSNET, M (1984). *An Essay on Rights*. Texas L. Wisconsin Law Review. *Volume 62, Number 8*.

TOMASELLI, A. (2016). Exploring indigenous self-government and forms of autonomy. En E. b. Short, *In Handbook of Indigenous People's Rights*.

VIRALLY, M. (1983). Panorama de droit international contemporain (Cours général de droit international public). *Recueil des cours* 183: 9–382.

## **BIODATA**

**Edwin RUBIO MEDINA:** Abogado y consultor de pueblos indígenas, docente-investigador Universidad del Sinú. Magister en Derechos Humanos y Democratización Universidad Externado-Carlos III de Madrid (España). Candidato a doctor en Human Rights in Contemporary Societies. Universidad de Coímbra-Centro de Estudios Sociales (Portugal). Sus publicaciones versan sobre: Teoría jurídica, Derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano, derechos de los pueblos indígenas de Colombia y Sociología jurídica comparada. Sus áreas de interés son: Antropología jurídica, filosofía del derecho, sociología jurídica, Derechos Humanos, Derecho Constitucional, pensamiento decolonial y estudios culturales.



## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 87-95  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

# Planificación educativa como herramienta fundamental para una educación con calidad

*Educational Planning as a Fundamental Tool for Quality Education*

**Cindy CARRIAZO DIAZ**

<https://orcid.org/0000-0003-3822-6462>

[cindycarriazo@unisinu.edu.co](mailto:cindycarriazo@unisinu.edu.co)

Universidad del Sinú "Elías Bechara Zainum", Colombia

**Maura PEREZ REYES**

<https://orcid.org/0000-0003-2815-272X>

[mauraperez@unisinu.edu.co](mailto:mauraperez@unisinu.edu.co)

Universidad del Sinú "Elías Bechara Zainum", Colombia

**Kathelyn GAVIRIA BUSTAMANTE**

<https://orcid.org/0000-0002-2116-4907>

[kathelyngaviria@unisinu.edu.co](mailto:kathelyngaviria@unisinu.edu.co)

Universidad del Sinú "Elías Bechara Zainum", Colombia

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3907048>

### RESUMEN

La planificación educativa permite la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje basado en el Sistema Educativo Nacional, con el objetivo de describir la función de la planificación educativa como herramienta fundamental para construir una educación con calidad. Se realizó una revisión documental de 15 artículos como base de datos, concluyendo que La política de mejoramiento impulsada por el MEN basada en la consolidación de un sistema de aseguramiento de la calidad, busca que la población tenga mejores oportunidades educativas, desarrollando competencias básicas y ciudadanas, consolidando la descentralización y autonomía institucional mediante el fortalecimiento de la gestión de los establecimientos educativos.

**Palabras clave:** Planeación, administración, educación, Calidad educativa, práctica educativa.

### ABSTRACT

Educational Planning allows the effectiveness of the teaching-learning process based on the National Educational System, which its objective is to describe the role of educational planning as a fundamental tool to build quality education. The review was documentary using 15 articles as database, concluding that the improvement policy promoted by the MEN based on the consolidation of a quality assurance system seeks that the population has better educational opportunities, developing basic skills and citizenship, consolidating decentralization and institutional autonomy by strengthening the management of educational establishments.

**Keywords:** Planning, administration, education, educational quality, educational practice.

Recibido: 20-05-2020 • Aceptado: 28-06-2020



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## INTRODUCCIÓN

Las nuevas dinámicas sociales y la tendencia hacia la descentralización de los sistemas educativos, genera que los docentes directivos asuman nuevos roles, tengan la capacidad para actuar de manera autónoma y tomar decisiones que le permitan acceder al mundo globalizado de la educación y de la sociedad en general. Todo ello, hace que los actores del ámbito educativo gestionen procesos adecuados y coherentes con la movilidad social que acontece en la comunidad, quiere decir que se debe asumir responsabilidad para obtener resultados exitosos e innovadores y generar las suficientes capacidades para proyectar, diseñar, analizar y evaluar políticas como proyectos pertinentes al contexto actual. En este marco de ideas, los procesos de gestión de los sistemas de educación demandan no solo la necesidad de un docente directivo o un gestor de la educación, sino también factores como la planeación, equidad, calidad, manejo de recursos, participación de la comunidad y rendición de cuentas ante esta; todo ello, para generar resultados óptimos y la prestación de mejores servicios.

La planificación puede partir de un problema dado o simplemente de la previsión de necesidades y soluciones de la institución. Generalmente la planeación considera que hacer, como hacer, para que, con que, quien y cuando se debe hacer algo.

Hay quienes afirman que de esta función dependen todas las demás funciones administrativas, puesto que el administrador dirige, organiza, evalúa y controla todo aquello que se encuentra comprendido en la planeación con un fin determinado.

Planear es elegir alternativa. El proceso administrativo es complejo y repleto de incertidumbres, problemas de tipo económico, dificultades a nivel humano, factores intangibles, etc. Debido a esto las alteraciones de acción son numerosas, cada plan exige la adopción de objetivos y la elección de formas razonables para su logro. Planear es decidir por adelantado lo que se debe hacer.

Educar sin planificar, es como construir una casa sin plano o escribir una novela sin borrador. El arte de educar requiere esfuerzo, análisis racional, pensamiento crítico y creatividad. La planificación en la Educación es una clave para asegurar el éxito y la calidad de las acciones.

Se entiende por planeación educativa la previa selección y organización de todas las actividades curriculares de la institución, en función de objetivos y con base en los recursos humanos, económicos y materiales, el interés y las necesidades de la comunidad educativa, el tiempo disponible y la correlación de fallas de años anteriores.

En este sentido la planeación es un instrumento, no un objetivo, ni un fin en sí mismo. Es un instrumento de trabajo que facilita la organización, la ejecución y el control de la tarea administrativa por lo que consecuentemente debe estar en función de los objetivos y recursos para una mejor realización.

Para que la planeación pueda considerarse como integral debe realizarse sobre todos los aspectos, que en una u otra forma participan en las actividades a desarrollar.

Es por ello, por lo que en el presente trabajo se muestra una revisión documental de la planeación educativa en el contexto, que comprende la búsqueda, revisión de documentación y la interpretación de la información encontrada.

La Planeación Educativa se encarga de delimitar los fines, objetivos y metas de la educación. Este tipo de planeación permite definir qué hacer, como hacerlo y qué recursos y estrategias se emplean en la consecución de tal fin. La Planificación permite prever los elementos necesarios e indispensables en el quehacer educativo.

Es importante señalar que la planificación educativa constituye una herramienta necesaria en el accionar docente, dado que permite establecer los objetivos que se desean alcanzar en cada una de las actividades propuestas en el aula de clase, el resultado final lo constituye el desarrollo integral y una eficiente difusión del aprendizaje por parte de nuestros discentes, lo que le permitirá enfrentarse a los retos que el mundo actual requiere. Toda situación de enseñanza la condiciona la inmediatez y la imprevisibilidad, por lo que la planificación permite reducir el nivel de incertidumbre y anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la clase, llevando a la rigurosidad y a la coherencia en la tarea pedagógica en el marco de un programa.

La planificación estratégica en la educación consiste en un plan el cual sistematiza los objetivos a mediano plazo de una institución educativa. En este plan se diseñan y muestran las estrategias y caminos

previstos para el cumplimiento de objetivos y describe detalladamente los sistemas de evaluación correspondientes. La planificación estratégica representa una herramienta de gestión muy eficaz y útil para trabajar con perspectiva de futuro. Para la planificación estratégica es fundamental una reflexión previa y un grado de acuerdo y consenso considerable entre los miembros de la comunidad educativa sobre los planteamientos institucionales del centro. Acordar qué valores rigen la escuela, cuál es su principal razón de ser y hacia dónde quiere caminar es un paso importantísimo hacia la creación de un plan eficaz, pragmático y ejecutable. Hay que establecer qué queremos hacer y cómo hacerlo. Es el momento de dibujar el mapa estratégico, donde se establecen los objetivos principales del plan y las estrategias y recursos que destinaremos para conseguirlos.

Es importante establecer una adecuada planificación estratégica para poder brindar una educación eficiente y eficaz, donde el estudiante se sienta a gusto de aprender y colocar en práctica lo aprendido. No es un proceso fácil de alcanzar, pero paso a paso se pueden obtener buenos resultados.

La planeación en el contexto educativo implica las dimensiones de la alocución pedagógica en los cuales participan los actores educativos. La planeación orienta la academia y la administración de la escuela, conllevando una serie de procesos y estrategias que hacen que se desarrolle el acto educativo de manera eficiente y con calidad para la prestación de dicho servicio educativo.

Es así como la planeación en el contexto educativo ayuda al proceso administrativo de las escuelas a distribuir de manera equitativa los recursos y materiales para el funcionamiento correcto de dichas instituciones.

Para el proceso de planificación educativa se tiene en cuenta las dimensiones política, jurídica, administrativa y humana ya que el contexto educativo está conformado por estas dimensiones, que pueden ser sistemas complejos pero que tiene un fin y es hacer efectivo y eficaz el derecho a la educación. Para el ministerio de Educación Nacional, la educación de calidad es aquella que permite la formación de ciudadanos integrales con una alta formación en valores, con respeto hacia el bien ajeno y en procura de principios sociales como la convivencia y la paz. Afirma que una educación de calidad es aquella que genera grandes oportunidades de progreso para la sociedad en sí misma y por ende para todo el país.

La planeación educativa debe centrar sus mayores esfuerzos en la formación integral de sus educandos, que bien se refleja en la misión de cada institución, en ocasiones los entes directivos de estas instituciones dejan de lado esta formación integral y por cumplir con estándares nacionales e internacionales de calidad creen que la formación se debe centrar sólo en el plano del conocimiento, olvidando el ser, que en consecuencia será lo que permita la formación de personas ecuanímes, solidarias y felices que aporten sus conocimientos para construir una sociedad más justa y equitativa.

La planificación educativa requiere de la calidad de la educación, sistemas de gestión de calidad y evaluación, siendo estas desarrolladas a partir de la planeación educativa, cabe resaltar entonces el papel fundamental que juegan los procesos de calidad desde la parte administrativa a través de normas y/o estándares, y a través del aula donde el docente transmite el conocimiento a sus estudiantes, lo anterior no se puede deslindar del sistema de gestión de calidad que le permite a la institución educativa estar activa, dinámica, incluyente y funcional a toda la comunidad mediante procesos de mejora continua. La calidad requiere de la evaluación para mejorar dichos procesos y gestionar las nuevas intervenciones. Por tal razón para alcanzar niveles óptimos en los estándares de calidad se hace necesario un buen proceso de planeación educativa que incluya ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? y ¿Con que recursos?

Para la planificación institucional de los espacios educativos se debe tener en cuenta los nuevos entornos del proceso enseñanza- aprendizaje y la dinámica social por lo que se debe incluir en estos espacios la interacción didáctica, tener claro y definidos los roles del docente y del estudiante, tomando en cuenta el perfil de la competencia a desarrollar en el mismo. La planeación institucional de espacios educativos basados en competencias tiene como fin brindar al estudiante el escenario idóneo para el desarrollo de sus competencias y así dar solución a situaciones problemas.

La importancia de la planificación curricular radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera.

De allí la importancia de la determinación de los contenidos conceptuales, procedimentales y de actitudes que se abordarán, en qué cantidad y con qué profundidad. De igual manera es importante conocer y saber la finalidad de lo que estamos haciendo, ya que para los estudiantes resulta fundamental reconocer algún tipo de motivación o estímulo frente al nuevo aprendizaje.

Finalmente, debe considerarse cuál es la forma más adecuada para trabajar con los estudiantes, pensando en actividades que podrían convertir el conocimiento en algo cercano e interesante para un grupo, dentro de un determinado contexto.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario que los docentes realicen una adecuada planificación de sus currículos por competencias, considerando los siguientes pasos, que fueron descritos por Sileny Méndez M. y Luis J. Gómez B, en su artículo "la planificación curricular en el aula. Un modelo de enseñanza por competencias"<sup>1</sup>

**1. Fase diagnóstica:** Es la evaluación de entrada al inicio del año escolar de la planificación curricular con todos los actores del proyecto dentro de la escuela, de manera que garantice el logro de las competencias propuestas.

**2. Fase de propósito de la planificación curricular:** Este momento consistirá en dar una visión global y específica de la acción educativa; proporcionar continuidad e interdisciplinariedad entre los contenidos, asignaturas y el pensum de acuerdo con el texto sociocultural del estudiante, considerando las experiencias anteriores en cuanto a planificaciones, revisión de informes de pasantías, perfil del egresado y utilización de los recursos adecuados para el logro de las competencias.

**3. Fase Selección de estrategias metodológicas:** Comprenden métodos, técnicas y recursos, existen diversos criterios que permiten seleccionar las estrategias más adecuadas ante determinada situación de aprendizaje. Cabe mencionar que el docente debe tomar en cuenta el dominio al que se refiere la competencia (cognoscitivo, afectivo y psicomotor), para entonces determinar la metodología, la técnica y los recursos a utilizar, tomando en consideración las fases de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias están enmarcadas en el constructivismo, la teoría de las inteligencias múltiples, los aportes de las neurociencias y la programación neurolingüística.

**4. Fase de herramientas para la elaboración de una planificación curricular en el aula por competencias:** En estas actividades se integran la acción del saber, hacer, ser y convivir, con los elementos de las competencias (conceptuales, procedimentales y actitudinales).

**5. Fase de evaluación de la planificación:** La evaluación de la planificación es un instrumento que permite medir el avance académico según la estructura y cumplimiento de cada plan de clase. A través de la aplicación de algunos formatos, la evaluación se realizará tomando en cuenta las instrucciones siguientes: Los elementos de la competencia deberán estar redactados con el verbo en presente para diferenciarlo de los objetivos, los bloques de contenido deberán llevar secuencia lógica, las subcompetencias o actividades deberán estar redactadas en orden de complejidad y las estrategias metodológicas deberán contener las cinco fases de planificación ya propuestas.

La realización de la planeación curricular debe tener en cuenta los grupos con que se trabajará, su entorno, dando relevancia a las posibilidades del centro educativo y a los recursos digitales que posibiliten la integración de todos en el diseño de las actividades, a los valores y ejes transversales y a los diversos actores relacionados, que pueden ayudar a la profundidad en la calidad del aprendizaje, basados en la innovación y en una visión global de la realidad educativa.

No se debe olvidar dentro de la planeación educativa las estrategias didácticas de planeación para el desarrollo del currículo dentro del aula de clase, de manera que el estudiante no solo aprenda el concepto

---

<sup>1</sup> Melendez, S., & Gómez, L. J. (2008). La planificación curricular en el aula. Un modelo de enseñanza por competencias. *Laurus*, 14(26), 367-392.

de un determinado conocimiento sino cuándo y por qué debe utilizarlo en la resolución de situaciones problemáticas. Las diversas competencias: La conceptual, procedimental, actitudinal deben estar inmersas en las bases teóricas impartidas a los estudiantes para que este pueda aplicarlo desde su propia praxis, sin olvidar que el actuar del docente debe obedecer a procesos de planeación antes, durante y después del desarrollo de las clases. No se puede olvidar que la acción del docente se ve afectada por factores administrativos, políticos, sociales y/o culturales que en ocasiones obligan a improvisar al docente en el aula de clases, por tal motivo el proceso de planificación educativa tiene que abarcar todos los niveles de la organización, para llevar a cabo el proceso enseñanza – aprendizaje de una manera eficiente y eficaz que permita lograr una educación de calidad apuntando a un sistema de calidad educativa.

Es indispensable resaltar la importancia de la planeación como función necesaria dentro del proceso de gestión educativa, dentro de dicha planificación es importante la acción docente dentro del proceso de enseñanza -aprendizaje y evaluación, que lleva de forma inexorable a mantener estándares de calidad dentro del quehacer educativo, esta requiere la generación de ideas y funciones cognitivas que orienten una mejor práctica docente, en relación a la planeación de estrategias de enseñanza que lleven a mejorar las operaciones mentales superiores de cada uno de los estudiantes.

Se resalta a Quesada (2005), quién afirma que los conceptos se adquieren cuando se reestructura el pensamiento para aplicarlo a condiciones específicas contextuales. Lo que lleva a la conformación de ideas que entran en concordancia con las funciones de la vida escolar, dando lugar, como lo refieren los autores a representaciones mentales.<sup>2</sup>

El proceso de planeación docente permite que se sea más fácil generar toda una estructuración y/o esquematización del contenido a desarrollar y la metodología en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del que se ha tratado.

Paul Thagard (2008) en su libro *la mente*, introducción a las ciencias cognitivas, donde acota que el objetivo principal de la ciencia cognitiva es encontrar las explicaciones de cómo se realizan esas formas de pensamiento. Esta disciplina científica no se limita a describir los distintos tipos de estrategias de aprendizaje y de resolución de problemas, sino que ofrece una explicación acerca de cómo realiza la mente esas operaciones.<sup>3</sup>

Además, da cuenta de los casos en los que la mente no funciona con la eficacia deseada; por ejemplo, cuando se toman decisiones equivocadas. Basados en eso el docente entonces tiene la tarea dentro del aula de clase de generar espacios que permitan el desarrollo de estas habilidades del pensamiento en sus estudiantes, todo a través de una excelente planeación curricular.

La calidad en las instituciones de educación superior resulta ser una problemática actual de todos países, la calidad es entendida como el esfuerzo mancomunado de todos sus actores con el único objetivo de cumplir en forma oportuna y responsable con las exigencias trazadas por los entes superiores, en este caso del sistema nacional de acreditación.

La corriente institucionalista de Coase (1996), la cual afirma que las instituciones son constructos ideados por los individuos para dar forma a la interacción humana. Comprenden las reglas, las costumbres, los incentivos, los desincentivos y los mecanismos de cumplimiento.<sup>4</sup>

El objetivo es demostrar como todo lo que se desarrolle bajo la sombrilla del marco institucional puede influir de forma positiva o negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, rasgo que es determinante para establecer criterios de calidad dentro de la institución. Se comparte la opinión de que uno de los mecanismos

---

<sup>2</sup>Alarcón Quesada, D., Cortés Menara, A., & Rodríguez Quesada, V. (2006). Competencias cognitivas, evaluación constructivista y educación inicial.

<sup>3</sup>Thagard, P. (2008). *La mente. Introducción a las ciencias cognitivas* (Vol. 3021). Katz Editores

<sup>4</sup>Coase, R. (1996). La naturaleza de la empresa (1937). En O. E. Williamson y S. G. Winter, *La naturaleza de la empresa: orígenes, evolución y desarrollo*. (pp. 29-48). México: FCE.

más eficaces para mantener y elevar los niveles de calidad de las instituciones de educación superior es la formación integral, la formación en valores, que al final del día es lo único que va a permitir el buen desempeño del profesional en la sociedad, sólo formando grandes seres humanos vamos a construir una sociedad diferente. Le corresponde entonces al personal administrativo de las instituciones generar espacios y mecanismos que incentiven y creen en el docente el perfil necesario para trabajar en el proceso educativo y mantener un buen clima organizacional que impulse diariamente el proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos.

Haciendo mención al uso de las tendencias educativas y al gran auge que estas tienen en la educación actual, resaltamos el artículo **"posibilidades del uso educativo de youtube"** donde se puede evidenciar el gran abanico de posibilidades que tiene ésta como herramienta tecnológica, donde a través de ella podemos mejorar y hacer más dinámica el desarrollo de las clases, buscando la adquisición de nuevas competencias en materia de educación, esto permitirá entonces gestionar y poner en marcha las denominadas universidades virtuales, a través de las cuales se reduce la brecha entre los estudiantes de diversas partes del mundo y a su vez podrán hacer intercambio de conocimientos con estudiantes de otras universidades. Tal como lo demostró el artículo, esta herramienta es de gran utilidad para el desarrollo del currículo dado que permite transformar las estrategias de aprendizaje dentro del aula de una forma interactiva.

Los autores citan una parte del artículo: "La Comunicación mediada por Computadora (CMC) ha sido definida por diferentes autores (Gómez, Arvizu y Galindo, 2005; Siles, 2005, 2008; Bowler, 2010), las primeras acepciones la distinguen como un medio para el intercambio, transferencia y almacenamiento de información y mensajes textuales. Posteriormente, se le define de manera más precisa como el conjunto de posibilidades comunicativas que permiten componer, almacenar, transmitir y procesar declaraciones multimediáticas (no limitadas a sólo a textos) (Perera y Torres, 2005)." <sup>5</sup>

Desde el campo de la educación, es concebida como el conjunto de tecnologías digitales que asisten en la comunicación y los procesos de enseñanza aprendizaje. Herramientas que pueden ser utilizadas para apoyar los procesos didácticos, de manera que permita a los aprendices y tutores interactuar a través de un diálogo mediado, privada o colectivamente, en el desenvolvimiento tanto de la enseñanza como del aprendizaje (Ramírez, 2016). <sup>6</sup>

La educación actual demanda de una gran responsabilidad, la literatura afirma que el mundo presente, siglo XXI, requiere de un modelo educativo propio, donde los estudiantes no sean un ente pasivo, dado que el aprendizaje de estos es totalmente opuesto, deben aprender de forma interactiva donde el docente dejó de tener el protagonismo, hoy día alumnos y profesores deben trabajar conjuntamente en busca del conocimiento que está, ahí al alcance de todos, es necesario desaprender viejos dogmas para volver aprender nuevos métodos pedagógicos, el objetivo principal es entonces que el estudiante desarrolle habilidades propias que le permitan adquirir nuevos conocimientos y nuevas formas de enfrentar los problemas actuales, el docente de hoy debe ser capaz de hacer que el alumno se enfrente con su realidad a través de ABP (aprendizaje basado en problemas) que le permitirán el desarrollo de competencias integrales. El proceso de formación del ser humano es tan complejo, que implica un desarrollo individual, tendiente a adquirir diariamente nuevas habilidades y capacidades, constituye una decisión propia definir hacia donde perfilar todas esas habilidades y capacidades.

El currículum es parte importante de toda la integralidad expuesta, las prácticas educativas solo cobran vida cuando son analizadas e interpretadas a través del ojo crítico de la realidad diaria del docente. Es a través del currículum que se justifican todos los procesos, normatividad y concepciones ideológicas, pedagógicas y psicológicas que determinan los objetivos que se aplican dentro del aula de clases.

El recurso humano es el activo más valioso que poseen las instituciones de educación, personas que se encargan justamente de realizar las diversas actividades encaminadas a lograr los propósitos institucionales.

<sup>5</sup>Gómez, E., & Galindo, A. (2005). Los estudios de Comunicación Mediada por Computadora: una revisión y algunos apuntes. *Razón y Palabra*, 10(44).

<sup>6</sup> Ramírez-Ochoa, M. I. (2016). Posibilidades del uso educativo de YouTube. *RA ximhai*, 12(6), 537-546.



En este recurso humano encontramos el director docente quien tiene una responsabilidad grande en el proceso de planificación educativa, ya que este dirige la institución y debe ser una persona con bases teóricas, humanas, con alta cualificación para enfrentar el reto de dirigir.

La formación de directivo docente es un reto que el gobierno debe de afrontar ante los nuevos desafíos y desarrollos que se experimentan en el mundo científico tecnológico. Es por eso por lo que la consecución de nuevos saberes y la adaptación a la tecnología es una forma estratégica que el docente de estos tiempos debe asumir como herramienta fundamental para absorber los cambios y transformaciones que se experimenta en el área educativa. La responsabilidad del directivo docente es compleja dado que exige el dominio de unas estrategias que faciliten su actuación para poder liderar el proceso educativo y cumplir con los objetivos y metas trazadas.

El directivo docente debe poseer amplias cualidades entre ellas el liderazgo pedagógico, que se entiende por ser el equilibrio inteligente entre la gestión a corto plazo (liderazgo gerencial) de las funciones administrativas y una visión a largo plazo (liderazgo visionario) de las funciones docentes. El liderazgo pedagógico está centrado en el aprendizaje. Este liderazgo no tiene una preocupación, sino una pasión, por el aprendizaje que hace que este concepto sea vital para los actores del sector educativo, lo que implica una transferencia de conocimiento.

## CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los conceptos de liderazgo pedagógico, se necesita de este para realizar una adecuada planificación estratégica, ya que se requiere diseñar las estrategias necesarias y adecuadas para alcanzar los objetivos a corto y a largo plazo en las instituciones educativas, es por ello por lo que se necesita de excelentes líderes pedagógicos con formación integral para llegar a cabo estos planes estratégicos que se evidencian en una educación con calidad.

Dentro del marco de la UNESCO y los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 se encuentra la reducción de las desigualdades, donde aplicaría la inclusión y el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de acceder a la educación superior.

En la actualidad se evidencia una discriminación evidente hacia estos por parte de la sociedad y se ve reflejado en la falta de oportunidades educativas, accesibilidad, barreras arquitectónicas, oportunidades laborales restringidas, entre otras acciones.

Hay que reconocer que las instituciones y entes controladores intentan mejorar sus políticas de inclusión y se ve reflejado en avances, pero es necesario seguir trabajando en la construcción de oportunidades para las personas con discapacidad.

Finalmente, la actual transformación social y económica que vive la civilización postmoderna exige una reflexión en torno a la universidad y su sentido, en la tarea de formar para el desarrollo humano integral que respete la vida, la cultura y el desarrollo sostenible de la nación en una visión planetaria.

## BIBLIOGRAFÍA

ACUÑA, K F, J. M. (2010). Consideraciones sobre la planeación de espacios educativos para la formación de estudiantes competentes. *Revista de Educación y Desarrollo*, 12.

ALARCÓN QUESADA, D., CORTÉS MENARA, A., & RODRÍGUEZ QUESADA, V. (2006). Competencias cognitivas, evaluación constructivista y educación inicial.

BERNAL SUAREZ DURLEY, M. P. (2015). Investigación documental sobre calidad de la educación en instituciones educativas del contexto iberoamericano. *Revista entremados-educación y sociedad*, 18.

C.B, YOLANDA,(2011). Organización, planeación y administración educativa. Perspectivas teóricas en la escuela. *revista logos, ciencia y tecnología* , 16.

CASILLAS-GUTIÉRREZ, C. (2019 ). Currículum, ideología y capacidad crítica en la docencia universitaria. *Revista Educación*, vol. 43, núm. 1, *Universidad de Costa Rica, Costa Rica* , 20.

COASE, R. (1996). La naturaleza de la empresa (1937). En O. E. Williamson y S. G. Winter, *La naturaleza de la empresa: orígenes, evolución y desarrollo*. (pp. 29-48). México: FCE.

GÓMEZ, E., & GALINDO, A. (2005). Los estudios de Comunicación Mediada por Computadora: una revisión y algunos apuntes. *Razón y Palabra*, 10(44).

JACQUES-P., V., & BOISIER-O., G. (2019). La calidad en las instituciones de educación superior. Una mirada crítica desde el institucionalismo. *Revista Educación*, vol. 43, núm. 1, *Universidad de Costa Rica, Costa Rica* , 18.

M, MARCELA (2018). Las prácticas realizadas por la Universidad de Costa Rica, para garantizar la educación superior de las personas con discapacidad. *Rev. Reflexiones* 97 (2): 35-54, ISSN:1021-1209/2018, 20

MANZANO JOAQUÍN MARTÍN, M. D. (2013). La planificación Estratégica, un indicador sobre el liderazgo pedagógico. *Universidad de Salamanca*, 25.

MELITÓN-GARCÍA, INOCENTE M. V.-M. (2014). Nociones y prácticas de la planeación didáctica desde el enfoque por competencias. *RA XIMHAI*, 11.

MELÉNDEZ, S., & GÓMEZ, L. J. (2008). La planificación curricular en el aula. Un modelo de enseñanza por competencias. *Laurus*, 14(26), 367-392.

MORENO RESTREPO, M. F., & SOTO TRIANA, J. S. (2019). Planeación de estrategias de enseñanza y sus procesos cognitivos subyacentes en un grupo de docentes de básica primaria. *Revista Educación*, vol. 43, núm. 1, *Universidad de Costa Rica, Costa Rica* , 13.

N.H JUDITH,(2016). El Transfondo de la planeación en las insituciones educativas. *Itinerario Educativo*, 16.

O.R, MIGUEL (2013). La planificación estratégica en las instituciones de educación. *Revista de Investigación Educativa* 16, 11.

PEREIRA, S. (2013). Planificación y políticas lingüísticas en la enseñanza de lenguas extranjeras a nivel universitario: un análisis de percepciones. *Lenguaje*, 2013, 41 (2), 383-406, 24.

PERERA, V., & TORRES, J. (2005). Análisis de las condiciones pedagógicas, sociales y cognitivas en los foros de discusión online. In *Congreso Internacional Virtual y Presencial sobre el Profesorado ante el Reto de las Nuevas Tecnologías en la Sociedad del Conocimiento. Congreso de Tipografía* (No. 1).

R.O, ISABEL (Julio – Diciembre 2016 ). Posibilidades del uso educativo de Youtube . *RA XIMHAI* ISSN 1665-0441 Volumen 12 Número 6 Edición Especial , 11.

RAMÍREZ-OCHOA, M. I. (2016). Posibilidades del uso educativo de YouTube. *RA ximhai*, 12(6), 537-546.

SANDOVAL-ESTUPIÑÁN, L Y, C.-A. M. (2008). Necesidades de formación de directivos docentes.: *Universidad de La Sabana, Facultad de Educación*, 38.

THAGARD, P. (2008). *La mente. Introducción a las ciencias cognitivas* (Vol. 3021). Katz Editores

## **BIODATA**

**Cindy CARRIAZO DÍAZ:** Fisioterapeuta Especialista en Salud Ocupacional. Maestrante en Administración y Planificación Educativa, 10 años de experiencia como Fisioterapeuta en el área de seguridad y salud en el trabajo, 7 años en el ejercicio de la docencia, actualmente docente del programa de fisioterapia de la Universidad del Sinú, sede Montería.

**Maura PÉREZ REYES:** Fisioterapeuta Especialista en Fisioterapia en Ortopedia. Maestrante en Administración y Planificación Educativa, 15 años de experiencia como Fisioterapeuta en el área clínica y 10 años en el ejercicio de la docencia, actualmente docente del programa de fisioterapia de la Universidad del Sinú, sede Montería.

**Kathelyn GAVIRIA BUSTAMANTE:** Fisioterapeuta, Especialista en Neurorehabilitación. Magíster en Salud Pública, con más de 10 años de experiencia como Fisioterapeuta en el área de neurorehabilitación, discapacidad, amputaciones y prótesis, 8 años en el ejercicio de la docencia e investigación, desarrollando competencias académicas e investigativas en los estudiantes y practicantes del programa de Fisioterapia de la Universidad del Sinú, sede Montería. Así mismo desempeña trabajos de formación y capacitación a agentes comunitarios de poblaciones vulnerables de la ciudad. Actualmente se desempeña en la coordinación institucional de investigaciones de la universidad del Sinú Elías Bechara Zainum.



## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 96-104  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

# Propiedades psicométricas del cuestionario Función Reflexiva Parental (PRFQ) en la población monteriana

*Psychometric Properties of the Parental Functioning Questionnaire (PRFQ) in Monteria Population*

**Ricardo Camilo RUEDA MORA**

<https://orcid.org/0000-0003-0614-2520>  
camilorueda@unisnu.edu.co  
Universidad del Sinú, Colombia

**Stefano VINACCIA ALPI**

<https://orcid.org/0000-0001-5169-0871>  
Vinalpi47@hotmail.com  
Universidad del Sinú, Colombia

**Leidy Vanessa CORREA GRISALEZ**

<https://orcid.org/0000-0002-7809-1972>  
vanesa49.vc@gmail.com  
Universidad del Sinú, Colombia

Este trabajo está depositado en Zenodo:  
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3907050>

### RESUMEN

La presente investigación buscó analizar la estructura factorial y la consistencia interna del Cuestionario de Función Reflexiva Parental (PRFQ) en 192 madres de hijos de 0-5 años de la ciudad de Montería, Colombia. Se Aplicó el Cuestionario de Funcionamiento Reflexivo Parental (PRFQ). El PRFQ muestra las tres dimensiones de la prueba original y un alfa de Cronbach de .81. Se sugiere eliminar un ítem para mejorar la confiabilidad y la concordancia en el cuestionario con respecto a la versión original. El Cuestionario PRFQ es válido y confiable en madres de hijos de cero a cinco años de la población monteriana.

**Palabras clave:** PRFQ, validación, función reflexiva parental, mentalización.

### ABSTRACT

The aim of the study was to analyze the factorial structure as well as the internal consistency of the Parental Reflective Functioning Questionnaire (PRFQ) in 192 mothers with children of 0-5 years old from the city of Monteria, Colombia. The PRFQ shows three dimensions of the original test and a Cronbach's alpha of .81. It is suggested that an item be removed to improve reliability and concordance in the questionnaire with the original English version. The PRFQ is valid and reliable to be applied in mothers with children between zero and five years of age in the Monteria population.

**Keywords:** PRFQ, validation, parental reflexive function, mentalizing.

Recibido: 20-05-2020 • Aceptado: 30-06-2020



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## INTRODUCCIÓN

En Colombia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó los primeros cinco meses del 2018 un total de 11.000 casos de maltrato infantil (físico, psicológico y por negligencia) siendo la mayoría maltratado originado por padres y/cuidadores principales. La ciudad de Bogotá y los departamentos del Valle del Cauca, Cundinamarca y Córdoba en su orden donde se registran las más altas cifras de violencia contra los niños<sup>1</sup>.

Por lo tanto, la relación que establecen los padres con sus hijos y viceversa es de vital importancia ya que esta facilita el conocimiento acerca de los sentimientos o estados emocionales, pensamientos y comportamientos que pueden ejercer los unos a los otros<sup>2</sup>.

En concordancia con lo anteriormente planteado, es necesario mencionar que la Función Reflexiva Parental (PRF por sus siglas en inglés) se ha definido como la capacidad de los padres para comprender sus propios estados mentales, tener en cuenta los estados mentales de sus hijos y comprender cómo estos estados mentales afectan el comportamiento<sup>3, 4</sup>.

Por su parte la función reflexiva facilita a los padres acceder de manera coherente y flexible a las memorias y emociones relevantes de las tempranas experiencias de apego, y además, provee una segura base a los hijos propios, en resumen se podría entender como la capacidad de mentalizar en razón a las experiencias propias de apego tempranas<sup>5</sup>.

En Inglaterra, Luyten, Mayes, Nijssens, & Fonagy<sup>6</sup> construyeron el Cuestionario de la Función reflexiva parental (PRFQ por sus siglas en inglés) el cual fue desarrollado y validado en 3 estudios, en el primero se presentó el desarrollo inicial y la validación del PRFQ en una muestra de madres con bebés de 0 a 3 años en el cual se buscaba investigar la estructura factorial del PRFQ, explorar la relación entre el PRFQ, las características demográficas y la angustia sintomática, y encontrar correlaciones teóricamente significativas entre el PRFQ, las dimensiones de apego adulto y la disponibilidad emocional.

En el estudio 2 se tenía como objetivo replicar los hallazgos del Estudio 1 e investigar la invarianza factorial del PRFQ en madres y padres. Puesto que esta población ha sido estudiada muy poco, la mayoría de investigaciones incluyen en su población solo a las madres dejando de lado a los padres, no obstante, las capacidades de PRF de los padres se han asociado con el desarrollo socioemocional en sus hijos. La muestra de este estudio fueron 153 padres primerizos con un bebé en desarrollo normal de edades comprendidas entre 8 y 13 meses<sup>7</sup>.

Por último, el estudio 3 investigó el papel del PRF en el desarrollo infantil basados en el principio clave de que esta capacidad fomenta el desarrollo del apego seguro del niño, basándose la investigación en la relación entre el PRFQ y el método de tres vías (seguro, ansioso, evasivo) y de cuatro vías (Seguro, ansioso, evasivo, resistentes y desorganizadas)<sup>8</sup>. El PRFQ ha sido utilizado en varios estudios abordando diferentes

<sup>1</sup> INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. (2018). ICBF atiende 68 casos diarios de violencia contra la niñez en todo el país. Obtenido de:

[https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/com\\_19102018\\_nal\\_icbf\\_atiende\\_68\\_casos\\_diaros\\_de\\_violencia\\_contra\\_la\\_ninez\\_en\\_todo\\_el\\_pais.pdf](https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/com_19102018_nal_icbf_atiende_68_casos_diaros_de_violencia_contra_la_ninez_en_todo_el_pais.pdf).

<sup>2</sup> Zucchi, A.; Huerin, V.; Duhalde, C. Y Raznoszczyk, C. (2006). "Aproximación al estudio del funcionamiento reflexivo materno." Anuario de investigaciones, Vol. 14, pp. 215-221.

<sup>3</sup> Ordway, M. R.; Webb, D.; Sadler, L. S. Y Slade, A. (2015). "Parental reflective functioning: an approach to enhancing parent-child relationships in pediatric primary care". Journal of Pediatric Health Care, Vol. 29, Núm. 4, pp. 325-334. Doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.pedhc.2014.12.002>

<sup>4</sup> Vernengo, M.; Leonardelli, E.; Oelsner, J.; Woloski, E.; Silver, R. Y Duhalde, C. (2014). "Funcionamiento reflexivo y cuestionario autoanálisis de sucesos de vida. Registro de sucesos estresantes." VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXI Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

<sup>5</sup> Besoain, C. Y Santelices, M.P. (2009). "Transmisión intergeneracional del apego y función reflexiva materna: Una revisión". Terapia Psicológica. Vol. 27, Núm. 1, pp. 113-11.

<sup>6</sup> LUYTEN, P.; MAYES, L. C.; NIJSSENS, L. Y FONAGY, P. (2017). "The parental reflective functioning questionnaire: Development and preliminary validation". PLoS One, Vol. 12, Núm. 5.

Doi: <http://dx.doi.org.ezproxy.unal.edu.co/10.1371/journal.pone.0176218>

<sup>7</sup> Luyten, P.; Mayes, L. C.; Nijssens, L. Y Fonagy, P. (2017). Op. Cit.

<sup>8</sup> Luyten, P.; Mayes, L. C.; Nijssens, L. Y Fonagy, P. (2017). Op. Cit.

problemáticas relacionadas con la relación padres-hijos<sup>9,10, 11, 12, 13, 14</sup>.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar psicométricamente la versión en español del Cuestionario de la Función reflexiva parental (PRFQ) para conocer sus propiedades en una muestra de madres de familia de estrato bajo de la ciudad de Montería, Colombia. Se eligió evaluar psicométricamente el PRFQ porque como lo describe Sánchez et al<sup>15</sup> hay pocos instrumentos con análisis psicométricos para medir capacidad reflexiva

## MÉTODO

### Diseño

Este es un estudio con enfoque cuantitativo no experimental transversal descriptivo de validez y confiabilidad<sup>16</sup>.

### Participantes

La muestra fue compuesta de 192 madres y/ o acudientes principales de niños de 0 a 5 años con una edad promedio de 29.3 años y una DS de 8.9 años. la edad mínima fue de 16 años y la máxima de 68 años residentes de la ciudad de Montería escogidas mediante un muestreo no probabilístico de tipo incidental. Como criterio de inclusión se requirió ser madre casadas y/o unión libre de niños con edades inferiores a los 5 años y los criterios de exclusión fue ser madres solteras. Con respecto al nivel de escolaridad 33 participantes manifestaron tener estudios de primaria o primaria incompleta (17.2%), 116 estudios de secundaria o secundaria incompleta (60.4%), 34 estudios técnicos (17.7%) y 9 estudios de pregrado o posgrado incompleto (4.7%). Con respecto a la ocupación 16 manifestaron tener empleo (8.3%), 137 amas de casa (71.4%), 24 manifestaron ser trabajadores independientes (12.5%) y 15 estudian y trabajan (7.8%). En cuanto al nivel socioeconómico 189 participantes resultaron ser de los estratos 1 y 2 (98.5%), mientras que 2 participantes pertenecen al estrato 3 lo equivalente al (1%) y un participante al estrato 4 representando un (0.5%).

### Instrumentos

Para esta investigación se utilizó el cuestionario de funcionamiento reflexivo parental (PRFQ) diseñado por Luyten, Mayes, Nijssens & Fonagy. El PRFQ está conformado por 18 preguntas en las que se les pide a los participantes que califiquen una serie de declaraciones con respecto a su hijo, en escala de 7 puntos de Likert de 1 (muy en desacuerdo) a 7 (muy de acuerdo), de las cuales se obtienen puntuaciones que miden la pre-mentalización, certeza y opacidad de los estados mentales e interés y curiosidad<sup>17</sup>

<sup>9</sup> Camoirano, A. (2017) "Mentalizing Makes Parenting Work: A Review about Parental Reflective Functioning and Clinical Interventions to Improve It". *Front. Psychol.* Vol. 8, Núm. 14, Doi: 10.3389/fpsyg.2017.00014.

<sup>10</sup> Cooke, D.; Priddis, L.; Luyten, P.; Cavanagh, R. Y Kendall, G. (2017). "Paternal and maternal reflective functioning in the western Australian peel child health study". *Infant mental health journal*, Vol. 00, Núm. 0, pp. 1-12. Doi: 10.1002/imhj.21664

<sup>11</sup> Pazzagli, C.; Delvecchio, E.; Raspa, V.; Mazzeschi, C. Y Luyten, P. (2018). "The Parental Reflective Functioning Questionnaire in Mothers and Fathers of School-Aged Children". *Journal of Child and Family Studies*, Vol. 27, Núm. 1, pp. 80-90. Doi: 10.1007/s10826-017-0856-8

<sup>12</sup> De Roo, M.; Rempel, G. Wong, G Y Fraser, S. (2019). "Advancing Optimal Development in Children: Examining the Construct Validity of a Parent Reflective Functioning Questionnaire (Preprint)". *JMIR Pediatrics and Parenting*. Vol. 2., Doi: 10.2196/11561.

<sup>13</sup> Ordway, M. R.; Webb, D.; Sadler, L. S. Y Slade, A. (2015). Op. Cit.

<sup>14</sup> Rostadi, W. Y Whitaker, D. (2016). "The Association Between Reflective Functioning and Parent-Child". *Journal Child Family Study*. Pp. 2164-2177. Doi: 10.1007/s10826-016-0388-7

<sup>15</sup> Sañchez, M.; León, L.; García, A.; Mas, J. Y Fernández, A. (2015). "La medida de la capacidad reflexiva: instrumentos disponibles en castellano y tareas pendientes." *Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq.* Vol. 35, Núm. 127, pp. 487-510.

<sup>16</sup> Hernadez, R.; Fernandez, C. Y Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGRAW-HILL. Mexico.

<sup>17</sup> Luyten, P.; Mayes, L. C.; Nijssens, L. Y Fonagy, P. (2017). Op. Cit.

## Procedimiento

Antes de empezar la investigación se desarrolló la traducción –Retro traducción por una traductora nativa bilingüe del instrumento PRFQ del inglés al español y viceversa.

Posteriormente se llevó a cabo la evaluación cultural del instrumento según los criterios de Alexandre y Guirardello<sup>18</sup>. El trabajo de adaptación cultural consistió en aplicar el cuestionario a 10 madres de familia. Luego de contestar el cuestionario las madres fueron entrevistadas para identificar palabras o preguntas de difícil comprensión, evaluar la aceptabilidad y hacer comentarios sobre estos de una forma general. Igualmente se registró el tiempo para completar el cuestionario y la comprensión del sistema de respuesta de cada ítem. Posteriormente se procedió al a la firma del consentimiento informado y a realizar las aplicaciones de la escala a los participantes

## RESULTADOS

### Descriptivos para prementalización, certeza y curiosidad

Para la prementalización se obtuvo un puntaje promedio de 2,8 puntos con una desviación estándar de 1,37 puntos, el puntaje mínimo es de 1,0 puntos y el máximo de 7,0 puntos.

Para la certeza y opacidad se obtuvo un puntaje promedio de 4,4 puntos con una desviación estándar de 1,25 puntos, el puntaje promedio mínimo fue de 1,2 puntos y el máximo de 7,0 puntos.

Para la curiosidad se obtuvo un puntaje promedio de 5,6 puntos con una desviación estándar de 1,12 puntos, el puntaje promedio mínimo fue de 2,0 puntos y el máximo de 7,0 puntos (Ver Tabla 1).

Tabla 1: Estadísticos descriptivos para la puntuación media de prementalización, certeza e interés y curiosidad						
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar	Varianza
Prementalización	192	1,0	7,0	2,8	1,37	1,87
Certeza y opacidad	192	1,2	7,0	4,4	1,25	1,55
Curiosidad	192	2,0	7,0	5,6	1,12	1,26

### Grado de prementalización, certeza y curiosidad en los participantes

Del total de participantes 119 presentaron capacidad para mentalizar (62,0%), 12 presentaron modos de funcionamiento prementalizadores (6,3%); mientras que 61 participantes presentaron dificultades para mentalizar (31,8%) (Ver Tabla 2).

Tabla 2: Grado de prementalización en participantes		
	Frecuencia	Porcentaje
Prementalización	12	6,3
Dificultades Mentalizadores	61	31,8
Mentalización	119	62,0

De los 192 participantes 102 presentan una buena mentalización (53,1%), 59 participantes presentaron una hipermentalización (30,7%) y 31 participantes una hipomentalización (16,1%) (Ver Tabla 3).

<sup>18</sup> Alexandre, N.M.C. Y Guirardello, E.B. (2002). "Adaptación cultural de instrumentos utilizados en salud ocupacional". Revista Panamericana de Salud Pública, Vol.11, núm. 2, pp. 109-111.

Tabla 3: Grado de certeza y opacidad en participantes		
	Frecuencia	Porcentaje
Hipomentalización	31	16,1
Buena mentalización	102	53,1
Hipermentalización	59	30,7

Para interés y curiosidad se tiene que 131 participantes presentaron una alta curiosidad (68,2%), 52 presentaron una mediana curiosidad (27,1%) y 9 una baja curiosidad (4,7%) (Ver Tabla 4).

Tabla 4: Grado de curiosidad en participantes		
	Frecuencia	Porcentaje
Baja	9	4,7
Media	52	27,1
Hipermentalización Intrusiva	131	68,2

### Validación del cuestionario PRFQ

Inicialmente se realizó un análisis factorial exploratorio, para ello se utilizó la regla de extracción de Kaiser la cual recomienda la extracción de cinco componentes para explicar la varianza total del cuestionario, ya que, se tuvieron cinco componentes con valores propios superiores a 1; donde los cinco factores extraídos explican respectivamente el 17.07%, 15.0%, 8.44%, 7.28% y 6.38 de la varianza total y en conjunto explican el 54.17% de dicha varianza. En la solución rotada se observó que la carga factorial del ítem 12 fue de magnitud moderada 0.338.

### Análisis factorial confirmatorio

Mediante la estimación por componentes principales y rotación varimax, al extraerse 3 factores por expectativa, los resultados fueron en general muy similares con la previa factorización y con lo reportado por el autor; El valor de  $\chi^2$  para el modelo propuesto fue de 712,8 (gl=153,  $p<0.001$ ). Debido a que se tiene un tamaño de muestra considerablemente grande el valor de  $\chi^2$  conduce a rechazar los modelos propuestos, por tal razón las conclusiones sobre el ajuste del modelo propuesto debe basarse en otro criterio; por tal motivo se reporta el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), el cual tiene un valor de 0,798 por tal razón se sugiere que la estructura trifactorial (3 factores) puede representar los conjuntos subyacentes propuestos en el estudio país del cuestionario, pero no está libre de un reajuste posteriormente (debido a que la estructura trifactorial explica el 40.52% de la varianza total). Al examinar las cargas factoriales en el modelo propuesto (ver Tabla 7) se observó que los ítems en su mayoría alcanzaron niveles moderadamente altos, ya que, estos reportaron cargas superiores a 0.35; a excepción del ítem 12, que registra una carga de 0,33.

Tabla 7: Estadísticos descriptivos, correlación ítem-test, cargas factoriales e índice de Kaplan-Meyer-Olkin					
	Media	DE	Cor	Carga factorial	KMO=0,798
Factor I: Prementalización					
1	2,9	2,5	0,56	0,53	
4	2,3	2,0	0,68	0,64	
7	3,4	2,6	0,52	0,48	
10	2,1	1,9	0,75	0,67	
13	2,6	2,2	0,54	0,60	
16	3,2	2,4	0,51	0,49	



Factor II: Certeza y opacidad					
2	5,2	2,2	0,47	0,51	
5	3,1	2,3	0,49	0,52	
8	4,0	2,4	0,42	0,46	
11	3,9	2,5	0,62	0,59	
14	5,4	2,2	0,72	0,61	
17	4,3	2,4	0,53	0,45	
Factor III: interés y curiosidad					
3	5,8	1,9	0,48	0,50	
6	5,5	2,1	0,71	0,62	
9	6,2	1,6	0,74	0,60	
12	5,4	2,1	0,45	0,33	
15	5,8	2,0	0,59	0,55	
18	3,2	2,6	0,53	0,54	

### Fiabilidad y consistencia interna

La confiabilidad y consistencia interna la cual se llevó a cabo mediante el coeficiente alfa de Cronbach, para los cuales se obtuvo una confiabilidad de 0,74, 0,79 y 0,81 para prementalización, certeza y curiosidad respectivamente estos valores nos indican que para todas las escalas la consistencia interna es alta, es decir, se revela una alta correlación entre las preguntas que conforman cada una de estas escalas; en la Tabla 8 se muestran estos resultados además de algunas estadísticas descriptivas de las correlaciones ítem-test.

Tabla 8: Resumen homogeneidad de los ítems, consistencia interna y estadísticos básicos para prementalización, certeza y curiosidad			
	Prementalización	Certeza y opacidad	Curiosidad
Correlación ítem-test corregida			
Minima	0,44	0,38	0,42
Media	0,53	0,49	0,55
Máxima	0,67	0,65	0,66
Correlación ítem-test			
Minima	0,51	0,42	0,45
Media	0,59	0,54	0,58
Máxima	0,75	0,72	0,74
Alfa Cronbach	0,74	0,79	0,81

## **ANÁLISIS GLOBAL RESULTADOS VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA**

En primer lugar encontramos de acuerdo a los resultados que las madres presentaron altos niveles de interés y curiosidad lo que se considera como Hipermentalización intrusiva, por otra parte se pudo observar que existe un porcentaje considerable de Hipomentalización en lo referente a la certeza y opacidad identificando las dificultades que tienen algunas madres de percibirse en la mente de sus bebés, es preocupante ver que un 30% de las madres muestran dificultades mentalizadora lo que implica una incapacidad para entender las necesidades reales de sus infantes.

Adicionalmente se encontró que el PRFQ evalúa el interés y curiosidad acerca de los estados mentales en madres de niños de 0-5 años de la ciudad de Montería porque según el análisis factorial los seis ítems correspondientes a este factor explican adecuadamente este porcentaje de la prueba, así mismo es confiable ya que su puntuación en el coeficiente de alfa de Cronbach fue 0,81 lo que revela una correlación entre las preguntas de las subescalas.

En los resultados obtenidos se puede observar que la prueba si evalúa la certeza y opacidad porque según el análisis factorial los seis ítems de este factor explican adecuadamente su porcentaje correspondiente de la prueba, así mismo es confiable ya que su puntuación en el coeficiente de alfa de Cronbach fue 0,79 lo que revela una correlación existente entre las preguntas de esta subescala.

También se confirmó que la prueba si evalúa la Prementalización porque según el análisis factorial los ítems correspondientes a este factor explican claramente su porcentaje de la prueba, así mismo se muestra confiable ya que su puntuación en el coeficiente de alfa de cronbach fue 0,74 la cual aun siendo un poco menor que la otra puntuación revela una correlación entre las preguntas de la subescala.

De lo anterior se puede concluir que el PRFQ es válido y confiable para evaluar la función reflexiva parental en madres de niños de 0-5 años de la ciudad de Montería, se obtuvieron resultados de confiabilidad en el coeficiente alfa de Cronbach de 0,74, 0,79 y 0,81 para Prementalización, certeza y curiosidad respectivamente lo que nos indican que para todas las escalas la consistencia interna es alta y a su vez revela una alta correlación entre las preguntas que conforman cada una de estas escalas y demuestran la fiabilidad de la prueba, todos estos datos demuestran la validación y confiabilidad del PRFQ en las madres de la población Monteriana.

Con estos hallazgos nos damos cuenta que la prueba es confiable en mujeres de la población monteriana ya que mide correctamente el interés y la curiosidad, la opacidad y la certeza y la Prementalización dando resultados fiables que muestran la realidad de las familias y que ayudan a comprender en parte su comportamiento, la mayoría de los resultados fueron favorables y podemos decir que la división de los ítems de la prueba en las tres subescalas es correcta, ya que los ítems asociados a cada subescala mide exactamente lo que se requiere en estos casos, la única sugerencia sería que se modifique o se elimine el ítem 12 ya que su carga factorial es de 0,338, lo que se traduce en que su carga es moderada y no mide completamente la subescala en la que se encuentra, en la Tabla 6 se encuentran todos las cargas factoriales para cada ítem en ella podemos ver que todos tienen cargas factoriales mayores o iguales a 0,415 y menores o igual a 0,686 y que el único que no se encuentra en ese rango es el ítem 12 por ello se hace la recomendación y se espera sea atendida al momento de utilizar el instrumento en esta población.

## DISCUSIÓN

Este es el primer estudio de las propiedades psicométricas del PRFQ en Colombia, por ello se comparan los resultados con el trabajo de Parental Reflective Functioning Questionnaire (PRFQ), validado ya en Inglaterra y en Bélgica. Ahora respecto al estudio de De Roo, Rempel, Wong & Fraser<sup>19</sup>, se confirmó la estructura de los tres factores que evalúan la prueba y se evidencia niveles muy similares a nivel validez y confiabilidad con unas diferencias con respecto a los ítems que se sugieren eliminar para mejorar la confiabilidad de la prueba que son los ítems 11 y 18 en la investigación belga mientras que en nuestra investigación sugiere que se elimine solo el ítem 12. para futuras aplicaciones en la población, elemento en que también difieren las investigaciones ya que en una la población estaba conformada por hombres y mujeres y en la segunda solo mujeres lo que contribuye a la variación de los resultados obtenidos.

De igual manera con respecto al estudio inglés de Luyten, Mayes, Nijssens, & Fonagy<sup>20</sup>, se encuentran los mismos tres factores que evalúan los modos de pre-mentalización, la certeza, el interés y la curiosidad al encontrarse que las cargas factoriales de la prueba se encuentran equilibrados y se correlacionan entre sí para medir las esferas de la función reflexiva.

Por otra parte clínicamente hablado algunos de los hallazgos son preocupantes, en el caso del grado de certeza respecto a los estados mentales del infante el porcentaje de madres que presentan hipomentalización es alto y refleja que las madres presentan dificultades para mentalizar, lo que se traduce en que no son capaces de satisfacer las necesidades primordiales de los infantes de manera eficaz ya que no tienen certeza de lo que realmente el bebé desea, así mismo en la categoría de curiosidad se evidencia un porcentaje elevado de inadecuados madres que presentan hipermentalización intrusiva lo que puede generar muchos problemas en los infantes desde su niñez hasta su vida adulta, ya que la inadecuada percepción de sus necesidades y la intrusión en su intimidad puede generar trastornos psiquiátricos o de personalidad ya que la mentalización juega un papel muy importante en el desarrollo de las capacidades del infante para enfrentarse al mundo social. Así mismo en el factor de prementalización existe un porcentaje considerable de madres con dificultades, ya que les cuesta un poco de trabajo visualizar al menor como un agente psicológico y por ellos no logran entender sus prioridades.

Además de lo mencionado con anterioridad es importante tener en cuenta que el estudio tuvo algunas limitaciones como que la muestra no fue aleatoria y no participaron hombres en el proceso de validación y que el 98% de muestra fue de estrato bajo. Sería interesante estudiar cómo se sería el funcionamiento psicométrico de este cuestionario PRFQ con otros estratos sociales y con muestras de otros sectores geográficos de Colombia.

## BIBLIOGRAFÍA

- ALEXANDRE, N.M.C. Y GUIRARDELLO, E.B. (2002). "Adaptación cultural de instrumentos utilizados en salud ocupacional". Revista Panamericana de Salud Pública, Vol.11, núm. 2, pp. 109-111.
- BESOAIN, C. Y SANTELICES, M.P. (2009). "Transmisión intergeneracional del apego y función reflexiva materna: Una revisión". Terapia Psicológica. Vol. 27, Núm. 1, pp. 113-11.
- CAMOIRANO, A. (2017) "Mentalizing Makes Parenting Work: A Review about Parental Reflective Functioning and Clinical Interventions to Improve It". Front. Psychol. Vol. 8, Núm. 14, Doi: 10.3389/fpsyg.2017.00014.

<sup>19</sup> De Roo, M.; Rempel, G. Wong, G Y Fraser, S. (2019). Op. Cit.

<sup>20</sup> Luyten, P.; Mayes, L. C.; Nijssens, L. Y Fonagy, P. (2017). Op. Cit.

- COOKE, D.; PRIDDIS, L.; LUYTEN, P.; CAVANAGH, R. Y KENDALL, G. (2017). "Paternal and maternal reflective functioning in the western australian peel child health study". *Infant mental health journal*, Vol. 00, Núm. 0, pp. 1-12. Doi: 10.1002/imhj.21664
- DE ROO, M.; REMPEL, G. WONG, G Y FRASER, S. (2019). "Advancing Optimal Development in Children: Examining the Construct Validity of a Parent Reflective Functioning Questionnaire (Preprint)". *JMIR Pediatrics and Parenting*. Vol. 2., Doi:10.2196/11561.
- HERNADEZ, R.; FERNANDEZ, C. Y BAPTISTA, M. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGRAW-HILL. Mexico.
- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. (2018). ICBF atiende 68 casos diarios de violencia contra la niñez en todo el país. Obtenido de: [https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/com\\_19102018\\_nal\\_icbf\\_atiende\\_68\\_casos\\_diarios\\_de\\_violencia\\_contra\\_la\\_ninez\\_en\\_todo\\_el\\_pais.pdf](https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/com_19102018_nal_icbf_atiende_68_casos_diarios_de_violencia_contra_la_ninez_en_todo_el_pais.pdf).
- LUYTEN, P.; MAYES, L. C.; NIJSSENS, L. Y FONAGY, P. (2017). "The parental reflective functioning questionnaire: Development and preliminary validation". *PLoS One*, Vol. 12, Núm. 5, Doi: <http://dx.doi.org.ezproxy.unal.edu.co/10.1371/journal.pone.0176218>
- ORDWAY, M. R.; WEBB, D.; SADLER, L. S. Y SLADE, A. (2015). "Parental reflective functioning: an approach to enhancing parent-child relationships in pediatric primary care". *Journal of Pediatric Health Care*, Vol. 29, Núm. 4, pp. 325-334. Doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.pedhc.2014.12.002>
- PAZZAGLI, C.; DELVECCHIO, E.; RASPA, V.; MAZZESCHI, C. Y LUYTEN, P. (2018). "The Parental Reflective Functioning Questionnaire in Mothers and Fathers of School-Aged Children". *Journal of Child and Family Studies*, Vol. 27, Núm. 1, pp. 80-90. Doi: 10.1007/s10826-017-0856-8
- ROSTADL, W. Y WHITAKER, D. (2016). "The Association Between Reflective Functioning and Parent-Child". *Journal Child Family Study*. Pp. 2164-2177. Doi: 10.1007/s10826-016-0388-7
- SÁNCHEZ, M.; LEÓN, L.; GARCÍA, A.; MAS, J. Y FERNÁNDEZ, A. (2015). "La medida de la capacidad reflexiva: instrumentos disponibles en castellano y tareas pendientes." *Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq*, Vol. 35, Núm. 127, pp. 487-510.
- VERNENGO, M.; LEONARDELLI, E.; OELSNER, J.; WOLOSKI, E.; SILVER, R. Y DUHALDE, C. (2014). "Funcionamiento reflexivo y cuestionario autoanálisis de sucesos de vida. Registro de sucesos estresantes." VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXI Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- ZUCCHI, A.; HUERIN, V.; DUHALDE, C. Y RAZNOSZCZYK, C. (2006). "Aproximación al estudio del funcionamiento reflexivo materna." *Anuario de investigaciones*, Vol. 14, pp. 215-221.

## BIODATA

**Ricardo Camilo RUEDA MORA:** Psicólogo y Magister en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctorando en Psicología de la Universidad del Salvador. Docente Investigador Universidad del Sinú.

**Stefano VINACCIA ALPI:** Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, Doctor en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Docente Investigador Universidad del Sinú.

**Leidy Vanessa CORREA GRISALEZ:** Psicóloga de la Universidad del Sinú.



## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 105-124  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

# Conflictos por el agua y resiliencia comunitaria en el Bajo Sinú: evidencias de disputas y alternatividad

*Water Conflicts and Community Resilience in Lower Sinu: Evidence of Disputes and Alternativity*

**Rubén Darío SEPULVEDA VARGAS**

<https://orcid.org/0000-0001-6694-3907>

[ruben.sepulveda@upb.edu.co](mailto:ruben.sepulveda@upb.edu.co)

Universidad Pontificia Bolivariana, Montería, Colombia.

**María Alejandra TABORDA CARO**

<https://orcid.org/0000-0002-9170-661X>

[socialescolombia@gmail.com](mailto:socialescolombia@gmail.com)

Universidad de Córdoba, Montería, Colombia

**Deivi David FUENTES DORIA**

<http://orcid.org/0000-0002-0699-286X>

[deivi.fuentesd@upb.edu.co](mailto:deivi.fuentesd@upb.edu.co)

Universidad Pontificia Bolivariana, Montería, Colombia

Este trabajo está depositado en Zenodo:  
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3907052>

## RESUMEN

El trabajo pretende revelar los conflictos por el agua que acontecen en la Ciénaga Grande del bajo Sinú, Colombia y la manera como las comunidades campesinas e indígenas organizadas, enfrentan las disputas. Se realiza una investigación cualitativa de alcance descriptivo con entrevistas en profundidad, observación y revisión de literatura, las cuales permiten evidenciar las presiones ambientales que alteran el equilibrio ecológico del ecosistema cenagoso y las estrategias de resiliencia comunitaria ejecutadas. Se concluye que el conocimiento propio y ancestral construido a partir de prácticas cotidianas, es la fuente de poder de las comunidades para contrarrestar las disputas por el agua y edificar un modelo alternativo de desarrollo.

**Palabras clave:** alternativas de desarrollo, conflictos por el agua, resiliencia comunitaria, seguridad hídrica y alimentaria

## ABSTRACT

This work aims to reveal the conflicts over water that happened in the Ciénaga Grande del bajo Sinú, Colombia and the way in which organized peasant and indigenous communities, disputes. Qualitative research of descriptive scope is carried out with in-depth interviews, observation and review of literature, which allows to demonstrate the environmental pressures that alter the ecological balance of the muddy ecosystem and the community resilience strategies implemented. It is concluded that the own and ancestral knowledge constructed from everyday practices, is the source of power of the communities to counteract water disputes and build an alternative model of development that guarantees water and food security.

**Keywords:** alternatives of development, conflicts over water, community resilience, water and food security

Recibido: 20-05-2020 • Aceptado: 30-06-2020



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## INTRODUCCIÓN

La presente investigación se ubica en el contexto de los conflictos por el agua que se origina por la deficiente calidad y disponibilidad del recurso generando limitado acceso y escasez<sup>12345</sup>. Esta situación restringe el desarrollo de actividades productivas y abastecimiento hídrico en familia campesinas e indígenas, por la afectación del sistema de humedales en la cuenca baja del Sinú<sup>6</sup> lo que los motivó a diseñar un conjunto de estrategias de resiliencia comunitaria, construidas a partir de un conocimiento propio, para enfrentar las disputas en torno al agua<sup>7</sup>.

Por su parte, las riquezas hídricas del departamento de Córdoba, Colombia se considera significativa por la subregión del Valle del Sinú que cubre 1.207.000 hectáreas y 846 Km de ríos y afluentes en todo el territorio Cordobés. La cuenca principal río Sinú, registra un área de 13.874 Kilómetros y los ecosistemas de ciénagas y acuíferos de 110.000 hectáreas<sup>89</sup>. De ello, en la región de América Latina, se indica que la tercera parte de las aguas dulces del mundo las dispone este continente, lo que representa una dotación per cápita de 22.929 metros cúbicos por año, guarismo que alcanza un 300% por arriba del promedio global<sup>10</sup>. No obstante, reconociendo la abundancia del recurso, hay evidencias de usos inadecuados en la mayoría de las actividades en las que se utiliza, con ciertas excepciones que promueven ideas para un cambio sostenible del agua<sup>11</sup>.

El nacimiento del río Sinú, tiene su origen en inmediaciones del Parque Nacional Natural del Paramillo con una altura superior a 3.000 metros sobre el nivel del mar, hasta llegar a boca de Tinajones sobre el mar Caribe donde desemboca, recorre los paisajes bioclimáticos relacionados al páramo y el bosque húmedo tropical, hasta encerrarse en el Departamento de Córdoba, lugar donde logra el mayor extensión y división, 12.200 Km<sup>2</sup> y que está figurada por entornos de sabanas y acuáticos. Es así, que el estudio abarca la parte baja del río Sinú, específicamente en el complejo cenagoso denominado Ciénaga Grande del bajo Sinú (en adelante CGS), ubicada alrededor de los municipios de Chimá, Cotorra, Lórica, Momil y Purísima en el departamento de Córdoba, Colombia (Ver figura 3). Es una planicie que regula y amortigua de forma natural las aguas lluvias y los excesos de caudales del río, esenciales para el estabilidad y preservación de los ecosistemas naturales en la zona<sup>12</sup>.

---

<sup>1</sup> Ávila, P. (2002). cambio global y recursos hídricos en México: hidropolítica y conflictos. México.

<sup>2</sup> Gleick, P. (1993). water and conflict: fresh water resources and international security. international security, 18(1), 79–112. <https://doi.org/10.2307/2539033>.

<sup>3</sup> Gleick, P. (1994). amarga agua dulce: los conflictos por recursos hídricos. ecología política, 85–106.

<sup>4</sup> Martín, I. y Justo, J. B. (2015). análisis, prevención y resolución de conflictos por el agua en américa latina y el caribe Santiago de Chile: Cepal- serie recursos naturales e infraestructura.

<sup>5</sup> Mussetta, P. (2010). los conflictos por agua en américa latina mayo 2010. centro de estudios y programas interamericanos - Cepi, (23).

<sup>6</sup> Corte Constitucional. (1999). corte constitucional sentencia t-194-99. Bogotá: corte constitucional de Colombia.

<sup>7</sup> Ortiz, C.; Pérez, M. y Muñoz, I. (2007). los cambios institucionales y el conflicto ambiental: el caso de los valles del río Sinú y san Jorge. Bogotá: pontificia universidad javeriana

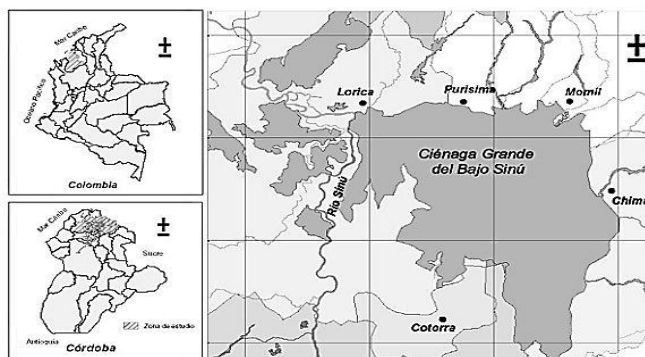
<sup>8</sup> CVS [corporación de los valles del Sinú y san Jorge]. (2008). plan de gestión ambiental regional – PGAR: 2008 - 2019. montería: corporación de los valles del Sinú y san Jorge – CVS.

<sup>9</sup> Defensoría del pueblo. (2007). resolución defensorial no. 38 sobre el estado media y baja del Sinú. Bogotá: defensoría del pueblo.

<sup>10</sup> Arroyo, V. (2017). la paradoja de la escasez de agua en américa latina. américa economía.

<sup>11</sup> Jaramillo, E.T. (2019). fluid kinship: race, power, and the hydrosocial order of water flow along new Mexico's acequias. environment and planning d: society and space, (January 2015), 1–18. <https://doi.org/10.1177/0263775819879719>.

<sup>12</sup> IDEAM [Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales]. (1998). humedal del valle del río Sinú. Bogotá: IDEAM.



**Figura 3.** Área de estudio de la CGS

Fuente: (Lans, E, Marrugo, J, y Diaz: 2008).

Desde la época prehispánica hasta la contemporánea, pasando por la colonia, el agua ha sido fundamental para los pueblos. La sociedad hidráulica Zenú, fue el eje central del desarrollo, creando tecnologías de sistema de drenaje y riego para el control de inundaciones y uso productivo<sup>13</sup>. Este conocimiento fue irrumpido y destruido por los conquistadores, en su afán de dominar territorios indígena a través de la encomienda<sup>14 15</sup>.

En tiempos de la colonia el interés de los españoles fue la tierra, y no el agua, con la intención de instaurar la hacienda ganadera a finales del siglo XIX en el departamento de Córdoba<sup>16</sup>. En la segunda mitad del siglo XX los cambios ambientales locales se hacen más evidentes, en especial, las alteraciones de la dinámica del ciclo hidrológico del río Sinú y los sistemas de humedales en la parte baja de la cuenca que son desecados afectando la oferta hídrica del territorio<sup>17 18</sup>.

Tales circunstancia ha llevado a la oferta del preciado líquido, generando conflicto y disputas de comunidades con organizaciones privadas por el abastecimiento y acceso a los cuerpos de agua que hacen parte del área del bajo Sinú. Ante esta situación, las comunidades locales son las más afectadas por restringirle su uso y acceso, obligándolos a auto organizarse y empoderarse colectivamente para hacerle frente a las adversidades<sup>19</sup>. En este sentido, la investigación gira en torno al análisis y relación de dos conceptos actuales y debatidos ampliamente; los conflictos por el agua y las estrategias comunitarias para enfrentarlos<sup>20</sup>.

El trabajo se estructura en tres partes: Primero se explican las bases teóricas de los conflictos por el agua y la resiliencia comunitaria, luego el diseño metodológico utilizado y por último se presentan resultados y conclusiones respectivamente.

<sup>13</sup> Plazas, C. y Falchetti, A. (1990). Manejo hidráulico Zenú. Ingenierías Prehispánicas. Bogotá: Fondo FEN. Instituto Colombiano de Antropología.

<sup>14</sup> La encomienda se configuró como una asignación, realizada por la corona española a un súbdito español de un grupo de aborígenes, para resarcir los servicios suministrados. El encomendero se comprometía con los nativos puestos a su cargo, para convertirlos religiosamente, por un lado, y por otro lograba recibir los beneficios obtenidos del trabajo que realizaban estos.

<sup>15</sup> Vega, R. (2006). Imperialismo ecológico. El interminable saqueo de la naturaleza y de los parias del sur del mundo.

<sup>16</sup> Ocampo, G. (2007). La instauración de la ganadería en el valle del Sinú: la hacienda Marta Magdalena, 1881 – 1956. Medellín: Universidad de Antioquia.

<sup>17</sup> Corte Constitucional. (1999). op. Cit.

<sup>18</sup> Defensoría del pueblo. (2007). op. Cit.

<sup>19</sup> Powell, N.; Larsen, R. K.; Bruin, A.; Powell, S. y Elrick-Barr, C. (2017). Water security in times of climate change and intractability: Reconciling conflict by transforming security concerns into equity concerns. *Water (Switzerland)*, 9(12). <https://doi.org/10.3390/w9120934>.

<sup>20</sup> Usón, T.J.; Henríquez, C. y Dame, J. (2017). Disputed water: Competing knowledge and power asymmetries in the Yali Alto basin, Chile. *Geoforum*, 85(July), 247–258. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.07.029>.

## **BASES TEÓRICAS DEL CONFLICTO POR EL AGUA Y LA RESILIENCIA COMUNITARIA**

La investigación partió del supuesto paradigmático de la sociedad como espacio de conflicto. Para ello, se usó el cuerpo teórico de la escuela de Frankfurt y la teoría general crítica de lo social, la cual interpreta y recupera el concepto de naturaleza desde la concepción marxista con Alfred Schmidt<sup>21</sup>. Desde esta posición se seleccionan las teorías sustantivas de la Ecología Política (en adelante EP) y Economía Ecológica (en adelante EE) que cuestionan las lógicas del sistema capitalista dominante y repensan otros modos alternativos al desarrollo.

La génesis de la EP como campo epistemológico, surge por su interés de estudiar las relaciones de poder en el contexto de repensar la interacción sociedad – naturaleza, así como las causas de degradación de lo ecológico. Abordar estas temáticas, es lo que la hace distinta de otras disciplinas, con una característica fundamental, y es que la EP se abre con el dialogo interdisciplinar en las ciencias sociales, la filosofía y la ecología

El campo de la EP tiene sus raíces en el marxismo con el antropólogo e historiador Erick Wolf, el geógrafo Peter Kropotkin, el filósofo e historiador Murray Bookchin (fundador de la ecología social) y el filósofo francés André Gorz (principal exponente de la ecología política)<sup>22</sup>. La EP estudia críticamente las condiciones de miseria y pobreza de los grupos sociales de mayoría, como los campesinos y favorece la consolidación de los movimientos sociales de resistencia, ejemplo, los movimientos obreros europeo, movimientos feministas y estudiantiles, y en especial aquellos que se forman en torno a los problemas ecológicos, provocados por los modos de producción capitalista, como es el caso de la revolución verde.

En las últimas décadas el discurso marxista ha retomado importancia desde la perspectiva que relaciona sociedad – naturaleza. Al interior de las ciencias sociales, la economía, la historia, la geografía, la antropología, la sociología y el derecho, han realizado aproximaciones teóricas y metodológicas, donde la EP se ha alimentado de estas disciplinas y de la biología, con el fin de construir un campo epistemológico con características interdisciplinar, ecléctica. de acción política y postura crítica.

Si bien el interés del marxismo en el siglo XIX fue el cuestionamiento de las relaciones sociales presentes en el capitalismo de aquella época, ello estableció las bases para un discurso crítico y de acción política en la relación capital – trabajo, que permitió el corpus teórico para repensar después de la segunda mitad del siglo XX, otras formas de relacionamiento del capital, como lo es la relación capital - naturaleza.

El objeto de estudio por las condiciones de vida de los campesinos y, los movimientos obreros que se desarrollaron a finales del siglo XIX por marxistas de la época, como lo estudió el geógrafo Peter Kropotkin<sup>23</sup>, recobra gran interés con Erick Wolf en su libro las luchas campesinas del siglo XXI<sup>24</sup>, donde el autor evidencia casos de rebelión y revolución en la segunda mitad del siglo XX y disputas en la relaciones con terrateniente, arrendatario y propietarios. Es así como para la década de los setenta, la teoría de la ecología política evidentemente supera al marxismo ortodoxo y discierne en la liberación de los individuos, la crítica radical del productivismo y del consumismo del sistema dominante<sup>25</sup>.

Apoyado en las escuelas de pensamiento económico, es factible determinar primero los orígenes del surgimiento de la EE y segundo la desconexión que se presenta entre la economía y la ecología, fundamentado en la segunda ley de la termodinámica, concepto nacido de la física y que la economía no lo incorpora en la construcción de su corpus teórico, cuando ésta se configura como ciencia en el siglo XVIII<sup>26</sup>.

<sup>21</sup> Schmidt, A. (2013). Para un materialismo ecológico. Utopía y Praxis Latinoamericana, 61, 11-23.

<sup>22</sup> Leff, E. (2014). Epistemologías del sur para germinar alternativas al desarrollo (Seminario Latinoamericano). Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, Abril 29 y 30.

<sup>23</sup> Leff, E. op. Cit.

<sup>24</sup> Wolf, E. (1973). Las luchas campesinas del siglo XX. Madrid: Editorial Siglo XXI.

<sup>25</sup> Gorz, A. (1977). Miserias de lo presente, riqueza de lo posible. (Paidós). Buenos Aires.

<sup>26</sup> Gómez, L.J. (1997). Las raíces teóricas del conflicto economía y ecología y algunos desarrollos posteriores. En: Ensayos de Economía, 7, 102-121.

<sup>27</sup> Gómez, L.J. (1999). La entropía y sus relaciones con la economía y la ecología. Ensayos de Economía, 9, 9-27



En el contexto histórico de la EE, es preciso reconocer los aportes del pensamiento económico de la escuela clásica del siglo XVIII y neoclásica del siglo XIX, con el fin de establecer cuál de ellos intentaron construir teorías integradas a la naturaleza y cuáles no. Es así como con la aparición del capitalismo, el desarrollo de la actividad económica giró en torno a las categorías sociales de la propiedad privada y la acumulación de capital<sup>28 29 30 31</sup> las bases teóricas de la economía política desarrolladas por la doctrina de los fisiócratas reconocían la importancia de la agricultura en la economía como generadora de riqueza y del hombre como hijo de la naturaleza.

Las críticas a la economía política de los clásicos y neoclásicos no se hicieron esperar, para inicios de la segunda mitad del siglo XX, los cuestionamientos por no economistas como Podolinsky<sup>32</sup>, Geddes<sup>33</sup> y Soddy<sup>34</sup>, ejercen presión para que se retome las conceptualizaciones de la física, en especial el concepto de entropía<sup>35</sup>, aportes que son retomados más adelante, por Georgescu – Roegen, Hernán Daly y J.M. Naredo, para incorporarlo en el proceso de producción de la teoría económica. En esta época y con estos pensadores, se configura desde entonces los primeros indicios que declaran la integración en la relación economía – ecología<sup>36 37</sup>.

La EE plantea reconocer el concepto de entropía en los procesos económicos que ha omitido la economía tradicional. Este lo explica la física a través de la ley de la termodinámica.

El concepto de entropía entra a la física en la segunda mitad del siglo pasado, la biología sólo lo incorpora con el trabajo de Schrödinger en 1944 y en 1945. Prigogine introduce el concepto de termodinámica del no equilibrio. La economía, atada a la postura neoclásica de equilibrio, sólo lo hace en los años 70's con Georgescu – Roegen que introduce la entropía a la teoría económica y cuestiona la función de producción de Wicksteed al introducir los conceptos de procesos y de irreversibilidad en la producción económica<sup>38</sup>.

De allí en adelante, la EE considera que el modelo de crecimiento económico (se refiere al producto interno bruto – PIB) choca con los límites de los ecosistemas, rechaza los planteamientos de la economía neoliberal – que deja todo al mercado - y la economía socialdemócrata Keynesiana – que deja la distribución al crecimiento<sup>39 40</sup>. De igual forma como se indicó, la economía tradicional o clásica solo explica las relaciones sociales – o de seres humanos – y, desconoce las relaciones con la naturaleza, de la misma forma como lo han hecho los ecólogos tradicionales, que ignoran los seres humanos<sup>41</sup>.

<sup>28</sup> Alvater, E. (2006). Informalidad política, globalización y resistencia civil. Buenos Aires: Revista Herramienta No.31.

<sup>29</sup> Alvater, E. (2007). ¿Existe un Marxismo Ecológico? CLACSO, 358–385.

<sup>30</sup> Foucault, M. (1979). Microfísica del poder. (F. Varela, Julia. Álvarez - Uría, Ed.) (Segunda Ed). Madrid.: Ediciones de la Piqueta.

<sup>31</sup> Polanyi, K. (1989). La gran transformación: crítica del liberalismo económico. Madrid.: Ediciones la Piqueta – Endymion.

<sup>32</sup> En su artículo *Human Labor and the Unity of Nature* (El trabajo humano y la unidad de las fuerzas físicas) de 1883 pone en entredicho lo que Friedrich Engels había en algún momento mencionado: “es totalmente imposible expresar las relaciones económicas en función de variables físicas”. Podolinsky, al concluir su trabajo, dio el preámbulo para una serie de investigaciones encaminadas a hallar “rendimientos” económicos y producción eficiente dejando de lado el concepto de producción. En su trabajo, concluye con la idea de que más allá de la producción, debemos hablar de la disponibilidad de los recursos para quien la población disponga de una forma equitativa de la energía.

<sup>33</sup> Importante precursor de la EE que aporta desde el concepto de la conurbación, el crecimiento de las ciudades más allá de los límites políticos - administrativos permisibles, lo cual conlleva a una sobrepoblación que presiona la límites naturales de una región

<sup>34</sup> Cuestiona los planteamientos de la Economía Clásica en cuanto a los factores de producción tierra, trabajo y capital, proponiendo en este sentido la *energía* como el factor primordial en el proceso de económico.

<sup>35</sup> El concepto de la entropía en el contexto de la economía ecológica, se utiliza para describir el creciente metabolismo social que se lleva a cabo en la actual sociedad capitalista producto de las actividades extractivistas, la deforestación y destrucción de biomasa, entre otros (Martínez-Alier et al, 2010).

<sup>36</sup> Gómez, L.J. (1999). op. Cit.

<sup>37</sup> Zuberaman, F. (2013). El aporte del pensamiento de Karl Polanyi a la cuestión ambiental. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 21, 57–70.

<sup>38</sup> Gómez, L.J. (1999). op. Cit.

<sup>39</sup> Martínez-Alier, J. (2004). Los conflictos ecológico- distributivos y los indicadores de sustentabilidad. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica (REVIBEC), 1, 21–30. <https://doi.org/10.4000/polis.5359>.

<sup>40</sup> Martínez-Alier, J.; Kallis, G.; Veuthey, S.; Walter, M., y Temper, L. (2010). Social Metabolism, Ecological Distribution Conflicts, and Valuation Languages. *Ecological Economics*, 70, 153–158. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.09.024>.

<sup>41</sup> Daly, H. (1992). Economía ecológica y desarrollo Sustentable. Revista Documentación Social Estudios Sociales y Sociología Aplicada, 89, 85–107.

Tanto la EP como la EE se interesan por lograr una mayor justicia ambiental, que surge por los problemas de acaparamiento de recursos naturales y la desigual distribución de los costos ambientales, por efecto del creciente metabolismo social del proceso económico. Es este orden de ideas se hace necesario desde estos cuerpos teóricos, reflexionar por los fenómenos generadores de conflictos y ofrecer alternativas de solución que apunten a mayor equidad ecológica en términos de seguridad hídrica y alimentaria.

La producción de alimentos depende de la oferta de agua, entre otros factores y la justicia hídrica reclama igualdad, reparto y acceso, hechos socioeconómicos que están condicionados por la existencia de menor despojo del agua, menos acumulación de capital, menos conflictos hídricos y mayor iniciativa de acción social. Para una mayor comprensión la figura 2 muestra la correlación entre la seguridad hídrica y alimentaria (Sha) y la justicia hídrica (Jh) apoyado en estas categorías.

### Seguridad hídrica y alimentaria: (Sha)



Figura 2: Correlación Seguridad alimentaria y la justicia hídrica. Elaboración propia (2018).

La justicia hídrica representa un factor fundamental para asegurar y garantizar seguridad del agua y alimentos, de modo que para lograr mayor seguridad hídrica y alimentaria (Sha) es imprescindible el desarrollo de acciones que fomenten mayor justicia hídrica (Jh). (Ver ecuación 1)

$$Sha = f(Jh)$$

(Ecuación 1)

De la ecuación 1, se deduce que a mayor justicia hídrica (Jh) mayor será la seguridad hídrica y alimentaria (Sha). La razón de cambios de la Jh explica la razón de cambios en la Sha. El desarrollo de acciones que deben llevarse a cabo dentro de los campos de la EP y EE explicados anteriormente se presenta en la ecuación 2.

$$Sha = f(\downarrow \text{Despojo}, \downarrow \text{Acumulación}, \downarrow \text{Conflictos} \uparrow \text{Acción social})$$

(Ecuación 2)

**Despojo del agua:** robo de agua con fines de acumulación.

De la ecuación 2, se infiere que la Sha está en función o depende de una reducción en la dinámica de los despojo de agua, disminución de los procesos de acumulación de capital que apropiación y concentran el recurso para el desarrollo de actividades económicas diversas, menor conflictos hídricos, en sus distintas formas; acceso, uso y distribución, y por último un aumento de los dispositivos de acción social a través de mayores movimientos sociales, mayor implementación de estrategias de resiliencia, más producción agroecológica, lo que conduce a una incremento de la autonomía comunitaria

En este contexto y con el ánimo de evidenciar hechos de disputas, no sólo en el bajo Sinú con la sentencia T 194 de la Corte Constitucional<sup>42</sup> sino otras que revelen mayor justicia hídrica, es pertinente mencionar el fallo de la Corte Constitucional<sup>43</sup> en la que reconoce al río Atrato como sujeto de derecho a la protección, conservación y mantenimiento y restauración a cargo del Estado y a las comunidades étnicas, y por tanto, concede “a los actores el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medioambiente sano, a la cultura y al territorio” (p. 141).

No obstante lo anterior, las fuerzas ejercidas por las sentencias judiciales, el activismo de movimientos sociales campesinos e indígenas y los frecuentes conflicto por el agua obligan a las comunidades afectadas a resistirse para hacerle frente a las perturbaciones que les impone el sistema de producción dominante de estirpe capitalista, aumentando la resiliencia comunitaria como una alternativa de solución unilateral a los conflictos por el agua no solo en la cuenca del Sinú sino también en otros latitudes latinoamericanos.

## METODOLOGÍA

Este artículo utiliza un enfoque cualitativo con método de estudios de casos apoyados en las técnicas de revisión de literatura, entrevistas en profundidad y observación. El método de estudio de casos se recomienda para investigar fenómenos socioeconómicos de comunidades y grupos poblacionales<sup>44</sup> lo que permite cuantificar y registrar el comportamiento de personas que hacen parte del fenómeno estudiado a partir de fuentes de información del ámbito cualitativo y cuantitativo, siendo el primero frecuentemente utilizado para investigaciones exploratorias, descriptivas y explicativas<sup>45</sup>. En la tabla 1 se muestran aspectos metodológicos, marco teórico - conceptual y preguntas generales de investigación que orientan la captura de datos.

**Tabla 1.** Marco teórico-conceptual y metodológico que orienta la captura de datos.

Marco teórico	Marco conceptual	Aspectos metodológicos de la investigación		Preguntas de investigación de captura de datos
Economía Ecológica y Ecología Política	Conflictos por el Agua y Resiliencia Comunitaria	Metodología	<b>Cualitativo</b>	¿Qué tipos de conflictos por el agua acontecen en la Ciénaga Grande del bajo Sinú y cuáles son los actores en disputas?
		Método	<b>Estudio de casos</b>	¿Cómo enfrentar las adversidades de inundaciones y sequías recurrentes en el bajo Sinú?
		Técnicas	<b>Revisión de literatura</b>	¿Cómo enfrentar las perturbaciones sociales y ecológicas que surgen de los conflictos por el agua en la Ciénaga Grande del bajo Sinú?
			<b>Entrevistas profundidad</b>	
			<b>Observación</b>	

Fuente: Elaboración propia (2018)

<sup>42</sup> Corte Constitucional. (1999). op. Cit.

<sup>43</sup> Corte Constitucional. (2016). Sentencia T-622. Bogotá: Corte Constitucional de Colombia.

<sup>44</sup> Hakim, C. (2000). Research Design. Succesful Designs for Socal and Economic Research. Londres: Routledge.

<sup>45</sup> Martínez, P. (2006). El método de estudio de caso Estrategia metodológica de la investigación científica. Pensamiento y Gestión, 20, 165–193.

El método de estudios de caso es pertinente para este tipo de investigaciones porque pretenden explorar y comprender la cosmovisión de las comunidades afectadas y las formas de actuación ante un fenómeno concreto que surge de la vida cotidiana, con el uso de técnicas cualitativas como la entrevista en profundidad que obtienen datos narrados de los sujetos a partir de sus explicaciones<sup>46</sup>. En cuanto a las determinaciones de la muestra, se entrevistaron 3 asociaciones de 25 familias en promedio cada una, localizadas en los municipios de Lorica y San Carlos (Colombia), información que después de organizarla, se procesó con el software para el análisis cualitativo Atlas.ti -V8. Además, se revisaron 35 documentos de tipo judicial y científicos relacionados con el tema en el área de estudio y que, junto con la observación participante, facilitó la triangulación de datos.

La investigación se desarrolla en tres momentos. El primero revisa documentos (libros, sentencias judiciales, revistas científicas, informes públicos) de los CpA y la RC. El segundo corresponde al trabajo de campo en el área de estudio, es decir el CGS, con el fin de observar el fenómeno y capturar datos de fuente primaria y hacer entrevistas en profundidad a las comunidades afectadas. El tercer momento corresponde a la organización, codificación y análisis de datos para explicar resultados.

### **CONFLICTOS POR EL AGUA EN EL BAJO SINU**

Después de la segunda mitad del siglo XX en especial a partir de la década de los 60, la CGS experimenta una serie de cambios que comprometen la función de equilibrio y conservación. La presencia del hombre con el desarrollo de actividades económicas y sociales en la cuenca baja, se considera la causa principal de las transformaciones territoriales<sup>47 48 49 50 51</sup>, proceso que da surgimiento a una categoría emergente en esta investigación, denominada presión ambiental, entendida como las acciones de intervención humana, que ejercen fuerza y modifican las condiciones de estabilidad de los recursos naturales. En esta definición se halla oculta la relación sociedad – naturaleza, binomio que expresa una dificultad ecológica, debatido ampliamente en la actualidad, y que es constitutivo de conflictos ambientales.

En este contexto y según la investigación identificó cuatro presiones ambientales que fundamentan las causas principales del deterioro de la CGS y generan los conflictos por el agua en la actualidad, a saber<sup>52</sup>:

1. Ampliación de los límites agrícola y ganadera por tensión de grandes empresarios incita la desecación en el CGS. La agricultura comercial tecnificada y ganadería extensa son las economías de alto impacto ecológico sobre el ecosistema lagunar. En primer lugar, las tecnologías utilizadas para el aprovechamiento del suelo, genera decaimiento de la membrana productora y, segundo por el contagio de aguas producto de los derramamientos de despojos sólidos y líquidos que se vierten de estas actividades. Existen alteraciones a los humedales cercanos, que es considerablemente sensible a transformaciones de la ecología terrestre de la cuenca generando daños irreversibles<sup>53 54 55</sup>.
2. Retención del agua por hidroeléctrica Represa Urrá I estimula la alteración del caudal natural del río Sinú. El funcionamiento de la hidroeléctrica Urrá I en el año 2000, representa el fenómeno notable por modificar

---

<sup>46</sup> Castro, A. (2012). Familias rurales y sus procesos de transformación: estudio de casos un escenario de ruralidad en tensión. *Psicoperspectivas*, 11(1), 180–203.

<sup>47</sup> Corte Constitucional. (1999). op. Cit.

<sup>48</sup> Defensoría del pueblo. (2007). op. Cit.

<sup>49</sup> Defensoría del pueblo. (2009). Segundo informe de seguimiento a la resolución defensorial No. 38 sobre el estado de la cuenca del río Sinú. Bogotá: Defensoría del Pueblo.

<sup>50</sup> Ortiz, C.; Pérez, M. y Muñoz, I. (2007). Op. Cit.

<sup>51</sup> Roa, T. (2009). Heridas en el territorio. *Biodiversidadla.Org*, 1–11.

<sup>52</sup> Sepulveda, R.D. (2015). Conflictos socioambientales en la cuenca baja del río Sinú, Colombia. *Revista Direitos Emergentes Na Sociedade Global*, 4(1), 23–43. <https://doi.org/10.5902/23163054>.

<sup>53</sup> Corte Constitucional. (1999). op. Cit.

<sup>54</sup> Defensoría del pueblo. (2007). op. Cit.

<sup>55</sup> IDEAM, [Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales]. (1998). Humedal del valle del río Sinú. Bogotá: IDEAM.

la hidrología de la cuenca del Sinú. El dominio de la presa a un régimen pulsativo en diferentes horas y fechas induce a movimientos fuertes en la dinámica hídrica, hecho que redundo en la vida de las especies bióticas locales, incremento de procesos erosivos y acumulación de sedimentos, lo cual dificulta el intercambio de aguas del río con los humedales y la CGS<sup>56 57</sup>. Otro efecto es la disminución de la reproducción natural de la especie reofilica del bocachico<sup>58</sup> que por cambios en la hidrología de la cuenca al entrar en operación de la represa URRÁ I, altera las condiciones de desove y por tanto el ciclo de vida<sup>59 60</sup>.

3. Obra civil carretera Montería – Loricca impide el flujo y reflujo de aguas del río Sinú con humedales mayores y menores.

La disminución de la dinámica hídrica a lo largo de la cuenca del Sinú ha impactado en la firmeza de los humedales en todo el bajo Sinú por causa de la obstrucción que generó la construcción de la carretera Montería – Loricca en el año 1957. Lo anterior se le añade la obra de un terraplén en el área de las Palomas en 1994, lo que impidió el curso natural de derrame del río, función de regulación que históricamente se hacía sobre la margen izquierda de la cuenca<sup>61</sup>.

4. Vertimiento de desechos sólidos, aguas residuales domésticas y de actividades agropecuarias, contaminan fuentes de agua.

Una forma de polución en la CGS se origina por el inconveniente vertimiento de desechos sólidos y líquidos de origen familiar, así como el de las acciones agrícolas y ganaderas de grandes empresarios que se desarrollan en las zonas bajas de la cuenca del Sinú<sup>62 63 64</sup>.

Desde esta perspectiva el problema de investigación que se plantea es el limitado uso y acceso al agua en la CGS producto de las presiones ambientales nacidas en diferentes contextos temporales desde la década de los sesenta. Al respecto Rubén Sepúlveda afirma que

Un problema, es el estado negativo de un fenómeno visto desde una perspectiva histórica, presente o futura. Por lo tanto, un problema ambiental es posterior a la presión ambiental y anterior al conflicto socioambiental. Un problema ambiental no necesariamente debe generar un conflicto socioambiental, pero una presión sí genera problemas ecológicos (Sepúlveda: 2015, p. 27)<sup>65</sup>

Al respecto Folchi<sup>66</sup> indica que una controversia ambiental es cuando un individuo o comunidad, externa o local, altera la permeancia histórica entre un grupo poblacional y su entorno natural, afectando el equilibrio ecológico y por tanto sus condiciones de vida, generando disputas entre actores sociales por afectación del recurso natural. En la CGS los conflictos socioambientales y en especial los conflictos por el agua, acontecen de forma sorprendente desde la década de los años 2000.

En la figura 4 se muestra las presiones ambientales surgidas desde la década de los años 60 hasta el 2000, fundamentos que permiten explicar las dificultades ambientales y el problema específico de investigación; que es el limitado acceso y uso al agua en la CGS. Con base en esto se describen las causas

---

<sup>56</sup> Corte Constitucional. (1999). op. Cit.

<sup>57</sup> CVS. Op. Cit.

<sup>58</sup> Roa, T. y Duarte, B. (2013). Desarrollo hidroeléctrico, despojo y transformación territorial: el caso de Hidrosogamoso, Santander, Colombia.: En *Aguas Robadas, despojo hídrico y movilización social*. (R. Arroyo, Aline y Boelens, Ed.) (Primera Ed). Quito.

<sup>59</sup> Roa, T. (2009). Op. Cit.

<sup>60</sup> Rodríguez, C. y Orduz, N. (2012). *Adiós río: la disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa URRÁ*. (Dejusticia). Bogotá.

<sup>61</sup> IDEAM, op. Cit.

<sup>62</sup> Corte Constitucional. (1999). Op. Cit.

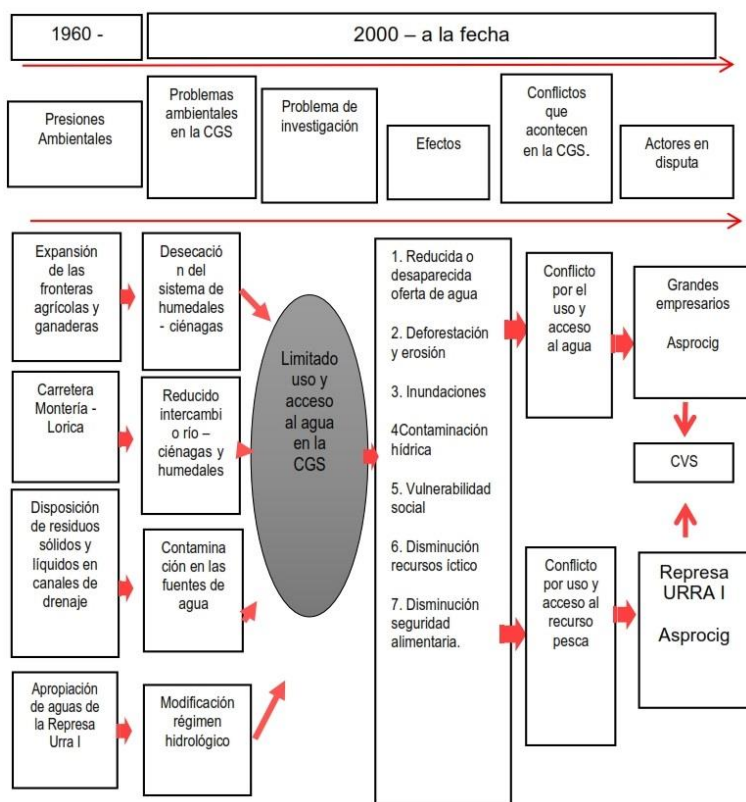
<sup>63</sup> Defensoría del pueblo. (2007). Op. Cit.

<sup>64</sup> Defensoría del pueblo. (2009). Op. Cit.

<sup>65</sup> Sepúlveda, R.D. Op. Cit.

<sup>66</sup> Folchi, M. (2001). Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas. *Ecología Política*, 22.

y los efectos que dan origen a dos tipos de disputas hoy en la CGS; conflictos por uso y acceso al agua y a la pesca. Estos nacen de presiones ambientales todas ellas de origen antrópico que datan de la década de los años sesenta y generan alteraciones tanto en el sistema social como en el ecológico.



**Figura 4:** El problema de investigación, conflictos ambientales y actores en disputa.

Fuente: Elaboración propia (2014).

El agua es un elemento natural que puede tener diferentes interpretaciones y significados. Esas posiciones divergentes son a menudo generadoras de conflictos socioambientales que incitan a movilizaciones sociales para oponerse o resistirse a las formas de uso y manejo. Son varios los hechos sorprendentes actuales, entiéndase como presiones ambientales, que explican las disputas entre distintos actores en las CGS. La construcción de hidroeléctricas, la ampliación de las fronteras ganaderas y de agricultura comercial, las obras civiles de gran tamaño en medio de ecosistemas estratégicos y la contaminación hídrica.

El estado de deterioro de las CGS fue motivo de protestas y movilizaciones sociales por parte de las comunidades locales, las cuales obligaron a las instancias legislativas<sup>67</sup> y de control público<sup>68</sup> resolver a través de sentencias y resoluciones medidas que revocan, ordenan y comunican sobre los hechos históricos

<sup>67</sup> Corte Constitucional. (1999). Op. Cit.

<sup>68</sup> Defensoría del Pueblo. (2005). Estado Actual de la Cuenca Media y baja del Sinú. Bogotá: Defensoría del Pueblo.

sociales y políticos que comprometen la estabilidad del complejo lagunar. La presencia de grupos económicos con poder político, han contribuido al proceso de desecación de la CGS y humedales circundantes, a través de la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas, donde se construyen camellones y terraplenes para el acaparamiento de tierras al interior de esta<sup>69</sup>, generando vertimiento de residuos agroquímicos que comprometen la calidad del agua<sup>70</sup>.

Desde la década de los años 60, se configuran hechos que cambian las condiciones de estabilidad ecológica de la cuenca del río Sinú y de la CGS, como fue; el proceso de adjudicación de tierras baldías lideradas por el INCORA (Ley 135 de 1961)<sup>71</sup> que consolidó la visión de un modelo seco y favoreció la desecación de humedales para actividades agrícolas y ganaderas; la obra civil carretera Montería – Loricá en 1957 que taponó los principales canales que servían de flujo en el intercambio de aguas entre los humedales – y el río; y por último, el inicio del conflicto armado en el alto Sinú en 1970, con la presencia del Ejército de Liberación Nacional -ELN en busca del control territorial, lo cual incitó a confrontaciones con diversos grupos armados ilegales y consecuentemente el desplazamiento forzoso de comunidades indígenas Emberá – katíos.

### **RESILIENCIA COMUNITARIA: EL CASO DE ASOCIACIÓN ASPROCIG**

La situación de degradación del sistema de humedales antes expuesto, incitó a la sociedad civil enfrentar diversos tipos de adversidades apoyándose en el uso de categorías conceptuales como son resistencia y la resiliencia, dispositivos sociales de protección y reclamo de justicia ambiental que fundamentan el surgimiento y organización de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga del bajo Sinú – Asprocig -, espacio político donde que debate el desarrollo sustentable desde una mirada alternativa, criticando las dinámicas económicas contemporáneas por perturbar las condiciones de estabilidad del complejo cenagoso y la seguridad alimentaria de éstos pueblos.

Asprocig surge en el año 1987<sup>72</sup>, municipio de Loricá, departamento de Córdoba, cerca del perímetro del CGS. Es una organización comunitaria de base, organizada por campesinos, pescadores e indígenas que reúnen 6.200 familias en 2.332 áreas de predios (hectáreas)<sup>73</sup>. Su modelo de desarrollo rural territorial busca el rescate de la cultura ancestral Zenú<sup>74</sup>, en relación con la gestión del agua para actividades agrícola, el manejo integral de humedales locales, el impulso de la producción agroecológica y la capacitación / administración de proyectos de comunitarios.

El modelo se fundamenta en principios de la no violencia (resistencia pacífica), autonomía, solidaridad, resiliencia, adaptabilidad, cooperación y sostenibilidad. Es una apuesta a la vida y la necesidad de consolidar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de bienestar de las comunidades y la conservación de los recursos naturales de la región, en especial al hídrico<sup>75</sup>

La propuesta de desarrollo rural territorial de las comunidades locales se fundamenta en la sabiduría ancestral, en especial el conocimiento en el manejo del agua. Para Asprocig, transformar los problemas

<sup>69</sup> Negrete, V. y Galeano, J. (2005). Desaparición y reducción de los humedales en los municipios de Montería, Cereté y San Pelayo. Montería: Agenda ciudadana del medio ambiente

<sup>70</sup> Lans, E; Marrugo, J. y Díaz, B. (2008). Estudio de la contaminación por pesticidas organoclorados en aguas de la Ciénaga Grande del Valle Bajo del río Sinú. Temas Agrarios, 13(76), 49–56.

<sup>71</sup> Negrete, V. y Galeano, J. Op. Cit.

<sup>72</sup> ASPROCIG, [Asociación de productores para el desarrollo comunitario de la Ciénaga Grande del bajo Sinú]. (2006). Diez Años De Camino: experiencias por la defensa de la cultura y el territorio de la cuenca baja del río Sinú. Bogotá: Censat Agua Viva.

<sup>73</sup> CORSOC, [Corporación para el desarrollo rural comunitario]. (2016). Posibilidades de implementar en Córdoba los acuerdos sobre desarrollo rural territorial firmados entre el gobierno nacional y la FARC EP. Montería: Editorial siglo 21 Litografía.

<sup>74</sup> Galeano, J. (1998). Algunos elementos sobre la formación de la cultura Cordobesa: En Urabá, conflictos y educación rural. (I. Negrete, V. Negrete, F. Galeano, J. y Berrocal, Ed.). Montería: Editorial Universidad del Sinú. El autor indica que en el "plano cultural se hace imperiosa la valoración y la organización sistemática de todo este conocimiento, vivencias y experiencias acumuladas del hombre cordobés en su trasegar por la historia y la geografía de este departamento. Esto nos ayudaría en la búsqueda de nuestros pasos perdidos.

<sup>75</sup> ASPROCIG. Op. Cit.

ambientales que atentan contra el complejo cenagoso del bajo Sinú, es necesario recuperar las prácticas de la cultura prehispánica Zenú, siendo esta la apuesta más relevante frente a la crisis ecológica actual. Al respecto indica Ortiz, C.; Pérez, M. y Muñoz<sup>76</sup>

El caso de Asprocig refleja con claridad las posibilidades de intervención en la problemática por parte de la comunidad, pues han alcanzado importantes logros en la transformación de conflictos ambientales como la recuperación de caños sedimentados, el retorno de población desplazada, la protección del estuario de la bahía de Cispatá, la protección de ciénagas, la promoción de la agricultura orgánica y, mediante la protesta pacífica, la detención de obras de infraestructura que pueden afectar el delta del Sinú. (Ortiz, et., al: 2007, p. 111).

La historia de Asprocig se puede dividir en cuatro momentos<sup>77</sup>; el primero de 1990 – 1994 se caracteriza por el comienzo y reorganización de la asociación; el segundo de 1995 – 1998 que explica las luchas por la defensa del territorio y la cultura; el tercero de 1999 – 2000 período en el cual se adquieren fortalezas políticas y económicas para avanzar con la misión institucional. En esta época se resaltan dos hechos importantes de tipo social y jurídico, la resistencia frente a la Represa URRÁ I y la acción de tutela que se interpone ante la Corte Constitucional en 1999, con fallo a favor. En lo económico, se desarrollan los programas de agricultura ecológica y acuicultura alternativa que más adelante se consolidan como sistemas agroecológicos familiares y colectivos, de gran impacto en la comunidad; y el cuarto de 2001 – 2004, por la fuerte oposición en la ejecución de la hidroeléctrica, el desarrollo de la industria camaronera y construcción de 15 canales de riego en toda la cuenca del río Sinú.

Estos últimos hechos ejercidos por el Estado y el sector privado, estimula a la asociación establecer respuestas de dos tipos: reorganización territorial, que busca la cohesión de comunidades en la defensa de la cultura y el territorio, y la creación de una metodología de trabajo que articule lo político, administrativo y lo espacial, enmarcado en un proceso de descentralización y crecimiento organizacional.

El interés decidido por articular los sistemas sociales y ecológicos se fundamenta en la recuperación del conocimiento ancestral Zenú, en especial en lo concerniente al manejo de los cuerpos de agua en periodos de invierno y sequía. En este sentido, Asprocig ha diseñado y ejecutado dos sistemas agroecológicos, de gran impacto en el bajo Sinú en las últimas dos décadas que promueven saberes sociales alternativos y emancipadores<sup>78</sup>.

El primero, son los Sistemas Agroecológicos Biodiversos Familiares (en adelante ABIF) que opera en el hogar de cada afiliado concebido como un proyecto de la familia que involucra a todos los miembros y participan en la búsqueda de objetivos de seguridad alimentaria y generación de excedentes para comercializar. El segundo, son los Sistemas Agroecológicos de Diques Altos (en adelante SADAS) que reúne a varias familias y conforman una asociación autónoma adscrita a la organización central (Asprocig) que enfoca sus esfuerzos a la producción agrícola y piscicultura apoyados en la tecnología prehispánica.

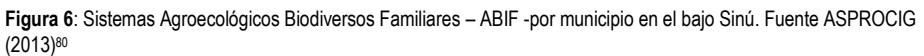
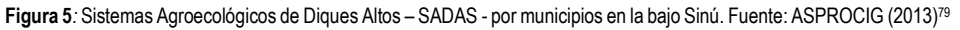
Ambos sistemas agroecológicos priorizan dos elementos fundamentales; primero, producir para garantizar la seguridad alimentaria en las familias y comunidades circundantes asociadas o no, y segundo, los excedentes de producción, comercializarlos en el mercado de Lórica en las instalaciones de Asprocig. De esta manera cada familia, a través de los ABIF o de los SADAS, cubre sus necesidades básicas de alimentación y obtiene recursos monetarios por la venta de productos, naciendo el concepto de los agroecosistemas con enfoque empresarial. En la figura 5 y 6 se muestran los SADAS y ABIF por municipios donde Asprocig tiene presencia.

<sup>76</sup> Ortiz, C.; Pérez, M. y Muñoz, I. (2007). Op. Cit.

<sup>77</sup> ASPROCIG. Op. Cit.

<sup>78</sup> ASPROCIG. Op. Cit.





Para el caso de los ABIF, todas deben cumplir la característica principal de ser policultivos, y este se logra con la organización de especies vegetales y animales. Un agroecosistema familiar en promedio tiene un área de 120 mts<sup>2</sup> incluyendo el área de la casa. Los vegetales se clasifican en seis (6) tipos que contiene de 80 a 120 variedades de plantas que son resistentes a sequías e inundaciones.

<sup>80</sup> ASPROCIG. (2013). Op. Cit.

Las ornamentales (ejemplo flores), hortalizas (ej.: tomate), medicinales (ej.: jengibres, orégano), frutales (ej.: guayaba, papaya), productoras / protectoras (ej.: roble, guacamayo) y las energéticas (ej.: yuca, plátano). Las especies animales se clasifican en cultivos de peces en piscinas de diferentes medidas (ej.: rectangular de 3 x 6 mts) que puede albergar hasta 800 unidades de tilapia, cachama o bocachico para ser capturados con peso promedio de 400 gramos por unidad. Puede existir también aves de corral, cerdos, entre otras.

Por su parte los SADAS, además de ser policultivos, se construyen en diques altos o camellones para el control de las inundaciones y del desarrollo de cultivos. Este tipo de agroecosistemas colectivos, se cimientan apoyados en las formas de organización de manejo del agua y del territorio utilizados por los Zenúes.

La actividad principal es la pesca en estanques de diferentes medidas, para el levante de larvas, producción de alevinos y engorde de alta y baja densidad con peso promedio de 400 a 500 gramos por unidad. En un estanco de alta densidad puede producir hasta 15.000 Kg de cachamas, tilapias y bocachico por trimestre, es decir 30.000. Un estanco grande puede medir hasta 5 hectáreas (50.000 mts<sup>2</sup>) y en promedio en un SADAS hay 6 estanques de engorde lo cual representa una producción trimestral de 180.000 unidades.

De lo producido, primero se le vende a los asociados y comunidad local a un precio promedio de \$5,000 Kg, para luego ser vendido en el mercado de Lórica a \$8,000 Kg, con un margen de ganancia para el asociado de \$3,000 Kg. En la actualidad todos los SADAS están en un proceso de mejoramiento para elevar la productividad de peces por estanques, para ello se están adecuando con geomembranas y reducir el nivel de filtración de aguas a través de la instalación de paneles solares para hacerlos más autosuficiente y sustentables. Al interior cada SADAS existen en la parte alta de los camellones, las seis (6) especies vegetales descritas anteriormente, donde cada familia miembro de la asociación, accede a una parte de la tierra para que cultive y a su vez participe en las acciones colectivas de estos agroecosistemas. En la tabla 2 se muestra la producción de todos los SADAS y ABIF adscritos a Asprocig para el año 2016.

**Tabla 2.** Niveles de producción y resultados financieros de los sistemas agroecológicos familiares y colectivos de Asprocig

Asociación / Familias (#)	Producción del Agroecológico Colectivo (SADAS)			Producción del Agroecológico Familiar (ABIF)		
	Año		2016	Año		2016
Asociaciones actuales: 96  Familias actuales: 6200 representadas en: 32.596 personas	Número de estanques piscícolas		95	Número de piscinas piscícolas		66
	Cosecha de peces (Kg)		104.550	Cosecha de peces familiar (Kg)		4.614
	Cultivos biodiversos Colectivos (Kg)		61.200	Cultivos biodiversos familiares (Kg)		896.000
	Ingresos SADAS por venta de peces	Costos de venta SADAS por cultivos biodiversos	Utilidad bruta del agroecológico colectivo	Ingresos ABIF por venta peces	Costos de venta ABIF por cultivos biodiversos	Utilidad bruta de los agroecológicos familiares
	\$892.350.000	\$490.792.500	\$401.557.500	\$ 32.303.250	\$11.306.138	\$20.997.113

Fuente: Elaboración propia (2017).

Para el año 2016 Asprocig contaba con 96 asociaciones que comprende 6.200 familias, todas ellas orientan sus esfuerzos de forma cooperante y participativa en la producción agroecológica tipo ABIF y sólo 19 para los SADAS. Para el primero, los resultados operacionales dan cuenta de la sostenibilidad financiera, al registrar un guarismo del 44,9% de utilidad sobre venta, lo cual indica que por cada \$100 pesos de ingresos recibidos, \$44,9 son ganancias. Por su parte los segundos, registraron un indicador del 65%.

La explicación del porqué estos agroecosistemas son tan rentables, se explica por el mínimo costo laboral

que incurren cada sistema, pues se mencionó antes, los miembros de cada familia son los que aportan trabajo a cambio de garantizar seguridad alimentaria y generar ingresos por la venta de excedentes de producción. Además, estos modelos de organización socioeconómica trabajan con valores que no incitan a la competencia sino a la cooperación donde la finalidad no es lo crematístico. Para Asprocig el fortalecimiento de estos esquemas de desarrollo rural será de gran impacto social y ambiental en los próximos años. En la tabla 3 se describe las capacidades institucionales de la organización proyectada para el año 2021.

**Tabla 3:** Niveles de producción y resultados financieros proyectados de los sistemas agroecológicos familiares y colectivos de Asprocig.

Asociación / Familias (#)	Producción del Agroecológico Colectivo (SADAS)			Producción del Agroecológico Familiar (ABIF)		
	Año		2016	Año		2016
Asociaciones actuales: 96  Familias actuales: 6200 representadas en 32.596 personas	Número de estanques piscícolas		95	Número de piscinas piscícolas		66
	Cosecha de peces (Kg)		104.550	Cosecha de peces familiar (Kg)		4.614
	Cultivos biodiversos Colectivos (Kg)		61.200	Cultivos biodiversos familiares (Kg)		896.000
	Ingresos SADAS por venta de peces	Costos de venta SADAS por cultivos biodiversos	Utilidad bruta del agroecológico o colectivo	Ingresos ABIF por venta peces	Costos de venta ABIF por cultivos biodiversos	Utilidad bruta de los agroecológicos familiares
	\$892.350.000	\$490.792.500	\$401.557.500	\$ 32.303.250	\$11.306.138	\$20.997.113

Fuente: Elaboración propia (2017).

Proyectado al año 2021 Asprocig aspira contar con 106 asociaciones que reunirá 8.320 familias equivalente a 41.600 personas. Los SADAS registraran un indicador de utilidad sobre ventas del 52%, mientras que los ABIF un 70%, los cuales muestran una mejoría notable con respecto al año 2016.

Las principales acciones a desarrollar para alcanzar los logros de producción y resultados financieros son: la integración y fortalecimiento de las capacidades de la familia en los SADAS y ABIF con enfoque empresarial, aumento de los ingresos familiares y mejoramiento de la calidad de vida, motivación e incorporación de nuevos miembros en la implementación de agroecosistemas biodiversos, mayor autonomía local y defensa del territorio, incremento de alianzas con instituciones educativas primarias, secundarias y de niveles superiores para la investigación, ampliación de sistemas de energías sustentables (solar), protección de recursos naturales frente a intereses de privatización y expoliación y, manejo sustentable del sistema de humedales en la cuenca baja.

En este sentido, para Asprocig (2006) la defensa por el agua y el territorio y el desarrollo de actividades agroecológicas, son la más notable fuente de aprendizaje en las organizaciones de base que trabajan por el impulso comunitario. Ello permite obtener un producto consistente y sustentado, a partir del cual es posible transmitir la experiencia construida, confrontarla con otras y contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y hacia la práctica, que se edifica desde un escenario socioecológico.

## CONCLUSIONES

Los conflictos por el agua que ocurren en el CGS se generan por presiones ambientales que provienen principalmente de actividades socioeconómicas y no la dimensión ambiental. La presencia del hombre con la instauración de la ganadería y agricultura extensiva y la construcción de la represa URRÁ I, son los fenómenos que explican las disputas hídricas. El limitado uso y acceso al agua en el CGS es el problema que suscita controversias por dos razones, primero por restringir su consumo y segundo por alterar las condiciones de naturales de acceso a la pesca. Por tanto, lo que acontece es negar a las comunidades locales el derecho de acceso al agua para sus necesidades vitales y el acceso a oportunidades de trabajo a través de la pesca.

Con base en lo anterior, la noción del conocimiento propio que surge en las comunidades como factor de acumulación social de poder, es el resultado de un conjunto de prácticas sociales y ecológicas que resultan de fusionar las acciones de resiliencia comunitaria y los sistemas agroecológicos familiares (ABIF) y colectivos (SADAS).

Estas epistemologías se construyen para fortalecer el bienestar de la organización y contrarrestar los conflictos por el agua, es decir, se muestran como una posible salida o punto de escape a las controversias hídricas con la recuperación del conocimiento ancestral Zenú a través del trabajo colectivo y cooperación mutua. En este sentido nos referimos a otros saberes, no propios del sistema dominante local, que son diversas formas de pensar y actuar en favor del acercamiento sociedad – naturaleza, requerido hoy de forma urgente.

Las prácticas cotidianas no sólo se ejecutan para sistematizar conductas colectivas de resistencia a las formas de producción capitalista como el sistema de monocultivo, sino también para fomentar un modo alternativo de producir con orientación agroecológica.

Se hace referencia a colectividades que se caracterizan por un ethos comunitario para construir autonomía local, esencial para desafiar poderes del mercado y el Estado neoliberal<sup>81</sup>, que cuestionan la idea de democracia monovalente<sup>82</sup>, de tal manera que, fortaleciendo la independencia, los hace más resilientes y menos vulnerable. En este contexto se estimula el empoderamiento comunitario para despertar el poder local por los bienes comunales esenciales, entre ellos el agua. Para el caso de Asproci el conocimiento propio sirve de fundamento para el diseño e implementación de acciones de resiliencia comunitaria en la gestión sostenible de suelo, agua y especies, rescate de conocimiento ancestral Zenú, fortalecimiento núcleo familiar y seguridad alimentaria.

Comprenden la importancia de operar con sistemas socioecológicos (ABIF o SADAS) de trascendencia adaptables al entorno ecológico, que se analizan a diferentes escalas (temporal y espacial) y los reconstruyen históricamente acorde a la evolución del sistema para entender su funcionalidad, de tal manera que las soluciones que se propongan al fenómeno de conflictos por el agua se hagan como lo indica Glaser et al., (2008) desde una perspectiva dinámica, compleja y en contextos específicos.

Desde esta perspectiva los sistemas socioecológicos adquieren la capacidad de resistir a un shock y mantener su estructura y funcionalidad, y por tanto su identidad. Es lo que se denomina resiliencia del sistema, noción relevante para los asociados en Asproci frente al fenómeno disputas por el agua. En este sentido hablamos de un proceso evolutivo, que comprende cuatro etapas, a saber; crecimiento, conservación, liberación y reorganización, y que, al completar el proceso, la diferencia entre el punto de partida y el punto de llegada no registra variación significativa<sup>83</sup>.

<sup>81</sup> Fuente, M. (2012). La comunalidad como base para la construcción de resiliencia social ante la crisis civilizatoria. *Polis*, 33, 16.

<sup>82</sup> Villalobos, J.V.; Ramírez, R. I. y Díaz-Cid, L. (2019). Bioética y biopoder: Perspectivas para una praxis pedagógica desde la ética de Álvaro Márquez-Fernández. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 24(87), 65–77. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.3463783>.

<sup>83</sup> Walker, B.H.; Gunderson, L.H.; Kinzig, A.P.; Folke, C.; Carpenter, S.R. y Schultz, L. (2006). A handful of heuristics and some propositions for understanding resilience in socioecological systems. *Ecology and Society*, 11(13).

Lo que se observa en las categorías resiliencia comunitaria y sistemas socioecológicos, es una reclamación ontológica y epistemológica para repensar otras formas de vida de hombre nuevo<sup>84</sup> y de desarrollo que recuperen el vínculo hombre – naturaleza con miras a una verdadera sustentabilidad socioeconómica y ecológica. Es decir, la resiliencia comunitaria de Asprocig promete un modelo de gobierno comunitario compatible con lo ecológico y necesario para mitigar los cambios ambientales globales y locales de creciente irreversibilidad.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- ALVATER, E. (2006). Informalidad política, globalización y resistencia civil. Buenos Aires: Revista Herramienta No.31.
- ALVATER, E (2007). ¿Existe un Marxismo Ecológico? CLACSO, 358–385.
- ARROYO, V. (2017). La paradoja de la escasez de agua en América Latina. América Economía.
- ASPROCIG, [Asociación de productores para el desarrollo comunitario de la Ciénaga Grande del bajo Sinú]. (2006). Diez Años De Camino: experiencias por la defensa de la cultura y el territorio de la cuenca baja del río Sinú. Bogotá: Censat Agua Viva.
- ASPROCIG. (2013). Desarrollo rural territorial. Loric: Archivos de Asprocig
- ÁVILA, P. (2002). Cambio Global Y Recursos Hídricos En México: Hidropolítica Y Conflictos. México.
- CASTRO, A. (2012). Familias rurales y sus procesos de transformación: estudio de casos un escenario de ruralidad en tensión. Psicoperspectivas, 11(1), 180–203.
- CVS, [Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge]. (2008). Plan de gestión ambiental regional - PGAR: 2008 - 2019. Montería: Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS.
- CORSOC, [Corporación para el desarrollo rural comunitario]. (2016). Posibilidades de implementar en Córdoba los acuerdos sobre desarrollo rural territorial firmados entre el gobierno nacional y la FARC EP. Montería: Editorial siglo 21 Litografía.
- CORTE CONSTITUCIONAL. (1999). Corte Constitucional Sentencia T-194-99. Bogotá: Corte Constitucional de Colombia.
- CORTE CONSTITUCIONAL. (2016). Sentencia T-622. Bogotá: Corte Constitucional de Colombia.
- DALY, H. (1992). Economía ecológica y desarrollo Sustentable. Revista Documentación Social Estudios Sociales y Sociología Aplicada, 89, 85–107.
- DEFENSORIA DEL PUEBLO. (2005). Estado Actual de la Cuenca Media y baja del Sinú. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- DEFENSORIA DEL PUEBLO. (2007). Resolución defensorial No. 38 sobre el estado media y baja del Sinú. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- DEFENSORIA DEL PUEBLO. (2009). Segundo informe de seguimiento a la resolución defensorial No. 38 sobre el estado de la cuenca del río Sinú. Bogotá: Defensoría del Pueblo.

---

<sup>84</sup> Peredo, B.E. (2019). Antropoceno y Biopolítica: Narrativas, resistencias y nuevas epistemologías ante el avance de la frontera extractivista en la Bolivia del Siglo XXI. Utopía y Praxis Latinoamericana, 24(84), 56–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2653166>.

- FOLCHI, M. (2001). Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas. *Ecología Política*, 22.
- FOUCAULT, M. (1979). *Microfísica del poder*. (F. Varela, Julia. Alavrez - Uria, Ed.) (Segunda Ed). Madrid.: Ediciones de la Piqueta.
- FUENTE, M. (2012). La comunalidad como base para la construcción de resiliencia social ante la crisis civilizatoria. *Polis*, 33, 16.
- GALEANO, J. (1998). Algunos elementos sobre la formación de la cultura Cordobesa: En Urabá, conflictos y educación rural. (I. Negrete, V. Negrete, F. Galeano, J. y Berrocal, Ed.). Montería: Editorial Universidad del Sinú.
- GLASER, M.; KRAUSE, G.; RATTER, B., y MARTIN, W. (2008). Human/Nature Interaction in the Anthropocene. *Gaia*, 17(1), 77–80.
- GLEICK, P. (1993). Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security. *International Security*, 18(1), 79–112. <https://doi.org/10.2307/2539033>.
- GLEICK, P. (1994). Amarga agua dulce: Los conflictos por recursos hídricos. *Ecología Política*, 85–106.
- GOMEZ, L.J. (1997). Las raíces teóricas del conflicto economía y ecología y algunos desarrollos posteriores. *Ensayos de Economía*, 7, 102–121.
- GOMEZ, L.J. (1999). La entropía y sus relaciones con la economía y la ecología. *Ensayos de Economía*, 9, 9–27.
- GORZ, A. (1977). *Misericordias de lo presente, riqueza de lo posible*. (Paidós). Buenos Aires.
- HAKIM, C. (2000). *Research Design. Successful Designs for Social and Economic Research*. Londres: Routledge.
- IDEAM, [Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales]. (1998). *Humedal del valle del río Sinú*. Bogotá: IDEAM.
- JARAMILLO, E.T. (2019). Fluid kinship: Race, power, and the hydrosocial order of water flow along New Mexico's acequias. *Environment and Planning D: Society and Space*, (January 2015), 1–18. <https://doi.org/10.1177/0263775819879719>.
- LANS, E; MARRUGO, J. y DIAZ, B. (2008). Estudio de la contaminación por pesticidas organoclorados en aguas de la Ciénaga Grande del Valle Bajo del río Sinú. *Temas Agrarios*, 13(76), 49–56.
- LEFF, E. (2014). *Epistemologías del sur para germinar alternativas al desarrollo* (Seminario Latinoamericano). Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, Abril 29 y 30.
- MARTÍN, L. y JUSTO, J. B. (2015). Análisis, prevención y resolución de conflictos por el agua en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL- Serie Recursos Naturales e Infraestructura.
- MARTINEZ-ALIER, J. (2004). Los conflictos ecológico- distributivos y los indicadores de sustentabilidad. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica (REVIBEC)*, 1, 21–30. <https://doi.org/10.4000/polis.5359>.
- MARTINEZ-ALIER, J.; KALLIS, G.; VEUTHEY, S.; WALTER, M., y TEMPER, L. (2010). Social Metabolism, Ecological Distribution Conflicts, and Valuation Languages. *Ecological Economics*, 70, 153–158. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.09.024>.
- MARTINEZ, P. (2006). El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica. *Pensamiento y Gestión*, 20, 165–193.

- MUSSETTA, P. (2010). Los Conflictos por Agua en América Latina Mayo 2010. Centro de Estudios y Programas Interamericanos - CEPI, (23).
- NEGRETE, V. y GALEANO, J. (2005). Desaparición y reducción de los humedales en los municipios de Montería, Cereté y San Pelayo. Montería: Agenda ciudadana del medio ambiente.
- OCAMPO, G. (2007). La instauración de la ganadería en el valle del Sinú: la hacienda Marta Magdalena, 1881 – 1956. Medellín: Universidad de Antioquia.
- ORTIZ, C.; PÉREZ, M. y MUÑOZ, L. (2007). Los cambios institucionales y el conflicto ambiental: el caso de los valles del río Sinú y San Jorge. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- PEREDO, B.E. (2019). Antropoceno y Biopolítica: Narrativas, resistencias y nuevas epistemologías ante el avance de la frontera extractivista en la Bolivia del Siglo XXI. UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA, 24(84), 56–67. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.2653166>.
- PLAZAS, C. y FALCHETTI, A. (1990). Manejo hidráulico Zenú. Ingenierías Prehispánicas. Bogotá: Fondo FEN. Instituto Colombiano de Antropología.
- POLANYI, K. (1989). La gran transformación: crítica del liberalismo económico. Madrid.: Ediciones la Piqueta - Endymion.
- POWELL, N.; LARSEN, R. K.; BRUIN, A.; POWELL, S. y ELRICK-BARR, C. (2017). Water security in times of climate change and intractability: Reconciling conflict by transforming security concerns into equity concerns. Water (Switzerland), 9(12). <https://doi.org/10.3390/w9120934>.
- ROA, T. y DUARTE, B. (2013). Desarrollo hidroeléctrico, despojo y transformación territorial: el caso de Hidrosogamoso, Santander, Colombia.: En Aguas Robadas, despojo hídrico y movilización social. (R. Arroyo, Aline y Boelens, Ed.) (Primera Ed). Quito.
- ROA, T. (2009). Heridas en el territorio. Biodiversidadla.Org, 1–11.
- RODRIGUEZ, C. y ORDUZ, N. (2012). Adiós río: la disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa URRÁ. (Dejusticia). Bogotá.
- SCHMIDT, A. (2013). Para un materialismo ecológico. Utopía y Praxis Latinoamericana, 61, 11-23.
- SEPULVEDA, R.D. (2015). Conflictos socioambientales en la cuenca baja del río Sinú, Colombia. Revista Direitos Emergentes Na Sociedade Global, 4(1), 23–43. <https://doi.org/10.5902/23163054>.
- CVS, [Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge]. (2006). Plan de Manejo y Ordenamiento Ambiental del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú. Montería: CVS.
- USÓN, T.J.; HENRÍQUEZ, C. y DAME, J. (2017). Disputed water: Competing knowledge and power asymmetries in the Yali Alto basin, Chile. Geoforum, 85(July), 247–258. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.07.029>.
- VEGA, R. (2006). Imperialismo ecológico. El interminable saqueo de la naturaleza y de los parias del sur del mundo.
- VILLALOBOS, J.V.; RAMÍREZ, R. I. y DIAZ-CID, L. (2019). Bioética y biopoder: Perspectivas para una praxis pedagógica desde la ética de Álvaro Márquez-Fernández. UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA, 24(87), 65–77. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.3463783>.
- WALKER, B.H.; GUNDERSON, L.H.; KINZIG, A.P.; FOLKE, C.; CARPENTER, S.R. y SCHULTZ, L. (2006). A handful of heuristics and some propositions for understanding resilience in social, ecological systems. Ecology and Society, 11(13).

WOLF, E. (1973). Las luchas campesinas del siglo XX. Madrid: Editorial Siglo XXI.

ZUBERMAN, F. (2013). El aporte del pensamiento de Karl Polanyi a la cuestión ambiental. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 21, 57–70.

## BIODATA

**Rubén Darío SEPULVEDA VARGAS:** Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Magister en economía, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, Magister en educación ambiental del Instituto de Investigaciones Ambientales, España. Doctor en ciencias sociales, Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Colombia. Docente de pregrado y posgrado en instituciones de educación superior. Actualmente es docente investigador en las líneas de economía ecológica y ecología política en el programa de Economía de la UPB, Montería. Autor de los libros “Educación ambiental y desarrollo sostenible y principios de economía. Autor de varios artículos de investigación indexados en revista de impacto. Integrante del Grupo de Investigación Equipo de Estudios Económicos y Administrativos para el Desarrollo Regional – ESDER de la UPB seccional Montería, Colombia. Reconocido y Categorizado por Colciencias en **B** desde 2019. Investigador junior (IJ) – Colciencias, Colombia. Revisor de la revista Smart and Sustainable Built Environment

**María Alejandra TABORDA CARO:** Geógrafa de la Universidad Nacional de Colombia, Licenciada en Ciencias Sociales Universidad Pedagógica Nacional, Magister en geografía por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Doctora en educación Universidad Pedagógica Nacional Colombia. Estudios posdoctorado Universidad Nacional Tres de Febrero Postdoctorado en Estudios sobre Genocidio. Docente de pregrado y posgrado en instituciones de educación superior. Actualmente es docente investigador en las líneas de Didáctica de la Geografía, Memoria Histórica y Derechos Humanos, Coordinadora del Semillero Memoria Histórica y Derechos Humanos, experiencia administrativa como decana y coordinadora del Comité Curricular de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, Universidad de Córdoba, autora de capítulo de libros, artículos indexados en revistas de impacto y proyectos de investigación. Miembro de la Asociación Colombiana de Geógrafos, Red Latinoamérica de Investigadores En didáctica de la Geografía. Integrante del Grupo de Investigación SIC Sociedad, Imaginarios y Comunicación Categorizado por Colciencias en **A** desde 2019 Investigadora junior (IJ) –

**Deivi David FUENTES DORIA:** Contador público de la Corporación Universitaria del Caribe (Montería), Master en dirección financiera (España), Doctor en ciencias: mención gerencia, Universidad Rafael Belloso Chacín (Venezuela), estancia postdoctoral en el departamento de contabilidad (Universidad de Oviedo, España), postdoctorado en gestión de la ciencia y tecnología (Venezuela). Actualmente es docente investigador en las líneas de contabilidad Ambiental y sostenibilidad en el programa de Administración de la UPB, Montería. Autor de los libros “Contabilidad en las Organizaciones”, “Contabilidad Gerencial”; capítulos de Libro, “Contabilidad Ambiental y sostenibilidad”, “Aspectos ético y sostenible en la Contabilidad”, “Prácticas de gestión sostenibles y políticas Gubernamentales”, Herramientas de medición de la sostenibilidad empresarial”. Autor de varios artículos de investigación indexados en revista de impacto. Integrante del Grupo de Investigación Equipo de Estudios Económicos y Administrativos para el Desarrollo Regional – ESDER de la UPB seccional Montería, Colombia. Reconocido y Categorizado por Colciencias en **B** desde 2019. Investigador junior (IJ) – colciencias, Colombia. Revisor de la revista Smart and Sustainable Built Environment (Q2 SCOPUS), CUC económica de la Universidad de la Costa, Par Evaluado del MinCIENCIA en convocatorias de regalías.





## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 125-138  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

## Hacia una Constitución ecológica en México frente a la crisis ambiental causada por la disrupción corrupta del antropocentrismo

*Towards an ecological Constitution in Mexico facing the environmental crisis caused by the corrupt  
disruption of anthropocentrism*

Filiberto Eduardo R. MANRIQUE MOLINA

<https://orcid.org/0000-0001-9407-6548>

[fmanrique@unal.edu.co](mailto:fmanrique@unal.edu.co)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México

Omar HUERTAS DÍAZ

<http://orcid.org/0000-0002-8012-2387>

[ohuertasd@unal.edu.co](mailto:ohuertasd@unal.edu.co)

Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Edgar Athzel CARMONA ARIAS

<https://orcid.org/0000-0002-2628-7404>

[edgar.carmonaari@uaem.edu.mx](mailto:edgar.carmonaari@uaem.edu.mx)

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México

Este trabajo está depositado en Zenodo:  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3907056>

## RESUMEN

En México desde hace más de tres décadas se han desarrollado reformas tanto constitucionales como legislativas que tienden *prima facie* al reconocimiento de los derechos humanos; no obstante, paralelamente existe un complejo marco normativo que ha permitido la sobreexplotación de los recursos naturales, ocasionando una destrucción cada vez más notoria, profunda y aparentemente incorregible. Por ello, desde una perspectiva constitucionalista comparada, proponemos un sistema de garantías que tienda a la protección efectiva de los derechos colectivos y ambientales, asegurando con ello un futuro sostenible para todos los habitantes de la madre tierra.

**Palabras clave:** Constitución ecológica, crisis ambiental, antropocentrismo, garantías constitucionales, derechos humanos.

## ABSTRACT

In Mexico for more than three decades, both constitutional and legislative reforms have been developed with a tendency to have a *prima facie* recognition of human rights. However, in parallel there is a complex regulatory framework that has allowed the overexploitation of natural resources, causing an increasingly noticeable, profound and seemingly incorrigible destruction. Therefore, from a comparative constitutionalist perspective, we propose a system of guarantees that tends to effectively protect the collective and environmental rights, thereby ensuring a sustainable future for all the inhabitants of mother earth.

**Keywords:** Ecological constitution, environmental crisis, anthropocentrism, constitutional guarantees, human rights.

Recibido: 20-05-2020 • Aceptado: 23-06-2020



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## INTRODUCCIÓN

Dentro del presente trabajo se aborda uno de los grandes retos que atraviesa el constitucionalismo ecológico en México y su impacto directo en la crisis ambiental del país, reflejándose en la huella de la destrucción cada vez más notoria, profunda e incorregible; ello se debe en gran parte a la permisividad de la legislación, a sus vacíos, antinomias, lenguaje ambiguo y sus omisiones en la generación de las garantías constitucionales suficientes y adecuadas que permitan brindar un mayor margen de protección a la naturaleza.

Tal y como es sabido, la Constitución mexicana de 1917<sup>1</sup>, se ha cimentado bajo las ideas de un pacto de corte social, la cual, en los últimos cien años ha sufrido importantes reformas; consolidándose a inicios de la segunda década del siglo XXI un auténtico contrato antropocéntrico, pues se incluyeron importantes cambios a la carta política en relación al reconocimiento de los derechos humanos y sus debidas garantías, así como reformas estructurales de gran calado de carácter economicista y financierista, bajo el argumento de generar mayores beneficios y mejores oportunidades para las y los mexicanos.

En el antropocentrismo de acuerdo con Lorenzetti, "el centro de interés es el individuo. Por esta razón, todas las cosas, los bienes e incluso la naturaleza son apreciados como valiosos solo en tanto produzcan una utilidad para el ser humano"<sup>2</sup>, podemos afirmar que, desde esta perspectiva, en la persona descansa la nueva arquitectura de la constitución mexicana y sus reformas.

Lastimosamente el constituyente permanente en esa oleada de reformas ha relegado y menospreciado el contrato con la naturaleza, pues en México se carece de una Constitución que proteja de manera integral al medio ambiente; contrariamente a lo que se ha impulsado con las corrientes del neoconstitucionalismo en Latinoamérica, en el cual, se ha desarrollado un pensamiento y conciencia de protección y garantía de la naturaleza como titular de derechos, atendiendo y retomando la cosmovisión de los pueblos originarios<sup>3</sup> y la necesidad de proteger la *Pachamama*, es decir la Madre Tierra; ejemplo de ello, es la Constitución de Colombia de 1991<sup>4</sup>, la cual consagra más de 30 artículos para la defensa del medio ambiente; la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999<sup>5</sup>; la Constitución de Montecristi de la República del Ecuador de 2008<sup>6</sup> y más recientemente la Constitución Política del Estado boliviano, aprobada en 2009<sup>7</sup>.

En México, los cambios constitucionales pensados en la persona de manera radical y teniéndola como centro de atención y actuación de todas las autoridades, coronándola como dueña y poseedora de todo su entorno, sin importar si ésta pone en serio riesgo a la naturaleza y a las especies que nos rodean. Todo lo anterior, contribuye a la generación de nuevos conflictos y ahonda las problemáticas ambientales causando no solo un impacto regional sino de alcance global, pues hablamos del cuarto país que cuenta con mayor biodiversidad a nivel mundial; por ello, la acción nociva del hombre en México acarrea efectos graves en la alteración del cambio climático.

Las reformas estructurales de corte constitucional, impulsadas desde la presidencia de Enrique Peña Nieto durante el período 2012-2018<sup>8</sup>, tales como la energética, la laboral, la hacendaria y la financiera, permitieron al Estado mexicano responder a las exigencias y presiones de organismos financieros internacionales, tales como lo son el FMI, Banco Mundial, OCDE, etc., incentivando la rapacidad de los hombres y sus empresas capitalistas, las cuales en su afán de continuar con su enriquecimiento y la falsa

<sup>1</sup> Cfr. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (1917), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Santiago de Querétaro.

<sup>2</sup> Lorenzetti, R. L. (2008), Teoría del derecho ambiental. Porrúa, México, p. 21

<sup>3</sup> Huertas Díaz, O., Esmeral Ariza, S. J., & Sánchez Fontalvo, I. M. (2014). "La Educación en Comunidades Indígenas. Frente a su proyecto de vida en un mundo globalizado", Revista Logos Ciencia & Tecnología. Vol. 5, N° 2, Policía Nacional de Colombia, Colombia, pp. 232-243

<sup>4</sup> Cfr. Asamblea Nacional Constituyente, (1991), Constitución Política de la República de Colombia, Bogotá.

<sup>5</sup> Cfr. Asamblea Nacional Constituyente, (1999), Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas.

<sup>6</sup> Cfr. Asamblea Nacional Constituyente, (2008), Constitución Política de la República del Ecuador, Montecristi.

<sup>7</sup> Cfr. Asamblea Constituyente de Bolivia, (2009), Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia, El Alto.

<sup>8</sup> Cárdenas Gracia, J. (2016). El modelo jurídico del neoliberalismo. IIJ-UNAM. Ciudad de México. p. 111

apreciación de que el desarrollo económico con base en la explotación desmedida e irracional de los recursos naturales es bienestar, se han vuelto uno de los mayores peligros para el medio ambiente y para el propio ser humano.

La naturaleza al no gozar de un reconocimiento intrínseco dentro del texto constitucional ha generado la aprobación o modificación de decretos y leyes que atentan gravemente contra la misma. Un ejemplo de ello, fue el beneplácito por una de las cámaras del Congreso de la Unión de la LXIII legislatura de la denominada Ley General de Biodiversidad, cuyos tintes correspondían más a la explotación que a la protección de la naturaleza, pues la iniciativa ofrecía un aprovechamiento desmedido de los recursos naturales por parte de las industrias mineras y energéticas, tales como lo son el gas y el petróleo; permitiendo que se continuara con prácticas tan degradantes para los ecosistemas como lo es el fracking, incluso su empleo en áreas naturales protegidas (ANP); también en ese sexenio se ha permitido por decreto presidencial levantar las vedas de más del 50% de las cuencas y acuíferos del país, con fines de producción de energía y consumo humano, aunque nosotros ponemos en entredicho el derecho humano al agua, pues la permisividad de este decreto se encamina más a la sobre explotación a manos privadas de los recursos hídricos del país.

Ante esa situación, nos hacemos las siguientes interrogantes que guiarán la presente investigación, ¿Qué tipo de acciones se deben de tomar, para efecto de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos?, ¿Cómo eliminar, reducir y prevenir las amenazas actuales y futuras al medio ambiente en México?, ¿Cómo se puede alcanzar el equilibrio que debe existir entre el desarrollo económico, el bienestar individual sin afectar o poner en riesgo la conservación de la naturaleza?, ¿Se requiere de un desarrollo constitucional ecológico y un auténtico Estado ambiental de derecho para poner un freno a las crisis ambientales en el país?; para responder a esas preguntas de investigación, emplearemos el método científico general, el cual se resumen en “observar, elaborar hipótesis, verificar y concluir”.

Esa metodología, nos permitirá un desarrollo investigativo tendiente a dilucidar si la hipótesis que a continuación planteamos es la correcta, esto es, que con un desarrollo constitucional ecológico y un auténtico Estado ambiental de derecho, se puede alcanzar el equilibrio que debe existir entre el desarrollo económico, el bienestar individual sin afectar o poner en riesgo la conservación de la naturaleza; así como la defensa y la protección efectiva de los derechos colectivos y ambientales, poner un freno a las crisis ambientales y alcanzar la integridad de la naturaleza, asegurando un futuro sostenible para todos los habitantes de la madre tierra.

Pues ante la promulgación de reformas denominadas estructurales, que amenazan gravemente a nuestro entorno y medio ambiente, y el anquilosado desarrollo legislativo que le restan su valor por sí mismo, se requiere hacer conciencia y poner un freno desde las bases constitucionales a la destrucción ambiental, para evitar una catástrofe mayor; por ello, resulta de urgencia elevar y reconocer dentro del texto constitucional a la naturaleza como sujeto de derechos, un giro biocéntrico, que sea un candado que fortalezca su protección y que evite a toda costa su menosprecio y la correspondiente degradación; obligación que dimana de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro desde 1992, que en su principio 11 señala que “los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente” (Organización de las Naciones Unidas: 1992).

## **EL ESTADO DE COSAS DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA**

Ha surgido a nivel mundial y con mayor fuerza a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, una gran preocupación por las consecuencias del cambio climático, el cual supone un riesgo latente para cualquier tipo de vida conocida en nuestro planeta, incluida la humana; por ello, en las últimas tres décadas la comunidad internacional se ha preocupado, desarrollado y adoptado un importante estándar internacional y diversos países han adecuado su legislación interna, entrando a una etapa que le da mayor relevancia al denominado biocentrismo o ecocentrismo dentro de sus políticas y legislaciones, esto es, “se introducen los

conceptos de derechos de la Naturaleza y derecho a su restauración”<sup>9</sup>. Ejemplo de ello en Europa, podemos señalar a Suiza, Francia, Dinamarca, mientras que en la región de Latinoamérica tenemos a países como Bolivia, Costa Rica, Colombia, Uruguay y Venezuela.<sup>10</sup>

Aquí conviene señalar que, la relación sociedad-naturaleza “es una interrupción en la prevalencia de una concepción mucho más integrador, en la que el hombre y la naturaleza forman parte de un todo y que ahora en la posmodernidad cobra auge”.<sup>11</sup> Ante esta nueva ola de cambios todavía existen sociedades que no cuentan con un pacto con la naturaleza y que se resisten al giro biocentrista de sus constituciones, tal es el caso de México, que en busca del desarrollo económico se resiste a entrar al paradigma ambiental, el cual de acuerdo con Lorenzetti debe revestir las siguientes características:

Paradigma ambiental incorpora un bien colectivo que genera derechos- deberes, así como límites y nuevos derechos fundamentales.

Positivos: Deberes ambientales puros: como ocurre con los deberes de preservación de los recursos naturales o de la biodiversidad;

Negativos: Como los de no dañar a otro, no contaminar.<sup>12</sup>

Dichos derechos fundamentales colectivos y sus correspondientes garantías –estructura nomodinámica del derecho moderno– con sus obligaciones positivas y negativas de prestación y no lesión del paradigma ambiental, deben tener como centro no solo al hombre sino también a la naturaleza, por ello, la legislación en especial la constitucional debe contar con una perspectiva de integralidad,<sup>13</sup> encaminada a un biocentrismo, pues de otra manera se encontraría con las mismas lagunas, es decir incompleta, inacabada y por ende ineficaz en cuanto a sus derechos y garantías. Aquí tenemos que ser específicos y advertir que la primera línea de defensa de las normas fundamentales es el marco constitucional, ya que la normativa internacional es de carácter coadyuvante y complementaria, de allí que, la primera función de las instituciones y autoridades estatales es la observación de ciertos derechos fundamentales colectivos y sus limitaciones que imponen los instrumentos de carácter nacional.

Los derechos fundamentales colectivos guardan ciertas configuraciones de naturaleza distinta a los derechos fundamentales subjetivos. Pues los primeros los distinguen los siguientes aspectos a saber:

Variedad de personas que disfrutan de un bien;

- a) Existe una ligadura por la que se busca algún beneficio o se pretende evitar algún daño o perjuicio;
- b) Un bien cuyo disfrute es colectivo o concurrente, es decir, compartido en igualdad de condiciones;
- c) Un bien susceptible de apropiación individual pero que convive en una situación de identidad fáctica que produce una sumatoria de bienes idénticos; y
- d) Es un bien que se puede usar y gozar, pero se encuentra limitado a la disposición, tal y como ocurre con los derechos subjetivos.

Si bien es relevante la suma de subjetividades para elevar un reclamo y estar en posibilidad de proteger la naturaleza, también lo es, que resulta indispensable su reconocimiento por la vía constitucional, tal y como lo han hecho otras naciones para generar un derecho de la naturaleza cuyo valor es intrínseco y que particulares cumplan con sus obligaciones de respeto y las autoridades de garantía, para su debida protección y tutela en esa interacción del ser humano con ella; solo así se podrá lograr la máxima efectividad

<sup>9</sup> Gudynas, E. (2009). La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador. *Revista de Estudios Sociales*, No. 32, Bogotá, pp. 34-47.

<sup>10</sup>Wendling, Z. A., Emerson, J. W., Esty, D. C., Levy, M. A., de Sherbinin, A., et al. (2018). 2018 Environmental Performance Index. CT: Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven, p. 7

<sup>11</sup> Ramírez Ortiz, D., & Ramírez Marín, J. (2014). *Derecho ambiental y desarrollo sustentable*. Porrúa, México, p. 2

<sup>12</sup> Lorenzetti, R. L. (2008). *Op. Cit.* p. 14

<sup>13</sup> Mesa Cuadros, G. (2013). *Derechos ambientales en perspectiva de integralidad*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pp. 20-22

de las acciones orientadas a proteger intereses colectivos y difusos, además de concretar un amplio conjunto de medidas de reparación para efecto de lograr la *restitutio*.

De allí que, los derechos no solo son aquellos que pertenecen al ser humano, si bien es cierto que solo él puede reclamar su cumplimiento ante las autoridades gubernamentales y ante particulares para que estos actúen para hacerlos válidos o dejen hacer determinada actividad para no lesionarlos, pero ello, no significa que le sean exclusivos. En México para la eficaz protección del medio ambiente se requiere que estos sean elevados a su norma iusfundamental y así autoridades y colectividades cuenten con las debidas garantías y mecanismos más eficaces que protejan a la naturaleza.

Pues es tal y como lo señalan importantes juristas, en el país norteamericano su reconocimiento constitucional "es escueto y desarticulado, quizá porque ha sido producto de varias reformas constitucionales producidas en diferentes tiempos, sin haber tenido la oportunidad de hacerlo de manera integral y uniforme",<sup>14</sup> lo cual ha tenido un profundo impacto en la arquitectura actual, en específicos en los artículos 1, 4, 25, 27 y 73 que regulan el medio ambiente dentro de la carta fundamental y que a continuación se expondrán.

En México, los derechos humanos se encuentran consagrados en la Constitución Política, misma que fue sujeta de una reforma el 10 de junio de 2011, tal y como se puede apreciar en su Título Primero, Capítulo I, de los derechos humanos y sus garantías, que a la letra reza:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.<sup>15</sup>

De la anterior transcripción del artículo primero se puede apreciar la importancia que adquiere la persona a partir del 10 de junio de 2011 –como sujeto de derechos y titular de los mismos–, así como la obligación del aparato estatal de brindar las debidas garantías para su defensa y promoción; dicha reforma en nuestro país ha dado un giro humanocentrista al concederle gran relevancia al reconocimiento y ampliación de los derechos humanos, ello en atención a la crisis sistemática y generalizada de violación a los mismos durante más de una década, ampliando el catálogo no solo de aquellos que consagra la Constitución sino de aquellos que encontramos plasmados en los tratados internacionales.

Otro de los cambios significativos a la Constitución mexicana, derivada de la reforma de 2011, fue la inclusión en el texto del principio *pro persona*, el cual señala que:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia<sup>16</sup>

Esto lo encontramos en el artículo 1º, párrafo segundo de la Carta política, el cual es de gran trascendencia, ya que significa un gran avance en materia de protección y defensa de los derechos de las personas; este importante principio marca un camino claro para todas las autoridades, incluyendo los tres poderes de la Unión, quienes imparten justicia, quienes participan en el poder legislativo y quienes tienen las riendas de la política pública.

El principio *pro persona* ha sido explicada mediante jurisprudencia de los altos tribunales mexicanos como:

<sup>14</sup>Corzo Sosa, E. (2015). Derecho al medio ambiente adecuado como derecho humano. Su configuración normativa, en: La Constitución y los derechos ambientales. Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Autónoma de México. México, pp. 3-7.

<sup>15</sup>Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Op. Cit. artículo 1

<sup>16</sup> Idem

[U]n criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.<sup>17</sup>

En síntesis, dicho mandato de optimización del sistema jurídico mexicano obliga a todas las autoridades del país a ponderar, ante todo, la fundamentalidad de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor de las personas, armonizando el contenido de catálogo de derechos nacional con el internacional, con el fin de brindar la máxima protección.

Tal y como se puede apreciar, los cambios más significativos a la Constitución que se han dado a inicios del siglo XXI son sin lugar a duda la inclusión de los derechos humanos, en conjunto con “mejores fórmulas jurídicas para acompañar el reconocimiento constitucional, con garantías y mecanismos más eficaces que los protejan”<sup>18</sup>, con ello podemos afirmar que dichas reformas colocan a través de una visión totalmente humanista a la persona como centro de toda actuación de la autoridad.

Lamentablemente lo anterior no ha pasado con la naturaleza, no cabe duda que, si en verdad aspiramos a convertirnos en un Estado que salvaguarde la naturaleza, se debe elevar su reconocimiento al plano constitucional de sus derechos, del interés superior del medio ambiente y de principios tan importantes como lo es el *“in dubio pro ambiente o natura”*, si bien es cierto, la inclusión de los derechos de la persona fue un gran avance, también lo es que se requiere imponer obligaciones a estos y a las autoridades para proteger la diversidad e integridad del ambiente que en estos tiempos de crisis se requiere de manera urgente e inaplazable, de allí que pugnamos por un nuevo cambio de paradigma que avance hacia la emisión de una reforma constitucional fundamentalmente verde.

Otro artículo constitucional donde encontramos una de nuestras principales preocupaciones en materia ambiental, es el cuarto, pues desde su inclusión en el año de 1999, identificamos un texto de carácter eminentemente antropocéntrico, el cual continúa con su más reciente reforma de data 8 de febrero de 2012, esto es que:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.<sup>19</sup>

Nuestra preocupación radica en el edificio constitucional, que se ha reformado sobre la base del individuo, empleando para ello el paradigma de su desarrollo y bienestar; por ello sostenemos que, en el modelo antropocéntrico de la Constitución, el centro de interés es el individuo, quien tiene el *dominus* sobre la naturaleza, la cual es una utilidad o servicio que se encuentra a merced para satisfacer al ser humano, justificando en ello una intervención corruptora y su abuso.

Con una visión utilitarista, abandonando términos justos y equitativos, se ha reformado el artículo 4° constitucional, en esa línea los pensadores Jeremy Bentham y su seguidor John Stuart Mill sostuvieron que:

[L]os derechos humanos se fundaban en su utilidad ya sea personal o de la mayoría, estas corrientes utilitaristas tienen una parte importante en el tema de derechos humanos que hoy en día podemos

<sup>17</sup> Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2012), Tesis: 1a. XXVII/2012 (10a.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Ciudad de México, p. 659

<sup>18</sup> Lara Ponte, R. (2015). La reforma de derechos humanos de 2011. Hacia el Estado constitucional, en: Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Derechos humanos, tomo V, vol. 2. Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Autónoma de México, México, pp. 65-78.

<sup>19</sup> Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Op. Cit. artículo 4

poner en práctica, esto es juzgar la corrección de las acciones según su resultado, que se media en los términos de las aspiraciones del hombre, esto es en términos de cantidad de placer o felicidad obtenida.”<sup>20</sup>

En ese sentido, es la norma fundamental la que genera ciertas tensiones y desequilibrios con el medio ambiente, de allí que, ha llevado a una intervención corruptiva en los recursos naturales y su hiper explotación, bajo el argumento de usar, disfrutar y disponer de los bienes bajo cualquier cantidad para el desarrollo y satisfacción de las necesidades humanas actuales.

Sin importar las generaciones futuras o que los recursos sean o no renovables, generando incluso las regulaciones secundarias necesarias para cumplir con la depredación, tales como lo son las reformas estructurales; en esa línea de intranquilidad Lorenzetti refiere que “los bienes ambientales ya no son un mero supuesto de hecho pasivo de la norma, sino un sistema que motiva sus propias regulaciones y ordenes clasificatorios”,<sup>21</sup> tal y como lo encontramos en el derecho supranacional, que desde hace más de 30 años suman más de mil acuerdos y se suman las nuevas esperanzas de contar con un nuevo Pacto Mundial por el Medio Ambiente.

De allí que, en México se requiere de la implementación de nuevos parámetros constitucionales dentro del nexo gobierno, persona y naturaleza, al conceder una importancia cardinal dentro del plano constitucional al medio ambiente en orden a su conservación, protección y restitución, para así evitar el daño o deterioro que atente contra la mega diversidad y la integridad medio ambiental.

Por otra parte, el artículo 25 constitucional señala que le corresponde al Estado mexicano “*la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable*”,<sup>22</sup> es dentro de este texto que se incorpora el concepto de desarrollo integral y sustentable, el cual se ha desarrollado en los últimos años dentro de las áreas biológicas, ambientales, productivas y económicas; Dentro del Informe Brundtland, se entiende a desarrollo sustentable como “la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas es el objetivo principal de desarrollo”,<sup>23</sup> esto nos indica que, se ha hecho una mala hermenéutica del concepto, pues el mismo no incluye desarrollo con protección de la naturaleza. Y es así como se ha llevado a documentos tan importantes como lo son las constituciones.

Si bien es cierto, que se incluye la sustentabilidad dentro del marco constitucional, también lo es que el mismo se deja a una interpretación libre de su sentido, por ello, esa falta de inclusión literal de que el ser humano se debe de desarrollar con el respectivo cuidado del ambiente y del entorno natural, pues a su letra reza que el desarrollo busca:

Artículo 25. [L]a competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico.<sup>24</sup>

Tal parece que el legislador en la búsqueda de la competitividad y el desarrollo no solo dejó de lado la naturaleza, sino también omitió a las generaciones futuras. Por su parte, la constitución mexicana señala que “corresponde a la nación la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio, así como el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos

<sup>20</sup>Velásquez Monsalve, J. (2011). La dignidad humana: fundamento de los derechos humanos, Revista Universidad Católica de Oriente, Vol. 24, No. 31, Universidad Católica de Oriente, Colombia, p. 77

<sup>21</sup>Lorenzetti, R. L. (2008), Op. Cit. p. 22

<sup>22</sup>Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Op. Cit. artículo 25

<sup>23</sup>Brundtland, G. H. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, “Nuestro futuro común”, Naciones Unidas, Nueva York, p. 59

<sup>24</sup>Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Op. Cit. artículo 25

submarinos”<sup>25</sup>; asimismo, se le impone la obligación al Estado de preservar y restaurar el equilibrio ecológico, evitando la destrucción de los elementos naturales.

De la lectura del citado artículo, vemos con preocupación que el mismo carece de desarrollo ecosistémico significativo, hay clara evidencia que el legislador no insertó el valor de la tierra por sí misma; puesto que, de su lectura integral se advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde el punto de económico o productivo, dando valor a la naturaleza por el papel que representa para la supervivencia y desarrollo de las personas, pero abandonando esa concepción de que todos los seres vivos que rodean al ser humano también son sujetos de derechos individualizables.

Cabe advertir que con esa visión se ha desarrollado una notada jurisprudencia en Latinoamérica, tal es el caso de Colombia, en la que su Corte constitucional ha marcado un hito al señalar que

[S]olo a partir de una actitud de profundo respeto con la naturaleza y sus integrantes es posible entrar a relacionarse con ellos en términos justos y equitativos, abandonando todo concepto que se limite a lo utilitario o eficientista.<sup>26</sup>

De allí que es relevante incorporar las debidas garantías en el plano constitucional, para efecto de superar esa visión utilitarista y generar una conciencia de conservación y salvaguarda de los recursos naturales.

Por último, tenemos que señalar que, dentro de la constitución, se le faculta al Congreso de la Unión en México, para legislar en materia de prevención y combate de la contaminación ambiental, de allí que su tarea es fundamental para la elaboración de la legislación a nivel federal, la cual también debe ser concurrente, de conformidad con la fracción XXIX-G de este numeral, pues el estado mexicano al ser federal

Artículo 73 fracción XVI.- [D]ebe expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.<sup>27</sup>

De allí que, dicho poder no solo debe de realizar los cambios constitucionales, sino que en su tarea están el codificar, unificar los parámetros básicos o más elementales de la legislación ambiental que irradie todo el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación, orientada hacia un modelo más racional y equilibrado en la materia.

El estado de cosas que guarda la Constitución en materia ambiental nos permite advertir las serias falencias del texto más relevante de México y que claramente la distan de ser llamada una constitución ecológica, por ello, se deben de realizar las correcciones necesarias para insertar una serie de principios y mandatos en una doble dimensión, esto es, que pueda avanzar en la persecución de una política que todos gocemos de un medio ambiente adecuado y que se le reconozca el derecho inherente a la naturaleza con carácter de interés superior.

Con gran atino se ha señalado que “la decisión de una política ambiental se reviste de la forma jurídica. Al menos, así será con toda seguridad en un sistema político con la forma de estado democrático de derecho” (Serrano: 2007, p. 21). Por ello, se requiere de una serie de reformas compatibles con los nuevos retos y las necesidades inaplazables para contar con una política por una defensa obligatoria y cada vez más rigurosa de la naturaleza.

---

<sup>25</sup>Ibidem, artículo 27

<sup>26</sup>Corte Constitucional de Colombia, (2015), Sentencia C-449/15, Bogotá, p. 22

<sup>27</sup>Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Op. Cit. artículo 73



## **LA CONSTITUCIÓN MEXICANA COMO PUERTA DE ENTRADA PARA LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL**

Tal y como se ha expuesto, el texto constitucional no cuenta con una adecuada regulación integral y racional que funcione como un candado suficiente para evitar el uso desmedido y abusivo de la mega diversidad en México, por el contrario, la misma ha permitido una serie de reformas inclusive dentro del texto constitucional que atentan gravemente contra la misma.

Si se reconociera la progresividad de los derechos de la tierra dentro del marco constitucional, es claro que aquellos actos y leyes que fueran contrarias serían nulas y expulsadas del sistema jurídico, en atención a ello, tal y como lo ha señalado González Chévez:

[E]l principio de supremacía constitucional señala que las disposiciones normativas que contravengan a la Constitución son nulas o ineficaces, y deberán de ser expulsadas del sistema jurídico o declaradas inconstitucionales para que produzcan los efectos jurídicos consecuentes.<sup>28</sup>

Si se contara con el reconocimiento de la naturaleza dentro de la carta política, reformas que atentan contra la misma como las de carácter estructural se hubieren expulsado, pues serían incompatibles.

Como eso no ha sido así, se abrió la puerta para aprobar en 2013 la reforma energética, la cual promovió el desarrollo del sistema energético nacional de la mano con la explotación tanto de particulares como del gobierno mexicano, de los combustibles fósiles como lo es el petróleo y gas; para la extracción del primero, se han concesionado vastas extensiones de asignaciones petroleras en el Golfo de México, para el caso del gas se permite el empleo de una las técnicas más dañinas para el ambiente y los recursos hídricos mediante su extracción tal como lo es la técnica del fracking o fractura hidráulica; aquí conviene advertir que la empresa petróleos mexicanos (PEMEX) es una de las empresas que más contribuye al cambio climático, pues de acuerdo con cifras de *The Carbon Majors (CDP)* emite el 1.9% de los gases efecto invernadero ocupando por ello el séptimo lugar a nivel mundial<sup>29</sup> de las empresas que más contaminan.

Si México actualmente cuenta con una de las empresas que más contamina, ahora que se encuentren operando en plenitud dichos cambios normativos y que se eleve por ello la extracción y producción de energéticos de manera desmesurada, de la mano con los nuevos actores privados, dicha crisis se profundizará, por ello sostenemos que el país se encuentra en vías de ser uno de los países que mayormente contaminará el planeta.

Otro fenómeno que alarma y presta toda nuestra atención es que una cuarta parte del territorio nacional se encuentra concesionado para la explotación de minería y megaminería a empresas nacionales e internacionales, lo cual trae una grave degradación y afectación al medio ambiente, en especial a aquellos territorios donde se desarrolla dicha actividad, la cual va de la mano con la contaminación y agotamiento del suelo, subsuelo y las aguas subterráneas, puesto que se generan altos volúmenes de desecho de residuos sólidos. Aquí es importante señalar que, dicha actividad no ha generado crecimiento económico ni mucho menos ha aportado al desarrollo humano de los pueblos en donde se practica la minería, sino todo lo contrario, pues en dichos sitios existe mayor desigualdad, extrema pobreza y alta degradación del medio ambiente.

Como un último ejemplo, está el proyecto de ley de biodiversidad<sup>30</sup> que se presentó al Congreso mexicano, la cual, si se hubiera aprobado hubiera representado un serio riesgo para una basta y amplia

<sup>28</sup>González Chévez, H. (2006). La suspensión del acto reclamado en amparo, desde la perspectiva de los principios de las medidas cautelares. Porrúa. México, p. 11

<sup>29</sup> Griffin, P. (2017). The Carbon Majors Database. Carbon Disclosure Project, United Kingdom, p. 14

<sup>30</sup> Cfr. Salinas Sada, N. (2016). Iniciativa que expide la Ley General de Biodiversidad, Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Congreso de la Unión, Ciudad de México.

extensión de reservas naturales protegidas, la vida silvestre e incluso especies que se encuentran en peligro de extinción; dicho proyecto fue impulsado por sectores mineros y gaseros, pues dichas extensiones de áreas naturales protegidas representan un gran negocio. Por ello, aseguramos que si existiera una protección a la naturaleza y a la tierra de rango constitucional con un enfoque de carácter biocéntrico se detendría este tipo de propuestas de proyectos de ley y se alcanzaría la justicia ambiental y la integralidad de la naturaleza tal y como ocurre en otros países latinoamericanos como lo son Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Colombia y Venezuela.

En tales países se ha percibido esa diferencia de manera tangible, ello en gran medida se debe al reconocimiento desde el seno constitucional y su impacto en la transformación del aparato jurídico-político, tarea que, resultó de suma importancia para que los cambios quedasen institucionalizados, y si en algún momento fuera factible un retroceso o una amenaza, eso tendría que conllevar también una ruptura del orden constitucional, ello derivado del principio de progresividad de los derechos de la naturaleza, veamos a continuación dichos desarrollos.

### **NEOCONSTITUCIONALISMO ECOLÓGICO EN LATINOAMÉRICA**

Ejemplo de esos textos constitucionales verdes que han cerrado la puerta para la degradación ambiental, están la Constitución de la República de Ecuador de 2008, la cual señala en su preámbulo: "Celebramos la naturaleza, la Pacha Mama, de la cual somos parte y que es vital para nuestra existencia". Enfatiza que la República se propone construir "una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y en armonía con la naturaleza, para alcanzar el bien vivir, o *sumac kawsay*"<sup>31</sup> Reconociéndole su importancia para la existencia del propio ser humano. Mientras que su artículo 71° señala que:

[L]a naturaleza o la Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento) y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir de la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza... el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema<sup>32</sup>.

Otro de los textos que siguen esa línea de constitucionalismo ecológico y que reconoce con carácter supremo los derechos a la naturaleza es la Constitución Política del Estado boliviano, aprobada en 2009, misma que en su preámbulo consagra que "Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia"<sup>33</sup>

Por su parte el Artículo 33° le reconoce los derechos de manera integral a todos los seres vivos, ese desarrollo neoconstitucional prescribe:

[L]as personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y a las colectividades de las presentes y futuras generaciones, incluidos otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente<sup>34</sup>.

Mientras que el artículo 34° dispone las acciones de carácter individual y colectivo, señalando que: "cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada a ejercer

---

<sup>31</sup> Asamblea Nacional Constituyente, (2008), Constitución Política de la República del Ecuador, Montecristi, preámbulo.

<sup>32</sup> Ibidem, artículo 71

<sup>33</sup> Asamblea Constituyente de Bolivia, (2009), Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia, El Alto, preámbulo.

<sup>34</sup> Ibidem, artículo 33

acciones legales en defensa del medio ambiente”,<sup>35</sup> las cuales son fundamentales para contar con mecanismos adecuados para la debida defensa del medio ambiente.

Otro de los desarrollos del neoconstitucionalismo verde en Latinoamérica que le reconocen a la naturaleza no solo valor nacional sino para toda la humanidad, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999, la cual en su preámbulo consolida que los fines que debe promover la sociedad venezolana es, “la protección del equilibrio ecológico y de los bienes jurídico ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”.<sup>36</sup> Para ello, desarrolla un apartado especial, en el cual se señala la dualidad de derechos y obligaciones que importan dicho reconocimiento.

En dicho apartado se destaca que:

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica.<sup>37</sup>

Vemos con claridad derechos y obligaciones subjetivas, seguidas de la obligación del Estado en su conjunto de aseguraren sus constituciones un mínimo adecuado de protección a la naturaleza; asimismo, a nivel regional, vemos con entusiasmo el nuevo Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú<sup>38</sup>, el cual es importante su firma y ratificación por parte de sus integrantes, pues en el sistema interamericano no existen convenciones o documentos relevantes de derecho común, que le den la importancia que se merece a la naturaleza,<sup>39</sup> esa crítica se lleva el pobre Sistema Interamericano en la materia, de allí que, el acuerdo de Escazú es un paso relevante a nivel hemisférico para su protección y defensa.

Hasta aquí, recogemos de manera breve la importancia del neoconstitucionalismo ecológico y de que se reconozcan una serie de obligaciones que tiene la raza humana para con la naturaleza y su correspondiente reivindicación de sus derechos; ello sirve en mayor medida como un candado de cierre de las injusticias a la madre naturaleza, desarrollos que México y su accidentado e irregular reconocimiento constitucional debe tomar como un ejemplo para implementar una reforma integral de gran calado que eleve a rango constitucional los derechos de la naturaleza así como las debidas garantías para su protección.

## CONCLUSIONES

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que ante los retos en materia de protección al medio ambiente que se viven en México y como primer paso para alcanzar el “Estado Ambiental de Derecho”, se requiere de la implementación de nuevos parámetros constitucionales dentro del nexo Estado, persona y naturaleza, al conceder una importancia cardinal dentro del plano constitucional al medio ambiente en orden a su preservación, protección y restitución, para así evitar el daño o deterioro constante que se está sufriendo, principalmente por aquellos sectores capitalistas, los cuales atentan contra la mega diversidad y la integridad medio ambiental.

---

<sup>35</sup>Ibidem, artículo 34

<sup>36</sup>Asamblea Nacional Constituyente, (1999), Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, preámbulo.

<sup>37</sup> Ibidem, artículo 127

<sup>38</sup> Cfr. Naciones Unidas, (2018), Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú, CEPAL, Escazú.

<sup>39</sup> Pereira Nocera, R & R. Manrique Molina, F. (2019), Desafios globais dos direitos de participação ambiental na agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Revista jurídica derecho, volumen 8. Nro. 10, p.101

No cabe duda de que, si en verdad México aspira a convertirse en un Estado ambiental de derecho, se debe elevar su reconocimiento al plano constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos; del interés superior del medio ambiente; de principios tan importantes como lo es el *"in dubio pro ambiente o natura"*, de precaución y de regulación integral, así como contemplar la obligación gubernamental del saneamiento ambiental vista un como un servicio de carácter público.

A su vez, el Congreso mexicano debe elevar una serie de obligaciones de carácter subjetivo, si bien es cierto, la inclusión de los derechos de la persona fue un gran avance, también lo es que se requiere imponer obligaciones a estos y a las autoridades para proteger la diversidad e integridad del ambiente que en estos tiempos de crisis se requiere de manera urgente e inaplazable, de allí que pugnamos por un nuevo cambio de paradigma que avance hacia la emisión de una reforma constitucional fundamentalmente verde que sea el preludio para el acceso al Estado Ambiental de derecho, el cual se entiende "como el marco jurídico de derechos y obligaciones subjetivas y procesales que incorpora los principios del desarrollo ecológicamente sostenible en el Estado de Derecho"<sup>40</sup>.

Un desarrollo constitucional ecológico y un auténtico Estado ambiental de derecho, es indispensable para poner un freno a las crisis ambientales que México y el mundo atraviesan, mismas que en su mayoría son provocadas por los intereses misántropos y rapaces de una minoría, bajo la excusa del desarrollo y el progreso de los derechos humanos, creando empleos y obtener ganancias a cambio de la aniquilación de la riqueza natural y la incidencia dañina y deletérea en los ecosistemas.

Por ello, sostenemos la importancia de que desde el texto de la carta política mexicana se concrete el equilibrio que debe existir entre el desarrollo económico, el bienestar individual sin afectar o poner en riesgo la conservación de la naturaleza; así como la defensa y la protección efectiva de los derechos colectivos y ambientales, pues lo que se pretende es alcanzar la integridad de la naturaleza y asegurar un futuro sostenible para todos los habitantes de la madre tierra.

## **BIBLIOGRAFÍA**

BRUNDTLAND, G. H. (1987), Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, "Nuestro futuro común", Naciones Unidas, Nueva York, p. 59

CÁRDENAS GRACIA, J. (2016), El modelo jurídico del neoliberalismo, Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Autónoma de México, Ciudad de México, p. 111

COMISIÓN MUNDIAL DE DERECHO AMBIENTAL, (2016), Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Rio de Janeiro, p. 2

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, (2015), Sentencia C-449/15, Bogotá, p. 22

CORZO SOSA, E. (2015). "Derecho al medio ambiente adecuado como derecho humano. Su configuración normativa", en: La Constitución y los derechos ambientales. Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Autónoma de México, México, pp. 3-7.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (1999). Asamblea Nacional Constituyente, Venezuela.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR (2008). Asamblea Constituyente, Montecristi, Ecuador.

---

<sup>40</sup> Comisión Mundial de Derecho Ambiental, (2016), Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Rio de Janeiro, p. 2

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (1917). H. Congreso de la Unión, México.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO BOLIVIANO (2009). H. Congreso Nacional por la Asamblea, El Alto, Bolivia.

GONZÁLEZ CHÉVEZ, H. (2006). La suspensión del acto reclamado en amparo, desde la perspectiva de los principios de las medidas cautelares. Porrúa, México.

GRIFFIN, P. (2017). The Carbon Majors Database. Carbon Disclosure Project, United Kingdom.

GUDYNAS, E. (2009). La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador. Revista de Estudios Sociales, No. 32, Bogotá, pp. 34-47.

HUERTAS DÍAZ, O., ESMERAL ARIZA, S. J., & SÁNCHEZ FONTALVO, I. M. (2014). "La Educación en Comunidades Indígenas. Frente a su proyecto de vida en un mundo globalizado", Revista Logos Ciencia & Tecnología. Vol. 5, N° 2, Policía Nacional de Colombia, Colombia, pp. 232-243.

LARA PONTE, R. (2015). "La reforma de derechos humanos de 2011. Hacia el Estado constitucional", en: Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Derechos humanos, tomo V, vol. 2. Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Autónoma de México, México, pp. 65-78.

LORENZETTI, R. L. (2008). Teoría del derecho ambiental. Porrúa, México.

MESA CUADROS, G. (2013). Derechos ambientales en perspectiva de integralidad. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

NACIONES UNIDAS, (2018), Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú, CEPAL, Escazú.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (1992). Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro.

PEREIRA NOCERA, R & R. MANRIQUE MOLINA, F. (2019), Desafios globais dos direitos de participação ambiental na agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Revista jurídica derecho, volumen 8. Nro. 10, p.101

RAMÍREZ ORTIZ, D., & RAMÍREZ MARÍN, J. (2014). Derecho ambiental y desarrollo sustentable. Porrúa, México.

SALINAS SADA, N. (2016), Iniciativa que expide la Ley General de Biodiversidad, Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Congreso de la Unión, Ciudad de México.

SERRANO, J. L. (2007). Principios de derecho ambiental y ecología jurídica. Trotta, Madrid.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, (2012), Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Ciudad de México. p. 659

VELÁSQUEZ MONSALVE, J. (2011). "La dignidad humana: fundamento de los derechos humanos", Revista Universidad Católica de Oriente, Vol. 24, No. 31, Universidad Católica de Oriente, Colombia, pp. 73-82.

WENDLING, Z. A., EMERSON, J. W., ESTY, D. C., Levy, M. A., de SHERBININ, A., et al. (2018). 2018 Environmental Performance Index. CT: Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven, p. 7

## **BIODATA**

**Filiberto Eduardo R. MANRIQUE MOLINA:** Ph.D. en Derecho y Globalización por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos-México; Maestro en Derecho, abogado, realiza estudios de postdoctorado en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia- sede Bogotá; reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores SNI-CONACYT-México e Investigador Jr. MINCIENCIAS-Colombia.

**Omar HUERTAS DÍAZ:** Abogado, PhD. en Derecho, especialista en Derecho Penal, Curso Postdoctoral en Derecho, profesor asociado e investigador senior de la Universidad Nacional de Colombia; Magister en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, de la Universidad de Alcalá (España); Magíster en Derecho Penal, de la Universidad Libre; Ph.D. en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar. Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Director "Red Internacional de Política Criminal Extrema Ratio UN" Reconocido y Clasificado Minciencias 2018 en A1.

**Edgar Athzel CARMONA ARIAS:** Magister PhD en Derecho y Globalización por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos-México; Maestro en Derecho, abogado, Reconocimiento Candidato a Investigador Nacional SNI - CONACYT ha participado en semilleros e impartido conferencias en México y Colombia. Actualmente se desempeña como profesor universitario y Juez de Paz Municipal del Poder Judicial del Estado de Morelos, México.



## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 139-153  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

### Educación o resocialización: Problemática abordada desde la administración penitenciaria en Colombia

*Education or Resocialization. Problem Addressed from the Penitentiary Administration in Colombia*

**Victoria Amalia PRECIADO BURGOS**

<https://orcid.org/0000-0002-9050-3458>

[victoria-0713@hotmail.com](mailto:victoria-0713@hotmail.com)

Universidad del Sinú, Montería, Colombia

Este trabajo está depositado en Zenodo:  
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3907061>

#### RESUMEN

Al momento de que una persona es privada de la libertad, se desencadena como consecuencia inmediata la cesación o suspensión temporal de algunos derechos reconocidos constitucionalmente, pero en ningún momento se debe desconocer que el Estado como garante de los mismos, debe velar y custodiar por la correcta protección de los derechos fundamentales que se consideran inescindibles; por lo que surge la obligación del Estado de implementar y adoptar procesos de enseñanza y educación en centros carcelarios con fines resocializadores. La presente investigación es de tipo descriptivo desarrollada mediante la técnica documental.

**Palabras clave:** Resocialización, derechos fundamentales, Estado, centro carcelario, reincidencia.

#### ABSTRACT

At the moment that a person is deprived of liberty, the temporary cessation or temporary suspension of some constitutionally recognized rights is triggered as an immediate consequence, but at no time should it be ignored that the State as guarantor of them, must ensure and guard by the proper protection of fundamental rights that are considered indispensable; Therefore, the obligation of the State to implement and adopt teaching and education processes in prisons for resocializing purposes arises. This research is descriptive type developed through documentary technique.

**Keywords:** Resocialization, fundamental rights, state, prison center, recidivism.

Recibido: 20-05-2020 • Aceptado: 30-06-2020



## INTRODUCCIÓN

La resocialización de las personas que se encuentran en Centros Carcelarios en Colombia, se considera fin fundamental de la pena y es resguardado por postulados constitucional y legislativos, además la Corte Constitucional como guardiana de la máxima legal y protectora de derechos fundamentales de los ciudadanos, a lo largo de múltiples pronunciamientos ha reconocido la importancia de la resocialización y reeducación de personas recluidas en cárceles.

El sistema penitenciario colombiano se caracteriza por ser progresivo, toda vez que atiende a la aplicación de diversas etapas en los sistemas de ejecución de los tratamientos penitenciarios hasta que se logra el reintegro absoluto de la persona recluida en Centro Carcelario a la sociedad, fundamentado el mismo en la conducta del penado y en el trabajo que realizó en tal Centro.

Además, el tratamiento al que tiene derecho la persona recluida tiene como fin prepararlo y proyectarlo para que al momento de cumplir con su condena y/u obtener la libertad, logre un adecuado desarrollo en la sociedad, sin dejar de lado que también generaría el tratamiento un bloque frente a la posibilidad de la comisión de nuevos delitos por parte de esa persona, dejando de lado la reincidencia.

El texto se presenta en tres (3) secciones. En la primera sección se analizan los antecedentes históricos y sociales de la pena en la actividad criminal, iniciando desde el año 212 antes de era cristiana hasta la actualidad, en donde tiene un desarrollo de imposición radical a protectora de derechos humanos. La segunda sección analiza y examina la resocialización como proceso de enseñanza y educación de principios ético-formativos impartidos desde los centros carcelarios, haciendo referencia a lo contemplado en los artículos 9 y 10 del Código Penitenciario y Carcelario colombiano –Ley 65 de 1993–, los cuales consideran que la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario tiene un fin resocializador, implicando un proceso de enseñanza y educación de valores y principios éticos-formativos, los cuales la persona que se encuentra en Centros Carcelarios deba meditar y aportar, además, se debe adoptar un tratamiento a través de métodos de aprendizaje que permitan la interiorización de tales principios y valores para así lograr el fin último del adecuado regreso a la sociedad de esa persona.

Finalmente, la tercera y última sección del escrito pone de presente los factores que inciden en la prestación de una adecuada resocialización a las personas privadas de la libertad en Centros de Reclusión y Penitenciarios en Colombia, que ostentan situación jurídica de condenados, partiendo de la valoración psíquica que se les debe brindar por parte de la administración penitenciaria, continuando con las acciones administrativas y presupuestales que la misma debe materializar y su inclusión en las comunidades académicas y formativas.

## ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y SOCIALES DE LA PENA EN LA ACTIVIDAD CRIMINAL

El jurista romano Domicio Ulpiano<sup>1</sup>, quien en el año 212 antes de la era cristiana, dedicado a redactar obras jurídicas, consagrados fragmentos de los mismo en Digestos o Pandectas<sup>2</sup> (obras conocidas por contener los escritos de juristas clásicos de la época) exponía cómo era vista la cárcel en la antigüedad, que de acuerdo a lo expresado por Fidel Darío Reina Herrera en su trabajo de grado “Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país<sup>3</sup>” presentado a la

---

<sup>1</sup> Reina Herrera, F. D. (Marzo de 2016). Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país. *Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país*. Bogotá: Universidad Nueva Granada.

<sup>2</sup> Reina Herrera, F. D. (Marzo de 2016). Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país. *Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país*. Bogotá: Universidad Nueva Granada.

<sup>3</sup> Reina Herrera, F. D. (Marzo de 2016). Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país. *Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país*. Bogotá: Universidad Nueva Granada.



Universidad Nueva Granda en el año 2016, señala:

*“La cárcel no era un sitio privativo de la libertad si no de castigo y de custodia para que el acusado pudiera comparecer a un juicio donde las únicas penas eran la muerte o un castigo el cual era sometido a una serie de torturas con el fin de que el acusado no volviera a reincidir en la actividad criminal, donde habian todo tipo de arbitrariedades, no existían procedimientos públicos que contribuyeran a crear una sanción justa, ya que carecía de una proporcionalidad justa entre los delitos y las penas”<sup>4</sup>.*

Para el año 1764, el jurista y filósofo italiano Cesare Bonesana, marqués de Beccaria publicó su obra *De los Delitos y las Penas*,<sup>5</sup> siendo considerado el libro que revolucionó el Derecho Penal del momento e ilustró los postulados legislativos propios del Derecho europeo.

En esta obra, se expone el fin de la pena como:

*“El fin, pues, no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales. Luego deberán ser escogidas aquellas penas y aquel método de imponerlas que, guardada la proporción, hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los ánimos de hombres, y la menos dolorosa sobre el cuerpo del reo”<sup>6</sup>.*

Pero con el conflicto desatado por la Toma de la Bastilla<sup>7</sup> (la *Bastille* era la cárcel donde pagaban condena las víctimas del poder monárquico) el 14 de julio del año 1789, hecho que da inicio a la Revolución Francesa, esa concepción de cárcel como sinónimo de castigo y torturas se empezaría a desdibujar, dando paso a los principios desplegados durante la Revolución y contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano los cuales eran fraternidad, libertad e igualdad.

Es así, como se le da paso a un nuevo concepto acuñado por normas tanto internacionales como nacionales y es la noción de Resocialización o Reeducción de las personas que se encuentran en Centros Carcelarios.

En ponencia adelantada por el abogado y funcionario del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, Ignacio Racca, dentro del Congreso de Derecho de Ejecución Penal<sup>8</sup> desarrollado por la Universidad de Buenos Aires los días 9 y 10 de junio del año 2014, bajo el título “La resocialización como fin de la pena privativa de la libertad: análisis del último legado del positivismo criminológico”, se expone la reeducación o resocialización del penado como medio idóneo para no afectar derechos constitucionales intrínsecos, en la misma se realiza un recorrido por la historia donde se afirma por parte del ponente:

*“Con la finalidad encubierta de legitimar el poder punitivo estatal, y el norte aparente de “mejorar” o “ayudar a la superación” de los individuos “desviados”, el mito de la resocialización como finalidad de la prisionización llega entre mediados y fines del siglo XIX a las sociedades modernas, con la promesa de abolir la reincidencia, disminuir el delito y por ende, reestablecer el orden social”<sup>9</sup>.*

---

<sup>4</sup> Reina Herrera, F. D. (Marzo de 2016). Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país. *Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país*. Bogotá: Universidad Nueva Granada. Página 5.

<sup>5</sup> Beccaria, C. (2004). *De los Delitos y las Penas con el Comentario de Voltaire*. (J. A. de las Casas, Trad.) Madrid: Alianza Editorial.

<sup>6</sup> Beccaria, C. (2004). *De los Delitos y las Penas con el Comentario de Voltaire*. (J. A. de las Casas, Trad.) Madrid: Alianza Editorial.

<sup>7</sup> Queralt del Hierro, M. P. (19 de Julio de 2019). La toma de la Bastilla: empieza la revolución. *La Vanguardia*. Obtenido de La toma de la Bastilla: empieza la revolución: <https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-moderna/20190705/47311214351/la-toma-de-la-bastilla-empieza-la-revolucion.html>

<sup>8</sup> Racca, I. (9-10 de Junio de 2014). La resocialización como fin de la pena privativa de la libertad: análisis del último legado del positivismo criminológico. En C. d. Aires (Ed.), (pág. 22). Buenos Aires.

<sup>9</sup> Racca, I. (9-10 de Junio de 2014). La resocialización como fin de la pena privativa de la libertad: análisis del último legado del positivismo criminológico. En C. d. Aires (Ed.), (pág. 22). Buenos Aires.

Así mismo, en el mismo acto se destacó por parte del ponente la importancia de conocer el origen del concepto y su reconocimiento en el ámbito internacional, destacándolo como una “readaptación social”.

Ya adentrada la época de los 90 y reconocidos los Derechos Civiles de los Ciudadanos, se consolida la idea de un fin constitucional de la pena en su ejecución, la cual era la resocialización. Cabe resaltar una frase expresada por el Doctor en Derecho nacido en Burgos-España en el año 1905 Antonio Quintano Ripolles, en su artículo “La motivación moral en el Derecho Español” publicada por la Revista General de Legislación y Jurisprudencia en el año 1949 donde expresa: “Hay que humanizar el Derecho en general, y muy especialmente el Penal, crearlo y recrearlo a imagen y semejanza del hombre concreto, con contenido ético y psicológico profundo, aunque a trueque de sacrificar apotegmas de pura lógica formal...”<sup>10</sup>.

### **LA RESOCIALIZACIÓN COMO PROCESO DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICO-FORMATIVOS IMPARTIDOS DESDE LOS CENTROS CARCELARIOS**

La resocialización, tal y como la define el doctor en Derecho y Ciencias Sociales Roberto Bergalli<sup>11</sup>, y citado por Álvaro Orlando Pérez Pinzón en el artículo titulado “Las funciones de la pena. Especial énfasis en la resocialización” publicado en el año 1993 por la Revista Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, es:

*“la reelaboración de un status social que significa la posibilidad de retorno al ámbito de las relaciones sociales en que se desempeñaba quien, por un hecho cometido y sancionado, según normas que han producido sus mismos pares sociales, habría visto interrumpida su vinculación con el estrato al cual pertenecía. Supone corresponder en el futuro a las esperanzas mínimas de la sociedad y con ello volver a ser incluido en ella”.*<sup>12</sup>

Es por esto, que la resocialización implica un proceso de enseñanza y educación de valores y principios éticos-formativos, los cuales la persona que se encuentra en Centros Carcelarios deba meditar y aportar, además, se debe adoptar un tratamiento a través de métodos de aprendizaje que permitan la interiorización de tales principios y valores para así lograr el fin último del adecuado regreso a la sociedad de esa persona.

Para el abogado Esteban Ignacio Viñas, de acuerdo a lo expresado en su artículo “Resocialización de condenados: política de Estado y participación de la sociedad” publicado en el año 2016 por la Revista Digital de Estudios Humanísticos de la Universidad FASTA – In Itinere,<sup>13</sup> la resocialización se debe entender desde dos (2) acepciones dogmáticas de previsión legal: la primera es la resocialización para la moralidad, la cual se entiende como en la que “el encierro carcelario persigue que el individuo interiorice y haga suyos los criterios valorativos dominantes en la sociedad en la que ha de reintegrarse”<sup>14</sup>; y la segunda es la resocialización para la legalidad, la cual se concibe “como un mínimo de asimilación del condenado a través del tratamiento carcelario del ordenamiento jurídico, lo que equivale a despertarle o formarle el convencimiento del valor normativo que encierra el derecho positivo.”<sup>15</sup>

En Colombia, se debe tomar tanto la resocialización por moral como la resocialización por legalidad,

<sup>10</sup> Quintano Ripolles, A. (Abril de 1949). La motivación moral en el Derecho Español. *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 393-414.

<sup>11</sup> Pérez Pinzón, Á. O. (1993). Las funciones de la pena. Especial énfasis en la resocialización. *Revista Derecho Penal y Criminología*, 15(50).

<sup>12</sup> Pérez Pinzón, Á. O. (1993). Las funciones de la pena. Especial énfasis en la resocialización. *Revista Derecho Penal y Criminología*, 15(50) Pág. 30.

<sup>13</sup> Viñas, E. I. (2016). Resocialización de condenados: política de Estado y participación de la sociedad. *In Itinere - Revista digital de Estudios Humanísticos de la Universidad FASTA*, 6(1), 86-109.

<sup>14</sup> Viñas, E. I. (2016). Resocialización de condenados: política de Estado y participación de la sociedad. *In Itinere - Revista digital de Estudios Humanísticos de la Universidad FASTA*, 6(1), 86-109. Pág. 88.

<sup>15</sup> Viñas, E. I. (2016). Resocialización de condenados: política de Estado y participación de la sociedad. *In Itinere - Revista digital de Estudios Humanísticos de la Universidad FASTA*, 6(1), 86-109. Pág. 89.

atendiendo a lo expresado por Viñas Esteban (2016)<sup>16</sup> donde manifiesta la resocialización por legalidad atiende "...en que la pena debe servir para que el sujeto aprehenda las valoraciones sociales trascendentes contenidas en las normas jurídicas vigentes, para que las respete, llegando a comprender los daños que ha ocasionado con el o los delitos cometidos"<sup>17</sup>; y en lo referente a la resocialización moral afirma: "está vinculado a una visión antropológica de la pena... y que se vincula con quien es el destinatario de ella, su capacidad de valoración y de responsabilidad, como así también, finalmente, la potencialidad para cambiar la conducta errada."<sup>18</sup>

El Código Penal Colombiano -Ley 599 de 2000- en su artículo 4 contempla la reinserción social como uno de las funciones de la pena, Código Penitenciario y Carcelario<sup>19</sup>; además en el artículo 5 de la misma ley, se expresan las funciones de la medida de seguridad, establece que al momento de la ejecución de la medida opera la función de rehabilitación.<sup>20</sup>

El artículo 9 del Código Penitenciario y Carcelario -Ley 65 de 1993<sup>21</sup>-, establece: "Funciones y finalidad de la pena y de las medidas de seguridad. La pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación"<sup>22</sup>.

A su vez el artículo 10 del Código Penitenciario y Carcelario contempla:

*"El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario."*<sup>23</sup>

Es así como, la resocialización de las personas que se encuentran en Centros Carcelarios en Colombia, se considera fin fundamental de la pena y es resguardado por postulados constitucional y legislativos, además la Corte Constitucional como guardiana de la máxima legal y protectora de derechos fundamentales de los ciudadanos, a lo largo de múltiples pronunciamientos ha reconocido la importancia de la resocialización y reeducación de personas reclusas en cárceles. Uno de esos pronunciamientos es el de la Sentencia C-261 de 1996 con ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero, en donde se expresa:

*"Durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de resocialización del delincuente, ya que esto es una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana, puesto que el objeto del derecho penal en un Estado de este tipo no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo... puesto que el objeto del derecho penal en un Estado de este tipo no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo... Así, de manera expresa, el artículo 10 numeral 3º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado por Colombia por la Ley 74 de 1968, consagra que "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados."*<sup>24</sup>

<sup>16</sup> Viñas, E. I. (2016). Resocialización de condenados: política de Estado y participación de la sociedad. In *Itinere - Revista digital de Estudios Humanísticos de la Universidad FASTA*, 6(1), 86-109. Pág. 89.

<sup>17</sup> Viñas, E. I. (2016). Resocialización de condenados: política de Estado y participación de la sociedad. In *Itinere - Revista digital de Estudios Humanísticos de la Universidad FASTA*, 6(1), 86-109. Pág. 89.

<sup>18</sup> Viñas, E. I. (2016). Resocialización de condenados: política de Estado y participación de la sociedad. In *Itinere - Revista digital de Estudios Humanísticos de la Universidad FASTA*, 6(1), 86-109. Pág. 89.

<sup>19</sup> Código Penitenciario y Carcelario [CPC]. Ley 65 de 1993. Art. 4. Agosto 19 de 1993 (Colombia).

<sup>20</sup> Código Penitenciario y Carcelario [CPC]. Ley 65 de 1993. Art. 5. Agosto 19 de 1993 (Colombia).

<sup>21</sup> Código Penitenciario y Carcelario [CPC]. Ley 65 de 1993. Art. 9. Agosto 19 de 1993 (Colombia).

<sup>22</sup> Código Penitenciario y Carcelario [CPC]. Ley 65 de 1993. Art. 9. Agosto 19 de 1993 (Colombia).

<sup>23</sup> Código Penitenciario y Carcelario [CPC]. Ley 65 de 1993. Art. 10. Agosto 19 de 1993 (Colombia).

<sup>24</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-261 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero: Junio 13 de 1996). Subrayado fuera del texto.

La resocialización se puede lograr luego de que se desarrolle un proceso tanto educativo como correctivo por parte de los Centros de Reclusión y Penitenciarios, en donde se dé el despliegue de tres (3) factores: **1)** una pronta e inmediata valoración de aspectos tanto psíquicos como culturales por parte de los profesionales que se encuentran al servicio del Centro de Reclusión a las personas reclusas, **2)** acciones administrativas y presupuestales de los Centros de Reclusión tendientes a materializar el cumplimiento de las penas bajo espacios aptos para la educación, trabajo y desarrollo socio-cultural, y **3)** la incorporación de los Centros de Reclusión dentro de las comunidades académicas y formativas del sector, con el fin de brindar por parte de estas entidades talleres y acompañamiento laboral a las personas reclusas.

El informe estadístico publicado en la página web del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC– con fecha del 17 de enero del año 2018 y con corte de datos al 31 de diciembre del año 2017<sup>25</sup>, refleja la estadística de la población penitenciaria en Colombia, la cual corresponde a un total de 114.750 personas, en donde se discrimina la población por regional (central, occidente, norte, oriente, noroeste, viejo caldas), la capacidad y el porcentaje de hacinamiento.<sup>26</sup>

**Tabla 1.** Población Carcelaria en Colombia al 31 de diciembre de 2017 – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC –<sup>27</sup>

REGIONAL	CAPACIDAD POBLACIONAL	TOTAL DE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE HACINAMIENTO
Central	29.581	39.896	34,8%
Occidente	14.895	22.918	53,9%
Norte	7.735	13.407	73,3%
Oriente	7.856	11.408	45,2%
Noreste	8.582	14.248	66,0%
Viejo Caldas	10.562	12.901	22,1%
<b>TOTAL</b>	<b>79.211</b>	<b>114.750</b>	<b>44,9%</b>

**Fuente:** Elaboración propia con base en las estadísticas de la página web del INPEC<sup>28</sup>.

De acuerdo con el artículo de investigación publicado por la Revista Derecho de la Universidad del Norte – Barranquilla en el año 2018, del autor Norberto Hernández Jiménez, bajo el título “El fracaso de la resocialización en Colombia”<sup>29</sup>, la población penitenciaria presentaba una evolución con tendencia al aumento, demostrado por el mismo en gráfica con representación de los años 2005 a 2016, en donde en el

<sup>25</sup> Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. (17 de Enero de 2018). *Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC*. Obtenido de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC: <http://www.inpec.gov.co/documents/20143/361642/12.+ESTADISTICAS+DICIEMBRE+31+DE+2017.xls/536e75e5-2eea-39d3-27eb-feaa0fe14989>

<sup>26</sup> Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. (17 de Enero de 2018). *Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC*. Obtenido de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC: <http://www.inpec.gov.co/documents/20143/361642/12.+ESTADISTICAS+DICIEMBRE+31+DE+2017.xls/536e75e5-2eea-39d3-27eb-feaa0fe14989>

<sup>27</sup> Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. (17 de Enero de 2018). *Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC*. Obtenido de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC: <http://www.inpec.gov.co/documents/20143/361642/12.+ESTADISTICAS+DICIEMBRE+31+DE+2017.xls/536e75e5-2eea-39d3-27eb-feaa0fe14989>

<sup>28</sup> Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. (17 de Enero de 2018). *Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC*. Obtenido de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC: <http://www.inpec.gov.co/documents/20143/361642/12.+ESTADISTICAS+DICIEMBRE+31+DE+2017.xls/536e75e5-2eea-39d3-27eb-feaa0fe14989>

<sup>29</sup> Hernández Jiménez, N. (2018). El fracaso de la resocialización en Colombia. *Revista de Derecho*(49), 1-41. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n49/0121-8697-dere-49-2.pdf>

año 2005 el número de personas reclusas en cárceles colombianas era de 66.829 y para el año 2016 hasta el mes de julio era de 120.657<sup>30</sup>.

Esta disminución en el número de personas reclusas en Centros de Reclusión, se le atribuye en gran medida a la entrada en vigencia de la Ley 1760 de 2015<sup>31</sup> "Por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de libertad", y a la Ley 1786 de 2016<sup>32</sup> "Por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la ley 1760 de 2015", las cuales se consideraron como motivo de excarcelaciones masivas en el país por lo contenido en el artículo 1° parágrafo 1° de la Ley 1760 de 2015, que contempla que el término de las medidas de aseguramiento privativas de libertad no podrá exceder de un (1) año, lo que genera que inmediatamente pierdan vigencia miles de medidas de aseguramiento privativas de libertad en establecimientos carcelarios impuestas por jueces de la república<sup>33</sup>.

El título XIII del Código Penitenciario y Carcelario en Colombia "Tratamiento Penitenciario", expresa que el objetivo de este es "preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad"<sup>34</sup>. Es por esto, que el artículo 10 de la misma norma, tal como se manifestó en párrafos anteriores, le da importancia y prevalencia a los tratamientos penitenciarios, además es sostenida tal norma en el amparo de la Corte Constitucional tal y como se evidencia en la Sentencia T-213 de 2011 que señala las dos dimensiones que presenta el tratamiento penitenciario, la primera es la "referente al propósito de lograr la resocialización del delincuente", y la segunda "la relación que existe entre el derecho a acceder a programas de estudio o trabajo que permitan redimir pena y el derecho fundamental a la libertad personal"<sup>35</sup>.

Siendo así, y tal como lo afirma la Corte Constitucional en la Sentencia anteriormente citada, el Establecimiento de Reclusión es el encargado y tiene el deber de "restaurar los lazos sociales de los reclusos con el mundo exterior, pues de ello dependerá, en gran parte, la posibilidad de resocialización"<sup>36</sup>.

El sistema penitenciario colombiano se caracteriza por ser progresivo, toda vez que atiende a la aplicación de diversas etapas en los sistemas de ejecución de los tratamientos penitenciarios hasta que se logra el reintegro absoluto de la persona reclusa en Centro Carcelario a la sociedad, fundamentado el mismo en la conducta del penado y en el trabajo que realizó en tal Centro.

Además, el tratamiento al que tiene derecho la persona reclusa tiene como fin prepararlo y proyectarlo para que al momento de cumplir con su condena y/u obtener la libertad, logre un adecuado desarrollo en la sociedad, sin dejar de lado que también generaría el tratamiento un bloque frente a la posibilidad de la comisión de nuevos delitos por parte de esa persona, dejando de lado la reincidencia.

La Resolución 7302 de 2005<sup>37</sup> emitida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC– "Por medio de la cual se revocan las resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario"<sup>38</sup>, en su capítulo II "Tratamiento Penitenciario", en la parte considerativa define el objetivo del tratamiento penitenciario

<sup>30</sup> Hernández Jiménez, N. (2018). El fracaso de la resocialización en Colombia. *Revista de Derecho*(49), 1-41. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n49/0121-8697-dere-49-2.pdf>

<sup>31</sup> Ley 1760 de 2015. Por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de libertad. Julio 6 de 2015. DO. N°49565.

<sup>32</sup> Ley 1786 de 2016. Por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la ley 1760 de 2015. Julio 1 de 2016. DO. N°49921.

<sup>33</sup> Ley 1760 de 2015. Por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de libertad. Julio 6 de 2015. DO. N°49565.

<sup>34</sup> Código Penitenciario y Carcelario [CPC]. Ley 65 de 1993. Art. 142. Agosto 19 de 1993 (Colombia).

<sup>35</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-213 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: Marzo 27 de 2011).

<sup>36</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-213 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: Marzo 27 de 2011).

<sup>37</sup> Resolución 7302 de 2005 [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–]. Por medio de la cual se revocan las resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario. Noviembre 23 de 2005.

<sup>38</sup> Resolución 7302 de 2005 [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–]. Por medio de la cual se revocan las resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario. Noviembre 23 de 2005.

como el de “preparar al condenado mediante su resocialización para la vida en libertad”<sup>39</sup>.

En el artículo 8 de la citada resolución<sup>40</sup>, establece que el interno o recluso inicia el tratamiento penitenciario en el momento en que es condenado, además en el párrafo 1 impone la obligación al director del Centro de Reclusión de “organizar, divulgar y ejecutar un sistema de oportunidades, ajustado a las características y necesidades del Establecimiento, que permita el tratamiento, de modo que este sea progresivo y programado, conforme a la dignidad humana y a las necesidades de cada sujeto”<sup>41</sup>.

El artículo 10 de la Resolución 7302 de 2005<sup>42</sup> desarrolla cada una de las fases del tratamiento penitenciario, la cual nos permitimos representar a través del siguiente cuadro, señalando la etapa, la fase del tratamiento, en lo que consiste el mismo y el período en el cual se debe desarrollar:

**Cuadro 1. Fases del Tratamiento Penitenciario**

Etapa	Fase del Tratamiento	Descripción	Período de Desarrollo
<b>1 FASE</b>	<b><u>Fase de Observación</u></b>	El equipo interdisciplinario realiza una revisión documental y exploración del comportamiento del interno(a), su pensamiento y actitud frente a su estilo de vida. Se implementa a partir de los momentos de: <b>1) Adaptación</b> , busca que el interno(a) se ubique en el nuevo espacio intramural. <b>2) Sensibilización</b> , mediante talleres y actividades se busca que el interno(a) adquiera nuevos conocimientos sobre normas, hábitos y características de su nuevo entorno. <b>3) Motivación</b> , se le da a conocer al interno(a) el Sistema de Oportunidades con el que cuenta el Establecimiento de Reclusión para la elección de actividades. <b>4) Proyección</b> , el interno(a) elabora una propuesta de su proyecto de vida a desarrollar durante su tiempo de reclusión.	Mínimo de un (1) mes y máximo de tres (3) meses
	<b><u>Fase de Diagnóstico</u></b>	Se le define el perfil a nivel jurídico y psicosocial al interno(a) de acuerdo a los talleres y formatos diligenciados.	
	<b><u>Fase de Clasificación</u></b>	El Consejo de Evaluación y Tratamiento establece un plan de tratamiento al interno(a) con objetivos a cumplir en cada una de las fases.	
		El interno(a) accede a programas educativos y laborales, en periodo cerrado, que permite el	Termina cuando el interno(a) es

<sup>39</sup> Resolución 7302 de 2005 [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–]. Por medio de la cual se revocan las resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario. Noviembre 23 de 2005.

<sup>40</sup> Resolución 7302 de 2005 [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–]. Por medio de la cual se revocan las resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario. Artículo 8. Noviembre 23 de 2005.

<sup>41</sup> Resolución 7302 de 2005 [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–]. Por medio de la cual se revocan las resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario. Artículo 8. Noviembre 23 de 2005.

<sup>42</sup> Resolución 7302 de 2005 [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–]. Por medio de la cual se revocan las resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario. Artículo 10. Noviembre 23 de 2005.

<b>2 FASE</b>	<b><u>Fase de Alta Seguridad (período cerrado)</u></b>	cumplimiento del plan de tratamiento. Implica mayores medidas restrictivas y se orienta a reflexiones y fortalecimiento de habilidades. Se prepara para su desempeño en espacios semiabiertos.	promovido por el Consejo de Evaluación y Tratamiento. Cumplimiento de la tercera parte de la pena impuesta
<b>3 FASE</b>	<b><u>Fase de Mediana Seguridad (Período Semiabierto)</u></b>	El interno(a) accede a programas educativos y laborales, en un espacio semiabierto, que implica medidas de seguridad menos restrictivas. Los programas que se ofrecen en esta fase se basan en la intervención individual y grupal, permiten el fortalecimiento de competencias psicosociales y ocupacionales.	Inicia cuando alcance el cumplimiento de la tercera parte de la pena y finaliza cuando cumpla las 4/5 partes del tiempo requerido para libertad condicional
<b>4 FASE</b>	<b><u>Fase de Mínima Seguridad (Período Abierto)</u></b>	El interno(a) accede a programa educativos y laborales en espacio con medidas de restricción mínimas. Se fortalece el ámbito personal de restructuración de la dinámica familiar y laboral, para lograr afrontar la integración social positiva y consolidar su proyecto de vida en libertad.	Inicia cuando el interno(a) haya cumplido las 4/5 partes del tiempo requerido para la libertad condicional
<b>5 FASE</b>	<b><u>Fase de Confianza</u></b>	Se orienta al desarrollo de actividades que permitan evidenciar el impacto del tratamiento realizado en las fases	Procede cuando la libertad condicional haya sido negada

**Fuente:** Elaboración propia con base en el artículo 10 de la Resolución 7302 de 2005 emitida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, Resolución 7302 de 2005 [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–]. Por medio de la cual se revocan las resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario. Artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Noviembre 23 de 2005<sup>43</sup>.

Pero, a pesar de existir regulación y protección normativa de la misma y parámetros para un adecuado desarrollo de programas de resocialización y reeducación en las cárceles colombianas, son muchos los factores que obstaculizan la adecuada prestación de los tratamientos terapéuticos a las personas reclusas en estos centros.

## **EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONALES MATERIALIZADO EN LAS CÁRCELES COLOMBIANAS**

El término obstaculizar, es definido por la Real Academia Española (2014)<sup>44</sup>: como “impedir o dificultar la consecución de un propósito”, dentro del tema de análisis y estudio son muchos los obstáculos que se presentan en materia de resocialización. Podemos manifestar, que el hacinamiento, la falta de prestación de servicios públicos esenciales en los centros de reclusión, las carencias de tipo educativo y terapéutico en estos centros, el deterioro de la infraestructura penitenciaria, la violencia, extorsión, criminalidad, drogadicción, entre otros, son comunes denominadores si de estado de cosas inconstitucionales hablamos y de impedimentos para cumplir con la obligación de resocialización en las cárceles colombianas.

<sup>43</sup> Resolución 7302 de 2005 [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–]. Por medio de la cual se revocan las resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario. Artículo 10. Noviembre 23 de 2005.

<sup>44</sup> Real Academia Española (2004). Recuperado de: <https://drae.es/palabras/obstaculizar>

La Sentencia T-388 de 2013<sup>45</sup> con ponencia de la Doctora María Victoria Calle Correa, en lo referente al estado de cosas inconstitucionales de las cárceles señala:

*“La violencia al interior de las prisiones es un asunto que compete a muchos sistemas penitenciarios y carcelarios en el mundo, pero en especial a aquellos que se encuentran en situación de hacinamiento. La sobrepoblación carcelaria, por sí misma, propicia la violencia. El hacinamiento penitenciario y carcelario lleva a la escasez de los bienes y servicios más básicos al interior de las cárceles, como un lugar para dormir. Esto lleva a que la corrupción y la necesidad generen un mercado ilegal, alterno, en el cual se negocian esos bienes básicos escasos que el Estado debería garantizar a una persona, especialmente por el hecho de estar privada de la libertad bajo su control y sujeción. La prensa, al igual que los escritos académicos, ha mostrado como las personas recluidas en penitenciarías y cárceles tienen que pagar por todo. Conseguir un buen lugar en un pasillo tiene sus costos; conseguir una celda es prácticamente imposible, sobre todo por su altísimo valor. Diferentes analistas de la realidad nacional, en diversos medios de comunicación, han puesto de presente su opinión al respecto. Son voces que coinciden en la gravedad de la crisis carcelaria y de su impacto sobre la dignidad humana y los derechos humanos. Ha sido calificada, entre otros términos, de “insostenible”<sup>46</sup>.*

Además en la misma jurisprudencia, se recalca en lo que las cárceles se habían convertido, y la violación que se estaba dando a la política criminal y carcelaria por no tomar las medidas adecuadas y necesarias para evitar el uso indebido o excesivo de las medidas de aseguramiento que implicaran la privación de la libertad de una persona afirmando que las misma se “han convertido en vertederos o depósitos de seres humanos, antes que instituciones respetuosas de la dignidad, de los derechos fundamentales de las personas y orientadas a resocializarlas.”<sup>47</sup>

Es por esto, que se puede afirmar que las condiciones de vida en las cárceles colombianas se encuentran reducidas a situaciones precarias atendiendo a los índices de hacinamiento, condiciones de salubridad e higiene. En el informe presentado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–<sup>48</sup>, demuestra cómo hay un porcentaje de 44,9% de sobrepoblación, como ejemplo tomemos el caso de Regional Norte, en donde la capacidad es de 7.735 reclusos y a la fecha del 31 de diciembre del año 2017, se encontraban recluidos 13.407, presentando un porcentaje de hacinamiento del 73,3%. Para ilustrar mejor se demuestra en tabla 2:

---

<sup>45</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-388 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa: Junio 28 de 2013).

<sup>46</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-388 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa: Junio 28 de 2013).

<sup>47</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-388 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa: Junio 28 de 2013).

<sup>48</sup> Recuperado de:

[http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadistica/estadisticas/-/document\\_library/3pVdHSI1UBFX/view\\_file/323826?\\_com\\_liferay\\_document\\_library\\_web\\_portlet\\_DLPortlet\\_INSTANCE\\_3pVdHSI1UBFX\\_redirect=http%3A%2F%2Fwww.inpec.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Festadistica%2Festadisticas%2F-%2Fdocument\\_library%2F3pVdHSI1UBFX%2Fview%2F361642%3F\\_com\\_liferay\\_document\\_library\\_web\\_portlet\\_DLPortlet\\_INSTANCE\\_3pVdHSI1UBFX\\_displayStyle%3Dist%26\\_com\\_liferay\\_document\\_library\\_web\\_portlet\\_DLPortlet\\_INSTANCE\\_3pVdHSI1UBFX\\_navigation%3Dhome](http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadistica/estadisticas/-/document_library/3pVdHSI1UBFX/view_file/323826?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSI1UBFX_redirect=http%3A%2F%2Fwww.inpec.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Festadistica%2Festadisticas%2F-%2Fdocument_library%2F3pVdHSI1UBFX%2Fview%2F361642%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSI1UBFX_displayStyle%3Dist%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSI1UBFX_navigation%3Dhome)

Link documento: <http://www.inpec.gov.co/documents/2014/361642/12.+ESTADISTICAS+DICIEMBRE+31+DE+2017.xls/536e75e5-2eea-39d3-27eb-feaa0fe14989>



**Tabla 2.** Porcentaje de Hacinamiento Población Carcelaria en Colombia al 31 de diciembre de 2017 – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC –<sup>49</sup>

Regional	Capacidad Poblacional	Total de la Población	Diferencia	Porcentaje de Hacinamiento
Central	29.581	39.896	10.315	34,8%
Occidente	14.895	22.918	8.023	53,9%
Norte	7.735	13.407	5.672	73,3%
Oriente	7.856	11.408	3.552	45,2%
Noreste	8.582	14.248	5.666	66,0%
Viejo Caldas	10.562	12.901	2.339	22,1%
<b>TOTAL</b>	<b>79.211</b>	<b>114.778</b>	<b>35.567</b>	<b>44,9%</b>

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de la página web del INPEC<sup>50</sup>.

Es por esto, que se puede afirmar que las condiciones de vida en las cárceles colombianas se encuentran reducidas a situaciones precarias atendiendo a los índices de hacinamiento, condiciones de salubridad e higiene.

En el informe presentado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, demuestra cómo hay un porcentaje de 44,9% de sobrepoblación, como ejemplo tomemos el caso de Regional Norte, en donde la capacidad es de 7.735 reclusos y a la fecha del 31 de diciembre del año 2017<sup>51</sup>, se encontraban reclusos 13.407, presentando se evidencia así que, uno de los obstáculos para una adecuada y efectiva resocialización es el hacinamiento, además se considera como una de las principales causas para que se presente violencia y otro estado de cosas inconstitucionales, violación de derecho fundamentales, entre otros, tal y como lo afirma Fidel Darío García Reina en su trabajo de investigación presentado en la Universidad Nueva Granada en el año 2016 bajo el título “Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país”, que menciona: “El hacinamiento hace que la violencia se

<sup>49</sup> Recuperado de:

[http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadistica/estadisticas/-/document\\_library/3pVdHSI1UBFX/view\\_file/323826?\\_com\\_liferay\\_document\\_library\\_web\\_portlet\\_DLPortlet\\_INSTANCE\\_3pVdHSI1UBFX\\_redirect=http%3A%2F%2Fwww.inpec.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Festadistica%2Festadisticas%2F-%2Fdocument\\_library%2F3pVdHSI1UBFX%2Fview%2F361642%3F\\_com\\_liferay\\_document\\_library\\_web\\_portlet\\_DLPortlet\\_INSTANCE\\_3pVdHSI1UBFX\\_displayStyle%3Dlist%26\\_com\\_liferay\\_document\\_library\\_web\\_portlet\\_DLPortlet\\_INSTANCE\\_3pVdHSI1UBFX\\_navigation%3Dhome](http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadistica/estadisticas/-/document_library/3pVdHSI1UBFX/view_file/323826?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSI1UBFX_redirect=http%3A%2F%2Fwww.inpec.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Festadistica%2Festadisticas%2F-%2Fdocument_library%2F3pVdHSI1UBFX%2Fview%2F361642%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSI1UBFX_displayStyle%3Dlist%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSI1UBFX_navigation%3Dhome)

Link documento: <http://www.inpec.gov.co/documents/20143/361642/12.+ESTADISTICAS+DICIEMBRE+31+DE+2017.xls/536e75e5-2eea-39d3-27eb-feaa0fe14989>

<sup>50</sup> Recuperado de:

[http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadistica/estadisticas/-/document\\_library/3pVdHSI1UBFX/view\\_file/323826?\\_com\\_liferay\\_document\\_library\\_web\\_portlet\\_DLPortlet\\_INSTANCE\\_3pVdHSI1UBFX\\_redirect=http%3A%2F%2Fwww.inpec.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Festadistica%2Festadisticas%2F-%2Fdocument\\_library%2F3pVdHSI1UBFX%2Fview%2F361642%3F\\_com\\_liferay\\_document\\_library\\_web\\_portlet\\_DLPortlet\\_INSTANCE\\_3pVdHSI1UBFX\\_displayStyle%3Dlist%26\\_com\\_liferay\\_document\\_library\\_web\\_portlet\\_DLPortlet\\_INSTANCE\\_3pVdHSI1UBFX\\_navigation%3Dhome](http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadistica/estadisticas/-/document_library/3pVdHSI1UBFX/view_file/323826?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSI1UBFX_redirect=http%3A%2F%2Fwww.inpec.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Festadistica%2Festadisticas%2F-%2Fdocument_library%2F3pVdHSI1UBFX%2Fview%2F361642%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSI1UBFX_displayStyle%3Dlist%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSI1UBFX_navigation%3Dhome)

Link documento: <http://www.inpec.gov.co/documents/20143/361642/12.+ESTADISTICAS+DICIEMBRE+31+DE+2017.xls/536e75e5-2eea-39d3-27eb-feaa0fe14989>

<sup>51</sup> Recuperado de:

[http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadistica/estadisticas/-/document\\_library/3pVdHSI1UBFX/view\\_file/323826?\\_com\\_liferay\\_document\\_library\\_web\\_portlet\\_DLPortlet\\_INSTANCE\\_3pVdHSI1UBFX\\_redirect=http%3A%2F%2Fwww.inpec.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Festadistica%2Festadisticas%2F-%2Fdocument\\_library%2F3pVdHSI1UBFX%2Fview%2F361642%3F\\_com\\_liferay\\_document\\_library\\_web\\_portlet\\_DLPortlet\\_INSTANCE\\_3pVdHSI1UBFX\\_displayStyle%3Dlist%26\\_com\\_liferay\\_document\\_library\\_web\\_portlet\\_DLPortlet\\_INSTANCE\\_3pVdHSI1UBFX\\_navigation%3Dhome](http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadistica/estadisticas/-/document_library/3pVdHSI1UBFX/view_file/323826?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSI1UBFX_redirect=http%3A%2F%2Fwww.inpec.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Festadistica%2Festadisticas%2F-%2Fdocument_library%2F3pVdHSI1UBFX%2Fview%2F361642%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSI1UBFX_displayStyle%3Dlist%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSI1UBFX_navigation%3Dhome)

Link documento: <http://www.inpec.gov.co/documents/20143/361642/12.+ESTADISTICAS+DICIEMBRE+31+DE+2017.xls/536e75e5-2eea-39d3-27eb-feaa0fe14989>

incremento por el dominio de un territorio para poder suplir las necesidades básicas de alojamiento...”<sup>52</sup>

En lo referente a otra circunstancia que se podría considerar obstáculo para la adecuada resocialización de las personas que se encuentran reclusas en cárceles colombianas tiene que ver con la violencia que se presenta en las mismas, de acuerdo a lo expresado por la Corte Constitucional en Sentencia T-388 de 2013<sup>53</sup>, en donde se refiere la alta corte a que lejos de solucionar los problemas de seguridad el recluir a infractores de la ley, lo que se está ocasionando es mayor reincidencia y mayor índice de violencia por falta de resocialización, expresa la Corte:

*“... el aumento de las políticas de encarcelamiento está relacionado con los problemas de seguridad que enfrentan las personas en la región. Aunque la prisión es una de las herramientas en la guerra contra el delito, que buscan evitar las violaciones a los derechos fundamentales de las personas mediante la resocialización de quienes delinquen, no lo ha logrado, puesto que la reclusión en las condiciones de crisis que se enfrenta, impide que el encierro sirva adecuadamente a los propósitos que se le asignan de resocialización. De hecho, como se ha dicho, las condiciones de reclusión aceleran y propician ciclos del crimen”<sup>54</sup>.* Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-388 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa: Junio 28 de 2013).

En lo referente al tema de violencia en las cárceles colombianas, tenemos el relato del Profesor e Investigador de Yale University,<sup>55</sup> Michael Reed Hurtado en la columna publicada en la página web [razonpublica.com](http://razonpublica.com) en donde señala:

*“Lamentablemente, el estigma que se extiende sobre los presos lleva a su deshumanización y a la devaluación de sus derechos. Esa construcción de una subclase de humanos encerrados e imaginados como bestias es una figura útil para su olvido y negación. Los muros de la prisión, que separan y ocultan, están ahí, justamente, para secuestrar el sufrimiento humano y proteger a la sociedad de lo que pasa bajo el paraguas del castigo judicial. Además de las muertes y de los ataques salvajes contra personas particulares, la vida en prisión –ayer como hoy– está marcada por la violencia, la privación y la arbitrariedad. Esto es así por la tolerancia y la connivencia sistemáticas de las autoridades con la atrocidad. Ayer como hoy, en Colombia la vida en prisión está teñida de muerte y de impunidad.”<sup>56</sup>*

Si bien es cierto, al momento de que una persona es privada de la libertad, se desencadena como consecuencia inmediata la cesación o suspensión temporal de algunos derechos reconocidos constitucionalmente, pero en ningún momento se debe desconocer que el Estado como garante fundamental de los mismos, debe velar y custodiar por la correcta protección de los derechos fundamentales que se consideran inescindibles y que por el hecho de encontrarse privado de la libertad no se desprenden de su ser, éstos se convierten en atributos de la condición de la persona privada de la libertad.

---

<sup>52</sup> Reina Herrera, F. D. (Marzo de 2016). Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país. *Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país*. Bogotá: Universidad Nueva Granada. Pág. 6.

<sup>53</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-388 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa: Junio 28 de 2013).

<sup>54</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-388 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa: Junio 28 de 2013).

<sup>55</sup> Reed Hurtado, M. (2016). Atrocidades en las cárceles colombianas: todos sabrán. *RazonPublica.com*. Obtenido de <https://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9263-atrocidades-en-las-carceles-colombianas-todos-sabian>

<sup>56</sup> Reed Hurtado, M. (29 de Febrero de 2016). Atrocidades en las cárceles colombianas: todos sabrán. *RazonPublica.com*. Obtenido de <https://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9263-atrocidades-en-las-carceles-colombianas-todos-sabian>

## CONCLUSIONES

Se tiene que el enfoque que se le da a la reinserción social o resocialización va encaminada a programas de educación, instrucción, trabajo y actividades formativas que le hagan ignorar al recluso que se encuentra en un centro de reclusión donde tiene restringida su libertad y va a perder su vida en la sociedad, y por el contrario se le haga entrar en razón a través de esas estrategias que cometió un hecho delictivo y que se encuentra en ese lugar para poder resarcir su pena con la sociedad y aprender a no volverlo a cometer pero desde el cambio psicológico y particular, dejándole siempre claro que al cumplir la pena volverá a la sociedad a dar lo mejor de él como persona y a ayudar a las personas que necesiten de su experiencia para evitar actuaciones criminales que estigmaticen a la sociedad.

A lo largo de la investigación se examinaron factores como: **1)** Establecer si en el caso de las condenas por delitos relacionados con violencia contra la mujer, la administración penitenciaria es responsable o no cuando el condenado no se resocializa, **2)** Establecer condiciones para una adecuada política pública en materia penitenciaria para quienes resulten responsables de delitos de violencia contra la mujer, y **3)** Aumento de índices de cumplimiento estatal en la obligación de garantizar la protección y velar por los derechos de los que resulten responsables de delitos de violencia contra la mujer.

Llegando a la conclusión que se hace necesario por parte del Estado colombiano, la implementación de nuevos preceptos encaminados dentro de la Política Pública Carcelaria referida a los incentivos que recibe una persona privada de la libertad en Establecimiento Carcelario por cometer delitos contra la mujer, con el fin de que la no fracase la misma por parte de compromiso del interno, ya que se pudo evidencia en las encuestas realizadas la falla que presenta la actual Política Pública Penitenciaria y Carcelaria por no formar en la libertad del recluso.

Además, se necesita socializar y hacer conocer a la población reclusa de la Cárcel Las Mercedes de la ciudad de Montería, el contenido de la Política Pública Penitenciaria y Carcelaria colombiana<sup>57</sup> y así lograr que los mismos conozcan el fin del tratamiento penitenciario y la necesidad de someterse al mismo.

Como resultado de la investigación llevada a cabo sobre el Análisis de la Política Pública Penitenciaria y Carcelaria colombiana respecto al cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano de protección de los derechos fundamentales y la aplicación de tratamientos penitenciarios en los Centros de Reclusión a las personas condenadas por cometer delitos contra la mujer, se proponen las siguientes recomendaciones:

1. Que se realice por parte de los Centros de Reclusión una socialización de todos los programas y tratamientos penitenciarios con los que cuenta el centro y así motivar a los reclusos a la inscripción en los mismos.
2. Que se realice una revisión por parte del Estado, a través de los organismos competentes de la Política Pública Penitenciaria y Carcelaria colombiana –Documento CONPES 3828–<sup>58</sup> en cuanto a la eficacia que está teniendo la aplicación de tratamientos penitenciarios y hacer un estudio conforme a las estadísticas reportadas actualmente de reincidencia.
3. Que se establezca y ejerza vigilancia por parte del órgano estatal jerárquico competente sobre los Centros de Reclusión del país para así evidenciar la aplicación o no de los tratamientos penitenciarios en los mismos. además, se lograría con esto obtener estadísticas comprobables de las condiciones de las personas reclusas en tales centros y el cumplimiento post-pena.

<sup>57</sup> Consejo Nacional de Política Económica y Social - Departamento Nacional de Planeación. (19 de Mayo de 2015). Documento CONPES 3828 Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia. *Documento CONPES 3828 Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia*. Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia.

<sup>58</sup> Consejo Nacional de Política Económica y Social - Departamento Nacional de Planeación. (19 de Mayo de 2015). Documento CONPES 3828 Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia. *Documento CONPES 3828 Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia*. Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia.

## BIBLIOGRAFÍA

BECCARIA, C. (2004). *De los Delitos y las Penas con el Comentario de Voltaire*. (J. A. de las Casas, Trad.) Madrid: Alianza Editorial.

CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO [CPC]. LEY 65 DE 1993. ART. 142. AGOSTO 19 DE 1993 (Colombia).

CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO [CPC]. Ley 65 de 1993. Art. 9. Agosto 19 de 1993 (Colombia).

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. SENTENCIA C-261 DE 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero: Junio 13 de 1996).

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. SENTENCIA T-213 DE 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: Marzo 27 de 2011).

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. SENTENCIA T-388 DE 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa: Junio 28 de 2013).

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. SENTENCIA T-388 DE 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa: Junio 28 de 2013).

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC. (17 DE ENERO DE 2018). *Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC*. Obtenido de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC:<http://www.inpec.gov.co/documents/20143/361642/12.+ESTADISTICAS+DICIEMBRE+31+DE+2017.xls/536e75e5-2eea-39d3-27eb-feaa0fe14989>

LEY 1760 DE 2015. Por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de libertad. Julio 6 de 2015. DO. N°49565. Ley 1786 de 2016. Por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la ley 1760 de 2015. Julio 1 de 2016. DO. N°49921.

PÉREZ PINZÓN, Á. O. (Mayo-Agosto de 1993). Las funciones de la pena. Especial énfasis en la resocialización. *Revista Derecho Penal y Criminología*, 15(50).

QUINTANO RIPOLLES, A. (Abril de 1949). La motivación moral en el Derecho Español. *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 393-414.

RACCA, I. (9-10 DE JUNIO DE 2014). La resocialización como fin de la pena privativa de la libertad: análisis del último legado del positivismo criminológico. En C. d. Aires (Ed.), (pág. 22). Buenos Aires.

REED HURTADO, M. (29 DE FEBRERO DE 2016). Atrocidades en las cárceles colombianas: todos sabrán. *RazonPublica.com*. Obtenido de <https://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9263-atrocidades-en-las-carceles-colombianas-todos-sabian>

REINA HERRERA, F. D. (Marzo de 2016). Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país. *Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país*. Bogotá: Universidad Nueva Granada.

REINA HERRERA, F. D. (Marzo de 2016). Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país. *Resocialización pilar fundamental para reducir los elevados índices de delincuencia y reincidencia en el país*. Bogotá: Universidad Nueva Granada.

RESOLUCIÓN 7302 DE 2005 [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–]. Por medio de la cual se revocan las resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario. Artículo 8. Noviembre 23 de 2005.

VIÑAS, E. I. (2016). Resocialización de condenados: política de Estado y participación de la sociedad. *In Itinere - Revista digital de Estudios Humanísticos de la Universidad FASTA*, 6(1), 86-109.

## **BIODATA**

**Victoria Amalia PRECIADO BURGOS:** Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia). Magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre (Colombia). Candidata a Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca (España). Actualmente docente investigadora de la Universidad del Sinú (Montería – Córdoba).



## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 154-173  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

# Ética sindical como mecanismo impulsor de competitividad en las pequeñas y medianas empresas

*Union Ethics as a Mechanism Driving Competitiveness in Small and Medium-Sized Enterprises*

**José Gregorio NOROÑO SÁNCHEZ**

<https://orcid.org/0000-0001-9777-2733>

[josenorono@unisinu.edu.co](mailto:josenorono@unisinu.edu.co)

Universidad del Sinú, Colombia

**Manuel NUÑEZ VILLAVICENCIO**

<https://orcid.org/0000-0003-4698-823X>

[manuelnunez@unisinu.edu.co](mailto:manuelnunez@unisinu.edu.co)

Universidad del Sinú, Colombia

**Romel Ramón GONZÁLEZ DÍAZ**

<https://orcid.org/0000-0002-7529-8847>

[director@ciid.com.co](mailto:director@ciid.com.co)

Centro Internacional de Investigaciones y Desarrollo (CIID), Colombia

Este trabajo está depositado en Zenodo:  
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3907063>

## RESUMEN

Este artículo presenta un análisis de la ética sindical como mecanismo impulsor de competitividad en las pequeñas y medianas empresas, los cuales fueron analizados bajo la metodología cualitativa a través del análisis hermenéutico interpretativo, generando la triangulación entre los informantes claves, obteniendo como principales hallazgos: prestancia, impulso y detrimento del modelo de competitividad empresarial, en razón a la Ética sindical, evidenciándose una grave incidencia de la falta de ética de las organizaciones sindicales, que obstaculiza las metas establecidas y estorbo del buen desempeño empresarial en las Pymes.

**Palabras clave:** Ética, Sindicatos, Competitividad y Pymes.

## ABSTRACT

This article presents an analysis of trade union ethics as a driving force for competitiveness in small and medium enterprises, which were analyzed under the qualitative methodology through the interpretive hermeneutic analysis, generating triangulation among the key informants, obtaining as main findings: presence, impulse and detriment of the business competitiveness model, due to trade union ethics, evidencing a serious incidence of the lack of ethics of trade union organizations, which hinders the established goals and hinders the good business performance in SMEs.

**Keywords:** Ethics, Unions, Competitiveness and SMEs.

Recibido: 20-05-2020 • Aceptado: 24-06-2020



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## INTRODUCCIÓN

La historia latinoamericana ha sido marcada profundamente por el movimiento obrero, y entre los más antiguos, surge el primer sindicato mutual en el año 1857, con la creación y fundación de la Sociedad Tipográfica Bonaerense de Buenos Aires, en la República Argentina. Esta organización de auxilio mutuo sembró las raíces de lo que hoy se conoce como las organizaciones sindicales modernas en América del Sur. Seguidamente, nacerían de forma vertiginosa otras agrupaciones de trabajadores en México, Chile, Bolivia y a partir de 1930 en Venezuela.

En Venezuela, las agrupaciones de trabajadores se hicieron cada vez más grandes, poderosas en la lucha por sus reivindicaciones y en la actualidad, el sindicato más representativo de toda Latinoamérica se encuentra en México, con un número de afiliados de más de 1.5 millones de miembros asociados, como lo es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Sin embargo, autores como Urquijo (2009) y Díaz (2009) coinciden en que el caso venezolano, el movimiento sindical es uno de los más jóvenes del continente, lo cual es sin lugar a dudas una desventaja en comparación con otros países, lo cual, hace que todavía se esté moldeando no simplemente su forma, sino también las estructuras, desde sus recientes inicios, tomando en consideración la experiencia y desarrollo del sindicalismo latinoamericano se pudieran introducir mejoras importantes que fortalezcan su actuar ético y así evitar los caminos ya vividos en otros momentos de la historia, intentando que tales organizaciones sirvan de impulso a las pequeñas y medianas empresas en su camino hacia la rentabilidad y sustentabilidad.

Tales cambios sociales iniciados por gobiernos de izquierda, han incluido reformas a la organización de los trabajadores, reformas educativas, reformas a las otras formas de organización social, entre las que se cuentan los consejos de trabajadores, las mesas técnicas y los consejos de tierras, en donde la participación de la sociedad civil es necesaria, entre tanto, dichos cambios sociales, han tomado relevancia y por tanto, es importante el estudio de los componentes esenciales para el éxito de las empresas y de las organizaciones sindicales actuales y las futuras.

Del mismo modo, las relaciones laborales venezolanas<sup>1</sup> en criterio de Noroño y Acevedo (2019a) han estado inmersas en situaciones de gran variabilidad y vulnerabilidad toda vez, que gran parte de la población, se encuentra en tránsito, por así decirlo, en la actualidad, pues, algunos poseen una doble modalidad, trabajan bajo dependencia y al mismo tiempo frecuentan la informalidad comercial, como segunda fuente de ingresos, donde las condiciones mismas no están sujetas a ninguna protección legal y en otras hasta rayan con lo ilegal al sumirse en prácticas solo observadas en una economía golpeada por la desaparición de productos de la cesta básica y comercializados en esa informalidad.

Tal situación de precariedad, coloca a las relaciones laborales en riesgo, ya que, los trabajadores han abandonado en algunos casos el recinto de trabajo para acercarse a la venta informal de productos alimenticios, rezagando al trabajo por dependencia al segundo plano y poniendo en jaque por ausentismo generalizado las operaciones laborales empresariales, razones más que suficientes para realizar un análisis sobre el impacto ético en las relaciones laborales, sindicales y gremiales de estas nuevas formas en que ha mutado la sociedad venezolana y la manera como la pequeña y mediana empresa puede a través de las organizaciones sindicales apalancar los niveles de competitividad.

Dentro de estos cambios sociales producto de los gobiernos de izquierda<sup>2</sup>, en criterio de Noroño (2019 b) tienden a realzar los derechos de los trabajadores con la implementación de marcos jurídicos que de manera tangencial limitan las capacidades de mano de obra de las pequeñas y medianas empresas, quienes tienen que lidiar con las demandas de las organizaciones sindicales. Sin embargo, algunas gerencias de las pequeñas y medianas empresas han acertado en su proceso diplomático entre la dirección de las empresas y los

<sup>1</sup> Las relaciones laborales venezolana se hace alusión a las amplias dinámicas económicas, políticas y sociales en las que se encuentra sumergido el pueblo venezolano, presentado indicadores socioeconómicos de la CEPAL (2019)

<sup>2</sup> Se hace referencia que los gobiernos de izquierdas son los que buscan la equidad social, otra forma de llamar la igualdad en términos económicos.

representantes sindicales, logrando de esta manera, elevar la capacidad de proporcionar productos y servicios con mayor eficacia y eficiencia frente a sus competidores, en otras palabras, elevar los niveles de competitividad.

A este mismo tenor, Urquijo (2000) acota que las organizaciones sindicales de hoy se debaten entre “luces y sombras” y que por lo tanto esta realidad no debe ser ignorada, sino más bien, tomada en cuenta, analizada y estudiada y finalmente introducir los correctivos y cambios convenientes para proyectar “una nueva imagen renovada y renovadora”, al mismo tiempo, indica el autor, que Venezuela se ha convertido en un inmenso campo de experimentación sindical, en un momento donde el mundo del trabajo se estremece por las nuevas tendencias globales, que hacen que sea necesaria y apremiante una verdadera unidad orgánica del movimiento sindical.

Por otra parte, indica Noroño y Seijo (2016) que las organizaciones sindicales, como garantes de la protección de sus afiliados y miembros, son responsables de la consecución de mejoras sustanciales en las condiciones laborales, por lo tanto, el deterioro o minusvalía del componente ético sindical podría socavar el protagonismo primario de tales organismos y poner en peligro el futuro económico de los trabajadores, por lo tanto cobra aún más relevancia la autocrítica para producir propuestas que coadyuven al logro de las transformaciones necesarias en el sindicalismo venezolano y en las relaciones laborales como mecanismos de competitividad en las pequeñas y medianas empresas, las cuales son el propósito fundamental de este capítulo.

En tal sentido, Noroño y Seijo (2016) apunta a un sindicalismo deslastrado de la dirigencia política que le resta autonomía, y al mismo tiempo enfocado en la superación de las crisis sociales emprendiendo un rumbo histórico diferente que sea propicio para el apalancamiento de las pequeñas y medianas empresas, para ello se deberá apuntalar a un sindicato ético que persiga la sustentabilidad empresarial sin olvidar los compromisos con sus agremiados y la persecución incansable de la progresividad de los beneficios para todos sus asociados, lo que redundará en beneficio holístico y recíproco.

## **REVISIÓN DE LITERATURA, MATERIALES Y MÉTODOS**

### **Ética Sindical**

En opinión de Parra (2010) expresa que podría decirse que se está ante una evidente crisis de las relaciones laborales, que tiene implicaciones manifiestas en los fundamentos éticos y en consecuencia se manifiesta en los nuevos espacios de construcción de la responsabilización. Por lo tanto, la nueva configuración racional/sistémica traza nuevos rumbos y nuevas renegociaciones en el mundo del trabajo, en la medida en que la superestructura jurídico/política<sup>3</sup> ya no está en posibilidad de reconocer los derechos sustantivos clásicos del mundo laboral, encuentra muros de contención para su extensión al contexto social en el cual

En opinión de Prado, citado por Aguilar (2008) la ética es la disciplina filosófica se mueve el campo laboral, es decir en la diada empresa-sociedad que estudia la moral, la conducta y las obligaciones del hombre ante sus semejantes. Al respecto, Flórez (2005) infiere que la ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad. Es la ciencia de la conducta humana. Los hombres tienen diversos actos o modos de comportamiento ante ciertos problemas prácticos, que se plantean en las relaciones afectivas reales de unos individuos con otros o al juzgar ciertas decisiones o acciones de los demás.

Infiere Sen (2006) como Premio Nobel de Economía que “Los valores éticos de los empresarios y los profesionales de un país (y otros actores sociales clave) son parte de sus recursos productivos”. Si estos valores accionan a favor de la inversión, la honestidad, el progreso tecnológico y la inclusión social, serán verdaderos activos; si, en cambio, predomina la ganancia rápida y fácil, la corrupción y la falta de escrúpulos,

---

<sup>3</sup> La superestructura jurídica/política son las normas creadas dentro del derecho administrativo general sobre la base de mandatos específicos en un tiempo determinado sustentados en la acción política.



bloquearán el avance de la sociedad.

De igual manera, Seijo y Ávila (2008), exponen que dentro de las decisiones responsables que una organización debe tomar, está presente la responsabilidad social, como una filosofía de gestión ética de los impactos que generan las organizaciones en su entorno. Guede (2006 citado por Hernández y Seijo (2013) expresan que la ética es la ciencia mediadora entre Dios, con la naturaleza y los semejantes desde la perspectiva de los individuos

A este respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 2 incluye a la ética, como un valor superior del estado venezolano, que será insertada en todo el ordenamiento jurídico venezolano, a tenor de esta disposición, No obstante, la Ley Orgánica del Trabajo (1997)<sup>4</sup>, no hacía referencia a la ética y menos aún, a la sindical, sin embargo fue concebida como factor de desarrollo bajo inspiración de la justicia social y equidad, que también forman parte del componente ético según su artículo 2.

Cabe destacar, que, en el año 2012, el extinto presidente Chávez, promulga el nuevo paradigma laboral con la entrada en vigencia de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, donde se introdujo en la redacción del artículo 402 el término “ética sindical”, de esta manera, el legislador patrio por primera vez utiliza este término, razón suficiente para que los investigadores, hagan sus acercamientos interpretativos de su alcance, misión y visión.

De acuerdo con Villasmil (2006), el sindicato es una unión o asociación de trabajadores o empleadores, con el objeto de regular, mejorar y defender sus condiciones de trabajo, razón por la cual se trata de una verdadera persona jurídica de derecho del trabajo que con la sola inscripción en el registro de organizaciones sindicales que lleva generalmente la administración del trabajo es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones en el ámbito de las relaciones de trabajo.

En este orden de ideas, Alegría (2007) plantea que el sindicato es el instrumento creado por los trabajadores y protegido por la ley para asumir la defensa de sus intereses, tanto los específicos y derivados de la relación de trabajo, así como aquellos de naturaleza general propios de su condición humana, constituyendo una estructura organizada, reglamentada y con dinámica interna que le permite con propiedad que se hable de su creación, de su naturaleza jurídica, de su condición de sujeto capaz de asumir derechos, deberes y obligaciones, a través del ejercicio de la autonomía colectiva, cuya constitución se somete al principio de legalidad sindical, y forma parte del contenido de la libertad sindical.

Aduce el mencionado autor que estas atribuciones y finalidades están ensombrecidas por la cruda realidad del movimiento sindical actual, pues opina que la clase sindical está muy lejos de cumplir a cabalidad con esas funciones protectoras, de representación, de defensa de velar por el cumplimiento de las normas destinadas a proteger el hecho social trabajo y son contadas las organizaciones que medianamente desarrollan algunas de estas funciones, lo que denota el gran estado de abandono en el que se encuentran.

Por otra parte, Machicado (2010), citado por Noroño (2014) el sindicato es la unión libre de personas que ejerzan la misma profesión u oficio, o profesiones y oficios conexos, que se constituya con carácter permanente y con el objeto de defender los intereses profesionales de sus integrantes o para mejorar sus condiciones económicas y sociales, es una persona jurídica que tiene por objeto la defensa de los intereses de sus asociados, empleadores, o trabajadores que pertenecen a una misma empresa, profesión u oficio, empresas profesiones u oficios similares y conexos.

En cuanto a la definición establecida en la propia Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012) en el artículo 365, que las organizaciones sindicales tendrán por objeto, el estudio, defensa, desarrollo y protección del proceso social trabajo, la protección y defensa de la clase trabajadora, el conjunto del pueblo, de la independencia, y soberanía nacional conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la defensa y promoción de los intereses de sus afiliados.

---

<sup>4</sup> Esta Ley, tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, creadores de la riqueza socialmente producida y sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático y social de derecho.

Con relación a los sindicatos Noroño (2014b) indica que son todas aquellas organizaciones de carácter permanente diseñadas y creadas por grupos de trabajadores y patronos, con el fin último de proteger, defender cuidar y mejorar sus beneficios socio-laborales que se desprenden de un nexo jurídico con el beneficiario de una obra, entidad de trabajo, faena o explotación, dotadas legalmente de capacidad jurídica y de representación personal y colectiva, a fin de cumplir con los principios, valores, metas y aspiraciones, aprobadas por la mayoría de sus fundadores.

En este sentido, y a criterio de los investigadores, se comprende que la ética es un conjunto de reglas morales, conductuales y sociales, las cuales dominan la conducta humana, siendo el sindicato una sociedad de trabajadores y trabajadoras conformadas en pro de la de la defensa de los derechos económicos, y sociales de sus miembros. Sin embargo, la ética sindical es definida como la conducta que asumen los miembros de una organización sindical en sus esferas de acción, tales como las derivadas de sus relaciones con el patrono, con los órganos públicos (administrativos y judiciales) y con sus afiliados, agremiados o asociados.

La ética sindical, en postura de los Investigadores, es el comportamiento moral que despliegan los dirigentes, miembros y vinculados al movimiento sindical, que determina la reputación del organismo de representación colectiva, a este respecto, se refiere al despliegue de conducta no reprochable socialmente y se evidencia con la pulcritud y transparencia en las gestiones, actos, asuntos y perspectivas propias del organismo, tanto a nivel intrínseco como extrínseco.

De la evidencias anteriores, se infiere que la ética sindical, para muchos es una utopía, un sueño imposible, sin embargo, a criterio del investigador, es el conjunto de valores, principios, normas, elementos y comportamiento ejemplares que deben asumir y modelar tanto a quienes desean como a quienes ostentan un cargo de representación colectiva, dicho comportamiento posee una serie de aristas importantes, tales como el asumido, frente a los miembros del organismo sindical, frente a los empresarios, patronos, a la entidad de trabajo, así como frente a la sociedad, es el compromiso responsable de mejorar la calidad de vida, los beneficios laborales, el acceso a la justicia y la representación eficiente de los agremiados, tomando las decisiones en consideración al beneficio de las mayorías sobre las minorías.

### **Elementos de la Ética**

Para Etkins (2007) la ética es un saber que orienta los comportamientos. Pero no es un saber instrumental, porque requiere convicción, consentimiento y compromiso en las prácticas y relaciones. No sólo se trata de cuidar la inversión o mejorar el rendimiento a largo plazo, se trata de una visión más superlativa en la búsqueda de una ecuación, que, a criterio de los investigadores, puede invertir el rol que históricamente han desempeñado las organizaciones sindicales en materia moderna de la competitividad y sustentabilidad.

### **Convicción**

Sobre este tema, Weber (2015) indica que la ética de la convicción de un político, "que se rige únicamente por principios morales y donde siempre y por encima de todo, se deben respetar estos principios, como por ejemplo 'decir la verdad', independientemente de las circunstancias. Y por tanto la mentira, por más excepcionales que sean las circunstancias, siempre será un comportamiento ilícito, éticamente reprochable."

En este sentido, la ética de la convicción tiene un elemento mesiánico que permite evadir responsabilidad, pero al mismo tiempo crea ilusión y marca un camino a conseguir. Weber<sup>5</sup> comenta que: "Cuando las consecuencias de una acción realizada conforme a una ética de la convicción son malas, el que la va a ejecutar no se siente responsable de ellas, sino que responsabiliza al mundo, a la estupidez de los hombres, o a la voluntad de Dios que los hizo así. Quien actúa conforme a una ética de la responsabilidad, al contrario, tiene presente todos los defectos del hombre medio. Quien opera conforme a la ética de la convicción no soporta la irracionalidad ética del mundo. Es un racionalista cósmico-ético".

---

<sup>5</sup> Max Weber (1864-1920) fue el iniciador del estudio sistemático sobre la burocracia. ... Con su teoría de la dominación burocrática, trata de establecer las condiciones en las que la persona que detenta el poder justifica su legitimidad y las formas en que los sujetos sobre los que se ejerce el poder se someten a él

En opinión de Etkin (2007) lo correcto se basa en convicciones pero también en razones que buscan el bienestar en la organización. Lo inmoral afecta la condición humana y vulnera la naturaleza social de la organización, aún en las situaciones donde los directivos se mantienen dentro del orden jurídico. La razón moral refiere no solamente a lo legítimo en términos de las reglas vigentes, sino que implica una valoración desde lo justo y lo equitativo.

### **Consentimiento**

El consentimiento no es más que el acuerdo de voluntades. La voluntad es el querer interno que manifestado bajo el consentimiento, produce efectos de derecho. Todo contrato exige el libre consentimiento entre las partes que lo forman. El consentimiento se manifiesta por la concurrencia de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato en nuestra legislación. De ahí que, indica la ley, será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. El artículo 1.141 del Código Civil establece: "las condiciones requeridas para la existencia del contrato son: 1º Consentimiento de las partes..." Los vicios del consentimiento se encuentran reflejados en los artículos 1.146 al 1.145 del Código Civil.

En opinión de Maduro y Pittier (2008) el consentimiento es el acuerdo de voluntades para crear obligaciones, es una manifestación de voluntad deliberada, consciente y libre, que expresa el acuerdo de una persona respecto de un acto externo ajeno.

Con base a lo expuesto, se puede inferir que en términos laborales el consentimiento consiste en la declaración de voluntad de las partes respecto a las condiciones bajo las cuales se llevaría la relación laboral.

### **Compromiso**

De conformidad con los postulados de Melé (2009), el compromiso visto desde el punto de vista moral, implica una disposición a dar la misma consideración a los derechos, intereses interrelacionados, y las opciones de todas las partes en la situación de que se trate. Este compromiso, como la imparcialidad de juicio tiene un papel esencial en el estudio de la ética: el autor se propuso evaluar y canalizar las decisiones que tomamos para con todas las personas.

Según Newton (2014), va mucho más allá de las decisiones, el hombre comprometido busca la transparencia y enfoca sus decisiones en la seriedad y la equidad en la balanza final, se debe conceder el respeto y la consideración moral, entonces se obtiene la mayoría de los imperativos morales que se utilizarán a partir de este único compromiso. A modo de ejemplo, la regla de oro familiar, que debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos traten es una declaración preliminar, donde quedan excluidos quienes cometen excesos. Con respecto a todo lo que planeamos hacer, el compromiso debe hacer que se piense que el actuar afecta a otros.

En ningún caso y en primer lugar, se recomienda el actuar compulsivamente o de forma prejuiciosa, llamamos a esta generalidad "el compromiso con la razón, el compromiso real conlleva al acuerdo de someter la propia juiciocidad moral de acuerdo con la crítica conductual que presenta la sociedad, este poder no descarta la toma de decisiones basados en la moral, de esta manera se descarta el intuicionismo<sup>6</sup> y la negativa a participar sobre juicios morales en absoluto, ya sea por razones de percepción o aprehensión moral.

En segundo lugar, la autora Newton (2014), propone la obligación de examinar las opciones desde un punto de vista objetivo, un punto de vista que todo el mundo podría adoptar, sin parcialidad, indicando que tiene un interés en el resultado sobre para otras personas, éste es el fundamento de la moral, que se suele llamar, esta perspectiva compromiso e imparcialidad.

En opinión del investigador, el compromiso es más que postulados morales y éticos, es multidireccional, a su criterio, es una acepción que proviene del núcleo familiar, donde, radica la percepción de cumplimiento de

---

<sup>6</sup> Concepción filosófica que defiende la prioridad de la intuición sobre las demás formas de conocimiento

tareas durante la etapa de formación del carácter infantil, en donde, los padres forman una parte integrante del mismo, a este respecto, el deseo de complacer y agradar a los padres es un comienzo del compromiso, posee cierto grado de cumplimiento responsable de tareas asignada y de cumplimiento de objetivos.

No obstante, a nivel sindical, el compromiso es más amplio, por cuanto, el deseo de complacer y agradar a sus miembros afiliados requiere un verdadero esfuerzo, ya que se deben realizar actuaciones en diferentes ámbitos, entre los que se pueden, y entre los propios trabajadores, por mencionar solo algunos de muchos mencionar, ante la empresa o entidad de trabajo, ante los organismos públicos otros. Este respecto, el investigador, infiere que se necesitan lineamientos enfocados en el cumplimiento y persecución de objetivos claros para los que liderizan las organizaciones sindicales.

De este modo, la asamblea de trabajadores<sup>7</sup>, consciente de las altas y delicadas responsabilidades que poseen los líderes sindicales, debe establecer criterios uniformes sobre los objetivos perseguidos en el marco de la discusión de una convención colectiva, a sabiendas que no es una tarea fácil; El líder sindical, debe enfocarse en complacer y responder ante la asamblea de trabajadores sobre los resultados obtenidos en las discusiones, buscando en primer lugar, la progresividad de los beneficios, la mejora en la prestación del servicio y el avance constante en materia de seguridad en el trabajo.

Cabe acotar, que el compromiso, deber ser la primera norma del sindicato, debe ser una visión del líder y en resumen, el compromiso sindical, implica poner en primer lugar los intereses de los trabajadores y poner de lado los intereses personales y empresariales. De esta manera, la visión de cumplimiento, agrado y prosecución de objetivos comunes, implica abandonar los proyectos personales y dedicarse a la labor de crecimiento colectivo, de ahí que sea una labor titánica, puesto que, dentro de las prácticas empresariales, según Añez y Bonomie (2007) el capital busca infiltrar a la organización sindical con el propósito de amoldarla a las políticas y visión del empresario, transformando la visión del sindicato.

En este sentido, la falta de compromiso se evidenciará de varias maneras, una de las más evidentes aflora con el estancamiento en el mejor escenario, de los beneficios derivados de la convención colectiva, por no mencionar la desaparición o desmejora de los ya obtenidos, por otra parte, según Noroño (2014b), la baja conflictividad sindical, que incluye el respeto de lo pactado, denota una filtración de las políticas empresariales en la visión proteccionistas del sindicato.

Por otro lado, según Díaz (2009), los sindicatos se convirtieron en las correas de transmisión de las políticas empresariales dentro de los recintos de trabajo, eliminando el compromiso del líder sindical para con sus agremiados, situación que debe cambiar desde la base misma del sindicalismo, como lo es, la asamblea de trabajadores, por ello, se debe detectar en razón de sus actitudes, el líder sindical que no reporta beneficios para el colectivo y que permite que el patrono, deje de cumplir con sus responsabilidades pactadas, para esto, se debe utilizar los mecanismos establecidos en los estatutos para cambiar de forma definitiva la falta de compromiso sindical e impulsar un nuevo liderazgo basado en el compromiso de clase.

Es de hacer notar, que no es otra cosa, que la búsqueda y anteposición de los intereses propios del líder sindical y del empresario, por los del gremio que representa, en sus diferentes esferas de acción, las cuales evidenciarán y catapultarán las relaciones laborales a un nivel óptimo para la clase trabajadora, eliminando o minimizando las practicas que impidan el desarrollo continuo y progresivo de los beneficios de los trabajadores.

## Dilemas Éticos

Terry (2007) y Arboleda y Díaz (2017), aborda el tema de los dilemas éticos. Considerando que las diversas obligaciones de los profesionales pueden entrar en conflicto y con ello pueden surgir los dilemas. Éstos se producen cuando hay dos o más posibles explicaciones de una misma situación. La autora afirma que hay diversos modelos para asistir a los responsables de decidir, pero que rara vez hay una respuesta definitiva y absoluta a un dilema ético.

---

<sup>7</sup> La asamblea de trabajadores es un derecho circunscrito al ámbito del Derecho Sindical, y es el instrumento embrionario por excelencia del propio movimiento sindical, ya que la constitución de los iniciales sindicatos nace de las asambleas auto-gestionarias.

## Transparencia y Opacidad

Seijo y otros (2008) citada por Rangel y Alvarado (2012) expresa que, dentro de estos dilemas, se encuentra la transparencia, la cual en el planteamiento de se ha constituido en un valor imprescindible para garantizar un desempeño libre de zonas grises y eliminar la corrupción del marco empresarial.

En este orden de ideas, Etkin, (2007) indica es necesaria la transparencia en las comunicaciones, reafirmar la identidad y la cultura organizacional y poner al descubierto la doble moral de quienes ejercen el poder en forma arbitraria o compulsiva

Al respecto, Aguilar (2009) infiere que la transparencia es una práctica o un instrumento que utilizan las organizaciones para publicar o volver público cierto tipo de información o bien para abrir al público algunos procesos de toma de decisiones, haciendo énfasis en las acciones que la organización realiza, tendientes a brindar la información que el ciudadano necesita.

Para Rangel (2012) este concepto considerado por muchos autores como principio, tiene diferentes abordajes, desde el punto de vista: jurídico, político, ético y organizacional. Lo que ha demostrado que es un concepto multifacético. Así, la transparencia es un pilar fundamental de la integridad. Si no hay transparencia, difícilmente otras reglas como la solución de conflictos de intereses, la justicia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el control social, serán factibles de conseguir.

Haciendo referencia a la opacidad, Etkin (2007) infiere que como la doble moral implica, opacidad en la organización, por cuanto existen diferencias entre el pensar, el decir y el hacer. Así mismo Cortina (2000) señala que las organizaciones han enarbolado las éticas de máximos como propuestas sociales, en donde los máximos representan aspiraciones privadas de felicidad y no de justicia. Por ello ante la incapacidad de brindar felicidad muchos de los que se ven cerca del poder de administrar optan por establecer mecanismos anómalos para construir su felicidad particular a las de un reducido grupo, pero vulnerando los mínimos de justicia que son patrimonio exigible para todos

Para Clemenza y Ferrer (2004), la opacidad<sup>8</sup> es el aprovechamiento indebido de un patrimonio común relacionado con la desviación de la función pública en beneficio particular. En base a ello, se considera una alteración, vicio o abuso. Cabe destacar, que las acciones contra las prácticas corruptas van más allá de mejores políticas y leyes; requiere romper el equilibrio oculto, a través de una convicción y necesidad práctica de la ética. Se puede inferir, de acuerdo a lo expuesto, que las prácticas opacas conllevan a un acto que aleja a las instituciones a desempeñar un sentido ético. Sin embargo, ha sido denunciada de modo constante por los sociológicos y los que gestionan como un factor de fracaso

Arguye Rangel (2012) que la opacidad, viene a constituir lo oscuro, lo opaco lo no transparente, lo corrupto, lo perverso, la doble moral, el doble discurso en las organizaciones. Lo cual es un llamado de atención a la realidad empresarial, social, económica, financiera, política para rechazar cualquier práctica que vaya en consonancia con cualquiera de estos aspectos, dada las consecuencias, que sin duda son indeseables y llevan a cualquier organización a desaparecer.

En opinión de De la Cuesta y Valor (2003), hay quienes pueden caer en la tentación de utilizar la ética para mejorar su imagen. No se puede hacer una cosa y decir la contraria. Por ello ante la incapacidad de brindar felicidad muchos de los que se ven cerca del poder de administrar optan por establecer mecanismos anómalos para construir su felicidad particular a las de un reducido grupo, pero vulnerando los mínimos de justicia que son patrimonio exigible para todos. En este sentido, para lograr esto se crean todos los artificios, que involucran a estamentos administrativos, judiciales, personales, se corrompe lo bueno y lo armónico.

---

<sup>8</sup> El término, que deriva de la lengua latina (*opacitas*), está vinculado a la propiedad de los materiales que bloquean gran parte de la luminosidad.

## METODOLOGÍA

La metodología utilizada fue la metodología cualitativa a través del análisis hermenéutico interpretativo aplicado a: 1 unidad de análisis: 3 Gerentes con estudios en derecho del trabajo con al menos 5 años de experiencia en negociación sindical y competitividad empresarial en las pequeñas y medianas empresas del sector manufactura que posean organizaciones sindicales activas(ver tabla 1), a quienes se aplicaron entrevistas abiertas de acuerdo a las categorías antes descritas y se procesaron los análisis del discurso mediante: la categorización, estructuración, contrastación y teorización, utilizando como software AtlasTi8, generando la triangulación entre los gerentes de las pequeñas y medianas, conformando así la diagramación y entramado hermenéutico de los informantes claves (González-Díaz y Hernandez-Royett, 2017)

**Tabla 1.- Estructuración de Categorías.**

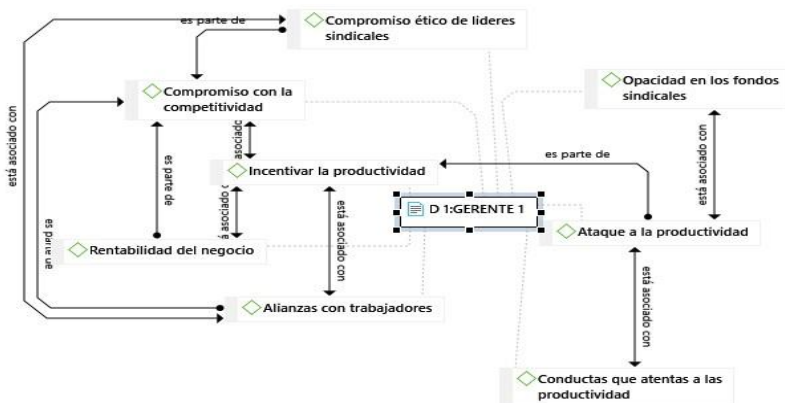
CATEGORIAS	SUB-CATEGORIAS	UNIDAD DE ANÁLISIS
La ética sindical como mecanismo Impulsor de competitividad	Convicción	3 Gerentes con estudios en derecho del trabajo con al menos 5 años de experiencia en negociación sindical y competitividad empresarial en las pequeñas y medianas empresas del sector manufactura que posean organizaciones sindicales activas
	Compromiso	
	Consentimiento	
	Dilemas éticos	
	Transparencia y Opacidad	

Fuente: Elaboración Propia (2019)

## DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En esta fase de la investigación se siguieron los procesos antes descritos acerca del análisis hermenéutico interpretativo. Por lo tanto, se inicia con una transcripción de las entrevistas realizadas a los informantes claves, luego una reducción y categorización del contenido (Hernández-Royett y González-Díaz, 2016). Para finalizar con un análisis que titulamos “memorándum”<sup>9</sup>. La figura 1, muestra el orden discursivo del Informante Clave 1.

**Figura 1.- Entramado Hermenéutico del Informante Clave 1**



Fuente: Elaboración Propia a partir de la Entrevista realizada en fecha 22/09/2019.

<sup>9</sup> EL memorándum hace referencia al reporte donde se analizan las convergencias de las categorías emergentes.

## Reducción y Categorización

**Tabla 2.-** Reducción y Categorización del Informante Clave 1

Informante Clave 1.	CATEGORIA	MARCADORES
	La ética sindical como mecanismo impulsor de competitividad	Compromiso con la competitividad
		Compromiso ético de los líderes sindicales
		Opacidad de los fondos sindicales
		Ataque a la productividad
		Alianza con trabajadores
		Conductas que atentan con la competitividad
		Rentabilidad del negocio

**Fuente:** Elaboración Propia a partir de la Entrevista realizada en fecha 22/01/2019.

## Memorándum

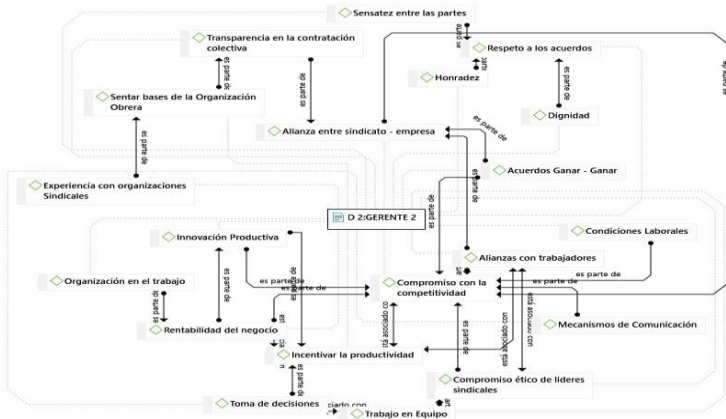
En la tabla 2 observa el proceso de reducción y categorización de la entrevista con el informante clave 1, por lo que se extraen las siguientes observaciones: en primer lugar se evidencia una serie de conductas que atentan contra la productividad, derivadas de sus estrategias de negociación con el empleador o patrono, en este sentido, el órgano sindical utiliza tácticas ralentizadoras de los procesos productivos con el fin de presionar al patrono a celebrar acuerdos muchas veces fuera del tiempo previsto contractualmente, situación que afecta gravemente a la productividad y competitividad.

En segundo plano, se evidencia que, si el organismo sindical<sup>10</sup> tuviera un compromiso ético robusto, no se observarían comportamientos dolosos referidos al uso de los fondos sindicales, situación que causa molestias en los afiliados, un mal ambiente de trabajo y perturbaciones entre los agremiados, provocando un clima laboral tenso y poco plausible para la persecución de metas de productividad proyectadas. Por otra parte, es de notar, que los ataques a la productividad reflejan parte de estas conductas poco honestas, con los cuales el organismo sindical busca recibir de alguna manera un incentivo empresarial a cambio de su compromiso productivo, estimulando la opacidad.

En tercer punto, se deriva de esta entrevista, que las metas productivas y la rentabilidad del negocio están fuertemente vinculadas al establecimiento de incentivos de producción, al compromiso productivo del organismo sindical, al cumplimiento de metas que persigan la rentabilidad y sustentabilidad de las operaciones productivas, no obstante, tales circunstancias se ven empañadas por prácticas opacas, dolosas, y estorbos a la productividad que impulsan en oportunidades al empresariado a realizar alianzas estratégicas directamente con los trabajadores dejando de lado al organismo sindical, por cuanto, no están alineados con las políticas productivas, la persecución de la rentabilidad y la sustentabilidad. Por otra parte, se realiza el análisis discursivo del informante clave 2, según la figura 2.

<sup>10</sup> El movimiento sindical o sindicalismo es la parte del movimiento obrero que se organiza mediante sindicatos, una organización que reúne a los trabajadores a partir del trabajo que desempeñan con el fin de defender sus intereses comunes ante los empleadores y los gobiernos, aparecida en el siglo XIX.

**Figura 2.-** Entramado Hermenéutico del Informante Clave 2



**Fuente:** Elaboración Propia a partir de la Entrevista realizada en fecha 22/01/2019. **Reducción y Categorización.**

**Tabla 3.-** Reducción y Categorización del Informante Clave 1

	CATEGORIA	MARCADORES
		La ética sindical como mecanismo impulsor de competitividad
Informante Clave 2.	La ética sindical como mecanismo impulsor de competitividad	Sensatez entre las partes
		Honradez
		Respeto de Acuerdos
		Dignidad
		Acuerdos Ganar – Ganar.
		Condiciones Laborales
		Alianza con trabajadores
		Mecanismo de comunicación
		Compromiso ético con los líderes sindicales
		Trabajo en equipo
		Toma de decisiones
		Incentivo a la productividad
		Rentabilidad del negocio
		Innovación Productiva
		Organización en el trabajo
		Experiencias con organizaciones sindicales
		Sentar bases en organizaciones obreras.
		Transparencia en la contratación colectiva.

**Fuente:** Elaboración Propia a partir de la Entrevista realizada en fecha 22/01/2019.

### Memorándum

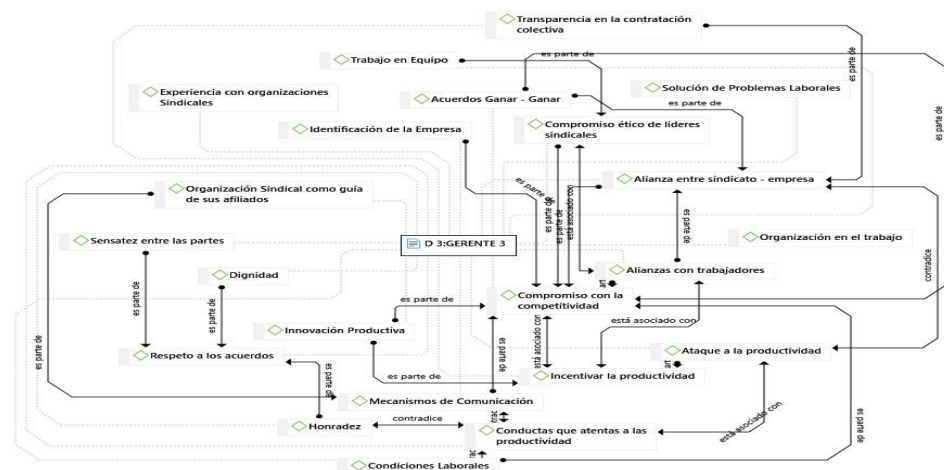
Se observa en la tabla 3 el proceso de saturación de la entrevista con el informante clave 2, se evidencian ciertas consideraciones: en el primer abordaje se extraen diferentes enfoques que involucran las características que deben predominar en los ambientes gerenciales, entre ellos, apuntalar y construir los mecanismos de comunicación que sean abiertos, francos, sensatos, directos y sin intermediarios innecesarios, lo cual refleja, amplia experiencia en el trato con los líderes sindicales y con la organización del trabajo, por otra parte denota la búsqueda de alianza empresa-sindicato y la visión común compartida de beneficio recíproco, y el compromiso referente a competitividad y productividad<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> La productividad es un concepto afín a la Economía que se refiere a la relación entre la cantidad de productos obtenida mediante un



De tercera visión, el componente gerencial debe asumir responsabilidades, entre las que se derivan las referidas a la toma de decisiones acertadas, una visión jurídica alineada con los componentes éticos empresariales, la innovación productiva, la transparencia, la comunicación abierta y efectiva, las condiciones laborales imperantes en los recintos donde se prestan los servicios o se ejecutan las labores entre otras, las cuales, no están sometidas a la verificación sindical, al ser únicamente controladas y coordinadas por el patrono, empleador o entidad de trabajo, con lo cual, se logra, alinear las metas productivas a los trabajadores y sus representantes en un único brazo que fomenta el trabajo en equipo, y la alianza trabajadores, sindicatos y empresa, amalgamados para un fin común, la rentabilidad del negocio<sup>12</sup>. Por otra parte, se realiza el análisis discursivo de del Informante clave 3. (ver figura 3)

**Figura 3.- Entramado Hermenéutico del Informante Clave 3**



**Fuente:** Elaboración Propia a partir de la Entrevista realizada en fecha 22/09/2019.

<sup>12</sup> La rentabilidad es cualquier acción económica en la que se movilizan una serie de medios, materiales, recursos humanos y recursos financieros con el objetivo de obtener una serie de resultados. Es decir, la rentabilidad es el rendimiento que producen una serie de capitales en un determinado periodo de tiempo.

## Reducción y Categorización

**Tabla 4.-** Reducción y Categorización del Informante Clave 3

Informante Clave 3.	CATEGORIA	MARCADORES
	La ética sindical como mecanismo impulsor de competitividad	Transparencia en la Contratación colectiva. Solución de Problemas Laborales Compromiso ético de los líderes sindicales Alianza con trabajadores Ataque a la productividad Conductas que atentan con la productividad. Incentivar a la productividad. Condiciones Laborales. Honradez. Mecanismo de Comunicación. Innovación Productiva Respeto a los acuerdos Dignidad Sensatez entre las partes Organización sindical como guía a sus afiliados Identificación de la empresa Experiencia con organizaciones sindicales Trabajo en equipo Acuerdos Ganar-Ganar

**Fuente:** Elaboración Propia a partir de la Entrevista realizada en fecha 22/01/2019.

## Memorándum

Se evidencia en la tabla 4, referida a la entrevista del Informante clave 3 donde se obtuvieron las siguientes consideraciones: de primera fuente se debe organizar la forma de realizar el trabajo, en este sentido la entidad de trabajo, empresa, faena o explotación, debe poseer experiencia en el manejo de situaciones conflictivas y asesoría especializada en el manejo de los conflictos laborales y problemas que se derivan de sus relaciones laborales, con lo cual, se reducen las razones para que enerven ataques por incumplimiento de pactos, beneficios o compromisos adquiridos por la gerencia o propiciados por el incumplimiento o retraso en los convenios celebrados.

Como segundo aporte, es explícita la necesidad de construir una relación de respeto a la dignidad de líderes sindicales y trabajadores, que impulse la sensatez de las partes de modo, que existan caminos anchos de comunicación con lo cual se reduce el riesgo de ataques a la productividad, para ello, las Pymes, deben propender a que el sindicato y los trabajadores, estén identificados con la empresa, se obtenga el compromiso del liderazgo sindical, y se impulsen las metas y proyectos empresariales a los fines de incentivar la productividad, perseguir la rentabilidad logrando la sustentabilidad.

Como tercer referente, observamos que la innovación<sup>13</sup> en la productividad es responsabilidad empresarial, sin embargo los canales abiertos de comunicación suelen ser electivos si se escuchan a los propios trabajadores, con lo cual, la empresa, recibe información de cómo acelerar y aumentar la eficiencia de la mano de sus propios colaboradores, es decir, la empresa busca de primera mano las causas de perturbación productiva directamente de manos de su trabajador, atendiendo a sus sugerencias, parte de los problemas se

<sup>13</sup> El término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias. Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad.

Por último, se obtienen grandes aspectos que denota el entrevistado, como lo son la honradez empresarial, la ética sindical, el trabajo en equipo, las alianzas empresa-sindicato, los incentivos productivos la identidad empresarial en cada uno de los trabajadores y un detalle no menos importante: el mensaje sindical a los trabajadores.

En este estadio, el sindicato cumple una función vital en las metas relacionadas con la productividad empresarial, por cuanto, se debe apuntar a que el organismo sindical responda a los lineamientos productivos y gerenciales que persiguen la rentabilidad del negocio, y para ello, el mensaje sindical, debe contemplar su compromiso productivo<sup>14</sup> sin que ello, perjudique la visión de los trabajadores sobre la autonomía sindical, con lo cual se obtendrán los resultados que se persiguen.

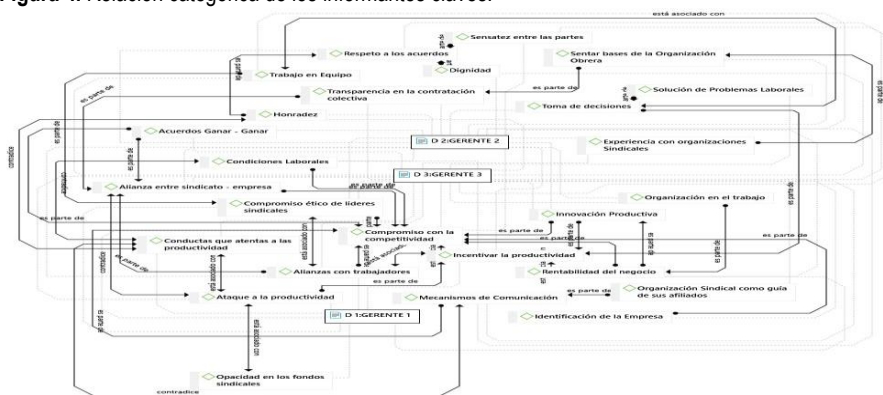
### Triangulación de la información desde la perspectiva de los informantes claves

**Tabla 5.- Enraizamiento y Densidad de Marcadores.**

Marcadores	Enraizamiento	Densidad
Compromiso con la competitividad	5	10
Incentivar la productividad	4	6
Alianza entre sindicato-empresa	8	5
Ataque a la productividad	3	4
Rentabilidad del Negocio	5	4

**Fuente:** Elaborado a partir de la Entrevista realizada en fecha 22/01/2019. Elaboración Propia (2019).

**Figura 4.** Relación categórica de los informantes claves.



**Fuente:** Elaboración Propia (2019)

<sup>14</sup> EL compromiso con la productividad es la fuerza relativa de identificación y de involucramiento de un individuo con una organización, por otra parte, Don Hellriegel, John Slocum y Richard Woodman, en *Comportamiento organizacional*, sostienen que este elemento se caracteriza por la creencia y aceptación de las metas y los valores de la organización, la disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la organización y el deseo de pertenecer a la organización.

**Tabla 6.** Triangulación de la información desde la perspectiva de los informantes claves, referentes teóricas y perspectiva de los investigadores.

Categoría	Categorías Emergentes	Perspectiva de los informantes claves	Referentes teóricos
<b>La ética sindical como mecanismo impulsor de competitividad</b>	Compromiso con la competitividad	Se considera que existe una relación entre el compromiso con competitividad les genera estabilidad en la relación de sus labores.	Damang, K., Sida, A., Lasise, S., Munizu, M., Abdul, M.R., Pono, M. (2019). Giraldo, O.G., Granados, H.J.
	Incentivar la productividad	La productividad es clave para mejorar los beneficios laborales.	Acevedo, N.M. (2019). Afanasieva, N.V., Rodionov, D.G., Vasilev, Y.N. (2018)
	Alianza entre sindicato-empresa	Es sumamente necesaria, se requiere que el sindicato esté alineado con metas productivas, rentabilidad y sustentabilidad del negocio.	Noroño y Seijo (2016) Marquez, Pertuz, Villavicencio & Negrón (2020)
	Ataque a la productividad	Se acrecientan cuando existen malas decisiones gerenciales y un mal ambiente de trabajo, también pueden devenir de la falta de ética sindical y de la búsqueda de beneficios personales, antes que los colectivos.	Noroño y Seijo (2016) Díaz (2009) Añez y Bonomie (2007) González-Díaz y Perez (2015) Hernández-Julio et al. (2019)
	Rentabilidad del Negocio	Mientras la rentabilidad del negocio sea positiva, mejorará los beneficios laborales.	Phornlaphatrachakorn, K. (2019), Gonzalez y Córdoba (2017), Gonzalez-Díaz y Castro-Ramos (2019)

**Fuente:** Elaboración Propia (2019)

## CONCLUSIONES

En el primer nivel, se observan cualidades empresariales que deben predominar a los fines de perseguir la rentabilidad, y de conformidad con Afanasieva et al. (2018) la sustentabilidad y productividad que se desea son vitales para la rentabilidad, en tal sentido, la dirigencia empresarial debe coordinar la productividad minimizando las demoras innecesarias, uso ilimitado de la sensatez a la hora de resolver conflictos, por cuanto una mala asesoría, implicaría un experimento que se traduce en malestar colectivo y por ende en conflictos que repercuten en las metas productivas que se desean alcanzar.

En el segundo nivel, de la relación de los informantes, tenemos el establecimiento de alianzas laborales, claras, transparentes, precisas según indica Noroño y Seijo (2016) y que impliquen la obtención de logros productivos comunes y no, como lo establecen los autores, en respuesta a presiones sindicales, procesos de aletargamiento productivo, practicas dilatadoras o ralentizadoras, a cambio, de un discurso sindical sintonizado con los aspectos productivos, en este sentido, una política clara tiende a optimizar los esfuerzos colectivos, a

mejorar los ambientes laborales implementando acuerdos ganar-ganar y al mismo tiempo se impulse la rentabilidad como forma de obtener beneficios superiores y no al uso de la fuerza o a mecanismos opacos, que deparan en conductas sindicales que pueden concluir en ataques a la productividad.

Como tercera fuente, la experiencia marca la diferencia, en este sentido, la gerencia debe fomentar la identidad empresarial, en el sentido que los trabajadores se sientan a gusto con la organización y eso se logra a través de políticas que impliquen la mejora continua de los ambientes laborales, lograr el compromiso ético de los líderes sindicales, la honradez y el trabajo en equipo, la innovación productiva que persiga no la pérdida de fuentes de empleo sino de la rapidez y eficiencia del trabajo efectuado y los incentivos por productividad, respeto a los acuerdos alcanzados que apunten al logro personal y colectivo de los colaboradores, para ello, se requiere de organización y dirigencia empresarial de primer nivel y de capacidades gerenciales con visión prospectiva del negocio

## **BIBLIOGRAFÍA**

AFANASIEVA, N.V., RODIONOV, D.G., VASILEV, Y.N. (2018). System of indicators of coal enterprise competitiveness assessment [Sistema de indicadores de evaluación de competitividad empresarial de empresas carboníferas]

AGUILAR, N (2008) Revista Jurídica Cajamarca, Algunos apuntes acerca de la Ética y la Moral.

ALEGRÍA, M. (2007). Derecho colectivo del trabajo, sindicatos, conflictos, negociación, Convenios y seguridad social. Venezuela. Editorial El Nacional.

ÁLVAREZ, I (2009) Utilitarismo y Derechos Humanos La propuesta de Jhon Mill. Plaza y Valdés Editores España.

ARBOLEDA, M. L. O., & DÍAZ, R. R. G. (2017). El carácter axiológico del proceso educativo en Colombia. Centros: Revista Científica Universitaria, 6(2), 1-17.

AÑEZ, C; Bonomie, M. (2007). Relaciones laborales y sindicatos en el contexto adverso de la globalización. Revista Venezolana de Gerencia, 12 (37), 50-65. Disponible en: <https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29003704>

AÑEZ HERNÁNDEZ, Carmen. (2010). Movimiento sindical venezolano y flexibilización laboral. Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología, Mayo-Agosto, 217-236.

BENCOMO E. (2012) Relaciones laborales y “gestión de recursos humanos” en filiales de empresas multinacionales en Argentina marcelo DelFiní Investigador CONICET – Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento.

CLEMENZA, C; FERRER, J (2004) Ética social y liderazgo ético del servidor público: fundamento para la construcción de un principio de transparencia institucional. IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España, 2 – 5 Nov. 2004. Disponible en: <https://cladista.clad.org/bitstream/handle/123456789/3050/0049924.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CORTINA, A (2000) Ética mínima introducción a la filosofía práctica editorial tecnos, s.a., 2000 Juan Ignacio Luca de Tena, 15 - 28027 Madrid. ISBN: 84-309-3471-5. Depósito legal: M. 573-2000. Disponible en: [https://tallersurzaragoza.files.wordpress.com/2012/11/cortina\\_adela-etica\\_minima.pdf](https://tallersurzaragoza.files.wordpress.com/2012/11/cortina_adela-etica_minima.pdf)

DAMANG, K., SIDA, A., LASISE, S., MUNIZU, M., ABDUL, M.R., PONO, M. (2019). Supply chain strategy and its effect on business competitiveness: Case of passion fruit industry in South Sulawesi (Indonesia).

DE LA CUESTA Y VALOR (2003), Responsabilidad social de la empresa Concepto, medición y desarrollo en España. Disponible en:

[https://www.researchgate.net/publication/28120630\\_Responsabilidad\\_social\\_de\\_la\\_empresa\\_Concepto\\_medicion\\_y\\_desarrollo\\_en\\_Espana](https://www.researchgate.net/publication/28120630_Responsabilidad_social_de_la_empresa_Concepto_medicion_y_desarrollo_en_Espana)

DI LELLA, Patricia Eugenia, DI PIETRO, Alejandro O., LOUYS, Liliana M., QUINTANA, María Beatriz, VALDÉS, Miguel Ángel. Los vacíos en las normas... sus implicancias éticas. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy [en línea] 2002, (diciembre) [Fecha de consulta: 12 de junio de 2014. ISSN 0327-1471

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18501522>

DÍAZ, R. (2009). Los sindicatos en Venezuela de la negociación a la confrontación. Revista sobre relaciones Industriales y laborales. Núm. 41, Pp. 91 a104.

ETKIN, J (2007) Jourmale revista innovar 207rev. Innovar vol. 20, núm. 37, mayo - agosto de 2010 capital social y valores en la organización sustentable. Jorge Etkin Buenos Aires: Granica, 2007, 448 p. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/262440399>

FLORES, R (2005) La importancia del código de ética internacional en la profesión contable. El contexto colombiano en el proceso de internacionalización. Universidad de Cali-Colombia. Disponible en: <https://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/gyd10-cap10.pdf>

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA N° 5.152, extraordinaria Ley Orgánica del Trabajo (1997), reformada el 6 de mayo de 2011, publicada en Gaceta Oficial N°6024, extraordinaria.

GACETA OFICIAL 6076, Decreto Presidencial N° 8.938 del 07 de mayo de 2012, Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

GIRALDO, O.G., GRANADOS, H.J., ACEVEDO, N.M. (2019). Competitive strategic wagers in the territories and its impact on business liquidation: Case study [Apuestas estratégicas competitivas en los territorios y su incidencia en la liquidación empresarial: Estudio de caso]

GIRÓN, Alicia. Desarrollo, ética y democracia Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía [en línea] 2012, 43 (Octubre-Diciembre). [Fecha de consulta: 12 de junio de 2018]. ISSN 0301-7036.

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11823951001>

GONZÁLEZ, R., & CÓRDOBA, T. (2017). Análisis diferencial entre el manual general de contabilidad gubernamental publicados en el año 2005 y 2014. una perspectiva general del sistema de contabilidad gubernamental panameño. Revista Colón Ciencias, Tecnología y Negocios, 4(1), 1-13.

GONZALEZ-DÍAZ, R. R., & CASTRO-RAMOS, D. E. (2019). Crecimiento financiero en las entidades del sector cooperativo a través de la bolsa de valores de Colombia. Centros: Revista Científica Universitaria, 8(1), 127-143.

GONZÁLEZ-DÍAZ, R. R., & HERNANDEZ-ROYETT, J. (2017). Diseños de investigación cuantitativos aplicados en las ciencias de la administración y gestión. Globalciencia, 3(1), 15-27.

GONZÁLEZ-DÍAZ, R. R., & PEREZ, L. A. B. (2015). Análisis financiero empresarial del sector comercio como factor de competitividad través de la lógica difusa. Estrategia, 1(1), 1-10.

- HERNÁNDEZ-JULIO, Y. F., HERNÁNDEZ, H. M., GUZMÁN, J. D. C., NIETO-BERNAL, W., DÍAZ, R. R. G., & FERRAZ, P. P. (2019). Fuzzy knowledge discovery and decision-making through clustering and dynamic tables: Application in medicine. *International Conference on Information Technology & Systems*,
- HERNÁNDEZ-ROYETT, J., & GONZÁLEZ-DÍAZ, R. R. (2016). Enfoques de investigación en la contabilidad. *Estrategias*, 2(2), 87-101. <http://estrategia.unisinu.edu.co/index.php/estrat/article/view/27>
- HERNÁNDEZ-ROYETT, J., & GONZÁLEZ-DÍAZ, R. R. (2016). Enfoques de investigación en la contabilidad. *Estrategia*, 2(1), 87-100.
- HERNÁNDEZ, I y SEJO, C (2013) Rasgos éticos de la gerencia: Posturas Sociales para la construcción del saber. Ediciones Astro Data S.A Maracaibo. Venezuela.
- KLIKSBERG, Bernardo. Ética y gerencia de organizaciones INNOVAR. *Revista de Ciencias Administrativas y Sociales* [en línea] 2003, (julio-diciembre). [Fecha de consulta: 12 de junio de 2014]. > ISSN 0121-5051. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81802205>
- LEÓN O. (2008). *Tomar Decisiones difíciles*. Segunda Edición. Editorial Mc Graw Hill. Madrid (España)
- MACHICADO, J. (2010) *Sindicato y Sindicalismo*. Bolivia. Editorial New Life.
- MADURO, E; Pittier, E (2008) *Curso de obligaciones: derecho civil III (tomo II)*. ISBN 980-244-061-2.b. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 200 Venezuela. (P.265).
- MARQUEZ, Y. R., CID, L. E. D., PERTUZ, L. D., VILLAVICENCIO, M. A. N., & NEGRÓN, M.(2020) *E. Políticas públicas para una coeducación con equidad*.
- MAIDANA, Susana. La dimensión ética del trabajo *Texto & Contexto Enfermagem* [en línea] 2005, 14 (janeiro-março). [Fecha de consulta: 12 de junio de 2018] Disponible en: <http://estudiosterritoriales.org/articulo.oa?id=71414108> ISSN 0104-0707.
- MAUREIRA, Jorge L. (1968) *Ideología sindical cristiana para América Latina*.
- MELE, D (2009) *Negocios, Ética en Acción, persiguiendo la excelencia humana en las organizaciones*.
- MENDOZA DE GRATEROL, Eva, MENDOZA DE LORBES, María Antonia. El liderazgo ético en organizaciones postmodernas *Revista de Artes y Humanidades UNICA* [en línea] 2008, 9 (Mayo-Agosto). [Fecha de consulta: 12 de junio de 2018] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118859004> ISSN 1317-102X.
- NEWTON, L (2014) *Decisiones tomadas con Ética: Introducción de casos y conceptos éticos*.
- NOROÑO, José (2014a), Retos y perspectivas de las organizaciones sindicales en el contexto de la globalización de las relaciones laborales en Venezuela *Revista Electrónica Lex Laboro de la Universidad Rafael Bellosillo Chacín (URBE)* Depósito Legal: PPI 200602ZU3009 / ISSN: 1856-9447. Vol. VI Enero-Julio 2014.
- NOROÑO, J (2014b), Las Relaciones Laborales Venezolanas En El Contexto De La Globalización. *Revista Legem* Vol. 2 No. 1 2014 ISSN: 2346-2787. Julio – Diciembre 2014. Facultad de Ciencias Jurídicas [cienciasjuridicas@mail.uniatlantico.edu.co](mailto:cienciasjuridicas@mail.uniatlantico.edu.co) Teléfono: PBX 3197010 Ext. 1210. Código Postal 081001 Km 7 Antigua Vía a Puerto Colombia Bloque H P1 Barranquilla, Colombia. <http://www.uniatlantico.edu.co>
- NOROÑO, J; SEJO C (2016) *Ética Sindical y Relaciones Laborales: Un valor impulsor en empresas Privadas*. (p. 143-144) Editorial Publicia. ISBN-13: 978-3841680815. España. Disponible Web: <https://www.amazon.com/%C3%89tica-sindical-relaciones-laborales-impulsor/dp/384168081X>

NOROÑO, J; ACEVEDO, A (2019a) Integración Regional Como Mecanismo De Desarrollo Sustentable Latinoamericano: Punto De Vista Ontológico. Revista Sapienza Organizacional ULA. Universidad de los Andes. Mérida-Venezuela. Año 6, N° 11: Enero - Junio (2019) ISSN: 2443-4256 ISSN Electrónico: 2443-4418 Depósito Legal: pp201402ME4542. <http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/handle/654321/3021>

NOROÑO, J (2019b) Transnacionalidad sindical. Herramienta de integración, cambio y equidad global. Teuken Bidikay, Vol. 10, No 15. Pp. 225- 238. Medellín: Politécnico Colombiano. doi:10.33571/teuken.v10n15a10

PARRA, C (2010) "Educación inclusiva: Un modelo de educación para todos". Revista Iseees n° 8, diciembre 2010, 73-84. Disponible en: [http://www.Dialnet-EducacionInclusivaUnModeloDeEducacionParaTodos-3777544%20\(1\).pdf](http://www.Dialnet-EducacionInclusivaUnModeloDeEducacionParaTodos-3777544%20(1).pdf)

PELEKAIS, C; SEIJO, C; NEUMAN, N y TROMPO, L (2014= El ABC de la Investigación Guía Didáctica, Sexta Edición. Ediciones Astro Data. Maracaibo Venezuela

PHORNLPATRACHAKORN, K. (2019) International Journal of Business Excellence, 17 (2), pp. 131-153. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-5060823305&doi=10.1504%2fIJBEX.2019.097540&partnerID=40&md5=a6110dc3f93a0b7f89635f153dde052f>

RANGEL, C; ALVARADO, C (2012). Ética como enfoque de la responsabilidad social: direccionamiento estratégico en universidades públicas. Omnia, vol.18, núm. 2, 95-108. Disponible en: [http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs\\_viceinves/index.php/FACE/article/view/1617/800](http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/FACE/article/view/1617/800)

ROBBINS, P (2004) Comportamiento Organizacional. Pearson Education.

RUBIO, Heriberto, Elegido, J M. Fundamentos de Ética de Empresa (1998). Pp. 251. Editorial IPADE. México.

SEIJO, C y ÁVILA, M (2008). Valores Éticos y Responsabilidad Social Empresarial: una plataforma gerencial en universidades privadas. Maracaibo-Venezuela.

SEN, A (2006) Desarrollo y libertad. vol. XI, núm. 17, enero-junio, 2006, pp. 17-32. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/510/51001702.pdf>

URQUIJO, L (2000) El Movimiento Obrero en Venezuela. UCAB Universidad Católica Andrés Bello. Caracas Venezuela.

URQUIJO, L (2009) Teoría de la Relaciones sindicatos Gerenciales. UCAB Universidad Católica Andrés Bello. Caracas Venezuela.

TERRY, L (2007) Dilemas, tensiones y contradicciones en la conducta ética de los profesores. A Hirsch Adler - Sinéctica, 2011 - scielo.org.mx. Disponible en: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-109X2011000200006&script=sci\\_arttext&lng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-109X2011000200006&script=sci_arttext&lng=es)

VILLARREAL CANTILLO, E, VISBAL ILLERA, G. Dilemas éticos Salud Uninorte [en línea] 2013, 29 (Enero-Abril). [Fecha de consulta: 12 de junio de 2014] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81728689013> ISSN 0120-5552.

VILLASMIL, L. (2006) Gerencia y Liderazgo. En Revista la gerencia de la calidad educativa. Año 3, no. 8 p. 86 Caracas: Editorial Candidus. Disponible en:

WEBER (2015) The Political Concept. Max Weber y el concepto de lo político La ética guerrera y la necesidad de la culpa P.102. España. Disponible en:



[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0121-51672015000100010](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-51672015000100010)

ZAGAL Y GALINDO ética para adolescentes post modernos (2006) 2 edición ampliada. Publicaciones Cruz O S.A México Ciudad de México.

## **BIODATA**

### **José Gregorio NOROÑO SANCHEZ**

Postdoctor en Integración y Desarrollo de América Latina, Doctor en Ciencias Gerenciales, Magister *Scientiarum* en Derecho del Trabajo y Abogado, egresado de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. (Maracaibo – Venezuela). Actualmente es Docente e Investigador de Planta de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación de la prestigiosa Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm (Montería - Colombia). Experto en las líneas de investigación relativas al Derecho del Trabajo, Derecho Internacional del Trabajo y Derecho Constitucional del Trabajo. Ex presidente del Sindicato Profesional de Trabajadores de la Industria de Bebidas Gaseosas, Similares, Afines y Conexos del Estado Zulia (SINPECZ). Su correo electrónico: josenorono@unisinu.edu.co

### **Romel Ramón GONZÁLEZ DÍAZ**

Doctor en Educación, Magister *Scientiarum* en Gerencia Financiera y Administrador mención Gerencia Industrial, con doctorado en Gerencia (c), certificado postdoctoral en Gerencia de la Educación Superior especialización en Contraloría y Maestría en Contabilidad con énfasis en Auditoría Forense (c), Master in Business Intelligence & Big Data(c). Generalmente, imparte asignaturas en proyecto de inversión, valoración de empresas y simulaciones empresariales. Su correo electrónico: gonzalezromel@gmail.com. Scopus ID 57205735742.

### **Manuel Alejandro NUÑEZ VILLAVICENCIO**

Doctor en Ciencias Políticas, con Postdoctorado en Políticas públicas, estado y paz social, Magister *Scientiarum* en Gerencia de Mercadeo, Abogado y Licenciado en Comunicación Social de la Universidad Rafael Belloso Chacín" (Maracaibo – Venezuela). Actualmente es docente investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y educación de la prestigiosa Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm (Montería - Colombia), con experiencia docente en las facultades de Comunicación Social, Administración de Empresas, Ciencias económicas. Es miembro de la Red de Docentes de América Latina y del Caribe (RedDOLAC) y otras asociaciones y expertos en las líneas de investigación. Su correo electrónico: manuelnunez@unisinu.edu.co. Scopus ID: Author ID: 57212660832.



## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 174-189  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

### La motivación de la declaratoria de Insubsistencia en Colombia

*The Motivation of the Insubstance Declaratory in Colombia*

Angélica María MUSKUS CARRIAZO

<https://orcid.org/0000-0003-1536-9700>

[Angelica.muskus@gmail.com](mailto:Angelica.muskus@gmail.com)

Universidad del Sinú, Colombia

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3907067>

#### RESUMEN

La motivación de la declaratoria de insubsistencia de los nombramientos de aquellos empleados públicos que se encuentran en provisionalidad no ha sido un asunto pacífico en la Jurisprudencia de las altas Cortes Colombianas, en la cual se ha presentado un famoso “choque de trenes” debido a las posiciones contrapuestas que han sostenido, por un lado, la Corte Constitucional, con una postura más garantista frente a una postura más conservadora del Consejo de Estado Colombiano.

**Palabras clave:** Provisionalidad, insubsistencia, motivación, acto administrativo.

#### ABSTRACT

The motivation of the declaration of insubstance of the appointments of those public employees who are in provisional status, has not been a peaceful matter in the Jurisprudence of the Colombian High Courts, in which a famous “train crash” has been presented due to the opposing positions that they have held on one hand, the Constitutional Court, with a more guaranteed stance against a more conservative stance of the Colombian State Council.

**Keywords:** Provisional, insubstance, motivation, administrative act.

Recibido: 20-05-2020 • Aceptado: 22-06-2020



## INTRODUCCIÓN

En Colombia, por mandato constitucional, la regla general del sistema de empleo público está dado por la carrera administrativa,<sup>1</sup> que es un sistema para la administración del personal al servicio del Estado, cuyo objeto es que el acceso a la función pública obedezca a principios de mérito, igualdad, ascenso y transparencia.

Para acceder a la carrera administrativa, es requisito sine qua non, superar concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil en virtud de lo estipulado por la ley 909 de 2004<sup>2</sup>.

No obstante, en circunstancias que se deben considerar siempre como excepcionales, la administración puede proveer empleos de carrera que encontrándose vacantes de manera definitiva<sup>3</sup>, requieren ser cubiertos transitoriamente, por razones de urgencia y necesidad, por personal que, aunque reúne los requisitos exigidos para el desempeño de las funciones que amerita el puesto de trabajo, no cumple con la exigencia de haber participado en un proceso de selección<sup>4</sup> previo<sup>5</sup>.

Así, el ordenamiento jurídico colombiano, ha previsto como una de las formas de provisión de los empleos de carrera administrativa, los nombramientos provisionales mientras se realiza la provisión de los cargos por medio del concurso de méritos. A estos empleados, se les llama empleados provisionales o en provisionalidad.

La ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." lo consagra en su artículo 25:<sup>6</sup>

*"Artículo 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera"*

Teniendo en cuenta lo precedente, se puede afirmar que el régimen jurídico de los funcionarios provisionales se caracteriza por dos rasgos esenciales: su excepcionalidad y el carácter no permanente de su vinculación.<sup>7</sup>

La situación de los empleados en provisionalidad ha sido objeto de controversias en Colombia, en especial, la situación administrativa del retiro de estos, puesto que no hubo consenso doctrinal o jurisprudencial acerca de la obligatoriedad o no de la motivación de los actos administrativos mediante los cuales se declara la insubsistencia de nombramientos provisionales en empleos de carrera administrativa.

*"La declaratoria de insubsistencia es una medida, prevista por nuestra legislación, en favor de la administración y como tal amparada por la presunción de legalidad. Pero tal presunción es desvirtuable, probando que el acto de insubsistencia se hizo con abuso o desviación de las atribuciones propias del funcionario que lo expidió, situación que se da cuando el agente que la*

<sup>1</sup> Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Artículo 125.

<sup>2</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004. Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones"

<sup>3</sup> Los nombramientos en provisionalidad pueden también utilizarse como mecanismo de provisión de empleos que se encuentran vacantes de manera transitoria por encontrarse su titular en situaciones administrativas previstas por el ordenamiento jurídico y al no ser posible su desempeño por un funcionario a través de la figura del encargo.

<sup>4</sup> Rincón Córdoba Jorge Iván, *Derecho administrativo laboral*. Universidad Externado de Colombia. 4 edición. 2013. Pág. 357.

<sup>5</sup> En el ordenamiento jurídico español por ejemplo, esto sería imposible toda vez que la jurisprudencia española ha sido enfática en señalar que como mínimo se debe realizar una convocatoria y un concurso evaluador de méritos y hojas de vida, para garantizar primero la publicidad y segundo, el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias. Ver ARROYO Luis, *El funcionario inerino*. Madrid. Editorial Tecnos. 1995.

<sup>6</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004. Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Artículo 25.

<sup>7</sup> Rincón Córdoba Jorge Iván, *Derecho administrativo laboral*. Universidad Externado de Colombia. 4 edición. 2013. Pág. 358

*decreta persigue fines contrarios a los del buen servicio, que son obviamente los que deben perseguir las autoridades investidas de esta facultad”<sup>8</sup>*

Este tema, suscitó por muchos años una controversia jurisprudencial entre los dos máximos órganos constitucionales: la Corte Constitucional, que es el intérprete por excelencia de la constitución y supremo órgano de la jurisdicción constitucional, y el Consejo De Estado Colombiano que es el órgano supremo de lo contencioso administrativo.

Lo anterior, generó mucha confusión a los operadores jurídicos, abogados, empleados, y al país en general puesto que existía incertidumbre jurídica al respecto, provocando fallos contradictorios en casos completamente similares, según la jurisdicción que conociera del mismo.

Como vemos, la figura en el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra debidamente delimitada legalmente, no obstante, en la práctica, su aplicación generalizada ha traigo consigo muchas dificultades y además ha suscitado dudas en el sistema de méritos en el empleo público<sup>9</sup>.

El tema del retiro de los empleados provisionales en Colombia no es intrascendente debido al abismal número de empleados que hay en esta situación aun cuando la regla general es la carrera administrativa. Durante el desarrollo de los debates legislativos que culminaron con la expedición de la ley 909 de 2004 *“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”*<sup>10</sup> se emitió un interesante al respecto:

*“Es de tal dimensión el problema de la provisionalidad que, de 91.174 empleos de carrera administrativa de las entidades del orden nacional de la Rama Ejecutiva, solamente 60.294 se encuentran inscritos en la carrera administrativa y los restantes, es decir, 30.880 en provisionalidad; no hay datos de este número de empleos en el orden territorial, pero se calcula que los provisionales alcanzan allí una suma de 60.000 o más.”*<sup>11</sup>

Por lo expuesto, quisimos abordar en este escrito el tema referido. Para ello, en primer lugar, iniciaremos con una contextualización del empleo público en Colombia, explicando las clases de personal existentes, la forma de provisión de estos, el régimen del retiro para concluir poniendo de presente la controversia a la que nos acabamos de referir.

## **CLASES DE VINCULACIÓN CON EL ESTADO EN COLOMBIA**

Las personas que se encuentran al servicio del Estado en Colombia, se clasifican en empleados del Estado, trabajadores del estado y miembros de corporaciones públicas, así se entiende del artículo 123 de la Constitución Política de 1991<sup>12</sup> que dispone que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Younes Moreno, Diego. Derecho Administrativo Laboral. Editorial Temis S.A. Décima edición. Bogotá-Colombia 2005. Pág. 204

<sup>9</sup> Rincón Córdoba Jorge Iván, *Derecho administrativo laboral*. Universidad Externado de Colombia. 4 edición. 2013. Pág. 358

<sup>10</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004. Ley 909 de 2004 *“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones*

<sup>11</sup> Ponencia para segundo debate al proyecto de ley 233 de 2004 senado, 262 de 2004 cámara por medio de la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones Disponible en [http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar\\_documento?p\\_tipo=12&p\\_numero=233&p\\_consec=8404](http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=12&p_numero=233&p_consec=8404)

<sup>12</sup> Constitución política de Colombia. 1991. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Artículo 123.

<sup>13</sup> Constitución política de Colombia. 1991. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Artículo 123.

Cada uno de estos, dependiendo de su vinculación se rige por diferentes disposiciones en materia de ingreso, permanencia y retiro. Se estudiará cada uno de ellos, con el fin de contextualizar el objeto de este escrito.

### 1. Empleados Públicos:

En Colombia, son empleados públicos quienes prestan servicios personales remunerados en los organismos y entidades de la administración pública, cuya vinculación se establece a través de un acto de nombramiento más posesión, y su relación laboral se encuentra determinada por ley o reglamento.<sup>14</sup>

Dentro de los empleados públicos encontramos:

a. Empleados de Carrera Administrativa: Constituyen la regla general del empleo público en Colombia. La constitución política de Colombia en su artículo 125, estipula<sup>15</sup>:

*“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.”*

La provisión definitiva de los empleos de carrera administrativa se realiza a través de un nombramiento en período de prueba, una vez el servidor ha superado un concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil en virtud de lo estipulado por la ley 909 de 2004<sup>16</sup>. No obstante, mientras esto transcurre, de manera transitoria, el empleo puede proveerse mediante nombramiento provisional, nombramiento este que estudiaremos con más detalle a continuación y que constituyen objeto central de este escrito.

b. Empleados de libre nombramiento y remoción, Su provisión y retiro se efectúan en virtud de la facultad discrecional del nominador para proveer los empleos.<sup>17</sup>

Al respecto de los empleados de libre nombramiento y remoción, queremos hacer mención especial a la trabajadora que se encuentra en estado de embarazo y en período de lactancia, ya que aún cuando se encuentran vinculadas con el Estado a través de una relación legal y reglamentaria y en principio el acto de retiro debería obedecer a un acto discrecional del nominador, cuentan con una protección laboral reforzada que implica que el acto administrativo que ordena la desvinculación debe ser motivado, ya que debe probarse que la razón del retiro no tuvo como fundamento la situación de embarazo o lactancia.<sup>18</sup>

c. Empleados de periodo fijo: Son empleos clasificados en la Constitución o en la ley con esta naturaleza. Ejemplo de ellos son los Contralores, Personeros, Directores de Empresa Social del Estado.

d. Temporales. Estos empleos se crean para cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la administración. Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones<sup>19</sup>.

<sup>14</sup> Ver Ley 909 de 2004, en el Decreto ley 2400 de 1968 y en el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.

<sup>15</sup> Constitución política de Colombia. 1991. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Artículo 125.

<sup>16</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004. Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” Diario Oficial 45.680. Artículo 30.

<sup>17</sup> Ibidem. Art. 5

<sup>18</sup> Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-075 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado: Julio 24 de 2018). Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU075-18.htm>

<sup>19</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004. Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”

## 2. Trabajadores Oficiales

Son los servidores públicos que, a diferencia de los empleados, son vinculados por medio de un contrato de trabajo. Esto determina el régimen del servicio que va a prestar, permitiendo, a diferencia de la categoría anterior, la posibilidad de discutir las condiciones aplicables en materia salarial, prestacional, jornada laboral, entre otros aspectos. Los pactos y convenciones colectivas, el reglamento interno de trabajo, los laudos arbitrales, hacen parte del contrato laboral. Son la regla general en las Empresas industriales y comerciales del Estado. Esta categoría está regulada en la ley 6 de 1945 y el decreto 1083 de 2015<sup>20</sup>.

## 3 Trabajadores que se Rigen por el Derecho Privado

Son trabajadores que se vinculan a la Administración mediante un contrato de trabajo y se rigen por las normas del Código Sustantivo de Trabajo<sup>21</sup>. Al igual que la categoría anterior, tienen la posibilidad de discutir las condiciones aplicables en materia salarial, prestacional, jornada laboral, entre otros aspectos. De igual manera, los pactos y convenciones colectivas, el reglamento interno de trabajo, los laudos arbitrales, hacen parte del contrato de trabajo. Son la regla general en las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos domiciliarios en el orden Nacional y Territorial.

## 4. Miembro de Corporación Pública

Son los servidores públicos que son electos por votación popular e integran los cuerpos colegiados de elección directa que representan al pueblo en los niveles nacional y territorial. Sus requisitos, funciones, inhabilidades e incompatibilidades y forma de elección se encuentran definidos en la Constitución Política de Colombia<sup>22</sup>. Ejemplo de ellos son los Congresistas (cabeza del poder legislativo colombiano), los Diputados y los Concejales.

## 5. Supernumerarios

Son auxiliares de la Administración vinculados a ella de manera temporal únicamente en casos de vacancia temporal de los empleados públicos como consecuencia de las licencias o vacaciones. Estos son colaboradores, y no pertenecen a las plantas de personal permanentes.<sup>23</sup>

Para que una persona se vincule como supernumerario, se le exigen los mismos requisitos que se exigen para proveer un empleo de la planta permanente y que la entidad cuente con el rubro especial de supernumerarios en el presupuesto.

## PROVISIÓN DE EMPLEOS EN COLOMBIA

### 1. Provisión de Empleos de Carrera Administrativa

Como ya mencionamos, por mandato constitucional, en Colombia la regla general en cuestión de empleo público es la carrera administrativa, lo cual significa que lo relevante es el mérito y capacidad, para la consecución del empleo público.

<sup>20</sup> Presidente de la República. 26 de mayo de 2015. Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.". Disponible en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083>

<sup>21</sup> Presidente de la República. Edición Oficial del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, con sus modificaciones, ordenada por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en el Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio de 1951, compilando los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951. Disponible en <http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/leyes-y-decretos-ley/codigo-sustantivo-del-trabajo>

<sup>22</sup> Constitución política de Colombia. 1991. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991.

<sup>23</sup> Presidente de la República de Colombia. 7 de junio de 1978. Decreto Ley 1042 de 1978. "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones". Diario Oficial 35035. Artículo 83.

Para proveer los empleos de Carrera Administrativa se acude a las que hayan superado un concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional de Servicio Civil, ya sea en periodo de prueba o en ascenso<sup>24</sup>.

Si la persona supera el periodo de prueba (6 meses), adquiere los derechos de Carrera Administrativa y se inscribirá en el Registro Público de Carrera Administrativa.<sup>25</sup>

## 2. Encargos y Nombramientos Provisionales

El objeto de este escrito, como hemos venido afirmando es determinar si es requerida la motivación de los actos administrativos que declaran la insubsistencia de nombramientos provisionales en empleos de carrera administrativa.

Pues bien, los empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes en forma definitiva se podrán proveer, mientras se adelantan los respectivos procesos de selección, mediante encargo a los empleados de carrera, siempre que cumplan con las siguientes condiciones<sup>26</sup>:

- Acreditar los requisitos para el ejercicio del empleo objeto de encargo;
- Poseer las aptitudes y habilidades para su desempeño;
- Haber sido calificado como sobresaliente en la última evaluación del desempeño;
- No haber sido sancionado disciplinariamente en el año anterior; y
- Desempeñar el empleo inmediatamente inferior al que se va a proveer.

En el evento que no existan dentro de la planta de personal empleados de carrera que puedan ser encargados por no reunir los requisitos, será procedente efectuar nombramientos provisionales, de manera excepcional.

Así, la administración puede proveer empleos de carrera que encontrándose vacantes de manera definitiva<sup>27</sup>, requieren ser cubiertos transitoriamente, por razones de urgencia y necesidad, por personal que, aunque reúne los requisitos exigidos para el desempeño de las funciones que amerita el puesto de trabajo, no cumple con la exigencia de haber participado en un proceso de selección previo.

También, cuando se generan vacantes temporales de los empleos de carrera porque el servidor se encuentra en vacaciones, licencias, permisos, suspensión o comisiones, entre otros, se puede proveer, mientras dura la vacancia, a través del encargo de los empleados de carrera o a través de nombramiento provisional de no encontrarse empleado de carrera que pueda ser encargado.<sup>28</sup>

La característica principal de esta forma de provisión es como su nombre lo dice, su carácter temporal. Así se deja claro en el Decreto 1083 de 2015<sup>29</sup>, reglamentario de la Ley 909 de 2004,<sup>30</sup> que dispone que la duración de esta provisión no podrá ser superior a seis (6) meses.

---

<sup>24</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004 Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." Diario Oficial 45.680.

<sup>25</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004 Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." Diario Oficial 45.680.

<sup>26</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004 Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." Diario Oficial 45.680. Artículo 24

<sup>27</sup> Los nombramientos en provisionalidad pueden también utilizarse como mecanismo de provisión de empleos que se encuentran vacantes de manera transitoria por encontrarse su titular en situaciones administrativas previstas por el ordenamiento jurídico y al no ser posible su desempeño por un funcionario a través de la figura del encargo.

<sup>28</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004. Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." Diario Oficial 45.680. Artículo 25.

<sup>29</sup> Presidente de la República. 26 de mayo de 2015. Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.". Disponible en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083>

<sup>30</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004. Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." Diario Oficial 45.680.

### 3. Provisión de Empleos de Libre Nombramiento y Remoción

En virtud del artículo 23 de la ley 909 de 2004<sup>31</sup>, los empleos de libre nombramiento se proveen por nombramiento ordinario, previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para su desempeño y de no encontrarse incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.

Estos nombramientos tienen una particularidad y es que están sujetos al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 que es la llamada en Colombia "Ley de Cuotas"<sup>32</sup> que busca conseguir tanto a nivel nacional como territorial, una participación efectiva de la mujer en los niveles decisorios de la Administración.

### 4. Provisión de Empleos de Periodo en el Nivel Territorial.

La elección de servidores públicos por parte de corporaciones públicas en el nivel territorial, como es el caso de los personeros y contralores, deben estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, la cual establece los requisitos y procedimientos para su selección, respetando los principios de mérito, publicidad, transparencia, y equidad de género.

## RETIRO DEL EMPLEO EN COLOMBIA

La ley 909 de 2004, en su artículo 41<sup>33</sup> instituye los casos en los que se produce el retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa en Colombia.

El retiro de los empleos de carrera deberá efectuarse siempre mediante acto motivado, así como el de las empleadas de libre nombramiento y remoción que se encuentran en estado de embarazo y lactancia.

### 1. Retiro de los Empleados de Libre Nombramiento y Remoción por Insubsistencia del Nombramiento

La remoción en empleos de libre nombramiento se puede efectuar mediante acto no motivado, por lo que la competencia para efectuarla es discrecional y procede por iniciativa del nominador cuando así bien lo ha considerado por la conveniencia y oportunidad para mejorar el servicio de la entidad pública y los intereses generales que deben predominar en la función pública<sup>34</sup>.

La excepción consagrada y que se ha mantenido casi que inmutable en la jurisprudencia colombiana, son las empleadas de libre nombramiento y remoción que se encuentran en estado de embarazo o lactancia, quienes cuentan con fuero especial de protección constitucional al ser beneficiarias de una estabilidad laboral reforzada.

Ha sostenido recientemente la Corte Constitucional Colombiana en sentencia de unificación jurisprudencial sobre el tema<sup>35</sup>, que el fundamento de la protección del fuero de maternidad tiene cuatro sustentos: el mandato del artículo 43 acerca de la especial protección de la mujer embarazada y en periodo de lactancia y en el caso de estar desamparada la obligación de otorgar un subsidio alimentario; la protección

<sup>31</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004. Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." Diario Oficial 45.680. Artículo 23.

<sup>32</sup> Congreso de la República de Colombia. 31 de mayo de 2000. Ley 581 de 2000 Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones." Diario Oficial 44.026.

<sup>33</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004 Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." Diario Oficial 45.680. Artículo 41.

<sup>34</sup> Ver al respecto por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia Radicado No. 2002-00188-01 del 19 de enero de 2006. M.P. Tarcisio Cáceres Toro. Ver también Radicado No. 4425-2004 del 4 de noviembre de 2008. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

<sup>35</sup> Corte Constitucional. Sentencia SU - 075 de 24 de julio de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Disponible en <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU075-18.htm>



de la mujer embarazada de la discriminación en el trabajo, específicamente de su despido por la maternidad; la protección de la mujer como gestora de vida y los derechos de los niños; y la protección a la familia.

Así las cosas, las mujeres en estado de embarazo o lactancia, aún cuando su vinculación con el Estado obedece a una relación legal y reglamentaria, y que en principio su acto de retiro debe obedecer a la mera discrecionalidad de su empleador, debido a sus especiales circunstancias por ser sujetos de protección constitucional, se han consagrado jurisprudencialmente como una excepción al ejercicio discrecional del retiro por parte del nominador, y es obligación que el acto administrativo que ordena la desvinculación de la misma deba ser motivado como fundamento de la situación de embarazo.<sup>36</sup>

Y es que el Estado Colombiano, se ha caracterizado por propender en el garantismo en los derechos de las mujeres embarazadas, y estar a la vanguardia internacional en el tema.

## 2. Retiro de Empleados Vinculados Mediante Nombramiento Provisional

En este punto, encontramos la cuestión central de nuestro escrito. Es claro, que el retiro debe hacerse por medio de acto administrativo, no obstante, en Colombia se ha discutido legal y jurisprudencialmente, si dicho retiro debe o no ser motivado.

La controversia entre el Consejo de estado y la Corte Constitucional, que son dos de las tres altas cortes en Colombia, empezó en el año 1998<sup>37</sup> cuando la segunda sentó su postura de obligatoriedad de motivación de los actos administrativos.

En 2004 se expide la ley 909 de ese año que entró a regular el empleo público y la carrera administrativa en el país<sup>38</sup>, y en 2015, se expide el Decreto Reglamentario No. 1083 de 2015<sup>39</sup> que dispone que antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados<sup>40</sup>

No obstante, ambas cortes siguieron obstinadas en la defensa de sus posturas, por lo cual nos vamos a referir a continuación a la controversia jurisprudencial que se ha presentado al respecto del tema estudiado:

## **POLÉMICA JURISPRUDENCIAL EN COLOMBIA: MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE RETIRO DE EMPLEADOS PROVISIONALES**

A propósito del acto administrativo mediante los cuales se declara la insubsistencia de nombramientos provisionales en empleos de carrera administrativa, en Colombia, se ha suscitado por largos años una discusión jurisprudencial, en torno a la motivación que debe tener o no dicho acto.

En Sentencia SU-250 de 1998<sup>41</sup>, la Corte Constitucional Colombiana, que es el intérprete máximo de la constitución, estableció la obligatoriedad de la administración de motivar los actos administrativos por medio

<sup>36</sup> Ver por ejemplo Sentencias de la Corte Constitucional Colombiana T-126 de 2012 (M.P. Jorge Pretelt Chaljub: febrero 23 de 2012) recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-126-12.htm> ; SU-070 de 2013, recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53189> (M.P. Alexei Julio Estrada: febrero 13 de 2013) T 716 de 2013, T 138 de 2015, Sentencia SU-075 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado: Julio 24 de 2018). Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU075-18.htm>

<sup>37</sup> Corte Constitucional. Sentencia SU – 250 de 26 de mayo de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/SU250-98.htm>

<sup>38</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004. Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” Diario Oficial 45.680.

<sup>39</sup> Presidente de la República. 26 de mayo de 2015. Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”. Disponible en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083>

<sup>40</sup> Presidente de la República. 26 de mayo de 2015. Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”. Artículo 2.2.5.3.4 Disponible en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083>

<sup>41</sup> Corte Constitucional. Sentencia SU – 250 de 26 de mayo de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/SU250-98.htm>

de los cuales se declara la insubsistencia de los empleados provisionales en empleos de carrera administrativa

En la providencia, la corte afirmó que los actos administrativos, para su validez, deben estar motivados, lo cual implica, por una parte, señalar los fundamentos de hecho que los justifican y por otro las normas jurídicas en que se fundamentan.

Asegura la corte, que la libertad de la administración para declarar insubsistente a un funcionario en provisionalidad en un cargo para el cual se estableció la carrera se encuentra limitada por la discrecionalidad, la cual no implica prescindir de una justificación para cada caso concreto, lo cual evita la arbitrariedad cuando se hace uso de estas facultades.

La necesidad de motivación de los actos administrativos según la Corte Constitucional está dirigida a convencer a las partes de que la decisión tomada fue ajustada a derecho y no a motivos meramente personales que puedan resultar arbitrarios. Se entiende como un reflejo del principio de publicidad establecido en la Constitución de 1991<sup>42</sup>, pues si no se motiva no hay publicidad y con ello se estarían violando otros derechos establecidos en la misma disposición.

Años más tarde, el en sentencia del 13 de marzo de 2003, dictada en el proceso 1834-01<sup>43</sup>, el Consejo de Estado Colombiano, quien es el máximo órgano de lo contencioso administrativo, fijó su criterio, en el sentido de señalar que los funcionarios provisionales al no pertenecer a la carrera administrativa pueden ser retirados discrecionalmente, en cualquier momento, sin necesidad de motivar la decisión.

Esta postura fue reiterada de forma más contundente por el mismo tribunal, en sentencia de 19 de octubre de 2006, expediente 3934-05<sup>44</sup> donde critica de manera abierta y expresa la posición jurisprudencial sentada por el máximo órgano constitucional.

En esa providencia, el Consejo de Estado parte de un trasfondo establecido de antaño en la jurisprudencia de esa Corporación, en la cual se asimilan los cargos de libre nombramiento y remoción a los de carrera en provisionalidad, desde la perspectiva legal, en la medida en que la inamovilidad que puede suponer la carrera sólo se puede predicar de quien haya superado un concurso y haya accedido al cargo por méritos y en propiedad.

El Consejo de Estado critica la posición de la Corte Constitucional, a partir de argumentos que apuntan en primer lugar a una realidad fáctica consistente en que los nombramientos de cargos de carrera en provisionalidad obedecen a razones de confianza, y no a razones técnicas que se deben predicar de los cargos de carrera. Señala que las condiciones técnicas del candidato y del empleo sólo cobran vigencia en la medida en que la vinculación se haya realizado previo a un concurso de méritos y como consecuencia de lo anterior sostiene que resulta equivocado que se prediquen condiciones profesionales y técnicas de quien no las ha demostrado.<sup>45</sup>

Manifiesta que el funcionario declarado insubsistente tiene la posibilidad de interpretar, conforme a las circunstancias concretas de su desempeño<sup>46</sup>, cuál causa dio lugar a dicho acto y determinar si la misma se apartó de la legalidad, del buen servicio o del interés general, argumentos que podrá utilizar para demandar y lograr la anulación del acto y, como consecuencia de lo anterior, no se puede decir que se viole el derecho de defensa, ya que la jurisdicción evaluará si se presentó una desviación de poder conforme a las pruebas allegadas al proceso.

Argumenta que la asimilación entre los cargos de libre nombramiento y remoción y los de carrera en provisionalidad en relación con el deber de motivar el acto administrativo de insubsistencia, no fue una

<sup>42</sup> Constitución política de Colombia. 1991. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Artículo 209

<sup>43</sup> Consejo de Estado. Sentencia de 13 de marzo de 2003, Tarsicio Cáceres Toro, expediente 1834-01 Disponible en <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14804>

<sup>44</sup> Consejo de Estado. Sentencia de 19 de octubre de 2006, Ana Margarita Olaya Forero. expediente 3934-05. Disponible en <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=23030>

<sup>45</sup> IBIDEM

<sup>46</sup> IBIDEM

<sup>50</sup>Consejo de Estado. Sentencia de 26 de junio de 2008, Expediente 606-07, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Disponible en [https://www.google.com/url?sa=t&rc=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwinhrmptO\\_QAHVJxQYKHW1nA5IQFggBMAA&url=https://www.notinet.com.co/2Fpedidos%2Finsu1.doc&usq=AFQjCNFu2k3kh\\_-OpUWdFjs9g2kwVF1hw](https://www.google.com/url?sa=t&rc=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwinhrmptO_QAHVJxQYKHW1nA5IQFggBMAA&url=https://www.notinet.com.co/2Fpedidos%2Finsu1.doc&usq=AFQjCNFu2k3kh_-OpUWdFjs9g2kwVF1hw)

Poco tiempo después de esta sentencia, se volvió a pronunciar la Corte Constitucional en sentencia T – 011 de 16 de enero de 2009<sup>51</sup>.

En la misma, afirma la corte que la necesidad de motivar el acto que declara la insubsistencia del funcionario, se fundamenta en el hecho de que el cargo en provisionalidad, no se puede asimilar al de libre nombramiento y remoción, por lo que no se permite la desvinculación salvo que medie una justa causa para ello. (Un ataque claro a la postura sostenida por el Consejo de Estado)<sup>52</sup>.

Adicionalmente, respecto de la motivación que debe realizar el nominador, en el fallo se hace una precisión importante, y es que para la Corte Constitucional no es válido fundamentar la declaratoria de insubsistencia en la provisionalidad del cargo o en la facultad discrecional que tiene la administración<sup>53</sup>. Considera que los únicos argumentos válidos se encuentran en la ocupación del cargo con ocasión del concurso de méritos o porque existe una razón que así lo justifique desde la perspectiva del servicio.<sup>54</sup>

Es decir, reafirma la postura que siempre ha referido, pero además la robustece estableciendo que no cualquier argumento constituye una motivación válida.

No obstante, 4 meses después, en sentencia T – 251 de 2 de abril de 2009<sup>55</sup>, encontramos una pequeña modificación de la posición de la Corte Constitucional, pues ya no se señala que la razón de la motivación de los actos mediante los cuales se declara insubsistente a un funcionario en provisionalidad provenga del hecho de ser cargos de carrera.

Encuentra el órgano constitucional, que efectivamente es diferente un cargo en provisionalidad y uno en propiedad, sin embargo, ello no implica que los actos mediante los cuales se declara insubsistente a un funcionario en provisionalidad no se deban motivar.

Sostiene, que la motivación desde el punto de vista de los derechos fundamentales resulta indispensable, ya que una interpretación sistemática de la Constitución impone al Estado el deber de erradicar la arbitrariedad en las decisiones.

De igual manera, manifiesta que, si la provisionalidad fue utilizada con el fin de impedir la parálisis o la interrupción del servicio, la desvinculación debe atender a que no se satisfizo el interés perseguido por la administración con el nombramiento.

De esta manera, sostiene que le asiste razón al Consejo de Estado al señalar que no se puede asimilar el nombramiento en propiedad y el nombramiento en provisionalidad, pero que no le asiste razón cuando permite la desvinculación de servidores en provisionalidad sin motivar los actos administrativos que así lo decidieron, dado que la motivación es lo que permite erradicar la arbitrariedad y le permite al funcionario conocer las razones de la decisión de la administración.

Por otra parte, señala la obligatoriedad de acoger la tesis defendida de antaño por la Corte<sup>56</sup>, pues la misma no riñe con la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, puesto que no entra a juzgar el fondo de la declaratoria de insubsistencia, sino que simplemente aboga por la necesidad de motivar los actos administrativos, pues el análisis de la legalidad de estos, una vez se cumpla con el deber de motivar las decisiones, corresponderá a dicha jurisdicción.

Se evidencia entonces en las providencias citadas<sup>57</sup>, que en Colombia existió por muchos años una ardua polémica encabezada por los dos máximos órganos jurisdiccionales (constitucional y contencioso

---

<sup>51</sup>Corte Constitucional. Sentencia T – 011 de 16 de enero de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-011-09.htm>

<sup>52</sup>Corte Constitucional. Sentencia T – 011 de 2009., Nilson Pinilla Pinilla. 16 de enero de 2009. Disponible en <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-011-09.htm>

<sup>53</sup> IBIDEM

<sup>54</sup> IBIDEM

<sup>55</sup> Corte Constitucional. Sentencia T – 251 de 2 de abril de 2009, Cristina Pardo Schlesinger Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-251-09.htm>

<sup>56</sup> Corte Constitucional. Sentencia T – 251 de 2 de abril de 2009, Cristina Pardo Schlesinger Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-251-09.htm>

<sup>57</sup> Ver Corte Constitucional. Sentencia T – 251 de 2 de abril de 2009, Cristina Pardo Schlesinger, Corte Constitucional. Sentencia T – 011

administrativo), en torno a la obligatoriedad de la motivación de los actos administrativos mediante los cuales se declara la insubsistencia de nombramientos provisionales en empleos de carrera administrativa.

Los más perjudicados fueron los mismos trabajadores que como mencionamos, no tenían seguridad jurídica sobre la verdadera vocación de la motivación del mencionado acto administrativo, y debían enfocar sus pretensiones según el órgano que fuera a conocer del caso, llegando esto a situaciones de desigualdad puesto que un caso similar, si era decidido por el Consejo de Estado podía traer una solución muy diferente a otro caso que fuese decidido por la Corte Constitucional.

## **ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN**

En el año 2010, la Corte Constitucional Colombiana se volvió a pronunciar sobre el tema, esta vez en una Sentencia de Unificación SU-917 de 2010<sup>58</sup>, en la cual afirma que el acto de retiro no sólo debe ser motivado, sino que ha de cumplir ciertas exigencias mínimas respecto de su contenido material, de modo que el administrado cuente con elementos de juicio necesarios para decidir si acude o no ante la jurisdicción y demanda la nulidad del acto, y lo contrario significaría anteponer una exigencia formal de motivación en detrimento del derecho sustancial al debido proceso, pues si no se sabe con precisión cuáles son las razones de una decisión administrativa difícilmente podrá controvertirse el acto tanto en sede gubernativa como jurisdiccional, por lo cual para que un acto administrativo de desvinculación se considere motivado es forzoso explicar de manera clara, detallada y precisa cuáles son las razones por las cuales se prescindirá de los servicios del funcionario en cuestión.<sup>59</sup>

En este orden de ideas, según la Corte Constitucional, sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto.<sup>60</sup>

Así las cosas, la Corte Constitucional señaló en la sentencia SU-917 de 2010<sup>61</sup>, que los nombramientos provisionales, podrán ser terminados de acuerdo con las siguientes causales:

- Como resultado de una sanción de tipo disciplinario.
- Cuando el cargo respectivo se vaya a proveer por utilización de lista de elegibles obtenida a través de concurso de méritos.
- Cuando existan razones específicas atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto y que ameriten una calificación insatisfactoria.

Ese mismo año el Consejo de estado, con providencia de 4 de agosto de 2010<sup>62</sup> sobre el tema indicó que no existe un linaje del funcionario provisional, sino que por el contrario se constituye en un fenómeno producto de la regulación de la legislación y de las normas reglamentarias vigentes, por tanto no cuenta con el fuero de estabilidad propio de quienes acceden por mérito a los cargos de carrera administrativa, para

---

de 2009., Nilson Pinilla Pinilla. 16 de enero de 2009, Consejo de Estado. Sentencia de 26 de junio de 2008, Expediente 606-07, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Consejo de Estado. Sentencia de 19 de octubre de 2006, Ana Margarita Olaya Forero. expediente 3934-05, Consejo de Estado. Sentencia de 13 de marzo de 2003, Tarsicio Cáceres Toro, expediente 1834-01.

<sup>58</sup> Corte Constitucional. Sentencia SU-917 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/SU917-10.htm>

<sup>59</sup> Corte Constitucional. Sentencia SU-917 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/SU917-10.htm>

<sup>60</sup> Ibidem.

<sup>61</sup> Ibidem

<sup>62</sup> Consejo de Estado. Sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 0319-08. MP. Gustavo Gómez Aranguren. Disponible en [http://190.24.134.67/documentos/boletines/PDF/15001-23-31-000-2001-00354-01\(0319-08\).pdf](http://190.24.134.67/documentos/boletines/PDF/15001-23-31-000-2001-00354-01(0319-08).pdf)

sostener de manera textual que sigue sosteniendo la tesis que de tiempo atrás se había determinado por la misma corporación, en el sentido de que el acto de desvinculación del funcionario provisional, no requiere de motivación alguna, conclusión a la cual llega la Sala luego de dirigir sus reflexiones al estudio histórico - normativo de la figura. Pero precisa, que esta situación, es decir, la no exigencia de motivación del acto de desvinculación del funcionario provisional encuentra su excepción solo cuando el nombramiento provisional se da por terminado antes de cumplirse el término, caso en el cual se requiere de resolución motivada<sup>63</sup>

Se refiere el Consejo de Estado, al ya artículo 10 del Decreto 1227 de 2005<sup>64</sup> que establecía que antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados.

En el mismo sentido esta Corporación en sentencia de 23 de septiembre de 2010<sup>65</sup> M.P Dr. Gerardo Arenas señaló:

*"La Ley 909<sup>66</sup> y su decreto reglamentario le dieron plenos efectos a los términos de duración de los nombramientos provisionales al señalar que estos no pueden superar los seis meses legales de duración, plazo dentro del cual se deberá convocar al empleado a concurso, autorizando la prórroga de los nombramientos provisionales hasta cuando dicha convocatoria pueda ser realizada, de tal manera que, sólo mediante acto motivado el nominador podrá darlos por terminados, antes del vencimiento del término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional"*<sup>67</sup>

Nótese entonces, que, a partir del año 2010, por un lado, la Corte Constitucional detalló aún más su postura de obligatoriedad de motivación de los actos administrativos de insubsistencia de provisionales estableciendo que sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia invoque argumentos específicos. Y, por otro lado, se flexibilizó un poco la postura del Consejo de Estado Colombiano, admitiendo como excepción la motivación de los actos administrativos, haciendo remisión a la norma del Decreto 1227 de 2005<sup>68</sup> (5 años después de su expedición).

En el año 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario de la función pública No. 1083 de 2015<sup>69</sup>, que enfáticamente dispone:

*"ARTÍCULO 2.2.5.3.4 Terminación de encargo y nombramiento provisional. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada podrá darlos por terminados"*<sup>70</sup>

---

<sup>63</sup>Consejo de Estado. Sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 0319-08. MP. Gustavo Gómez Aranguren. Disponible en [http://190.24.134.67/documentos/boletines/PDF/15001-23-31-000-2001-00354-01\(0319-08\).pdf](http://190.24.134.67/documentos/boletines/PDF/15001-23-31-000-2001-00354-01(0319-08).pdf)

<sup>64</sup>Presidencia de la República. 21 de abril de 2005. Decreto Reglamentario 1227 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998" presidente de Colombia. Diario Oficial 45890 de abril 25 de 2005.

<sup>65</sup>Consejo de Estado. Sentencia de 23 de septiembre de 2010. Expediente 0883-08 M.P Dr. Gerardo Arenas Disponible en: [http://190.24.134.67/documentos/boletines/PDF/25000-23-25-000-2005-01341-02\(0883-08\).pdf](http://190.24.134.67/documentos/boletines/PDF/25000-23-25-000-2005-01341-02(0883-08).pdf)

<sup>66</sup>Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004 Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." Diario Oficial 45.680

<sup>67</sup>Consejo de Estado. Sentencia de 23 de septiembre de 2010. Expediente 0883-08 M.P Dr. Gerardo Arenas Disponible en: [http://190.24.134.67/documentos/boletines/PDF/25000-23-25-000-2005-01341-02\(0883-08\).pdf](http://190.24.134.67/documentos/boletines/PDF/25000-23-25-000-2005-01341-02(0883-08).pdf)

<sup>68</sup>Presidencia de la República. 21 de abril de 2005. Decreto Reglamentario 1227 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998" presidente de Colombia. Diario Oficial 45890 de abril 25 de 2005.

<sup>69</sup>Presidente de la República. 26 de mayo de 2015. Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.". Disponible en <https://www.funcionpublica.gov.co/evalgestornormativo/norma.php?i=62866#1083>

<sup>70</sup>Presidente de la República. 26 de mayo de 2015. Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.". Disponible en <https://www.funcionpublica.gov.co/evalgestornormativo/norma.php?i=62866#1083>. Artículo 2.2.5.3.4

Es decir, se torna más por la postura que ha sostenido por años la Corte Constitucional, y contrario a lo que se había establecido en el Decreto 1227 de 2005<sup>71</sup>, estableciendo que es necesaria la motivación de terminación de los actos administrativos que den por terminados los nombramientos provisionales, aun cuando no haya terminado el término de duración del mismo.

En concepto reciente del Departamento Administrativo de la Función Pública, se afirma que *de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.4. del Decreto 1083 de 2015, y el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-917 de 2010<sup>72</sup>, la terminación del nombramiento provisional o el de su prórroga, procede por acto motivado, y sólo es admisible una motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto<sup>73</sup>.*

Así las cosas, se puede afirmar que actualmente en Colombia, siguen existiendo confusión por las diferencias normativas y jurisprudenciales acerca de la motivación de los actos administrativos por los cuales se declara la insubsistencia de nombramientos provisionales en empleos de carrera administrativa, aun cuando la balanza actualmente está inclinándose por la postura de la Corte Constitucional Colombiana.

## CONCLUSIONES

De lo que se ha venido exponiendo a través de este escrito, se puede concluir que conforme a lo establecido en la Ley 909 de 2004<sup>74</sup> y el Decreto 1083 de 2015<sup>75</sup>, los nombramientos provisionales se constituyen en un mecanismo de carácter excepcional y transitorio que permite proveer temporalmente un empleo de carrera administrativa, con personal que no fue seleccionado mediante el sistema de mérito, con fundamento en unas causales específicamente señaladas en la norma, siempre que no haya empleados de carrera que cumplan con los requisitos para ser encargados.

Con relación al retiro, sigue existiendo actualmente diversas posturas sobre si éste debe producirse mediante acto motivado, entre otras razones, porque el cargo se va a proveer de manera definitiva con la persona que superó el concurso de méritos, por razones de tipo disciplinario o por el desempeño no satisfactorio, o si solamente debe ser motivado cuando se produzca el acto administrativo antes del plazo acordado para ello.

Consideramos, que en aras de los principios que deben regir la función administrativa, así como las bases constitucionales de todo Estado de derecho y concretamente una de las garantías más importantes que esto implica, como lo es el derecho al debido proceso, todo acto administrativo debe estar motivado, y si bien reconocemos la discrecionalidad de la administración, consideramos que esa discrecionalidad en ningún momento se ve interrumpida u obstaculizada por el hecho de la obligación de motivar los actos administrativos, por el contrario, es una garantía para el administrado e incluso para la misma administración ya que dicha motivación puede resultar útil en la medida en que ésta pueden ser trascendental para efectos de resolver posibles conflictos posteriores ante la jurisdicción.

<sup>71</sup> Presidencia de la República. 21 de abril de 2005. Decreto Reglamentario 1227 de 2005 *"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998"* presidente de Colombia. Diario Oficial 45890 de abril 25 de 2005.

<sup>72</sup> Corte Constitucional. Sentencia SU-917 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/SU917-10.htm>

<sup>73</sup> Departamento Administrativo de la función Pública. Concepto 47941 de 2019. Disponible en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=91272>

<sup>74</sup> Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004. Ley 909 de 2004 *"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones."* Diario Oficial 45.680. Artículo 25.

<sup>75</sup> Presidente de la República. 26 de mayo de 2015. Decreto 1083 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública."* Disponible en <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083>

## **BIBLIOGRAFÍA**

ARROYO YANES, L.M (1995). El funcionario Interino. Editorial Tecnos, Madrid.

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. (1991) Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (2004). Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." Congreso de la República de Colombia. 23 de septiembre de 2004. Diario Oficial 45.680 de septiembre 23 de 2004.

CONSEJO DE ESTADO COLOMBIANO (2010) Sentencia de 23 de septiembre de 2010, M.P. Gerardo Arenas. Expediente 0883-08

CONSEJO DE ESTADO COLOMBIANO. (2003). Sentencia de 13 de marzo de 2003, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Expediente 1834-01

CONSEJO DE ESTADO COLOMBIANO. (2006). Sentencia de 19 de octubre de 2006, C.P. Ana Margarita Olaya Forero. Expediente 3934-05.

CONSEJO DE ESTADO COLOMBIANO. (2008). Sentencia de 26 de junio de 2008, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente 606-07.

CONSEJO DE ESTADO COLOMBIANO. (2010). Sentencia de 4 de agosto de 2010, MP. Gustavo Gómez Aranguren. Expediente 0319-08.

CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. (2009). Sentencia T – 251 de 2 de abril de 2009. M.P Cristina Pardo Schlesinger

CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. (1998). Sentencia SU – 250 de 26 de mayo de 1998. M.P Alejandro Martínez Caballero.

CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. (2009). Sentencia T – 011 de 16 de enero de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. (2010). Sentencia SU-917 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (1968). Decreto ley 2400 de 1968 "Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones." Presidente de Colombia. Diario Oficial 32625 de octubre 18 de 1968.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (2005). Decreto Reglamentario 1227 de 21 de abril de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998" presidente de Colombia. Diario Oficial 45890 de abril 25 de 2005.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (2015). Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública." Directora del departamento administrativo de la función pública. 26 de mayo del año 2015

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto Ley 1042 de 1978 "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se



fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones". Presidente de la República de Colombia. Diario Oficial No. 35035 de junio 7 de 1978.

RINCÓN CÓRDOBA J.I (2013). Derecho Administrativo Laboral. Universidad Externado de Colombia. Cuarta reimpresión. Bogotá.

YOUNES MORENO D. (2017). Derecho Administrativo Laboral. Editorial Temis S.A. Décima edición. Bogotá.

**Web:**

<https://vlex.com.co/vid/ponencia-segundo-debate-senado-ca-mara-451274718> consultado por última vez el 18/02/2020.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=92951> consultado por última vez el 18/02/2020.

**BIODATA**

**Angélica María MUSKUS CARRIAZO:** Abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho público y magister en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo de la misma Universidad, magister en Derecho de las Administraciones públicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y candidata a Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Experiencia como abogada asesora en el sector público y privado, y actual docente investigadora de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainúm.



## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 190-200  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

### Enseñanza en el análisis de señales aleatorias usando correlación y sus aplicaciones

*Teaching in the Analysis of Random Signals Using Correlation and its Applications*

**Andrés HERNÁNDEZ MARULANDA**

<https://orcid.org/0000-0001-8098-2427>

[andres.hernandez@usbmed.edu.co](mailto:andres.hernandez@usbmed.edu.co)

*Universidad de San Buenaventura Sede Medellín, Colombia*

**Nelson Javier ESCOBAR MORA**

<https://orcid.org/0000-0001-9681-3089>

[nelson.escobar@upb.edu.co](mailto:nelson.escobar@upb.edu.co)

*Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Antioquia, Colombia*

**Horderlin ROBLES VEGA**

<https://orcid.org/0000-0002-7705-7334>

[horderlinrobles@unisinu.edu.co](mailto:horderlinrobles@unisinu.edu.co)

*Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainum, Colombia*

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3907069>

#### RESUMEN

Este artículo consiste básicamente en definir que es, mencionar y explicar las aplicaciones de la correlación y auto correlación. Utilizando las herramientas brindadas por Matlab se pretende aplicar todos estos conceptos de correlación a una señal que pudiese ser aleatoria, y hacer un algoritmo que evalúe todo el comportamiento de la señal elegida. Se pretende dar información acerca de las aplicaciones en distintas áreas de la ciencia, la ingeniería, la estadística y la medicina.

**Palabras clave:** Correlación, autocorrelación, Convolución, Señales Aleatorias y Coeficiente de Correlación.

#### ABSTRACT

This article basically consists of defining what it is, mentioning and explaining the applications of correlation and self-correlation. Using the tools provided by Matlab, it's intend to apply all these correlation concepts to a signal that could be random, and make an algorithm that evaluates the behavior of the chosen signal. It is intended to give information about applications in different areas of science, engineering, statistics and medicine.

**Keywords:** Correlation, Auto Correlation, Convolution, Random Signals, Correlation Coefficient.

Recibido: 20-05-2020 • Aceptado: 25-06-2020



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## INTRODUCCIÓN

El termino correlación ha despertado en los últimos tiempos un gran interés tanto en la comunidad científica como matemática, existiendo en la actualidad gran número de grupos de investigación de todas las universidades del mundo que trabajan en este campo. La razón fundamental de su éxito radica en la sencillez conceptual y moderada complejidad frente a las indudables mejoras que proporciona frente a otras ciencias<sup>123</sup>. Esta comunicación presenta los resultados obtenidos en el análisis de distintas señales que permiten recuperar y comparar información de otro proceso o señal, lo cual es muy útil en aplicaciones de la ciencia y la medicina moderna<sup>45</sup>. En todos los casos se demuestra la potencialidad de dicha técnica que permite resolver, gracias a la flexibilidad de los parámetros de diseño, los problemas que van apareciendo en la implementación de reconstrucción y comparación de datos. Es de gran interés resaltar que esta metodología aproxima de una manera muy sustancial los resultados que se predicen en simulación con los obtenidos con las señales reales.

## Cálculos

Teniendo dos secuencias reales  $x(n)$  e  $y(n)$ , ambas de energía finita. La correlación cruzada de la secuencia  $x$ , que se define como<sup>6</sup>

$$r_{xy}(l) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y(n-l) \quad l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (1)$$

O, equivalentemente, como

$$r_{xy}(l) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n+1)y(n) \quad l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2)$$

El índice  $l$  es el parámetro de desplazamiento o retardo en el tiempo y los subíndices  $xy$  de la secuencia de auto correlación  $r_{xy}(l)$  indican las señales que han sido correlacionadas<sup>7</sup>. El orden de los subíndices, con  $x$  precediendo a  $y$  indica la dirección en que una secuencia es desplazada con respecto a la otra. Es decir, la secuencia  $x(n)$  no se desplaza y la secuencia  $y(n)$  se desplaza  $l$  muestras hacia la derecha si  $l$  es positivo y  $l$  muestras hacia la izquierda si  $l$  es negativo. De forma análoga en (2) la secuencia  $y(n)$  no se desplaza y lo hace la secuencia  $x(n)$  muestras hacia la izquierda si  $l$  es positivo y  $l$  hacia la derecha si  $l$  es negativo. Desplazar  $x(n)$   $l$  muestras hacia la izquierda con relación a  $y(n)$  es equivalente a desplazar  $y(n)$  muestras hacia la derecha con relación a  $x(n)$  de aquí que (1) y (2) produzcan idénticas secuencias de correlación cruzada.

Si se invierten los papeles de  $x(n)$  e  $y(n)$  en (1) y (2) y, por tanto, se invierte también el orden de los subíndices  $xy$ , se obtiene la secuencia de correlación cruzada

$$r_{yx}(l) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n)x(n-l) \quad (3)$$

O, equivalentemente,

<sup>1</sup> Imperial College "Correlation", [online] Available [http://www.ee.ic.ac.uk/hp/staff/dmb/courses/E1Fourier/00800\\_Correlation.pdf](http://www.ee.ic.ac.uk/hp/staff/dmb/courses/E1Fourier/00800_Correlation.pdf) [Consultado en: Agosto 8]

<sup>2</sup> Mathworks, "ayuda de Matlab y Simulink", [online] Available [www.mathworks.es](http://www.mathworks.es) [Consultado en: Agosto 10]

<sup>3</sup> Smith, Steven. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing.

<sup>4</sup> Podobnik, B., et al. Statistical tests for power-law cross-correlated processes. Phys. Rev. E 84, 066118 (2011).

<sup>5</sup> Banfi Francesco, "Wavelet cross-correlation and phase analysis of a free cantilever subjected to band excitation", Beilstein J. Nanotechnol, 294-300 (2012).

<sup>6</sup> Manolakis Dimitis, "Applied digital signal processing", Edit Cambridge University Press [impreso en 2013]

<sup>7</sup> Proakis Jhon, "Tratamiento digital de señales", Edit Prentice hall [impreso en 2018]

$$r_{yx}(l) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n+1)x(n) \quad (4)$$

Comparando (1) con (4) o (2) con (3), se concluye que

$$r_{xy}(l) = r_{yx}(-l) \quad (5)$$

Por tanto  $r_{yx}(l)$  es simplemente la versión reflejada de  $r_{xy}(l)$ , donde la reflexión se hace con respecto a  $l=0$ . De aquí, que  $r_{yx}(l)$  proporcione exactamente la misma información que  $r_{xy}(l)$ , con respecto a la similitud  $x(n)$  e  $y(n)$ .

Las similitudes entre el cálculo de la correlación cruzada y la convolución de dos secuencias son evidentes. En el cálculo de la convolución, una de las señales se refleja, se desplaza y entonces se multiplica por la otra secuencia; finalmente se suman todos los valores de la secuencia producto. Con excepción de la operación de reflexión, el cálculo de la correlación cruzada supone exactamente las mismas operaciones: el desplazamiento de una de las secuencias, multiplicación de ambas y suma de todos los términos de la secuencia producto.

En definitiva, si se tiene un programa para el cálculo de la convolución, se puede utilizar para obtener la correlación cruzada proporcionando como entrada  $x(n)$  y la secuencia reflejada y  $(-n)$ . Así, la convolución de  $x(n)$  con  $y(-n)$  entrega la correlación cruzada  $r_{xy}(l)$ , esto es,

$$r_{xy}(l) = x(l) * y(-l) \quad (6)$$

En el caso especial de qué  $y(n)=x(n)$ , se tiene la auto correlación de  $x(n)$ , que se define como la secuencia

$$r_{xx}(l) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x(n-l) \quad (7)$$

Al tratar con señales de duración finita es costumbre expresar tanto la auto correlación como la correlación cruzada mediante sumatorios finitos. En particular, si  $x(n)$  e  $y(n)$  son secuencias causales de longitud  $N$  (es decir,  $x(n) = y(n) = 0$  para  $n < 0$  y ), la auto correlación y la correlación cruzada pueden expresarse como

$$r_{xy}(l) = \sum_{n=-\infty}^{N-|k|-1} x(n)y(n-l) \quad (8)$$

Y

$$r_{xx}(l) = \sum_{n=-\infty}^{N-|k|-1} x(n)x(n-l) \quad (9)$$

Donde  $i = l, k = 0$  para  $l \geq 0$  e  $i = 0, k = l$  para  $l < 0$ .

### Propiedades de las secuencias de correlación cruzada

Las secuencias de correlación cruzada tienen varias propiedades importantes, que se presentan a continuación. Para desarrollar dichas propiedades se considera que se tienen dos secuencias  $x(n)$  e  $y(n)$  de energía finita que se combinan linealmente para obtener<sup>8</sup>

$$ax(n) + by(n-l) \quad (10)$$

<sup>8</sup> Stein Jhonatan, "Digital signal processing: A computer science Perspective", Edit Wiley [impreso en 2010]

Donde  $a$  y  $b$  son constantes arbitrarias y  $l$  es un desplazamiento en el tiempo. La energía de esta señal es

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [ax(n) + by(n-l)]^2 &= a^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2(n) + b^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} y^2(n-l) \\ &+ 2ab \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y(n-l) \\ &= a^2 r_{xx}(0) + b^2 r_{yy}(0) + 2abr_{xy}(l) \end{aligned} \quad (11)$$

En primer lugar, se observa que  $r_{xx}(0) = E_x$  y  $r_{yy}(0) = E_y$ , que son las energías de  $x(n)$  e  $y(n)$ , respectivamente.

Considerando

$$a^2 r_{xx}(0) + b^2 r_{yy}(0) + 2abr_{xy}(l) \geq 0 \quad (12)$$

Ahora, suponiendo que  $b \neq 0$  se puede dividir (12) por  $b^2$  para obtener

$$r_{xx}(0)\left(\frac{a}{b}\right)^2 + 2r_{xy}(l)\left(\frac{a}{b}\right) + r_{yy}(0) \geq 0 \quad (13)$$

Considerando esto como una ecuación cuadrática de coeficiente  $r_{xx}(0)$ ,  $2r_{xy}(l)$  y  $r_{yy}(0)$ . Dado que siempre es no negativa, el discriminante debe ser no positivo, es decir,

$$4[r_{xy}^2(l) - r_{xx}(0)r_{yy}(0)] \leq 0 \quad (14)$$

Por lo tanto, la correlación cruzada verifica que

$$|r_{xy}(l)| \leq \sqrt{r_{xx}(0)r_{yy}(0)} = \sqrt{E_x E_y} \quad (15)$$

En el caso especial de que  $y(n) = x(n)$ , (16) se reduce a

$$|r_{xx}(l)| \leq r_{xx}(0) = E_x \quad (16)$$

Esto significa que la auto correlación es una secuencia que alcanza su valor máximo para el retardo cero. Este resultado es consistente con el hecho de que una señal se adapta consigo misma para un retardo cero. En el caso de la correlación cruzada (15) constituye una cota superior de sus posibles valores.

Se observa que una o las dos secuencias implicadas en el cálculo de la correlación cruzada se escala, la forma de la correlación no cambia, simplemente se produce un escalado de la misma de acuerdo con el escalado realizado sobre las secuencias originales. Así, pues, el escalado carece de importancia, y es a menudo conveniente, en la práctica, normalizar las secuencias de auto correlación y correlación cruzada al rango entre -1 y 1.

### Correlación de secuencias periódicas

Es para señales de potencia.

Sean  $x(n)$  e  $y(n)$  dos señales de potencia. Su correlación cruzada se define como

$$r_{xy}(l) = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M x(n)y(n-l) \quad (17)$$

Si  $x(n)=y(n)$ , se tiene la definición de la correlación de una señal de potencia en concreto.

$$r_{xx}(l) = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M x(n)x(n-l) \quad (18)$$

En concreto, si  $x(n)$  e  $y(n)$  son dos secuencias periódicas, cada una de periodo  $N$ , los promedios sobre el intervalo infinito indicados en (17) y (18) son iguales a los promedios sobre un único intervalo, de manera que (17) y (18) se reducen a

$$r_{xy}(l) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)y(n-l) \quad (19)$$

Y

$$r_{xx}(l) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)x(n-l) \quad (20)$$

Está claro que  $r_{xy}(l)$  y  $r_{xx}(l)$  son secuencias de correlación periódicas con periodo  $N$ , el factor  $1/N$  puede considerarse un factor de escala.

### Cálculo de la correlación

Como ya se había indicado, el procedimiento para obtener la correlación entre dos secuencias  $x(n)$  e  $y(n)$  implica desplazar de una de las secuencias, por ejemplo  $x(n)$ , para obtener  $x(n-1)$ , multiplicar esta secuencia desplazada para obtener la secuencia producto  $y(n)x(n-1)$  y entonces sumar todos los valores de la secuencia producto para obtener  $r_{xy}(l)$ . Este procedimiento se repite para los distintos valores del retardo  $l$ . Con excepción de la operación de la operación de reflexión que se realiza en la convolución, las operaciones necesarias para el cálculo de la correlación son las mismas que las necesarias para el cálculo de la convolución.

El procedimiento para el cálculo de la convolución es directamente aplicable al cálculo de la correlación. Por lo tanto, si se refleja  $y(n)$ , y entonces se realiza la convolución entre  $x(n)$  con  $y(-n)$  se obtiene la correlación cruzada entre  $x(n)$  e  $y(n)$ . Esto es,

$$r_{xy}(l) = x(n) * y(-n) \Big|_{n=1} \quad (21)$$

Como consecuencia, el procedimiento descrito para el cálculo de la convolución se aplica directamente para el cálculo de la correlación.

Se describe ahora un algoritmo, fácil de programar, para el cálculo de la correlación cruzada de dos secuencias de duración finita  $x(n)$ ,  $0 \leq n \leq N-1$  y  $y(n)$ ,  $0 \leq n \leq M-1$ .

El algoritmo calcula  $r_{xy}(l)$  para retardos positivos. De acuerdo con  $r_{xy}(-l) = r_{yx}(l)$  los valores  $r_{xy}(l)$  para valores negativos del retardo se pueden obtener usando el mismo algoritmo que para valores positivos del retardo e intercambiamos los papeles de  $x(n)$  e  $y(n)$ .

Se observa que si  $M \leq N$ ,  $r_{xy}(l)$  puede calcularse mediante las relaciones

$$r_{xy}(l) = \begin{cases} \sum_{n=1}^{M-1+l} x(n)y(n-l), 0 \leq l \leq N-M \\ \sum_{n=1}^{N-1} x(n)y(n-l), N-M < l < N-1 \end{cases} \quad (22)$$

Por otra parte, si  $M > N$ , la correlación cruzada se obtiene según

$$r_{xy}(l) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)y(n-l), 0 \leq l \leq N-1 \quad (23)$$

Las fórmulas (22) y (23) pueden ser combinadas por un algoritmo.

Intercambiando los papeles de  $x(n)$  e  $y(n)$  y recalculando la correlación cruzada, se obtiene  $r_{xy}(l)$  correspondientes a valores negativos de retardo  $l$ . Para calcular la auto correlación  $r_{xx}(l)$ , se hace  $y(n) = x(n)$  y  $M = N$  en la ecuación (23). El cálculo de  $r_{xx}(l)$  se puede hacer mediante el mismo algoritmo para valores positivos del retardo solamente.

$$= r_{hh}(l) * r_{xx}(l) \quad (24)$$

## EJEMPLOS GRÁFICOS

Se puede graficar la correlación entre las dos variables a través de una gráfica de dos ejes (abscisas y ordenadas) cartesianos.

En el siguiente gráfico se observa la correlación entre potencia de motor de un automóvil y consumo en Litros por cada 100 Km. El  $r = 0.87$  (correlación positiva). (SPSS). Evidentemente a mayor potencia se observa mayor consumo de combustible. El valor de significación para ese  $r$  es de una  $p < 0.01$ . Esto quiere decir que la correlación entre potencia y consumo no es aleatoria<sup>9</sup>.

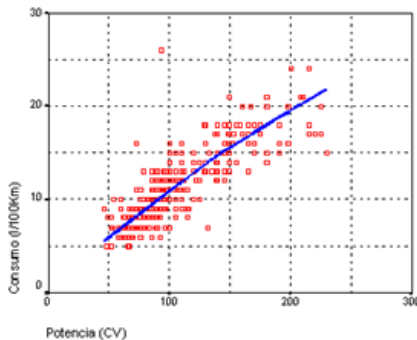


Figura 1. Correlación entre potencia y consumo de motor. Fuente: Autor

En el siguiente gráfico se encuentra la relación existente entre peso del automóvil en Kg. Y aceleración 0 a 100 Km. / hora en segundos. El  $r = -0.56$  con una  $p < 0.05$ . Esto significa que existe una correlación negativa significativa, entre peso del auto y respuesta de la aceleración. Automóviles más pesados presentan una respuesta más tardía y viceversa. (SPSS)

<sup>9</sup> Inc.The Math Works. MATLAB User's Guide.The Math Works,inc., 2019

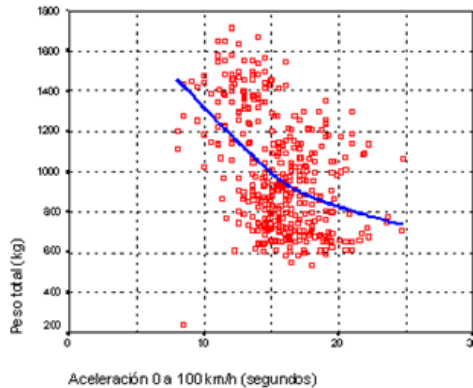


Figura 2. Correlación peso y aceleración. Fuente: Autor

## APLICACIONES

La correlación brinda diversas e importantes aplicaciones en distintos campos<sup>10</sup>.

En concreto, suponiendo que se tienen dos secuencias  $x(n)$  e  $y(n)$  que se desean comparar. En radar y sonar, por ejemplo,  $x(n)$  puede representar muestras de señal que se transmiten e  $y(n)$  muestras de señal que se reciben a la salida del conversor analógico – digital (A / D). Si existe un blanco en el espacio explorado por el radar o sonar la señal recibida  $y(n)$  es una señal retardada de la señal transmitida, reflejada por el blanco y corrompida por el ruido aditivo. Se puede representar la secuencia recibida como

$$y(n) = \alpha x(n - D) + w(n) \quad (25)$$

Donde  $\alpha$  es un factor de atenuación que contiene las pérdidas debidas al trayecto de ida y vuelta recorrido por la señal  $x(n)$ ,  $D$  es el retardo debido al trayecto de ida y vuelta y se supone que es un múltiplo entero del intervalo de muestreo, y  $w(n)$  representa el ruido aditivo captado por la antena y cualquier otra componente de ruido generada por los componentes electrónicos y los amplificadores del receptor. Por otra parte, si no existe ningún blanco en el espacio explorado por el radar o el sonar, la señal recibida constará únicamente de ruido.

Teniendo las dos secuencias,  $x(n)$ , que se denomina señal de referencia o señal transmitida e  $y(n)$ , la señal recibida, el problema radar o sonar consiste en determinar si existe algún blanco comparando  $x(n)$  con  $y(n)$  y si es así determinar el retardo en el tiempo  $D$  y a partir de él la distancia a la que se encuentra el blanco. En la práctica la señal  $x(n - D)$  se encuentra fuertemente corrompida por ruido, de manera que la observación visual de  $y(n)$  no permite determinar la presencia o ausencia de un blanco. La correlación proporciona una forma de extraer esta información de  $y(n)$ .

Otra de las áreas en la que la correlación se usa con frecuencia es la de las comunicaciones digitales. En comunicaciones digitales la información que se va a transmitir de un punto a otro se convierte a forma binaria, es decir se transforma en una secuencia de unos y ceros que es transmitida hacia el receptor. Para transmitir un 0 se puede enviar una secuencia  $x_0(n)$  para  $0 \leq n \leq L-1$  y para transmitir un 1 la secuencia  $x_1(n)$  para  $0 \leq n \leq L-1$ , donde  $L$  es un entero que indica el número de muestras en cada una de las dos secuencias. Muy a menudo, se selecciona  $x_1(n)$  como el valor negativo

<sup>10</sup> Yuan Naiming et al. "Detrended Partial-Cross-Correlation Analysis: A New Method for Analyzing Correlations in Complex System", Scientific reports, 1-7 (2015)



de  $x_0(n)$  La señal recibida por el receptor se puede presentar como

$$y(n) = x_i(n) + w(n) \quad i=0,1 \quad 0 \leq n \leq L-1$$

Donde, lo que se debe determinar es si  $x_0(n)$  o  $x_1(n)$  la señal contenida en  $y(n)$ , y  $w(n)$  representa el ruido aditivo y otras interferencias propias de cualquier sistema de comunicación. Otra vez parte del ruido tiene su origen en los distintos componentes del receptor. En cualquier caso, el receptor conoce las dos posibles secuencias transmitidas  $x_0(n)$  y  $x_1(n)$  y su tarea consiste en compararlas con la señal recibida  $y(n)$  para determinar cuál de las dos se parece más a ésta.

## RESULTADOS

Como el objetivo principal del artículo es observar el comportamiento de las señales de una forma cualitativa se emplea un entorno de simulación MATLAB en donde el código consiste en unos pasos en los cuales se preguntaran los datos iniciales en algunos casos y se crean unos archivos con códigos de distintos tipos de variables, que en su defecto tienen unas características estadísticas o matemáticas que el usuario podrá variar como por ejemplo la media, la varianza, los intervalos y el número de datos y luego se hallarán los parámetros para efectuar la correlación y auto correlación mediante distintos algoritmos y por último se llevará esto a un entorno GUI.



Figura 3. Entorno del programa. Fuente: Autor

### Variables aleatorias

En este submenú se elige el tipo de señal que se desea aplicar la auto correlación estadística o temporal y se determina el número de muestras. Y se puede observar la curva y espectro discreto característico de la señal predeterminada

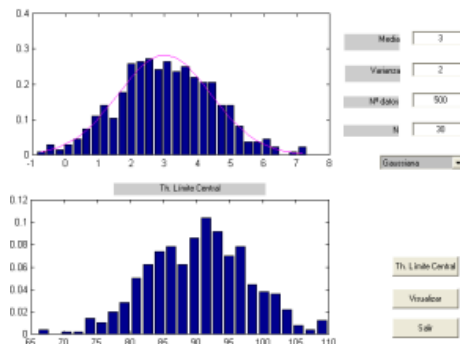


Figura 4. Submenú variable aleatorias. Fuente: Autor

### Auto correlación

En este submenú se calcula la auto correlación estadística y temporal de la señal predeterminada en el primer submenú de variables aleatorias.

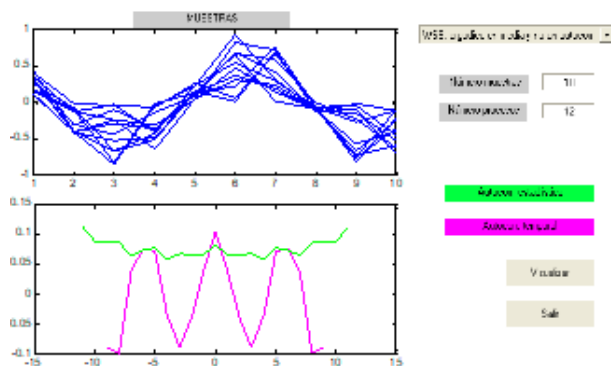


Figura 5. Autocorrelación. Fuente: Autor

### Correlación

En este submenú se calcula la correlación a partir de matrices o vectores que ingrese el usuario. Pretende además facilitar la relación entre el usuario y Matlab y ayuda a corroborar la fortaleza matemática utilizada, los comandos que se incluyeron son fáciles de manejar.

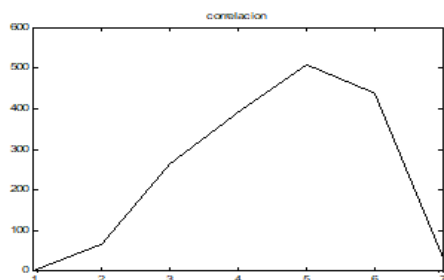


Figura 6. Correlación. Fuente: Autor

### CONCLUSIONES

En el desarrollo del artículo como del algoritmo, permitió evidenciar que en el ámbito de los sistemas y señales existen diferentes temas importantes a estudiar y a desarrollar como el caso de la correlación y la auto correlación. A partir de muestreos, señales y algoritmos, es posible recuperar y obtener información muy valiosa que permite dar aplicaciones específicas en recuperación de datos estadísticos, matemáticos y médicos.

Un aspecto importante de este artículo ha sido la caracterización de señales y sistemas. La correlación de señales discretas juega un papel muy importante en el procesamiento de señales, especialmente en aplicaciones relacionadas con las comunicaciones digitales. En este artículo se tuvieron en cuenta algunos parámetros estadísticos para el muestreo y obtención de las señales para tener una mejor aproximación a la ideal. Estos parámetros fueron utilizados para evaluar el ruido en las señales y de esta manera observar de una manera exacta el comportamiento de la señal. En el área de la salud, la correlación de señales es importante para corroborar las variables fisiológicas que puedan ser comparables.

## **BIBLIOGRAFÍA**

BANFI F y FERRINI G (2012) Wavelet correlación cruzada y análisis de fase de un voladizo libre sometido a excitación de banda. Beilstein J. Nanotechnol. 3, 294–300. doi: 10.3762 / bjnano.3.33

ELALI, T S. (2004). Discrete Systems and Digital Signal Processing with Matlab®. Boca Raton: CRC Press.  
MANOLAKIS D. (2013) "Applied digital signal processing", Edit Cambridge University Press

PODOBNIK B, JIANG Zhi-Qiang, ZHOU Wei-Xing y STANLEY H. E. (2011) Pruebas estadísticas para procesos de correlación cruzada de ley de poder. Phys. Rev. E 84 , 066118

PROAKIS J. (2018) "Tratamiento digital de señales", Edit Prentice hall

PROAKIS J, SALEHI M (2007) Digital Communications, Edición: 5, McGraw-Hill Education, ISBN-10: 0072957166; ISBN-13: 978-0072957167

PROAKIS, JG and MANOLAKIS, DG (1996). Digital Signal processing. Principles, Algorithms and Applications. Third edition. Prentice Hall.

SMITH S W. (2002). Procesamiento de señal digital: una guía práctica para ingenieros y científicos ISBN 0-7506-7444-X Newnes.

SMITH. S W. (1997). The Scientist & Engineer's Guide to Digital Signal Processing, 1st Edition ISBN-13: 978-0966017632; ISBN-10: 0966017633

STEIN J, (2010)"Digital signal processing: A computer science Perspective", Edit Wiley

STEWART, R.W. and M.W. Hoffman. (1998) Digital Signal Processing, An "A" to "Z", BlueBox Multimedia.

WEEKS, M. (2007). Digital Signal Processing Using Matlab ® and Wavelets. Hingham (Boston): Infinity Science Press,

YUAN N. et al. (2015) "Detrended Partial-Cross-Correlation Analysis: A New Method for Analyzing Correlations in Complex System", Scientific reports, 1-7

## **BIODATA**

**Andrés HERNANDEZ MARULANDA:** Recibió el título de ingeniero electrónico en 2005 en La Universidad Pontificia Bolivariana y el grado de PhD en 2018 en la misma institución. Profesor de ingeniería en la Universidad San Buenaventura en Medellín y sus temas de interés son procesamiento de señales, modelado y simulación y métodos numéricos.

**Nelson ESCOBAR MORA:** Ingeniero Mecánico y Magister en Ingeniería, docente investigador con más de 15 años de experiencia en temas de Ingeniería Biomédica y en especial de educación ya que en la actualidad me desempeño desde 2009 como Coordinador Académico de la Especialización en Ingeniería Biomédica y de la Ruta de Formación en Bioingeniería de la Maestría en Ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana. Grupo de Investigaciones en Bioingeniería.

**Horderlin ROBLES VEGA:** Ingeniero en Control electrónico e instrumentación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá - Colombia, Especialista en Bioingeniería de Universidad Distrital, Magister en Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Paraná Argentina. Director de Investigaciones de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum de la ciudad de Montería Córdoba. Mis áreas de interés son: instrumentación electrónica y biomédica, sistemas de control, procesamiento de señales e imágenes biomédicas. Además, diseño digital con microcontroladores y PFGAs. Grupo de Investigación GNOCIX.

## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 201-215  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

### Perspectivas de la política de contabilidad ambiental, sistemas de información administrativa y financiera

*Perspective of Environmental Accounting Policy, Administrative and Financial Information Systems*

**Ana CANTILLO OROZCO**

<https://orcid.org/0000-0002-7832-2726>

[ascantillo@utb.edu.co](mailto:ascantillo@utb.edu.co)

Universidad Tecnológica de Bolívar, Colombia

**Isabel Cristina RINCÓN RODRÍGUEZ**

<https://orcid.org/0000-0002-7348-2341>

[isabel.rincon@asturias.edu.co](mailto:isabel.rincon@asturias.edu.co)

Corporación Universitaria de Asturias, Colombia

**Omaira BERNAL PAYARES**

<https://orcid.org/0000-0002-7176-6957>

[Omaira.bernal@cumvirtual.edu.co](mailto:Omaira.bernal@cumvirtual.edu.co)

Universidad Rafael Núñez, Colombia

**Jorge E. CHAPARRO MEDINA**

<https://orcid.org/0000-0002-8148-9850>

[jchaparro@correo.uts.edu.co](mailto:jchaparro@correo.uts.edu.co)

Corporación Universitaria de Asturias, Unidades  
tecnológicas de Santander, Fundación Universitaria  
del Área andina, Colombia

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3907071>

#### RESUMEN

El objetivo del artículo es analizar desde las políticas públicas el proceso de contabilidad medioambiental, como sistema de gestión de información administrativa y financiera. Metodológicamente, se basó en el paradigma positivista, bajo un estudio cuantitativo y diseño de campo. La población estuvo conformada por Contadores Públicos y Gerentes de Gestión Ambiental, que se desempeñan en empresas agroindustriales de palma de aceite. Diseñándose un instrumento con escala tipo Likert. Se concluye que el indicador fortalecido es el de Unidad de Medida, como el medio efectivo para el intercambio de bienes y servicios, y para registrar los efectos económicos de los eventos que afectan a la organización.

**Palabras clave:** Políticas, Partidas Contables, Gestión Ambiental, Financieros

#### ABSTRACT

The objective of the article is to analyze from the public policies the environmental accounting process, as a management system for administrative and financial information. Methodologically, it was based on the positivist paradigm, under a quantitative study and field design. The population was made up of Public Accountants and Environmental Management Managers, who work in agro-industrial oil palm companies. Design an instrument with a Likert-type scale. It is concluded that the strengthened indicator is the Unit of Measure, as the effective means of exchanging goods and services, and to record the economic effects of events that affect the organization.

**Keywords:** Policies, Split accounting, environmental management, financial.

Recibido: 20-04-2020 • Aceptado: 23-06-2020



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## INTRODUCCIÓN

La deficiente gestión del ambiente es un problema global; en este ámbito, los palmicultores y las plantas de beneficio, actores de la agroindustria de palma, no son ajenas a esta problemática de índole mundial, donde se culpa al cultivo de palma de secar los suelos y acabar con el agua y la fauna. En este sentido las empresas agroindustriales de palma de aceite están obligadas a considerar la relevancia de la información medio ambiental traducida a través de los activos biológicos y costos medioambientales en la contabilidad para la preservación del medio ambiente por las actividades que realiza en la fase agrícola que comprende el cultivo y beneficio.

Se considera que la Contabilidad medioambiental es un elemento esencial de la responsabilidad social en cualquier tipo de organización y como ciencia de la información empresarial busca satisfacer los requerimientos de todo tipo de usuarios. La defensa del medio ambiente es un tema de trascendencia para el gobierno, las empresas y la comunidad en general.

De acuerdo a los procesos de los últimos años, se hace manifiesto que, con la finalidad de evitar la degradación medioambiental y los daños al ecosistema, las empresas agroindustriales han venido desarrollando prácticas ambientalistas orientadas a la prevención de la contaminación, a la reducción de la emisión de sustancias contaminantes y al tratamiento de desechos; cada una de acuerdo con las características de sus procesos productivos.

Es aquí donde toma fuerza, la Resolución 70/1 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas en 2015, la cual establece 17 Objetivos Globales. No obstante, se destaca el Objetivo No. 9: orientado a “construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”, lo que plantea para Colombia unos enormes retos. Es importante destacar que una de las metas que compone este objetivo, consiste en mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, aumentando la eficiencia en el uso de los recursos y promoviendo una mayor adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.

Dentro de este marco, el sector agro-industrial de la palma de aceite es una industria que adquiere cada vez más relevancia por el impulso a la producción de aceites y grasas de consumo básico, así como productos terminados tales como combustibles, lubricantes, pinturas entre otros y materias primas industriales para otros procesos como alcoholes grasos emulsificantes, entre otros. En virtud de que el procesamiento industrial de aceites y grasas e industria oleo química, generan problemas y riesgos ambientales, que obligan a los empresarios a establecer acciones para mitigar los daños ambientales. En este contexto, la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha acentuado en la determinación un patrón para la contabilidad medioambiental, es así, que publicó un manual integrado al Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 (SCN-93), divulgado con el nombre de Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada, esta metodología intentaba crear un sistema de cuentas satélites, concebidas como representación contable subsidiaria que permite incorporar información adicional de tipo monetario o no monetario referente a actividades no mercantiles no contempladas por la contabilidad tradicional.

En este orden de ideas, la disciplina contable a través de la contabilidad ambiental, permitiría aplicar instrumentos, herramientas de información, control y marcos teóricos, para lograr un uso razonable de los recursos naturales y un esquema contable ambiental que, en el corto, mediano y largo plazo permita a las empresas seguir ofreciendo sus productos y al mismo tiempo mejorar el entorno sostenible de la misma con la preservación del medio ambiente.

Se subraya que la Ley 1314 del 2009 estableció que todas las personas naturales o jurídicas que preparan información financiera en el territorio colombiano deben hacerlo bajo esta ley; clasificándose en uno de los tres grupos, y aplicar el marco normativo, así: Grupo 1 NIIF, plenas (Decreto 2784 del 2012), Grupo 2 NIIF para pymes (decreto 3022 del 2013) y Grupo 3 NIIF para microempresas (Decreto 2706 del 2012). Dichas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standards), son estándares técnicos contables adoptadas por

el IASB, institución privada con sede en Londres.

En la actualidad, el estudio del aspecto ambiental, se ha hecho una necesidad estratégica en las empresas, lo que requiere de herramientas de información, control y evaluación, que estén a la vanguardia de las exigencias normativas locales, nacionales y mundiales; este requerimiento no puede satisfacerse con el modelo contable tradicional que normalmente no mide cuestiones ambientales a menos que tengan consecuencias financieras de interés suficiente para activar los criterios de reconocimiento y medición.

Dentro de este contexto la responsabilidad medioambiental e información financiera, requiere que todos los hechos y acciones relacionados con la siembra y extracción del aceite crudo y palmiste de la palma de aceite, se midan, cuantifique, incorporen en informes financieros ambientales y se analicen. Dentro de estas perspectivas, la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en su documento "La agricultura y el Desarrollo Económico (1997, p.1), define la agroindustria como la transformación de productos originarios de la agricultura, de la actividad forestal y de la pesca.

Es así, como la preocupación por el medio ambiente, la progresiva presión pública, las medidas reguladoras, ha hecho imprescindible por parte de las organizaciones implementar herramientas administrativas, financiera y contables para cumplir con los compromisos ambientales y sociales. Dentro de las Normas Internacionales de Contabilidad, hay que reconocer el aporte que ha realizado la International Standards Boards IASB en la búsqueda de concretar asuntos de racionalidad ecológica; ha publicado varias normas en las que se establecen las disposiciones y los principios contables pertinentes a la hora de abordar la regulación en materia ambiental.

Bajo este contexto, la contabilidad tiene diferentes aplicaciones, las cuales están determinadas por las descripciones y tipologías de la información que se contabiliza, en relación con un entorno y la interacción con el mismo. Por ello se habla de contabilidad pública, contabilidad administrativa, contabilidad financiera, contabilidad presupuestal, contabilidad de costos, contabilidad de gestión y también de contabilidad ambiental.

Atendiendo a estas consideraciones, la Contabilidad se advierte como una ciencia que posee postulados básicos, principios y métodos propios; todos unidos en un solo cuerpo doctrinario que enfrenta nuevos retos. Tal cual como lo señala PELLEGRINO (2001), es una ciencia; porque estudia y establece todas las reglas para anotar y registrar debidamente cualquier operación económica que tenga lugar dentro de una organización, para conocer en cualquier momento su estado y prevenir futuras contingencias. Por su parte, ZAÁ (2000), señala que la ciencia contable tiende a plantearse problemas que no pueden resolverse mediante antiguos paradigmas, principios y técnicas convencionales.

A efectos de esta investigación, se sigue la Contabilidad, bajo el esquema que es el conocimiento científico aplicado a los sistemas de registro y control de las operaciones efectuadas por una entidad, que modifican el patrimonio de la misma de manera cuantitativa y cualitativa, a fin de interpretar sus efectos, permitiendo así conocer los resultados de las operaciones y situación financiera de una organización.

Desde esta perspectiva, es posible que la cuantificación del capital natural, por sus características subjetivas, sea de difícil medición. Sin embargo, la Contabilidad como disciplina transversa a las ciencias sociales, tiene un papel preponderante al insertar ciertas metodologías para cuantificar los costos y valorar aspectos ambientales. Por tanto, la Contabilidad hace posible que la información financiera de las organizaciones responda a pautas comunes y que estas midieran sus resultados de manera un tanto más ejemplar, al tratar de proporcionar confiabilidad.

En este orden de ideas, la investigación está orientada a analizar el proceso de contabilidad medioambiental, como sistema de gestión de información administrativa y financiera, en el sector agroindustrial de la palma de aceite del municipio de María la Baja – departamento de Bolívar, Colombia."

## **CONTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

Sin duda, la evolución de la contabilidad tiende a dar respuesta a las necesidades de los diferentes usuarios. El carácter financiero de las cifras contables y su imagen de objetividad en la sociedad, así, como el poder en reducir actividades y procesos económicos muy diversos a números, la hace un instrumento de comparación, al cual recurren los diferentes agentes económicos para justificar la racionalidad de las decisiones adoptadas. En este sentido, FIERRO (2015), define la contabilidad ,como un proceso que elabora informacion de las empresa de comercio, produccio y de servicio. Existen cinco grandes tipos de contabilidad: Contabilidad financiera, Contabilidad Fiscal, Contabilidad gerencial, Contabilidad científica y Contabilidad ambiental.

La contabilidad ambiental tiene su nacimiento en la gran necesidad referida a la forma de cuantificar, registrar e informar los daños que son causados al medioambiente y las acciones preventivas o correctivas que son necesarias para evitar dichos daños; por ello la búsqueda de soluciones exige a las empresas, instituciones, gobiernos y sociedades que se apropien del conocimiento de esta problemática.

Cualquier daño ambiental que sea generado por la fuerza de la naturaleza o por el ser humano, que repercute notablemente a los diversos ecosistemas. El daño que el ser humano hace al medio ambiente se puede evitar por el mismo y con la utilización de acciones de prevención, mitigación, restauración y correctivas.

La contabilidad medioambiental se ha convertido en una tendencia global que tiene una responsabilidad socio-ambiental, que involucra a los individuos, países, Gobiernos, empresas y diversos organismos no gubernamentales que han buscado muchas soluciones de carácter científicas, jurídicas, sociales y políticas. La realización de diversos estudios analíticos, normativos, normativos, acuerdos, protocolos, mecanismos participativos y de colaboración, sistemas tecnológicos, técnicos administrativos, contables y financieros, entre otros; por ello en seguimiento los países y los actores que están involucrado deben asumir el gran compromiso y reto de tener responsabilidades medio ambiental.

Por ello, la Contabilidad se convierte en una herramienta de gran utilidad que contribuye a la necesidad de cuantificar, registrar, informar respecto recursos naturales, financieros, humanos, técnicos, de servicios, de comunicación, así como, de costos y pasivos, en relación con el medio ambiente.

El campo del ejercicio profesional del contador público y su práctica, ha cambiado en relación con su responsabilidad social en cuestiones ambientales, ya sea por iniciativa propia, por presión social o porque la legislación contable así lo dispone. El desafío de contribuir a la sostenibilidad del patrimonio, conduce a pensar en la necesidad de un modelo contable que permita la inclusión de todos los recursos e impactos socio-ambientales que afectan y/o causan las organizaciones, se entra en Contabilidad Ambiental, la cual es definida por Bravo (2006) como el reconocimiento y revelación de los efectos medioambientales negativos en la práctica contable tradicional, identificando de manera separada los costos e ingresos afines al medio ambiente.

Según, LUDEVID (1999) señala que la contabilidad ambiental es la generación, análisis y utilización de información financiera y no financiera destinada a integrar las políticas económica y ambiental de la empresa y construir una empresa sostenible.

Tomando como base los planteamientos expuestos por Fernández ( 2003) en cuanto a la conceptualización de la contabilidad ambiental , esta se entiende a partir de las relaciones de una entidad y su medio ambiente ,lo cual supone diferenciar en la macro y la microcontabilidad. En este sentido, Mejia ( 2010), señala que la contabilidad debe comprometerse con el desarrollo sostenible, en lo social, ambiental y económico.

Para Fundacion Fòrum Ambiental (1999) la contabilidad ambiental se puede definir como la generación, análisis y utilización de información financiera y no financiera destinada a integrar las políticas económica y



ambiental de la empresa y construir una empresa sostenible. Entendida como el conjunto de sistemas e instrumentos para útiles para medir, evaluar y comunicar la actuación ambiental de la empresa

Para Garrido, citado por, SALAS ( 2015)

La contabilidad ambiental, abarca todo el conjunto de sistemas e instrumentos que sirven para medir, evaluar y comunicar las actuaciones ambientales de las organizaciones. En consecuencia todos los datos expresados en unidades físicas, monetarias o económicas son reflejados, traducidos e interpretados gracias a los estados financieros , que son el medio para que la información ambiental sea precisa o claramente definida, fiable, mensurable y verificable, oportuna y relevante, representativa de la actuación ambiental de la empresa, transparente y reproducible, adecuada (en tipo, calidad y cantidad) al uso que se le quiere dar en la empresa, procurando que la influencia subjetiva sea la menor posible.(p.104).

En este orden de ideas, el planeta tierra y el medio ambiente donde vivimos constan de diferentes recursos naturales con los cuales los seres humanos han subsistido desde su creación y en la actualidad dichos recursos son limitados y pueden estar en riesgo para las futuras generaciones para , SALAH EL SERAFY ( 2002), la contabilidad verde, a menudo llamada «Contabilidad medioambiental», se ha dirigido tanto a los recursos naturales como a la polución, esta hace referencia a la forma básica y más directa de compilar Indicadores del cambio medioambiental expresados en unidades físicas o como Índices basados en unidades físicas.

Se destaca que la contabilidad, al igual que otras disciplinas científicas, no puede permanecer al margen de la problemática ambiental, pues debe contribuir a su estudio y solución, lo cual significa, en esencia, una participación activa en el contexto del desarrollo sostenible. La modernización contable constituye un instrumento analítico para la toma de decisiones en cualquier ámbito y situación, por lo cual puede ser de utilidad en el campo ambiental.

De la misma complejidad de la valoración de los recursos, se desprende la dificultad en adoptar el paradigma contable de la partida doble para ejecutar la llamada Contabilidad Ambiental, lo que compromete al establecimiento de un nuevo paradigma contable. De hecho, la importancia de la partida doble ha quedado demostrada en su misma historia y trascendencia, por consiguiente, un enfoque diferente no significa una revaluación, ni poner en entredicho su funcionalidad, como tampoco es la razón contradecir las costumbres y las normas contables que rigen la información de la actividad económica nacional, lo importante es complementar los sistemas de información para acceder a la evaluación del desarrollo sostenible.

En este sentido, la continua emisión de gases a la atmósfera por la industria ha generado el efecto invernadero, así como alteraciones climáticas en todo el mundo; contaminación de mares y ríos por el vertimiento de petróleo y desechos químicos, ha deteriorado la vida de especies y la calidad de vida de los seres humanos. La explotación de gases, petróleo y carbón contamina tanto los terrenos como el aire y el vertimiento desechos, residuos, entre otros, son efectos de la industria en el medioambiente.

Los anteriores efectos pueden considerarse en sentido general como las cuestiones medioambientales por los cuales la contabilidad ambiental deberá responder; las empresas deberán disminuir dichos efectos ambientales, ya sea por iniciativas de gestión para lograr proyección, por contribuir a la preservación y conservación del medioambiente, sencillamente, porque así lo requiere la regulación. Bajo las consideraciones anteriores, en la Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992, la cual tuvo como resolución un acuerdo que se conoce como la Agenda 21 y es a partir de los compromisos adquiridos por las naciones participantes en esta cumbre que se desliga el surgimiento de las prácticas de contabilidad ambiental. Dentro de este marco, nace la propuesta de cuentas ambientales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se materializaría a través de un Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental Integrada (SEEA).

Desde esta perspectiva, según lo señalan BARRAZA Y GÓMEZ (2005), la concepción de contabilidad ambiental implícita en la propuesta de la ONU se orienta hacia un instrumento que a través de la representación de las relaciones del desarrollo con el medio ambiente se configure para diseñar políticas gubernamentales de tipo económico, así como ambiental, esta, en su aspecto macroeconómico, considera

cuentas monetarias que incluyen información como gastos, costos ambientales y cuentas físicas que informan acerca de las características de los recursos naturales, también, su uso.

Lo realmente significativo con la contabilidad ambiental, es hacer coherente el origen del valor de cada recurso, su determinación y registro contable, para una correcta evaluación de la sostenibilidad ambiental en contexto con el desarrollo nacional. La incorporación de la problemática ambiental a la investigación contable según LLUL (2001), data aproximadamente de mediados de los años 80, por lo cual se encuentra en un grado de desarrollo incipiente.

Al respecto, la contabilidad ambiental implica el cambio de paradigmas, tanto en el origen de los valores como en la dinámica de registro, en coherencia con su propósito contable y con el origen del valor de los recursos de la naturaleza, y sin pretender refir con la costumbre contable establecida, sino construir un complemento a los sistemas contables tradicionales, en busca de una verdadera integralidad en la información contable.

Como se ha señalado, en la Cumbre de Río (1999), quedó planteado el compromiso de incorporar la contabilidad ambiental en las cuentas nacionales. Lo ideal, es contar con la estructura de un subsistema de contabilidad ambiental, como elemento constitutivo de un sistema integral de contabilidad nacional, independiente en su operación, valoración y registro, interrelacionado con las cuentas nacionales y con la contabilidad o balance social por medio de indicadores bien definidos y diseñados objetivamente, según los propósitos de evaluación.

Las organizaciones deben garantizar datos que faciliten la valoración, evaluación y control ambiental, porque buena parte de las condiciones ambientales depende de la eficiencia en el manejo ambiental del sector productivo, por ser este el mayor contaminador al utilizar la naturaleza como fuente de materiales e insumos y destino de sus desechos. En consecuencia, estas deben clasificar las erogaciones vinculadas en el manejo ambiental, teniendo en cuenta los conceptos contables tradicionalmente establecidos y en orden a la necesidad de información de la contabilidad ambiental.

En efecto, como lo refiere LLUL (2001), los registros contables de la organización, al incorporar los hechos económicos con fundamento ambiental, facilitarán indicadores de gestión ambiental en la empresa, pero para asegurar procesos con calidad ambiental, se deben articular sistemas de control tanto en la ejecución de los planes de manejo como en los registros contables, soportados a través de una auditoría periódica, con la cual se evaluará el desempeño financiero y los resultados o impactos ambientales en la organización, responsables de los costos socio-ambientales.

ÁLVAEZ (2009), señala que la Contabilidad de Gestión Ambiental (CGA), constituye un instrumento valioso que ofrece información financiera y no financiera relacionada con el impacto ambiental. Siguiendo a Jasch (2002), expresa que es la herramienta principal para suministrar datos completos y exactos que se necesitan para tomar decisiones, al poner en práctica iniciativas ambientales maximizando ganancias a través de la eficiencia productiva.

Por su parte BLANCO (2006), indica que es aquella que tiene en cuenta el impacto del medio ambiente, de manera que dicho impacto es recogido en el ámbito de la contabilidad de costos y racionalizado en el ámbito de la contabilidad de gestión, permitiendo obtener una evaluación de la gestión ambiental de la empresa en función tanto de sus características cualitativas como cuantitativas.

En efecto, se podría decir que la contabilidad ambiental, es el sistema que permite el reconocimiento, organización, valoración, registro de las condiciones y cambios en el capital natural, donde se vinculan indicadores de evaluación de la sostenibilidad ambiental, además se establecen sistemas de información que faciliten el control y fiscalización de las acciones que afectan la condición de la naturaleza, donde su objeto es la estimación, registro e información de los activos, pasivos, gastos, ingresos, contingencias y provisiones ambientales.

La contaduría como área de conocimiento se ha visto inmersa en temas y problemáticas que involucran al medio ambiente, con el desarrollo de una línea de investigación y de contribución a las soluciones desde su ámbito financiero y se convierte además, en la autoridad profesional en el entorno económico y monetario,

con la obtención, aplicación y proyección de los recursos financieros de los sujetos de la economía teniendo como áreas principales contabilidad, contraloría, tesorería, auditoría, finanzas y fiscal, a través de la planeación, el análisis, la crítica, la interpretación y la investigación (PLAN 2012, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO).

## **ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) Y LA CONTABILIDAD AMBIENTAL**

Con la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); se organizó el grupo intergubernamental conformada por expertos en normas Internacionales de Contabilidad y presentación de informes (ISAR), quienes son los encargados a los asuntos relacionados con la Contabilidad Ambiental; las directrices establecidas han presentado el método más adecuados para la contabilidad financiero y la presentación de informes, cuyo objetivo es prestar asistencia a las empresas, a los órganos normativos y a las organizaciones con actividades de normalización sobre el método que se considera más adecuado para incluir en los estados financieros y en las notas conexas la contabilidad de las operaciones y los acontecimientos relacionados con el medioambiente.

Ahora bien, dentro de este tipo de contabilidad se pueden generar partidas contables para registrar los hechos económicos relacionados con el ambiente: activos ambientales, pasivos ambientales, costos ambientales y provisiones. Desde esta perspectiva, se define en principio lo que representa un Activo, por lo cual, en concordancia a lo establecido por la IASB (2001), en el marco conceptual de las NIC's, un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos y que este es reconocido en el balance cuando es probable que se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad, y además el activo debe tener un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad.

Por tanto, el reconocimiento de un activo se realizará en la medida que se adquieran los derechos a recibir los rendimientos futuros, por haber perfeccionado la transacción y permanecerá contabilizado mientras mantenga su capacidad de generación de estos rendimientos, tales como:

**Activos Ambientales:** de acuerdo a ABLÁN Y MÉNDEZ (2004), son bienes e inversiones, propiedades compradas o realizadas por la empresa, con la finalidad de preservar y proteger el ambiente y minimizar los daños que se le pudieran ocasionar. Por su parte Scavone (2002), expresa que los activos más obvios en esta sección son los contenedores de recolección, sistemas de recuperación de calor, filtros para la contaminación de aire, inversión para disminución de ruido, plantas de tratamiento de aguas residuales y añade que estos dependerán del tipo de negocio y de la gestión ambiental.

Para LULL (2001), los activos ambientales son inversiones empresariales susceptibles de generar beneficios medioambientales futuros, en el cual se trasladan al activo aquellos costos destinados a servir de forma duradera a la actividad de la empresa y que reducen o impiden la contaminación del ambiente y podrían ocasionar futuras operaciones de la empresa.

De acuerdo a RUEDA, ARAGÓN Y MARTÍN (2006), los activos ambientales representan los bienes que sirven para la preservación, protección y recuperación ambiental. Esto incluye inventarios, propiedad planta y equipo y diferidos, que deben ser presentados por aparte de las demás categorías de activo para permitir una mejor evaluación de las labores ambientales. ABLAN Y MÉNDEZ (2004), también señalan que dentro de este grupo, se encuentran: inventarios de materiales, propiedad, planta y equipo y los cargos diferidos.

**Inventarios,** se considera lo planteado por SCAVONNE (2002), al señalar que es todo el material comprado, el cual todavía no haya sido procesado, todo el producto en proceso y productos terminados, que todavía no hayan sido vendidos y que se registran en un procedimiento de almacenaje. Bajo estos parámetros, pero en lo que se refiere a inventarios de materiales, desde el punto de vista ambiental, son aquellos que se usen en el proceso productivo para minimizar la emisión de residuos, por ejemplo, en el caso de la elaboración de detergentes biodegradables.

MANTILLA (2006), señala que estos tipos de inventarios, son un valor patrimonial de los recursos como activos naturales de una sociedad o valor de existencia del recurso; donde el valor de los inventarios de cada recurso lo conforman los registros en cuentas definidas de acuerdo a los beneficios generados y de conformidad con las normas de clasificación; teniendo presente que los registros se alteran por cambio en los volúmenes o extensiones que constituyen los inventarios y por alteración de las características de los recursos.

**Inversiones**, hay autores que incluyen en las cuentas ambientales, este rubro, los cuales son negocios que realizan las organizaciones en materia ambiental, uno de ellos, MANTILLA (2006), señala que en las cuentas de inversión se registraran las erogaciones que constituyen un componente físico en el desarrollo de la política ambiental.

Por otro lado, también el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en España (ICAC; 2002), aprobó las normas para el reconocimiento, valoración e información de los aspectos medioambientales en las cuentas anuales y en ellas, entre otros aspectos establece, que dentro de la situación fiscal de las empresas, se incluirá información sobre las deducciones por inversión en medidas para reducir el impacto medioambiental. Además, debe presentarse información sobre medio ambiente, en el que de forma precisa se debe indicar, los efectos operativos y financieros que se prevén como consecuencia de las inversiones futuras de naturaleza medioambiental.

**Propiedad, Planta y Equipo**, también conocida como Activos Fijos, es otro rubro a considerar, según SCAVONNE (2002), se espera que sirvan a la compañía por un tiempo más largo que un ejercicio contable, siendo su propósito, a la fecha de corte, dar soporte en forma permanente a las operaciones de la compañía, por ello se extiende la vida útil a través de varios años y comprenden, entre otros: propiedad construida y no construida; instalaciones, máquinas; herramientas, equipamiento industrial y de negocios; activos intangibles tales como patentes, licencias y otros derechos; activos financieros tales como inversiones, bonos, entre otros.

Agrega la autora, que para determinar este tipo de activos vinculados al ambiente, es necesario que todos los activos sean valorados independientemente y de manera conjunta entre el gerente ambiental y los miembros del equipo de protección al medio ambiente, porque desde el punto de vista contable no se distingue entre activos fijos usados para los tratamientos de emisión, las tecnologías más limpias u otras propiedades del negocio.

Por su parte, para ABLAN Y MÉNDEZ (2004), estos activos son aquellos que se emplean en la reducción de impactos ambientales producidos por las empresas. Como lo refiere, Ariza (2000), la empresa que quiera disminuir su impacto ambiental en la actividad en su mayoría, deberá acceder a nuevas tecnologías e implementar procesos descontaminadores; por lo que requerirá invertir en patentes, equipos, entrenamiento y capacitación de su personal, lo que formará parte de sus activos.

Asimismo, BLANCO (2006), señala la existencia de la Propiedad Industrial Medioambiental, en la cual se registrarán la adquisición o creación por la propia empresa de procesos tecnológicos favorables al entorno.

También, aparece en el tema ambiental otro rubro contable que es considerado por ABLAN Y MÉNDEZ (2004), como son los Cargos diferidos, los cuales están representados por gastos de investigación y desarrollo en tecnología limpia, así como los gastos de reforestación.

**Pasivos Ambientales**: en lo referente a los Pasivos según QUINTERO Y ANIDO (2004), representan una obligación presente de la empresa originada por sucesos pasados, al vencimiento de esta y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos, este rubro se reconoce como auténtico pasivo, porque su cuantía ha sido estimada de forma fiable. Añaden los autores, que los pasivos asociados a la protección ambiental corresponden al tipo de pasivos bajo incertidumbre.

Siguiendo a Scavonne (2002), los pasivos ambientales ayudan a hacer que el agente causante del daño ambiental (el que contamina) paga por reparar el daño que ha causado. Las regulaciones ambientales y las normas contables, con respecto a los pasivos, difieren de nación a nación. PARA ZAÁ (1998), la inversión que se realiza con fines de mejorar el ambiente es una obligación de la empresa, por lo tanto, cualquier

inversión en tecnología de punta o en investigaciones con el propósito de minimizar o evitar daños al ambiente contribuye a cancelar los pasivos ambientales.

Para, Rueda (2002), estos pasivos constituyen los beneficios económicos que serán sacrificados en función de la obligación contraída frente a terceros para la preservación y protección del medio ambiente. Se originan por gastos relativos al medio ambiente del período actual o anterior, adquisiciones de bienes permanentes o existencia de riesgos que estos gastos lleguen a efectuarse.

**Pasivo Cierto**, en cuanto a materia ambiental, añade LULL (2001), que el pasivo se registra si se tiene la seguridad que en el futuro se debe responder a una determinada responsabilidad de naturaleza medioambiental, y su vencimiento e importe son incuestionables. Por tanto, cuando se tiene una deuda real cierta de carácter ambiental en la que no existe incertidumbre alguna en cuanto a su importe o fecha de pago, tal obligación deberá reconocerse igual que el resto de pasivos frente a terceros, razón por la cual, la empresa tiene un compromiso actual cierto ocasionado por hechos pasados y que generará un flujo de salida de recursos cuyo importe y fecha son indudables.

**Pasivo Contingente**, es una obligación solamente posible (menos que probable) generada por sucesos pasados, que será o no confirmada según ocurran o no acontecimientos futuros que están fuera del control de la empresa, donde su importe no pueda ser determinado de una manera fiable, siendo lo más recomendable que aparezcan en las notas a los estados financieros.

Al respecto, SCAVONNE (2002), señala que entre los pasivos contingentes que pueden surgir por la actividad de una empresa, se pueden mencionar: (a) contaminación de las capas de agua subterráneas (trabajar con sustancias que contienen solvente); (b) contaminación de la superficie del agua (derrames o transporte peligroso); (c) emisiones al aire (liberación repentina debido a una rotura del equipamiento de tratamiento de la contaminación); (d) emisión de energía (emisiones radioactivas); y (e) contaminación del suelo (agua contaminada por omisión de protección de depresiones y tanques colectores).

**Provisiones:** según ABLAN Y MÉNDEZ (2004), estas partidas son consideradas un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Para, TÚA (2001), desde el punto de vista ambiental, la empresa deberá dotar una provisión por este concepto cuando: (a) esté obligada, por ley o contrato, a prevenir, reducir o reparar daños al ambiente; (b) se encuentre frente a una obligación asumida, donde tenga el compromiso de prevenir, reducir o reparar un daño ambiental; c) cuando su política, objetivo, práctica del sector, así como las expectativas públicas imponen a la dirección la necesidad de utilizar esta cuenta; y d) cuando la empresa ha comunicado que tal provisión prevendrá, reducirá o reparará un daño al ambiente.

Para Berthelot, al igual que QUINTERO Y ANIDO (2004), las provisiones se requieren para reconocer el pasivo de futuras re-movilizaciones y costos de restauración del sitio, cuando la probabilidad de su ocurrencia sea establecida como resultado de una ley ambiental o porque la empresa ha establecido una política para ello.

Asimismo, SCAVONNE (2002), refiere que las provisiones son un instrumento clásico para anclar un esquema de protección de riesgo de la empresa en el balance y deben estar formada por pasivos contingentes y pérdidas potenciales latentes de las transacciones de negocio. La función de las provisiones es considerar y anticipar los gastos futuros, así como las obligaciones para ayudar a las compañías a protegerse a sí misma contra los riesgos contingentes.

En cuanto, a las provisiones por gastos que deben ser admitidas bajo leyes, por mantenimiento y reparaciones diferidos, por postergación de la remoción del material de excavación, así como provisiones para diferir la remoción de la sobrecarga en minería y limpiar los sitios contaminados, deben generalmente no considerarse como pasivos conforme con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Sin embargo, estas provisiones, constituyen obligaciones internas que no conllevan ningún pasivo directo con terceras personas.

**Provisión para remover y reciclar los desechos**, añade SCAVONNE (2002), que de existir una reserva en el balance con fecha límite de cumplimiento, que conlleve una obligación por remoción de desechos y

reciclado, los cuales surgen en intervalos periódicos, esto debe ser considerado para la creación de este tipo de provisión. En efecto, según GRAY Y BEBBINGTON (2006), la administración de desechos y las metas de reciclado probablemente requieren la provisión estable del tratamiento de los desechos y de las facilidades de disposición.

Por otro lado, refiere que existen tres (3) modalidades para contabilizar los desechos. La primera, consiste en reconocer los costos totales actuales y potenciales de la administración de desechos a cargo de la empresa, por lo cual procede a identificarlos, de acuerdo a la actividad o sitio, a fin de ajustarlos. En la segunda, se establece un sistema de registro y comunicación de información que contiene las cantidades físicas de desechos, bajo este esquema se registra la totalidad de los desechos, con la finalidad de consolidar las cuentas para su control y reducción.

Y en la tercera modalidad, se realiza una lista de verificación de desechos, donde se hace una revisión inicial, para detectar responsabilidades administrativas, con la finalidad de minimizar y administrar los desechos, para posteriormente realizar reportes internos y externos que aseguren la consecución de las políticas de desechos. Para ello, se cargan todos los costos por administración de desechos que sean identificables (disposición, seguros, obtención de permisos, procedimientos de emergencia, vertimientos, entre otros), a través del sistema de contabilidad, cuya meta principal es asignar en cuanto fuera posible una alta proporción de los costos organizacionales.

## **METODOLOGÍA DE ESTUDIO**

La investigación descriptiva, expone características de determinada población o de determinado fenómeno, pudiendo también establecer correlaciones entre variables y definir su naturaleza (VERGARA, 2014), en esta perspectiva la presente investigación se ubicó como descriptiva, pues el objetivo fue medir y describir la información, que se recabó sobre la contabilidad medioambiental como sistema de gestión de información administrativa y financiera y el desarrollo sostenible en empresas agroindustriales como herramientas gerenciales.

Para, HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAPTISTA (2004), los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren. Esta investigación fue correlacional, porque se determinó como se relacionan las variables: contabilidad medioambiental y el desarrollo sostenible en empresas agroindustriales, por lo cual se generaron como herramienta gerencial, lineamientos estratégicos orientados a la solución de problemas contables.

En la investigación presentada, los datos fueron recolectados de primera fuente por el investigador, en este caso de las empresas agroindustriales e extracción de palma de aceite, en el municipio María la Baja, donde se produjo el problema estudiado, por lo cual se obtuvo toda la información directamente de los informantes en el propio sitio donde se estaban dando los hechos.

Por otra parte, se constituyó la población, en primer lugar a los Contadores Públicos encargados de llevar los aspectos contables de estas empresas además se consultó a los Administradores o encargados de la Gestión del Ambiente de estas organizaciones. Para esta investigación los instrumentos de medición fueron formulados con base a las teorías que sustentan la investigación, así como en función de las variables a medir Contabilidad medioambiental.

Se construyó un cuestionario, constituido por 40 ítems para la variable, Contabilidad medioambiental, dirigido a los financieros y contadores. Para efectos de esta investigación, la confiabilidad se enfocó como el grado de homogeneidad de los ítems del instrumento en relación con la característica que pretendía medir. Al respecto, la confiabilidad calculada para el instrumento con respecto a la variable Contabilidad medioambiental, obtuvo  $\alpha = 0.92$

En los resultados se presentaron en tablas, y se procedió a la construcción de los gráficos respectivos por dimensión y variables, donde aparecen de manera explícita los resultados de la investigación.

## RESULTADOS

Gráfico 1. Contabilidad medioambiental



Fuente: Elaboración Propia (2018)

Atendiendo a los resultados arrojados, en los Principios de Contabilidad medioambiental, los contadores, se rigen por a) Supuestos derivados del ambiente económico; b) Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones de la entidad y los eventos económicos que la afectan; y c) Principios generales que debe reunir la información.

En este sentido, al considerar el gráfico 1, es importante acotar que en cuanto a los supuestos derivados del ambiente económico, el indicador más fortalecido es el de Unidad de Medida, pues el dinero es el común denominador de la actividad económica. Por lo cual, la unidad monetaria es el medio más efectivo para expresar, ante las partes, los intercambios de bienes y servicios, así como los efectos económicos de los eventos que afectan a la entidad.

Referente, a los Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones de la entidad y los eventos económicos que la afectan, el indicador Valor Histórico no está siendo considerado por los contadores, pues las cifras no se están modificando al aplicar métodos de ajuste aprobados por la CTCP (2014), a través de los Principios de Contabilidad y Las NIIF, que en forma sistemática preserven la imparcialidad y objetividad de la información contable.

Además, no se observa el indicador Período Contable, referido a que las erogaciones de dinero realizadas por algunas de estas organizaciones, no son identificadas con el ingreso que originaron, por tanto, no se puede visualizar lo correspondiente a un período en relación con otro, lo que trae como consecuencia que al momento de efectuar el Estado de Resultados de un ejercicio económico, no se indique el monto correcto de la pérdida o utilidad.

Por otra parte, en relación a los Principios generales que debe reunir la información, el indicador Importancia Relativa, no es contemplado por algunas de las organizaciones en las partidas contables, pues un cambio en la presentación, valuación, descripción o cualquiera de sus elementos, puede modificar la decisión de los interesados en la información contable.

Asimismo, los indicadores Objetividad y Comparabilidad salen menos consolidados. Por lo cual, en primer lugar, no están siendo valorados los rubros contables incorporados en los estados financieros pues lo más recomendable es poseer un valor que pueda ser medido con confiabilidad. Y, en segundo término, no perciben que la información contable debe ser obtenida mediante la aplicación de los mismos principios de cuantificación y al realizar una comparación, se puede conocer su evolución y a través de la comparación con otras entidades conocer su posición en el mercado.

En efecto, se puede deducir que en términos generales las organizaciones palmicultores de Marial abaja, se apegan a los Principios de Contabilidad medioambiental, los cuales han sido establecidos para presentar y valorar la información contable en Colombia.

## CONCLUSIONES

Sobre la base de las ideas expuestas, se planteó como objetivo describir el proceso de contabilidad medioambiental, como sistema de gestión de información administrativa y financiera. sustentando que se rige por a) Supuestos derivados del ambiente económico; b) Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones de la entidad y los eventos económicos que la afectan; y c) Principios generales que debe reunir la información. En cuanto, a los Supuestos derivados del ambiente económico, el indicador más fortalecido es el de Unidad de Medida, como el medio más efectivo para el intercambio de bienes y servicios, y para registrar los efectos económicos de los eventos que afectan a la organización.

Referente, al principio que establecen la base para cuantificar las operaciones de la entidad y los eventos económicos que la afectan, el indicador Valor Histórico no está siendo considerado por las algunas organizaciones de siembras de palma, por ello las cifras presentadas en los estados financieros, no preservan la imparcialidad y objetividad en la información contable. Además, no observan el indicador Período Contable, pues las erogaciones de dinero realizadas por algunas empresas extractivas, no son identificadas con el ingreso que originaron, por lo cual no se puede visualizar lo correspondiente a un período en relación con otro.

Por otra parte, en correspondencia a los Principios generales que debe reunir la información, el indicador Importancia Relativa, no es contemplado por algunas empresas extractivas, pues cualquier aspecto que ocurra en una partida contable, puede modificar la decisión de los interesados en la información contable. También, los indicadores Objetividad y Comparabilidad no están consolidados, por lo cual, no están siendo valorados los rubros contables incorporados en los estados financieros, además no aplican los mismos principios de cuantificación, imposibilitando conocer su evolución, y a través de la comparación con otras entidades su posición en el mercado.

## BIBLIOGRAFÍA

ALCALDÍA DE MARIA LA BAJA. (2012). Plan Integral Unico del municipio de María la Baja, Bolívar.

Obtenido de [http://www.marialabaja-](http://www.marialabaja-bolivar.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Integral%20%C3%9Anico%202012.pdf)

[bolivar.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Integral%20%C3%9Anico%202012.pdf](http://www.marialabaja-bolivar.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Integral%20%C3%9Anico%202012.pdf)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AECA). Principios de contabilidad de gestión. Contabilidad de gestión medioambiental. Documento 13. Serie Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid: AECA, 1996.

ABLAN, N Y MÉNDEZ, E (2004). Contabilidad y Ambiente. Una disciplina y un campo para el conocimiento y la acción. Revista Actualidad Contable Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad de Los Andes (ULA). Año 7 No. 8. Enero-Junio. Venezuela.

AMAT J (2000). Control de Gestión, una perspectiva de dirección. Quinta Edición. Ediciones Gestión 2000, S.A. Madrid. España.



BARRAZA F Y GÓMEZ M (2005). Aproximaciones a un concepto de contabilidad ambiental. Editorial Universidad Cooperativa de Colombia (EDUCC). Bogotá. Colombia.

BISCHOFFSHAUSEN W. (1996). Una visión general de la contabilidad ambiental. Revista Contaduría. Universidad de Antioquia. No. 29. Septiembre. Colombia.

BRAVO URRITIA, M. (25 de octubre de 2006). Obtenido de <http://www.teorema.com.mx/tendencias/contabilidad-ambiental-2/>

COSANO S Y ACOSTA T (2009). La gestión ambiental, herramienta para el replanteamiento estratégico de la empresa. Revista Académica Contribuciones a la Economía. Abril.

DANIELE A, FERNÁNDEZ S Y GORBACH L (2001). Conceptos sobre Contabilidad y Medioambiente: Referencias a un caso regional. Revista Anuario Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia – San Juan Bosco. Argentina.

FERNÁNDEZ CUESTAS, C. (2003). El concepto de la contabilidad ambiental y la normalización. AECA. Revista de la asociación Española de contabilidad y administración de empresas(64), 57.

FIERRO MATÍNEZ, Á. M. (2015). Contabilidad General con enfoque NIIF para pymes. Bogotá: ECOE Ediciones.

FRONTI L Y FERNÁNDEZ C (2007). EL Protocolo de Kyoto y los Costos Ambientales. Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, N° 1, Enero-Junio, p.p. 9-31.

GARCÍA SAMPER, M. A., García Guiliany, J., & Cabello Eras, J. (2017). Eficiencia en el uso de los recursos y producción más limpia (recp) para la competitividad del sector hotelero. Revista de Gestão Social e Ambiental; São Paulo Vol. 11, Iss. 2, (May/Aug 2017): 1-18. <https://search.proquest.com/openview/c34a02fb178ac36f05ff7448cd8023af/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031968>

GIL J (2001). Normas Internacionales de Contabilidad y Transferencias tecnológicas. Revista LEGIS de Contabilidad & Auditoría. No. 6. Abril-Junio. Colombia

GÓMEZ M. (2004). Avances de la contabilidad medioambiental empresarial: Evaluación y posturas críticas. Revista LEGIS de Contabilidad & Auditoría. No. 18. Abril-Junio. Colombia.

GRAY R Y BEBBINGTON J (2006). Contabilidad y Auditoría Ambiental. ECOE Ediciones. Segunda Edición. Colombia.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO, Roberto y BAPTISTA LUCIO, Pilar METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN McGraw-Hill Interamericana México, 2004

LLULL A (2001). Contabilidad medioambiental y desarrollo sostenible en el sector turístico. Tesis Doctoral de la Universitat de les Illes Balears. España. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=7890>. Consultado el 07 de septiembre de 2017. Hora 3:05 pm.

MASANET M. (2005). Desarrollo e Integración de los Sistemas de Información Contable en el sistema de Gestión Medioambiental de la empresa. Tesis Doctoral de la Universitat Jaume I. España. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=6961>. Consultado el 17 de septiembre de 2017. Hora 3:05 pm.

MORENO, Z., PARRA, M. A., Villasmil Molero, M., HERNANDEZ, B., & Duran, S. E. (2017). Importancia del Pensamiento Estratégico y Acciones Estratégicas para impulsar el emprendimiento social en las

universidades venezolanas. Revista Espacios Volumen 38 numero 45.  
<http://www.revistaespacios.com/a17v38n45/17384504.html>

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). (1998). Protocolo de Kyoto de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Disponible en:  
<http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpsan.pdf>. Consultado: 01 de junio 2017. Hora 07:53 am.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Dependencia de Economía y Comercio. División de Tecnología, Industria y Economía. (2002). Contabilidad Ambiental y Económica Integrada. Manual de Operaciones. Disponible en:  
[http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF\\_78S.pdf](http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_78S.pdf). Consultado: 01 de junio 2017. Hora 07:53 am.

PEÑA A (2007). Efectos Tributarios derivados de la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera. Revista Actualidad Contable Facultad de Ciencias Económicas (FACES). Universidad de Los Andes (ULA). Año 10 No. 15. Julio-Diciembre. Venezuela.

PLAN 2012. Facultad de Contaduría y Administración. Universidad Nacional Autónoma de México. [En línea]. Disponible en: <http://www.fca.unam.mx/contaduria>. [2014].

QUINTERO L y ANIDO J (2004). Estimación de pasivos ambientales mediante la técnica Obligaciones Económicas de los Usuarios: Caso: Aguas de Mérida C.A. Revista Actualidad Contable Facultad de Ciencias Económicas (FACES). Universidad de Los Andes (ULA). Año 7 No. 9. Julio-Diciembre. Mérida - Venezuela.

RODRÍGUEZ, R (2001). Los Costos en el Sistema de Gestión medioambiental. Revista Costos y Gestión No. 31. Año 8. Argentina.

RUEDA A, ARAGÓN J y MARTÍN I (2006). La medición de las capacidades organizacionales de la empresa: Validación de un instrumento de medida de la gestión medioambiental proactiva. Revista Española de Financiación y Contabilidad. ISSN: 0210-2412. Volumen XXXV. No. 130. Julio-Septiembre, páginas 563-582. España. Disponible en: <http://www.aeca.es/pub/refc/articulos.php?id=0234>. Consultado: 31 de julio 2017. Hora 08:53 am.

SCAVONE G (2002). Contabilidad de Gestión Ambiental. La Producción limpia como oportunidad de negocio. Ponencia presentada en la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

SCAVONE G, Schapira A y FERRUCCI M. (2001). Paradigma del usuario en relación con la Contabilidad de Gestión Medioambiental. Ponencia presentada en VII Congreso del Instituto Internacional de Costos y II Congreso de la Asociación Española de Contabilidad Directiva. Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI. Julio. Universidad de León. España.

SOTELO J (1999). Desarrollo y ambiente en la España actual: Gestión vs Conservación (notas entorno a la "ética medioambiental"). Revista Anuario Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia – San Juan Bosco. Argentina.

VERGARA, S. C. (2014). Proyectos e Informes de Investigación en Administración. 15ª Ed. São Paulo: Atlas.

## **BIODATA**

**Ana CANTILLO OROZCO:** Candidata a CPhD. En Gestión Gerencial Universidad Benito Juárez (México). Magíster en Administración. Especialista en Docencia Universitaria, Especialista en Aprendizaje Autónomo. Contadora. Docente Investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Cartagena, Colombia. Correos electrónicos: ascantillo@utb.edu.co –anasucantillo@hotmail.com.

**Omaira BERNAL PAYARES:** Doctora Ciencias sociales mención gerencia. Magister Administración. Especialista en Didáctica en la docencia virtual. Administradora Servicios de Salud. Psicóloga. Líder Grupo de Investigación Cartaciencia Universidad Rafael Núñez Cartagena, Colombia. Omaira.bernal@cunvirtual.edu.co

**Isabel Cristina RINCÓN RODRÍGUEZ:** Doctora en Administración SMC University. Magister en Administración con énfasis en Finanzas. Especialista en Finanzas. Administradora de Empresas. Directora del IMEBU Alcaldía de Bucaramanga. Profesora Investigadora Senior de MinCiencias. Corporación Universitaria de Asturias. Bucaramanga. Santander, Colombia. Correos electrónicos: isabel.rincon@asturias.edu.co - irincon15@hotmail.com

**Jorge E. CHAPARRO MEDINA:** Doctorando en Administración SMC University. Magister en Administración y Gerencia Pública, Máster en Dirección y Gestión. Sociólogo. Profesor Investigador Senior de MinCiencias. Corporación Universitaria de Asturias. Unidades Tecnológicas de Santander. Fundación Universitaria del Área Andina. Bucaramanga - Colombia. Correos electrónicos: Jorge.Chaparro@asturias.edu.co – jchaparro@correo.uts.edu.co -jchaparro22@areandina.edu.com

## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 216-226  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555



### Factores asociados a la diáspora de estudiantes universitarios

*Associated Factors with the Diaspora of University Students*

José Manuel GUTIÉRREZ SILVA

<https://orcid.org/0000-0001-9929-0172>

[jmgilva30@gmail.com](mailto:jmgilva30@gmail.com)

Universidad del Zulia, Venezuela

Jenny ROMERO BORRÉ

<https://orcid.org/0000-0002-0457-6467>

[jennyfrb@yahoo.com](mailto:jennyfrb@yahoo.com)

Universidad de la Costa, Colombia / Universidad del Zulia, Venezuela

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3907073>

#### RESUMEN

Venezuela ha sido considerada por muchos años de su historia un país receptor de migrantes o de puertas abiertas al mundo, en la actualidad presenta un patrón migratorio completamente distinto, pues se han registrado emigraciones considerables, en especial de población joven y calificada. Bajo estas consideraciones, el presente artículo analiza los factores asociados a la diáspora de estudiantes universitarios venezolanos. La metodología utilizada fue descriptiva, con un diseño de investigación de campo; empleándose un cuestionario semi-estructurado con 25 ítems, aplicado a una muestra de 423 estudiantes de la Universidad del Zulia – Venezuela, casa de estudios pública, con un número significativo de matrícula estudiantil a nivel nacional. Los resultados denotan que el 85.7% de la población estudiantil tiene intenciones de migrar, devenidas por problemas como la alimentación, realización personal, inseguridad, escasez de medicamentos, bajos salarios, corrupción, entre otros inconvenientes. Se concluye, que se está frente a un latente proceso de migración de estudiantes universitarios sin precedentes, que repercute en el desarrollo de la nación, dado la pérdida de personal joven y en formación; situación que amerita la atención seria del Estado a través de políticas que delineen rutas de acción para abordar este proceso demográfico.

**Palabras clave:** Estudiantes universitarios, factores, migración, población joven.

#### ABSTRACT

Venezuela has been considered for many years of its history a country receiving migrants or open doors to the world, at present, it presents a completely different migratory pattern, since there have been considerable emigrations, especially of young and qualified population. Under these considerations, this article analyzes the motivations of the migratory diaspora of Venezuelan university students. The methodology used was descriptive, with a field research design; using a semi-structured questionnaire with 25 items, applied to a sample of 423 students of the University of Zulia - Venezuela, house of public studies, with a significant number of student enrollment nationwide. The results show that 85.7% of the student population intends to migrate, due to problems such as food, personal fulfillment, insecurity, shortage of medicines, low wages, corruption, among other problems. It is concluded, that it is facing a latent process of migration of university students without precedents, which has an impact on the development of the nation, given the loss of young and training staff; situation that deserves the serious attention of the State through policies that delineate routes of action to address this demographic process.

**Keywords:** University students, factors, migration, young population.

Recibido: 12-04-2020 • Aceptado: 10-06-2020



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## INTRODUCCIÓN

La historia de la humanidad ha permitido recopilar diversos hechos migratorios en el mundo, pues desde que la especie humana existe, hay indicios de migración. Las personas han tenido que desplazarse de un lugar a otro en búsqueda de alimentos, abrigo, vestimenta o producto de grandes catástrofes naturales o sociales (Massey: 2004; León: 2015; Organización Internacional para las Migraciones, OIM: 2018). Estos diversos desplazamientos de masa poblacional espontáneos o forzados vividos a lo largo de los años, tienen como causantes factores culturales, económicos, geográficos y políticos fundamentalmente.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT: 2015) existen alrededor de 232 millones de migrantes en el mundo, sin embargo, los datos que ofrece la OIM (2018) aseguran que la cifra alcanza los 244 millones de personas, de los cuales el 65% son trabajadores, representando un porcentaje significativo de personas que dejaron de pertenecer a la fuerza de trabajo de sus naciones para hacer vida productiva en otras tierras, por lo que son individuos en edad activa (que incluye a jóvenes) y muchos de ellos, de condición calificada. Situación que preocupa a la OIT y OIM, entre otros organismos internacionales que han tratado el tema para delinear políticas de migración de alcance mundial.

En el caso de América Latina, dada su vinculación al viejo mundo, desde los períodos de la colonia, la independencia y hasta mediados del siglo XIX y parte del XX, la región recibió inmigrantes de ultramar cuya presencia aún es notoria en varios países. Aruj (2008) expone que 55 millones de europeos aproximadamente, se movilizaron a tierras americanas dadas las guerras presentadas y actuó como válvula de escape, posibilitando la organización o reorganización de los estados europeos. La región también fue escenario del arribo de personas procedentes de otras subregiones del viejo continente, como de poblaciones africanas, salidas del sistema de esclavitud vigente hasta el siglo XIX; de asiáticos, principalmente chinos y japoneses y, en menor escala, de inmigrantes de otras regiones, tales como el Medio Oriente; dejando huellas profundas en la cultura y sociedad latinoamericana actual (Naciones Unidas: 2006).

Por su parte Venezuela, que ha sido caracterizada en su historia migratoria como un país de puertas abiertas a los flujos poblacionales, interesados en las actividades económicas nacionales, tiene en su población una variedad étnica producto de la constante mezcla de nacionalidades, que lleva en la sangre y en los apellidos, la marca indeleble de los antepasados inmigrantes (Taylhardat: 2003; Álvarez de Flores: 2007).

El cacao y el café durante el período colonial (siglo XIX) marcan el inicio de la presencia de migrantes en el país, compuesta principalmente por comerciantes españoles, canarios y alemanes (Muñoz: 2016). Para el siglo XX, Venezuela continuó siendo un lugar de destino atractivo para los migrantes europeos, por su estabilidad económica y política, situación que se extendió durante los años de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra.

De acuerdo a Massey *et al.* (1998), la década del cincuenta y los primeros años de la década del sesenta, Venezuela se convirtió en un importante punto de atracción para unos 335.000 inmigrantes, de los cuales el 70% era de Europa del Sur (Italia, España y Portugal) y el 30% restante de países de la región sudamericana y de otras nacionalidades. Más adelante, con el llamado “boom petrolero”, que contempló un alza progresiva de los precios del petróleo a partir de los años 70, acentuó la prosperidad económica de Venezuela, trayendo consigo un aumento de la inmigración de personas provenientes de países fronterizos, disminuyendo los arribos masivos de europeos. En este momento de la historia, se instalaron particularmente colombianos, atraídos por las grandes oportunidades generadas por el petróleo y ante la posibilidad de adquirir mayores ingresos, en comparación con su país de origen (Álvarez de Flores: 2007; Muñoz: 2016).

Durante los años ochenta y noventa, Venezuela da un giro en sus pautas migratorias, pues la crisis tuvo efectos desalentadores sobre los movimientos migratorios provenientes del exterior, que además contribuyó a procesos de retorno de los extranjeros que habitaban en el país y a la emigración de venezolanos, quienes reaccionaron frente a un contexto de recesión económica, descomposición social y deterioro institucional (Freitez: 2011).

Al iniciar el nuevo milenio, los factores de atracción de inmigrantes intrarregionales empezaron a disminuir y de acuerdo con cifras del censo del año 2011, los extranjeros alcanzaron el 4,2% (1.156.578) del total de la población en Venezuela, estimada en poco más de 27.227.000 personas (Instituto Nacional de Estadística, INE: 2014), siendo la principal colectividad de extranjeros la formada por los provenientes de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Cuba. Escenario diferente al de la década de los ochenta, donde representaban un 7,4% de la población total (Muñoz: 2016).

A partir del año 2013, con la llegada al gobierno de Nicolás Maduro Moros como presidente de la República, se ha tornado en el país una situación caracterizada por la polarización política, donde además se evidencian altos niveles de inseguridad, la caída de los precios del petróleo, altos niveles de inflación, caída de las reservas internacionales, mayor control de precios, devaluación del bolívar, cierre técnico de numerosas empresas, escasez de productos básicos, entre otros inconvenientes provenientes de su proyecto político-económico (Gutiérrez, Romero, Díaz y Sulbarán: 2017), que mantienen hoy en día a Venezuela con las expectativas más bajas de crecimiento en la región (Castillo y Reguant: 2017).

Tal situación económica, política y social han provocado una serie de emigraciones nunca antes vista (Muñoz: 2016; De La Vega y Vargas: 2017). En cuestión de pocas décadas, Venezuela pasó de ser un país receptor a emisor de migrantes, debido a las condiciones políticas, económicas y sociales presentes en el país (Padilla, Torres y Michelena: 2015), desencadenando un escenario cargado de expectativas de crecimiento personal, económico y hasta profesional en la población. Esta problemática no ha recibido un reconocimiento oficial del gobierno nacional y desde las instituciones públicas poca atención se ha brindado (Freitez: 2015).

Cabe destacar, que el escenario de las migraciones también ha tocado al ámbito universitario nacional, ya que se está en presencia de una deserción estudiantil considerable en diferentes casas de estudios, que se atañe en parte a la migración (De La Vega y Vargas: 2017). En la Universidad del Zulia (LUZ), específicamente, casa de estudios de gestión pública, autónoma y con un número importante de estudiantes matriculados; la deserción se dejó sentir en las distintas facultades durante el reinicio de las actividades académicas y administrativas en septiembre de 2017 (LUZ Agencia de Noticias: 2017).

Decanos han reportado algunas cifras de la deserción y mencionan que las causas de esta pueden ser atribuidas a las protestas registradas en el país, la migración, la crisis en materia de infraestructura y servicios estudiantiles de la universidad, la situación económica familiar y hasta la seguridad personal. No obstante, la deserción no solo es de estudiantes, sino también de profesores, personal administrativo y obrero (LUZ Agencia de Noticias: 2017).

Tal panorama lleva a analizar la migración de estudiantes universitarios, tomando atención en los factores que la generan, desde la percepción de los estudiantes aún activos en LUZ. Pues este grupo está próximo en egresar como profesionales para aportar todos los conocimientos adquiridos en la carrera, habilidades y destrezas en el ámbito económico, político o social del país; y poseen además expectativas de iniciar planes de vida para construir un futuro estable y prometedor. Sin embargo, el horizonte venezolano parece poco alentador; por lo que las decisiones que tomen con respecto a la migración, marcará pautas importantes para el país.

## **ASPECTOS TEÓRICOS**

### **Algunas consideraciones sobre migración**

La migración es parte de los procesos demográficos que junto a la natalidad y mortalidad introduce cambios en el tamaño, composición y distribución de la población. Este fenómeno está relacionado según Massey (2004) y León (2015) con el movimiento o desplazamiento espacial de las personas, que tiene vigencia desde que la especie humana existe, ya que el hombre tuvo la necesidad de salir de su lugar de origen en búsqueda de alimentos, vestimenta o vivienda para él y sus afectos. Además, las grandes

catástrofes naturales, pérdida de cosechas, guerras y hechos sociales como persecuciones raciales o ideológicas, han promovido el movimiento migratorio.

Valente (2012) señala que la migración es un derecho ejercido por los individuos con la perspectiva de mejorar su situación o enfrentar circunstancias adversas, que puede producir cambios ligeros o hasta radicalmente bruscos en estas personas. Asimismo, indica que todo sujeto está expuesto a migrar en algún momento de su vida y aunque puede que esto no ocurra, existe siempre una expectativa latente de migración susceptible en cualquier lapso de tiempo.

En este mismo orden, Vargas (2016) define la migración como el cambio de residencia de un lugar llamado "origen" hacia otro llamado "destino", con un carácter casi permanente, el cual es motivado por razones económicas, sociales y/o políticas. De esta manera, el fenómeno se compone de la salida de un individuo (emigración) de una comunidad, estado o país (lugar de origen) por un tiempo determinado y la llegada de este al nuevo territorio (inmigración) o lugar de destino.

Bajo estas consideraciones, la migración puede ser entendida como el fenómeno social que altera la estructura, crecimiento y distribución de la población de un país; debido a que un número de personas realiza el cruce de algún límite o frontera administrativa en búsqueda de asentarse en nuevas tierras para mejorar sus condiciones de vida, de trabajo, entre otros aspectos. Se denominará migrante al individuo que toma la decisión de salir de su lugar de origen para trasladarse a otro; emigrante a la persona que traslada su lugar de residencia habitual geográfica o administrativa a otra (sale); e inmigrante a la misma persona, pero que viene a asentarse en el lugar de destino escogido (entra). Aunque puede responder a muchos factores o causas, las migraciones están normalmente originadas por la necesidad o deseo de alcanzar unas mejores condiciones económicas, culturales, sociales y/o políticas.

### **Factores que influyen en la migración**

Las experiencias migratorias en el mundo han dejado ver que son muchas las razones por las cuales las personas migran. Estudios de organismos internacionales como OIT (2015) y OIM (2018) demuestran que la búsqueda de una mejor calidad de vida y condiciones óptimas de trabajo son los principales factores; por lo que intervienen de manera directa determinantes de tipo social, económico y hasta político.

Aruj (2008) apunta que la decisión migratoria es consecuencia de un complejo proceso, relacionado al proyecto futuro de las personas que integra las expectativas de realización personal, económica y de seguridad. De igual modo, la OIT (2010) sostiene que las causas que promueven el fenómeno migratorio tienen peso en aspectos sociales y económicos fundamentalmente; donde la salida del lugar de origen evita el derrumbe personal que visualiza el emigrante ante situaciones angustiantes marcadas por carencias y problemas, teniendo la idea de un nuevo país que le permitirá aparentemente encontrarse con situaciones más llevaderas para alcanzar una vida estable.

No puede negarse que el ser humano trabaja en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades fisiológicas, de seguridad, reconocimiento y auto-superación (pirámide de Maslow); y en los países expulsos, las condiciones para lograr tales objetivos, se tornan desafiantes por la situación de crisis permanente. De este modo, Castles (2004) y Aruj (2008) reúnen una serie de factores generales que inducen la migración, tales como: la falta de alternativas para los logros ocupacionales, incertidumbre social sobre el futuro económico, inseguridad general frente al crecimiento de la violencia, necesidades básicas insatisfechas, así como frustración en la realización personal. En esencia, el autor resalta factores que reúnen características sociales y económicas. No obstante, De La Vega (2005) agrega a las causas señaladas, los retrasos científico-tecnológicos y escasos procesos de innovación en el país de origen, que aquietan los intereses de personas preparadas.

En este sentido, se tiene que los factores asociados a la migración se agrupan en aspectos económicos y sociales principalmente, que exigen mejoras en las condiciones de empleo y salarios que impactan en la calidad de vida de las personas; igualmente se incluye el acceso a los servicios públicos básicos como la

educación, salud, seguridad, vivienda, transporte, entre otras variables que inciden en el desarrollo social de la población.

Los factores económicos juegan un papel importante en este proceso demográfico, pues se vinculan de manera directa con los factores sociales; por lo que, si ambos están presentes, es difícil frenar el flujo migratorio. Conjuntamente, resaltan los factores políticos generados por problemas en el sistema político de los países, que atentan contra los ideales, libertad de pensamiento y la democracia. Igualmente se tienen problemas culturales y de catástrofes naturales como causantes del fenómeno, que junto con los mencionados anteriormente, generan sentimientos o emociones individuales que llevan a tomar la decisión de migrar.

## **ASPECTOS METODOLÓGICOS**

Posterior a la síntesis teórica que fundamente el presente artículo, es menester esbozar los aspectos metodológicos utilizados en el desarrollo de la investigación que dio origen a este trabajo. El enfoque epistemológico seguido fue el empírico-inductivo, con un diseño de investigación no experimental, de campo; y un tipo de estudio descriptivo, empleándose la encuesta como técnica para la recolección de datos, mediante el uso de un cuestionario semi-estructurado que contó con 25 ítems.

La población objeto de análisis estuvo conformada por todos aquellos estudiantes de pregrado activos para el año 2018 en la Universidad del Zulia - Venezuela, matriculados en las 11 facultades y 2 núcleos según datos que reposan en la Secretaría de LUZ (2018). Cabe destacar, que debido a la cantidad considerable de estudiantes inscritos para el período considerado, se utilizó un tipo de muestreo estratificado con afijación proporcional.

De esta manera, la muestra fue seleccionada utilizando un nivel de confianza del 90% ( $1 - \alpha = 0,90$ ), lo cual genera un valor de  $Z = 1,645$ , con un margen de error del 4% ( $d = 4\%$ ) y usando una proporción  $p = 0,50$ , que garantiza obtener el máximo tamaño de muestra ( $n$ ). En este sentido, se obtuvo un tamaño de muestra de 423 estudiantes, a los cuales les fue aplicado el instrumento.

Entre los procedimientos para el análisis, se encuentran: distribución de los datos, valores o puntuaciones obtenidas para cada ítem, distribución de frecuencias (absolutas y relativas) para cada ítem, presentación de los datos de manera escrita y tabulada. Debe destacarse, que el cuestionario aplicado contuvo preguntas de selección simple, por lo que la etapa de inferencia estadística toma aquellos resultados con mayor frecuencia como un rasgo predominante en la muestra, y el número de opciones promedio marcado para de cada ítem determina la cantidad de factores involucrados para los aspectos analizados.

## **RESULTADOS**

En esta sección se muestran las intenciones de migración de los estudiantes universitarios y los factores asociados a ella, en atención a una dinámica país desafiante, caracterizada por una profunda crisis política, económica y social, develada en informes nacionales e internacionales, que han provocado una serie de emigraciones nunca antes registradas en la nación.

Bajo estas consideraciones, se tiene que el 85,7% de los estudiantes universitarios indicó que sí tiene la intención de emigrar; mientras que un porcentaje muy bajo (14,3%) rechazó esta posibilidad. Tal situación causa preocupación dado los altos niveles de emigración presentados en los últimos años, sin reconocimiento oficial alguno del Estado según Freitez (2015).

Consultores 21 (2017) por ejemplo, registra una diáspora de 4.091.717 venezolanos hasta el año 2017. Encovi (2017) por su parte, estima para el mismo año, una emigración que asciende a 4 millones de personas, que representa el 12% de la población total. Por lo que este gran número de estudiantes



universitarios (85,7% de la población en estudio) pasaría a formar parte de las personas que deciden irse a otros países; situación que Azocar (2018) ya viene advirtiendo, estimando que el 30% de la población venezolana está realizando las gestiones para emigrar.

Ahora bien, tomando en cuenta que el 85,7% de la población estudiantil universitaria tiene intenciones de emigrar, es fundamental conocer las razones que motivan esta decisión, en atención a problemas como: necesidades básicas insatisfechas, seguridad, sistema educativo, salud, problemas económicos generales y aspectos políticos. Siendo relevante destacar, que la decisión migratoria de acuerdo a Aruj (2008), es consecuencia de un complejo proceso donde tienen peso aspectos sociales, económicos y políticos fundamentalmente,

Dentro de ese marco, los encuestados exponen que la alimentación (41,9% de los encuestados) y la realización personal (35,2%) son las principales necesidades básicas insatisfechas. Estos aspectos seleccionados por los estudiantes son considerados en la teoría de motivación de la conducta humana de Maslow, representados a través de una pirámide que contiene los niveles jerárquicos de necesidades por las que atraviesan las personas; donde el nivel más bajo o esencial comprende necesidades como alimentarse o respirar (fisiológicas), seguido de necesidades de seguridad, sociales, de estima y de realización personal.

Por lo que siguiendo la teoría de Maslow, la población universitaria siente que no está cubriendo las necesidades inherentes o básicas para la supervivencia humana, como lo es alimentarse, pues al satisfacer esta necesidad se está rellenando la base de la pirámide, teniendo la oportunidad de escalar al siguiente nivel, buscando satisfacer necesidades superiores.

En cuanto a la realización personal, Aruj (2008) plantea que la mayoría de las personas con intenciones de migrar, vela por su proyecto futuro que integra expectativas de realización personal principalmente, encontrándose este aspecto también en la pirámide de Maslow. No puede negarse que los individuos trabajan en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades y en el caso de Venezuela, las condiciones para lograr tales objetivos, se tornan difíciles por la situación de crisis permanente, que ha estado marcada por angustia, incertidumbre, carencias y problemas, por mencionar algunos problemas.

Con respecto a la seguridad física de las personas, la población universitaria considera que los atracos (36,1%), violencia (25,9%) y robos (23,3%) se han incrementado incesablemente en el país, siendo un factor determinante para su emigración. Este problema cada día ha ganado campo y no ha podido ser controlado por los cuerpos de seguridad nacional, teniendo como consecuencia el posicionamiento del país en los primeros lugares en rankings internacionales de países peligrosos.

De esta manera, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP: 2018), una organización civil mexicana, utilizando una metodología sencilla que compara el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, en su último ranking, publicado en el 2018, exhibe las 50 ciudades más peligrosas del mundo, donde en el caso de Venezuela destacan: Caracas en el 2do lugar del ranking, Guayana en el puesto 9, Maturín en el 23, Valencia en el sitio 27 y Barquisimeto ocupando la posición 33. De acuerdo al estudio, Venezuela no lleva este tipo de estadísticas de manera oficial, ya que el gobierno no está interesado en informar objetivamente y rendir cuentas sobre el tema, su imperativo ha sido la propaganda y el populismo, generando de tal situación de inseguridad, el acelerado proceso de desdoblamiento en los últimos años.

Por su parte, Encovi en su sección "Seguridad" (2017) muestra la opinión de los habitantes del país con respecto a este factor, teniendo que 9 de cada 10 individuos, piensa que hay más inseguridad en el año 2017 que el anterior. Asimismo, el estudio indica que la violencia a partir del año 2015 se ha mantenido en niveles que superan el 90%, manifestándose en la muerte de muchos jóvenes. Igualmente, 4 de cada 5 venezolanos ha sido víctima de algún delito en el 2017. El estudio además muestra que los venezolanos califican el trabajo de la policía como muy malo hasta 2016. Este panorama de inseguridad latente en el

territorio ha hecho que las personas teman de visitar lugares recreativos, hacer compras, sitios de trabajo y casas de estudios, siendo un factor determinante en el fenómeno migratorio.

Otro aspecto de interés destacar como factor migratorio, son las condiciones del sistema educativo, que toma en cuenta el caso de la Universidad del Zulia y en donde la población estudiantil percibe como problemas que agotan su posibilidad de quedarse en el país, el deterioro de la infraestructura de la casa de estudios (42,5%), que ha sido progresiva con el correr de los años, ya que la institución no ha escapado de la problemática venezolana, además de la falta de personal (33,9%).

Ante estos inconvenientes, puede señalarse que las autoridades de distintas universidades a nivel nacional han reconocido esta problemática y en el caso de LUZ, específicamente, a inicios del año 2018, se realizó un pronunciamiento por las autoridades que declara a la universidad en emergencia por la crisis en materia de infraestructura y servicios estudiantiles, que ha sido generada por el déficit presupuestario, afectando a comedores, becas y transporte estudiantil; siendo difícil garantizar un sistema de seguridad óptimo para toda la comunidad universitaria y el mantenimiento de la infraestructura física y operativa de las diferentes facultades y núcleos (LUZ Agencia de Noticias: 2017; El Nacional Web: 2018).

Con relación al sistema de salud, los estudiantes perciben que la escasez de medicamentos (45,5%) y las malas condiciones de los centros asistenciales (32,8%) son un detonante importante en su intención de migrar; plenamente entendible dado que la salud está representada por el estado físico, mental y social que requiere una persona para su bienestar individual y colectivo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2016).

En cuanto a la escasez de medicamentos, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, declaró que el país ha registrado un 40% de fallas en la distribución de medicamentos e insuficiencias en el inventario a causa de la poca fluidez en el suministro de divisas por parte del Estado. Para el año 2016 este porcentaje se incrementa de manera alarmante, alcanzando la cifra de 85% (Ceballos: 2016).

Por su parte, Encovi (2017) precisa que en el país existe una tendencia a mayor deterioro de los centros asistenciales y todo el sistema de salud, que demandan un programa de estabilización y transformaciones urgentes de financiamiento, descentralización y prestación de servicios. Esta situación se convierte en un horizonte desafiante en el corto plazo dada la falta de voluntad e ineficiencia de los entes gubernamentales que prácticamente juegan con la vida de las personas.

Con referencia a los problemas económicos generales, que cada día aquejan a los venezolanos, la población estudiantil universitaria se siente mayormente afectada por la inflación (37,4%) y la escasez de bienes y servicios (34,4%). Tales indicadores se han convertido en un reto para el gobierno central y a pesar de las diversas políticas aprobadas para contrarrestarlos, los problemas continúan ganando la partida y azotando el bolsillo de la ciudadanía.

Venezuela en estos momentos de su historia atraviesa por una incertidumbre plena en el panorama económico, marcado por la caída del PIB, hiperinflación, escasez de bienes y servicios, devaluación, control de precios, cierre técnico de numerosas empresas, caída de las reservas internacionales, control cambiario, entre otros inconvenientes (Muñoz: 2016; Castillo y Reguant, 2017). Esto como resultado de los traspiés del proyecto económico del gobierno nacional, que mantienen hoy día a Venezuela con las expectativas más bajas de crecimiento en la región (Romero, Hernández, Gutiérrez y Portillo: 2017), provocando que el patrón de emigración haya crecido exponencialmente, situación no ocurrida en la historia del país (Mazuera, Alborno, Morffe, Ramírez y Carreño: 2019).

Otro de los factores que motivan la migración de estudiantes universitarios son los problemas políticos, contexto que en Venezuela se ha agudizado dada la alta tensión que existe entre el gobierno nacional y los grupos de oposición. Al respecto, Muñoz (2016) comenta que el país está en presencia de una constante polarización política generada en torno a la figura de Nicolás Maduro y su estructura y dinámica de gobierno, que ha incidido en la diáspora de venezolanos.

En el caso de la población estudiantil, los problemas que le causan mayor preocupación son la corrupción (44,6%) y el modelo político implementado por el gobierno nacional (30,4%). Ambos problemas son el reflejo de la situación generalizada que tiene el país en términos de alimentación, seguridad, salud, economía, educación, entre otros inconvenientes que parecen escapar de la capacidad gerencial o gubernamental de los representantes políticos del Estado, pues las estadísticas, la academia y opinión pública así lo dejan ver.

Autores como Freitez (2011), De La Vega (2014), Muñoz (2016), Castillo y Reguant, (2017), Azócar (2018) y otros, han insistido sobre un cambio de modelo político para el país, ya que el proyecto bolivariano encabezado por Hugo Chávez y continuado desde 2013 por Nicolás Maduro, ha fracasado, generando una diáspora incalculable.

El proyecto político ejecutado, ha recrudecido la situación de Venezuela hasta sumergirla en una espiral de crisis permanente, bordeada por corrupción. Si bien el modelo "chavista" logró bajar los índices de pobreza entre 2003 y 2009, en la actualidad contribuye en el fomento de la emigración ante la pauperización de los empleos o la falta de ellos, la carencia de productos básicos, la inflación, la delincuencia, decadencia de los sistemas de educación y salud, entre otros problemas.

## **A MODO DE CONCLUSIÓN**

La situación de crisis que presenta Venezuela ha rebasado grandes límites, pues no solo se está frente a problemas sociales, económicos y políticos bien pronunciados, sino, además, frente a un proceso emigratorio indetenible de venezolanos, en especial de estudiantes universitarios, que pueden ser el detonante de la deserción masiva que vive la Universidad del Zulia y muchas instituciones de educación superior del país.

Esta diáspora mayoritariamente está compuesta por personal joven, miembro de la población económicamente activa, condición que los hace parte del bono demográfico que puede perder la nación en este momento de su historia. No obstante, a pesar de las diferencias presentadas en cuanto a los totales de la emigración, lo verdaderamente preocupante es que la mayoría de estos venezolanos en el extranjero es capital humano calificado y en edad productiva, lo que representa una pérdida dramática de capital intelectual y social para el país.

Tales intenciones de migración se derivan por problemas concurrentes que no están permitiendo cubrir la mayoría de las necesidades de la pirámide de Maslow, primordiales para cualquier grupo humano y que están sumando un nuevo problema público para Venezuela; demandando la atención seria del gobierno nacional, dado que los principales factores que inciden en la decisión de migrar tienen detrás un grupo de detonantes devenidos de la gestión de Nicolás Maduro, que tiene a su cargo el sistema económico y social del país.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- ÁLVAREZ DE FLORES, R. (2007). "Evolución histórica de las migraciones en Venezuela. Breve recuento", Aldea Mundo. Vol. 11, No. 22, noviembre-abril, pp. 89-93.
- ARUJ, R. (2008). "Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica", Papeles de Población. No. 55, enero/marzo, pp. 95-116.
- AZÓCAR, R. (2018). Gobernanza en la inmigración y emigración venezolanas. Disponible en <<http://www.analitica.com/opinion/gobernanza-en-la-inmigracion-y-emigracion-venezolana/>> Acceso el: 01 feb. 2018.

CASTILLO-CRASTO, T.; REGUANT-ÁLVAREZ, M. (2017). "Percepciones sobre la migración venezolana: Causas, España como destino, expectativas de retorno", *Migraciones*. No. 41, pp. 133-163.

CASTLES, S. (2004). "The factors that Make and Unmake Migration Policies", *International Migration Review*. 38(3), pp. 852-885.

CEBALLOS, F. (2016). El Universal, Fefarven: Escasez de medicamentos en el país supera 85%. Noticia de fecha 05/04/2016. Disponible en: <[http://www.eluniversal.com/noticias/economia/fefarven-escasez-medicinas-pais-supera\\_248147](http://www.eluniversal.com/noticias/economia/fefarven-escasez-medicinas-pais-supera_248147)> Acceso el: 20 dic. 2017.

CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA PENAL, CCSPJP. (2018). Informe de las 50 ciudades más violentas del mundo. Disponible en <<http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx>> Acceso el: 15 mar. 2018.

CONSULTORES 21. (2017). Apéndice sobre migración. Servicio de Análisis de Entorno PERFIL 21. N° 151, Cobertura Urbano – Rural, 4to Trimestre 2017. Disponible en <<http://www.consultores21.com>> Acceso el: 15 mar. 2018.

DE LA VEGA, I. (2005). Mundos en movimiento: movilidad y migración de científicos y tecnólogos venezolanos. Fundación Polar – Instituto de Investigaciones Científicas (IVIC), Venezuela.

DE LA VEGA, I. (2014). "Tráfico de venezolanos calificados a múltiples destinos", en: *Diáspora del talento, migración y educación en Venezuela: análisis y propuestas*. Fundación Centro de Estudios de las Américas y el Caribe: Fundación Talento Venezolano en el Exterior, Venezuela.

DE LA VEGA, I.; VARGAS, C. (2017). "La intención de emigración de estudiantes universitarios. Estudio comparado en cuatro universidades venezolanas", *INTERCIENCIA*. Vol. 42, N° 12, December, pp. 798-804.

EL NACIONAL WEB. (2018). Universidad del Zulia se declaró en estado de emergencia. Disponible en <[http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/universidad-del-zulia-declaro-estado-emergencia\\_221271](http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/universidad-del-zulia-declaro-estado-emergencia_221271)> Acceso el: 01 feb. 2018.

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA EN VENEZUELA, ENCOVI (2017). Emigración. Estudio elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. Venezuela

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA EN VENEZUELA, ENCOVI (2017). Salud. Estudio elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. Venezuela.

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA EN VENEZUELA, ENCOVI (2017). Seguridad Ciudadana. Estudio elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. Venezuela.

FREITEZ, A. (2011). "La emigración desde Venezuela durante la última década", *Temas de Coyuntura*. No. 63, julio, pp. 11-38.

FREITEZ, A. (2013). "Venezuela: Transición y riesgos socio-demográficos", *SIC ANIVERSARIA*. Economía y Bienestar, Diciembre, pp. 498-501.

FREITEZ, A. (2015). "Invisibilización del fenómeno migratorio", *SIC*. Año LXXVIII, N° 775, pp. 211-219.

GUTIÉRREZ, J. M.; ROMERO, J.; DÍAZ, M.; SULBARÁN, N. (2017). "Emprendimiento como fuente de desarrollo de la empresa familiar. Algunas reflexiones sobre Venezuela", *Revista de Ciencias Sociales*. 23 (4), Universidad del Zulia, Venezuela, pp. 98 – 107.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, INE. (2014). XIV Censo Nacional de Población y Vivienda. Resultados Total Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela. Disponible en <http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/nacional.pdf> Acceso el 15.03.2018.

LEÓN, L. (2015). *Análisis Económico de la Población. Demografía. Material para Estudiantes*. Departamento Académico de Economía de la FACEAC de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" de Lambayeque. Perú.

MASSEY, D.; ARANGO, J.; HUGO, G.; KOUAOUKI, A.; PELLEGRINO, A.; EDWARD, T. (1998). "Worlds in motion: Understanding international migration at the end of millennium". *International Studies in Demography*, Clarendon Press Oxford. University of Oxford, United Kingdom.

MASSEY, D. (2004). "Measuring Undocumental Migration", *International Migration Review*. 38(3), pp. 1075-1103.

MAZUERA, R.; ALBORNOZ, N.; MORFFE, M. Á.; RAMÍREZ, C.; CARREÑO, M. (2019). Informe sobre la movilidad humana venezolana II. Realidades y perspectivas de quienes emigran (8 de abril al 5 de mayo 2019). SJR (Venezuela) - Centro Gumilla - UCAT - IIES-UCAB. Venezuela.

MUÑOZ BRAVO, T. (2016). "Políticas migratorias en México y Venezuela: análisis de respuestas gubernamentales disímiles ante procesos de inmigración y emigración internacionales", *Desafíos*. (28-II), pp. 333-366.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT. (2010). *Las migraciones como factor de desarrollo: El caso de África Septentrional y Occidental*. Primera Edición. Organización Internacional del Trabajo; Instituto Internacional de Estudios Laborales, Italia.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT. (2015). *Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes*. OIT, Ginebra, Suiza.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, OIM. (2018). *Informe sobre las migraciones en el mundo 2018*. Organización de la Naciones Unidas, Ginebra, Suiza.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OMS. (2016). *Salud mental: fortalecer nuestra respuesta*. Disponible en <http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response> Acceso el 20.01.2018.

ROMERO, J.; HERNÁNDEZ, L.; GUTIÉRREZ, J. M.; PORTILLO, R. (2017). "Factores contextuales que influyen en el emprendimiento de empresas familiares en Venezuela", *Opción*. Año 33, No. 86, Universidad del Zulia, Venezuela, pp. 492 – 515.

SECRETARÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. (2018). *Memoria y Cuenta de la Secretaría de la Universidad del Zulia – Año 2018*. Formación de estudiantes en carreras. Data entregada al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

TORREALBA, R. (1987). "Las migraciones en la Frontera Colombo-Venezolana", en: Las migraciones laborales colombo-venezolanas. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) / Nueva Sociedad / Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.

UNIVERSIDAD DEL ZULIA - AGENCIA DE NOTICIAS. (2017). La deserción universitaria aumenta de la mano de la crisis del país. Disponible en <[http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com\\_content&task=view&id=7080&Itemid=148](http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=7080&Itemid=148)> Acceso el: 20 ene. 2018.

VALENTE MARTÍNEZ, M. R. (2012). Guía para el estudio de la Demografía: Algunas consideraciones teóricas. Trabajo de Ascenso para optar a la Categoría de Profesor Titular. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Venezuela.

VARGAS, C. (2016). "La migración en Venezuela como dimensión de la crisis", Pensamiento Propio, No. 47, pp. 91-128.

## **BIODATA**

**José Manuel GUTIÉRREZ SILVA:** Economista. Docente - Investigador adscrito al Instituto de Investigaciones "Econ. Dionisio Carruyo" de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia (Maracaibo-Venezuela). E-mail: [jmgssilva30@gmail.com](mailto:jmgssilva30@gmail.com)

**Jenny ROMERO BORRÉ:** Doctora en Ciencias Humanas. Magíster en Gerencia de Empresas. Economista. Docente - Investigadora adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Costa (Barranquilla-Colombia) y al Instituto de Investigaciones "Econ. Dionisio Carruyo" de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia (Maracaibo-Venezuela). E-mail: [jennyfrb@yahoo.com](mailto:jennyfrb@yahoo.com)



## DIRECTORIO DE AUTORES Y AUTORAS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° EXTRA 3, 2020, pp. 227-228  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

### Alonso SILVA ROJAS

Universidad Industrial de Santander,  
Bucaramanga, Colombia.

[asilva@uis.edu.co](mailto:asilva@uis.edu.co)

### Ana CANTILLO OROZCO

Universidad Tecnológica de Bolívar, Colombia

[ascantillo@utb.edu.co](mailto:ascantillo@utb.edu.co)

### Ana Carolina MERCADO GAZABÓN

Universidad del Sinú, Montería – Colombia

Universidad de Salamanca (España).

[anacaro2703@hotmail.com](mailto:anacaro2703@hotmail.com)

### Andrés BOTERO BERNAL

Universidad Industrial de Santander,  
Bucaramanga, Colombia.

[aboterob@uis.edu.co](mailto:aboterob@uis.edu.co)

### Andrés HERNÁNDEZ MARULANDA

Universidad de San Buenaventura Sede Medellín,  
Colombia

[andres.hernandez@usbmed.edu.co](mailto:andres.hernandez@usbmed.edu.co)

### Angélica María MUSKUS CARRIAZO

Universidad del Sinú, Colombia

[Angelica.muskus@gmail.com](mailto:Angelica.muskus@gmail.com)

### Carlos Alberto MOJICA ARAQUE

Universidad de Medellín, Colombia

[camojica@udem.edu.co](mailto:camojica@udem.edu.co)

### Carlos Arturo HERNÁNDEZ DÍAZ

Universidad Libre, Bogotá. Colombia.

[Carlos.hernandez@unilibre.edu.co](mailto:Carlos.hernandez@unilibre.edu.co)

[carhedy@gmail.com](mailto:carhedy@gmail.com)

### Cindy CARRIAZO DIAZ

Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainum”  
Colombia.

[cindycarriazo@unisnu.edu.co@unisnu.edu.co](mailto:cindycarriazo@unisnu.edu.co@unisnu.edu.co)

### Deivi David FUENTES DORIA

Universidad Pontificia Bolivariana, Montería,  
Colombia.

[deivi.fuentesd@upb.edu.co](mailto:deivi.fuentesd@upb.edu.co)

### Edgar Athzel CARMONA ARIAS

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  
México

[edgar.carmonaari@uaem.edu.mx](mailto:edgar.carmonaari@uaem.edu.mx)

### Eduardo Alonso FLÓREZ ARISTIZABAL

Universidad Pontificia Bolivariana –  
Seccional Montería, Colombia.

[eduardo.florez@upb.edu.co](mailto:eduardo.florez@upb.edu.co)

### Edwin RUBIO MEDINA

Universidad del Sinú “Elías Bechara Sainún”  
Montería, Colombia.

[edwinrubio@ces.uc.pt](mailto:edwinrubio@ces.uc.pt)

### Filiberto Eduardo R. MANRIQUE MOLINA

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México

[fmanrique@unal.edu.co](mailto:fmanrique@unal.edu.co)

### Horderlin ROBLES VEGA

Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainum,  
Colombia

[horderlinrobles@unisnu.edu.co](mailto:horderlinrobles@unisnu.edu.co)

### Isabel Cristina RINCÓN RODRÍGUEZ

Corporación Universitaria de Asturias, Colombia

[isabel.rincon@asturias.edu.co](mailto:isabel.rincon@asturias.edu.co)

### Jenny ROMERO BORRÉ

Universidad de la Costa, Colombia /  
Universidad del Zulia, Venezuela

[jennyfrb@yahoo.com](mailto:jennyfrb@yahoo.com)

### Jorge E. CHAPARRO MEDINA

Corporación Universitaria de Asturias,  
Unidades tecnológicas de Santander,  
Fundación Universitaria del Área andina, Colombia

[jchaparro@correo.uts.edu.co](mailto:jchaparro@correo.uts.edu.co)

**José Gregorio NOROÑO SÁNCHEZ**

Universidad del Sinú, Colombia

[josenorono@unisinu.edu.co](mailto:josenorono@unisinu.edu.co)

**José Manuel GUTIÉRREZ SILVA**

Universidad del Zulia, Venezuela

[jmg SILVA30@gmail.com](mailto:jmg SILVA30@gmail.com)

**Kathelyn GAVIRIA BUSTAMANTE**

Universidad del Sinú "Elías Bechara Zainum"  
Colombia.

[kathelyngaviria@unisinu.edu.co](mailto:kathelyngaviria@unisinu.edu.co)

**Leidy Vanessa CORREA GRISALEZ**

Universidad del Sinú, Colombia

[vanesa49.vc@gmail.com](mailto:vanesa49.vc@gmail.com)

**Luis Eduardo DÍAZ CID**

Investigador Emérito Vitalicio de Colciencias. 2017  
Universidad del Sinú "Elías Bechara Zainum"  
Montería Colombia.

Scopus ID: 57205324416

[Chindos40@gmail.com](mailto:Chindos40@gmail.com)

**Manuel NUÑEZ VILLAVICENCIO**

Universidad del Sinú, Colombia

[manuelnunez@unisinu.edu.co](mailto:manuelnunez@unisinu.edu.co)

**María Alejandra TABORDA CARO**

Universidad de Córdoba, Montería, Colombia.

[socialescolombia@gmail.com](mailto:socialescolombia@gmail.com)

**Mario PALENCIA SILVA**

Universidad Industrial de Santander,  
Bucaramanga, Colombia.

[palencia@uis.edu.co](mailto:palencia@uis.edu.co)

**Maura PEREZ REYES**

Universidad del Sinú "Elías Bechara Zainum"  
Colombia.

[mauraperez@unisinu.edu.co@unisinu.edu.co](mailto:mauraperez@unisinu.edu.co@unisinu.edu.co)

**Nelson Javier ESCOBAR MORA**

Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín,  
Antioquia, Colombia

[nelson.escobar@upb.edu.co](mailto:nelson.escobar@upb.edu.co)

**Omaira BERNAL PAYARES**

Universidad Rafael Núñez, Colombia

[Omaira.bernal@curmvirtual.edu.co](mailto:Omaira.bernal@curmvirtual.edu.co)

**Omar HUERTAS DÍAZ**

Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Scopus ID: 57002680800

[ohuertasd@unal.edu.co](mailto:ohuertasd@unal.edu.co)

**Orlando MENESES QUINTANA**

Universidad Libre, Bogotá. Colombia.

[orlando.meneses@unilibre.edu.co](mailto:orlando.meneses@unilibre.edu.co)

**Ricardo Camilo RUEDA MORA**

Universidad del Sinú, Colombia

[camilorueda@unisinu.edu.co](mailto:camilorueda@unisinu.edu.co)

**Romel Ramón GONZÁLEZ DÍAZ**

Centro Internacional de Investigaciones y Desarrollo  
(CIID), Colombia.

[director@ciid.com.co](mailto:director@ciid.com.co)

**Rubén Darío SEPULVEDA VARGAS**

Universidad Pontificia Bolivariana, Montería,  
Colombia.

[ruben.sepulveda@upb.edu.co](mailto:ruben.sepulveda@upb.edu.co)

**Stefano VINACCIA ALPI**

Universidad del Sinú, Colombia

[Vinalpi47@hotmail.com](mailto:Vinalpi47@hotmail.com)

**Victoria Amalia PRECIADO BURGOS**

Universidad del Sinú, Montería – Colombia

[victoria-0713@hotmail.com](mailto:victoria-0713@hotmail.com)





## UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA

### Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social

Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA)  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

### ***Normas de Publicación***

***Utopía y Praxis Latinoamericana:*** Es una revista periódica, trimestral, arbitrada e indexada a nivel nacional e internacional como la Web of Science o Scopus. Editada por la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela), adscrita al Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y financiada por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES) de esta misma Universidad. Todos los trabajos que se solicitan o reciben, deben ser originales e inéditos. No se admitirá ninguno que esté en curso de ser ofrecido simultáneamente a otra revista para su publicación. Las áreas temáticas que definen el perfil de la revista están insertas en las siguientes líneas genéricas del pensamiento iberoamericano y latinoamericano: Filosofía Política Latinoamericana, Historia de las Ideas, Filosofía de la Historia, Epistemología, Teorías y metodologías de las Ciencias Sociales, Antropología social, política y filosófica, Ética y pragmática, Filosofía y diálogo intercultural, Filosofía de la Liberación, Filosofía Contemporánea, Estudios de Género, Teorías de la Modernidad. Las sub-áreas respectivas a cada área general serán definidas por el Comité Editorial, con la ayuda de sus respectivos asesores nacionales e internacionales, a fin de establecer las pertinencias de los trabajos presentados.

***Presentación de originales:*** Se destacan los siguientes aspectos. En la primera página: Título: conciso y en referencia directa con el tema estudiado. No se aceptan sub-títulos. Resumen: debe describir la idea central de la investigación y considerar su relación con el objeto y la metodología que le sirve de soporte, con una cantidad máxima de 100 palabras. Añadir cuatro o cinco palabras clave, en orden alfabético. Se redacta en castellano y en inglés. No se aceptarán notas al pie en títulos, resumen, palabras clave, nombre de autor/a ni cualquier otra información que no corresponda a la primera página. Estructura de contenido (desde la segunda página): Introducción o Presentación, desarrollo seccionado por títulos e intertítulos (apartados), conclusiones generales y bibliografía de actualidad y especializada. Los títulos del cuerpo del trabajo deben ir en mayúsculas, cursivas y negritas. Los intertítulos (apartados) deben estar escritos como oraciones normales, sin cursiva y con negrita. Todas las referencias hemero-bibliográficas y notas, deben hacerse a pie de página, en numeración continua, de acuerdo a las indicaciones que se recogen en la sección que más adelante se indica. Utilice una hoja del siguiente tamaño A5 (15,03 x 22,5 cm), margen estrecho. La fuente Arial Narrow 9, a espacio 1,08. Se dispondrá una hoja de modelo para descargar. Además de la lengua castellana, los Estudios, Artículos, Ensayos, Notas y Debates, Entrevistas, Reseñas Bibliográficas; pueden ser presentados en portugués, francés, italiano e inglés. Se deben enviar en soporte electrónico (formatos ".doc", ".docx" o ".rtf") al correo [utopraxislat@gmail.com](mailto:utopraxislat@gmail.com).

## Secciones de la revista

### Aparición regular

*Estudios*: es una investigación exhaustiva de carácter monográfico, orientada a uno o varios objetos de áreas temáticas tratados inter y/o transdisciplinariamente, desarrollada desde un paradigma epistemológico. Se hace énfasis en el análisis crítico y la interpretación. Su extensión no deberá exceder las 40 páginas.

*Artículos*: es una investigación puntual de carácter monográfico, preferiblemente resultado parcial o final de una investigación donde se destaca la argumentación reflexiva y crítica sobre problemas teóricos y/o prácticos, metodológicos y/o epistemológicos del tema y el área de estudio explorado. Su extensión no deberá exceder las 20 páginas.

*Notas y debates de Actualidad*: es una colaboración de carácter relativamente monográfico, se presentan las opiniones y juicios críticos acerca de los problemas y las dificultades que pueden encerrar los procesos de investigación y sus resultados. Su extensión no deberá exceder las 10 páginas.

*Reseñas bibliográficas*: es una colaboración que pone al día la actualidad bibliográfica, se recogen los principales resultados de las investigaciones nacionales e internacionales en forma de libro individual o colectivo. Resalta el análisis crítico sobre los diversos niveles (teóricos, metodológicos, epistémicos, políticos, sociales, etc.), donde se puede demostrar el impacto de las investigaciones. Su extensión no deberá exceder las 5 páginas. Son publicadas en la sección "Librarius".

### Aparición eventual

*Ensayos*: es una interpretación original y personal, prescinde del rigor de la formalidad de una monografía, le permite a un investigador consolidado presentar sus posturas teóricas sobre la actualidad y trascendencia de las formas de pensamientos o los paradigmas, en los que se desarrolla su disciplina y temas afines. Su extensión no deberá exceder las 15 páginas.

*Entrevistas*: es una colaboración donde se interroga a un pensador o investigador con- sagrado, sobre las particularidades de sus investigaciones y los resultados que ésta le provee a la comunidad de estudiosos de su área de conocimiento y afines.

### Formato de citaciones hemero-bibliográficas

Estas referencias se reducen únicamente a las citas de artículos, libros y capítulos de libros, especializados y arbitrados por un Comité Editor o avalados por un Comité Redactor de sellos editoriales (universitarios o empresariales) de reconocido prestigio en el campo temático de la investigación. Se deben evitar referencias de carácter general como: Enciclopedias, Diccionarios, Historias, Memorias, Actas, Compendios, etc.

### Citas

Deben seguir el formato (Apellido: año, p. página). Ejemplo: (Freire: 1970, p. 11).

### En tabla de referencias: artículos de revistas, según el siguiente modelo

VAN DIJK, T. A. (2005). "Ideología y análisis del discurso", Utopía y Praxis Latinoamericana. Año:10, n°. 29, Abril-Junio, CESA, Universidad del Zulia, Maracaibo, pp. 9-36.

### En tabla de referencias: Libros de i) libros y ii) capítulos de libros, según el siguiente modelo

i) PÉREZ-ESTÉVEZ, A. (1998). La materia, de Avicena a la Escuela Franciscana. EdILUZ, Maracaibo.

ii) BERNARD, B. (2001). "El eterno retorno de una Filosofía Antihegémica", en: Estudios de Filosofía del Derecho y de Filosofía Social. Vol. II. Libro Homenaje a José Manuel Delgado Ocando. Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenajes, n°.4. Caracas. pp. 211-251.

NOTA: En caso de haber varios autores, se nombran todos en el orden de aparición. Cualquier otro tipo de citaciones, el Comité Editorial se reserva el derecho de adaptarla a esta normativa general. No se publican investigaciones o colaboraciones con anexos, cuadros, gráficos, etc. Cualquier excepción será deliberada y aprobada por el Comité Editorial.

### ***Evaluación de las colaboraciones***

Todos los Estudios, Artículos, Ensayos, Notas y Debates, Entrevistas, que se reciban en la revista serán arbitrados por miembros del Comité de árbitros nacionales y/o internacionales de reconocida trayectoria profesional en sus respectivos campos de investigación. Su dictamen no será del conocimiento público. La publicación de los trabajos está sujeta a la aprobación de por lo menos dos árbitros. Según las normas de evaluación estos deberán tomar en consideración los siguientes aspectos: originalidad, novedad, relevancia, calidad teórica-metodológica, estructura formal y de contenido del trabajo, competencias gramaticales, estilo y comprensión en la redacción, resultados, análisis, críticas, interpretaciones.

### ***Presentación y derechos de los autores y coautores***

Los Estudios y Artículos pueden ser de autoría individual o colectiva. El autor/a principal debe suscribir un Email dirigido al Editor solicitando la evaluación de su trabajo para una posible publicación. Se debe agregar al final del cuerpo del trabajo un título llamado "Biodata" con un CV abreviado (igual para los co-autores/as), donde se señalen datos personales, institucionales y publicaciones más recientes. El Copyright es propiedad de la Universidad del Zulia. Para cualquier reproducción, reimpresión, reedición, por cualquier medio mecánico o electrónico, de los artículos debe solicitarse el permiso respectivo. Los autores/as recibirán una copia electrónica de la revista más las respectivas certificaciones de publicación.



# UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA

## Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social

Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA)  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

### *Guidelines for Publication*

***Utopía y Praxis Latinoamericana (Latin American Utopia and Praxis):*** Is a periodic, tri-monthly, arbitrated journal which is indexed on a national and international level, and edited by the University of Zulia (Maracaibo, Venezuela) in the Center for Sociological and Anthropological Studies (CESA) ascribed to the Faculty of Economic and Social Sciences, and financed by The Scientific and Humanistic Studies Council (CONDES) at the same University. All contributions requested and/or received must be original unedited papers. No contributions will be accepted that are simultaneously being offered for publication in another journal. The thematic areas that define the profile of the journal are included in the following generic areas of Spanish American and Latin American thought: Latin American political philosophy, the history of ideas, the philosophy of history, epistemology, social science theories and methodology, social, political and philosophical anthropology, ethics and pragmatics, philosophy and inter-cultural dialogue, the philosophy of liberation, contemporary philosophy, gender studies, and post-modern theories. The sub-categories in each area will be defined by the Editorial Committee with the help of its respective national and international advisors in order to establish the pertinence of the papers presented for publication.

***Presentation of original texts:*** The following aspects are considered to be especially important: The title must be concise and directly relevant to the theme studies. Sub-titles are not acceptable. The abstract must describe the central idea of the research and consider its relationship with the objectives and methodology that support it, and be no longer than 100 words. Four key words in alphabetical order must accompany the abstract. The abstract must be written in both Spanish and English. The abstract must be structured in the following manner: Introduction or presentation, general explanation with titles and subtitles, general conclusions and up-dated and specialized bibliography. All of the bibliographical references and notations must be included in footnotes, and numbered in sequence, according to the indications in the section that follows. The recommended lettering font is Arial Narrow 12, spaced 1,5. In addition to Spanish, studies, articles, essays, notes, debates, interviews and bibliographical reviews can be presented in Portuguese, French, Italian and English. An electronic support copy (".doc", ".docx" o ".rtf") e-mail: [utopraxislat@gmail.com](mailto:utopraxislat@gmail.com).

### **Journal sections**

#### **Normal features**

***Studies:*** exhaustive research of a monographic nature oriented towards one or several objectives treated in an inter- or trans-disciplinary manner, and developed from an epistemological paradigm. Emphasis is made on critical analysis and interpretation. The article must not to exceed 40 pages.

***Articles:*** precise research of a monographic nature, preferably the result of partial or final research where a reflexive and critical argument in relation to certain theoretical or practical, methodological or epistemological problems is raised and the area of study is explored. The length should not to exceed 20 pages.

*Up-dated notes and debates:* this is a relatively monographic paper, in which opinions and critical judgements are made in reference to problems and difficulties encountered in re- search processes and results. The length should not to exceed 10 pages.

*Bibliographical Reviews:* these are collaborative articles that update bibliography, gathering the principle results of national and international research in the form of an individual or collective publication. They emphasize critical analysis on diverse levels (theoretical, methodological, epistemological, political, social, etc.) where the impact of this research can be demonstrated. These papers should not to exceed 5 pages.

### **Occasional features**

*Essays:* original and personal interpretations, which do not follow the rigid formalities of a monograph, and allow an experienced researcher to present theoretical up-dated postures and to transcend the normal forms of thought and paradigms that are developed in the respective discipline or thematic area. The paper should not to exceed 15 pages.

*Interviews:* these are the results of interrogative conversations with recognized theorists and researchers in relation to particular aspects of their research and the results of the same which provide the interested community with new information and knowledge in their fields.

### **Format for bibliographical quotations**

These references refer only to quotations from articles, books and chapters of books that are specialized and arbitrated by an editorial committee or evaluated by an editorial text re- view committee (university or publishing house), of recognized prestige in the thematic area of the research topic. General references from encyclopedia, dictionaries, historical texts, remembrances, proceedings, compendiums, etc. should be avoided.

### **Citations:**

They must follow the format (Surname: year, p. number page). Example: (Freire: 1970, p. 11).

### **Quotations from journal articles should follow the model below:**

VAN DIJK, T.A. (2005). "Ideología y análisis del discurso", *Utopía y Praxis Latinoamericana*. Año:10, nº. 29, Abril-Junio, CESA, Universidad del Zulia, Maracaibo, pp. 9-36.

### **Quotations from i) books and ii) book chapters, should follow the model below:**

i) PÉREZ-ESTÉVEZ, A. (1998). *La materia, de Avicena a la Escuela Franciscana*. EdILUZ, Maracaibo.

ii) BERNARD, B (2001). "El eterno retorno de una Filosofía Antihegemónica", en: *Estudios de Filosofía del Derecho y de Filosofía Social*. Vol. II. Libro Homenaje a José Manuel Delgado Ocando. Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenajes, nº.4. Caracas. pp. 211-251.

NOTE: In the case of various authors, name them all in order of appearance. If there is any other type of quotation, the Editorial Committee reserves the right to adapt it to this gen- eral norm. Research publications and collaborative research efforts including appendices, tables, graphs, etc. will not be published. Any exception to this ruling must be discussed and approved by the Editorial Committee.

### ***Evaluation of Collaborative Efforts***

All studies, articles, essays, notes, debates and interviews received by the journal will be arbitrated by members of national and international arbitration committees who are well known internationally for their professionalism and knowledge in their respective fields of learning. Their decisions will not be made public. Publication of articles requires the approval of at least two arbitrators. According to the evaluation norms, the following aspects will be taken into consideration: originality, novelty, relevance, theoretical and methodological quality, formal structure and content, grammatical competence, style and comprehension, results, analysis, criticism, and interpretations.

### ***Presentation of and rights of authors and co-authors***

Studies and Articles can be presented by one author or two co-authors. The principal author must sign the letter of presentation and direct it to the Editorial Committee, requesting the evaluation of the article for possible publication. A brief curriculum vitae should accompany the request (one for each author in the case of co-authors), and indicate personal and institutional information, as well as most recent publications. The copyright becomes the property of the University of Zulia. For reproduction, re-prints and re-editions of the article by any mechanical or electronic means, permission must be requested from the University of Zulia. The authors will receive an electronic copy of the journal plus the respective publication certifications.



# UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA

## Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social

Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA)  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

### *Instrucciones para los Árbitros*

Se parte del supuesto de que el/a árbitro es “un par” del arbitrado/a. Eso quiere decir que ambos se desenvuelven en el contexto de una cultura científica que le es familiar; es decir, que se presume que ambos “dominan el tema”, que conocen sus tendencias y contratendencias. Eso es de innegable valor a la hora de que un arbitraje responda de acuerdo a los objetivos en los que se basa: la suficiente neutralidad y el mínimo de subjetividad, como para hacer un juicio a conciencia. De esto dependerá el éxito de esa “misión” que sin lugar a dudas redundará en beneficio de la publicación.

Los especialistas encargados del arbitraje deben tomar con especial consideración, sin que esto menoscabe su libertad para evaluar, los siguientes aspectos que se enuncian, al momento de realizar la lectura, con el fin de lograr la mayor objetividad posible en su dictamen. Se trata pues de confirmar la calidad del artículo científico que está en consideración.

#### **1. El nivel teórico del trabajo**

Se considerará el dominio conceptual y argumentativo de la propuesta del trabajo. Especialmente, hacer evidente en el artículo presentado contextos teóricos pertinentes que permitan situar el tema y su problemática. Esto anula el grado de especulación que pueda sufrir el objeto de estudio.

#### **2. El nivel metodológico del trabajo**

Se considerará la coherencia metodológica del trabajo entre la problemática propuesta y la estructura lógica de la investigación. Sólo un buen soporte metodológico puede determinar si hay suficiente coherencia en torno a las hipótesis, los objetivos y las categorías utilizadas. Esto anula cualquier rasgo de asistematicidad de la investigación.

#### **3. Nivel de interpretación del trabajo**

Se considerará el grado interpretativo de la investigación, sobre todo en las de carácter social o humanístico. Esto cancela cualquier discurso o análisis descriptivo en la investigación, y permite poner en evidencia si el trabajo presenta un buen nivel reflexivo y crítico. Además, el trabajo debería generar nuevos postulados, propuestas.

#### **4. El nivel bibliográfico de la investigación**

Se considerará el uso adecuado de la bibliografía. Lo que significa que la misma debe ser lo más especializada posible y de actualidad. Las referencias y/o citas deben ajustarse y responder a la estructura argumentativa de la investigación, sin caer en contradicciones o sin sentidos. Este es uno de los niveles de probar la rigurosidad del trabajo. No se debe subestimar la fuente bibliográfica.

### **5. El nivel de la gramática**

Se considerará el adecuado uso del lenguaje y la claridad de expresión, en la medida en que esto está directamente relacionado con el nivel comunicativo que se le debe a la investigación. Imprecisiones sintácticas, retóricas superfluas, errores de puntuación, párrafos engorrosos, entre otros aspectos, son elementos que confunden al lector y puede ser sinónimo de graves faltas en la comunicación escrita.

### **6. El nivel de las objeciones u observaciones**

Se deberá razonar por escrito los argumentos que tiene el árbitro para corregir parcial o totalmente un artículo, a fin de proceder a su publicación. Esto es muy importante pues de lo contrario el autor del artículo no puede llevar a cabo los correctivos solicitados por el árbitro. Sus desacuerdos, si no están dentro de los límites de la investigación, no deben privar sobre la evaluación. Si por alguna razón el árbitro considera que no está en capacidad de lograr su dictamen con imparcialidad y objetividad, debe comunicar su renuncia a fin de proceder a su reemplazo.

### **7. La pronta respuesta del árbitro**

Es conveniente que el árbitro respete y cumpla debidamente, evitando demoras innecesarias, las fechas previstas para el arbitraje. Lo contrario genera serios, y a veces graves, problemas en el cronograma de edición. Si el árbitro no puede cumplir con los lapsos determinados para la evaluación, debe notificarlo enseguida.

### **8. La presentación formal**

Se considerará la presentación formal del trabajo de acuerdo a las Normas de Publicación de la revista que aparecen al final de la misma.